

COLECCIÓN GRUPOS DE TRABAJO



Serie Teoría social crítica

POPULISMO

UNA PERSPECTIVA LATINOAMERICANA

Mariana Mastrángelo
Ronaldo Munck
Pablo Pozzi
[Eds.]

 **CLACSO**

**POPULISMO: UNA PERSPECTIVA
LATINOAMERICANA**

Populismo: una perspectiva latinoamericana / Ronaldo Munck... [et al.]; editado por Mariana Mastrángelo; Ronaldo Munck; Pablo A. Pozzi - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2023.
Libro digital, PDF - (Grupos de trabajo de CLACSO)

Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-813-488-8

1. Populismo. 2. Peronismo. 3. Izquierda Política. I. Munck, Ronaldo, ed. II. Mastrángelo, Mariana, ed. III. Pozzi, Pablo A., ed.
CDD 320.5662098

Otros descriptores asignados por CLACSO:

Populismo / Izquierda / Desarrollo / Democracia / Neoliberalismo /
Transformación social / Socialismo / Derecha / Políticas sociales /
América Latina

Los trabajos que integran este libro fueron sometidos a una evaluación por pares.

POPULISMO: UNA PERSPECTIVA LATINOAMERICANA

Mariana Mastrángelo
Ronaldo Munck
Pablo Pozzi
(Eds.)

Grupo de Trabajo CLACSO
Izquierdas y luchas sociales en América Latina



CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales

Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

Colección Grupos de Trabajo

Pablo Vommaro - Director

CLACSO - Secretaría Ejecutiva

Karina Batthyány - Directora Ejecutiva

María Fernanda Pampín - Directora de Publicaciones

Pablo Vommaro - Director de Investigación

CLACSO - Equipo Editorial

Lucas Sablich - Coordinador Editorial

Solange Victory y Marcela Alemandi - Producción Editorial

Área de investigación

Natalia Gianatelli - Coordinadora de Investigación

Cecilia Gofman, Marta Paredes, Rodolfo Gómez, Sofía Torres, Teresa Arteaga y Ulises Rubinschik -
Equipo de Gestión Académica



LIBRERÍA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES

CONOCIMIENTO ABIERTO, CONOCIMIENTO LIBRE

Los libros de CLACSO pueden descargarse libremente en formato digital o adquirirse en versión impresa desde cualquier lugar del mundo ingresando a www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana

1ª edición: *Populismo: una perspectiva latinoamericana* (Buenos Aires: CLACSO, mayo de 2023).
ISBN 978-987-813-488-8



CC BY-NC-ND 4.0

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina

Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875 | <clacso@clacsoinst.edu.ar> | <www.clacso.org>



Este material/producción ha sido financiado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Asdi. La responsabilidad del contenido recae enteramente sobre el creador. Asdi no comparte necesariamente las opiniones e interpretaciones expresadas.

ÍNDICE

Rodolfo Gómez y Pablo Vommaro

Presentación | 9

Ronaldo Munck

Populismo en América Latina: Desarrollo, democracia y transformación social | 27

Marcelo Raimundo

¿Izquierda o derecha? El peronismo y la clase obrera | 47

Igor Goicovic Donoso

Comunistas, socialistas y populistas. Chile, 1936-1973 | 79

Reinaldo Lindolfo Lohn e Silvia Maria Fávero Arend

Um partido entre populismo, políticas sociais e voto popular. Interpretações sobre o Partido dos Trabalhadores (PT) | 103

Victor de O. P. Coelho

Bolsonarismo, o fenômeno populista conservador brasileiro. Reacionarismo e neoliberalismo | 123

Patricia Pensado Leglise

Dilemas políticos del gobierno de López Obrador: entre populismo, democracia e izquierda | 145

Roberto López Sánchez

El proceso bolivariano en Venezuela: ¿Socialismo, populismo o neoliberalismo? | 167

John Brown

Crisis de la democracia de mercado y las respuestas populistas: el caso de Evo Morales de Bolivia | 191

Pablo Dávalos

La revolución ciudadana en el Ecuador de 2007-2017: Más allá del populismo | 215

Barry Cannon

El populismo de derecha y el “liberalismo del miedo” en América Latina | 235

William I. Robinson

Ortega y el fantasma de Luis Bonaparte | 259

Mariana Mastrángelo y Pablo Pozzi

Populismo e izquierda en América Latina | 271

Francisco Panizza

Epílogo. Una historia de “dos pueblos”. El populismo nacional-popular y el populismo del siglo XXI en América Latina | 287

Sobre los autores y autoras | 311

PRESENTACIÓN

Rodolfo Gómez y Pablo Vommaro

RECIENTEMENTE, en América Latina y el Caribe ha resurgido la discusión acerca de lo que ha dado en llamarse “populismo”. Este debate, hoy hegemonizado por las derechas políticas y disputado por diversas fuerzas, incluso las etiquetadas como “populistas”, no es nuevo en la región.

Inicialmente, estos debates fueron dados tanto por las derechas como por las izquierdas y tuvieron que ver con la disrupción que representaron —promediando el siglo XX— gobiernos como los de Vargas en Brasil, Perón en Argentina, Lázaro Cárdenas en México o Paz Estenssoro en Bolivia, entre otros ejemplos clásicos. Estas experiencias fueron caracterizadas por un estilo fuertemente personalista, por la incorporación social (y en algunos casos también política) de amplios sectores de la población (trabajadores urbanos, campesinos, mujeres) y por implementar políticas distribucionistas, mercadointernistas y modernizadoras o desarrollistas, haciendo fuerte eje en la participación del Estado en la economía y en la organización sindical de la sociedad. En ese momento histórico, si para las derechas políticas los “populismos” resultaban más bien demagógicos y utilizaron este término para calificar despectiva o negativamente lo que entendían como una suerte de desvío, anomalía, paréntesis o disfunción de

la historia, era por las políticas distributivas e intervencionistas que aplicaron, las que no se condecían con lo que para estos grupos era el funcionamiento natural de una economía de mercado basada en el equilibrio —la famosa metáfora de la “mano invisible”— entre la oferta y la demanda.

Quizá paradójicamente, para buena parte de las izquierdas los populismos resultaban también demagógicos, porque interpretaban que la acción distributiva organizada por estos gobiernos desde el Estado capitalista promovía una integración sin cuestionamiento de las masas al funcionamiento de la sociedad capitalista. Amplios sectores de la izquierda de la época consideraban que esto resultaba engañoso, dado que entonces quedaba desactivada cualquier posibilidad crítica hacia el mismo capitalismo por parte de las masas trabajadoras — concebido sujeto de la transformación social revolucionaria— como también ocluía toda forma de organización autónoma por parte de estas.

Estas discusiones y posicionamientos políticos —por derecha e izquierda— que se hicieron presentes en América Latina y el Caribe frente al fenómeno del populismo tuvieron lugar en un determinado momento histórico, que abarcó desde las primeras manifestaciones del hecho populista —como decíamos, promediando el siglo XX— hasta la década del setenta, siendo que al mismo tiempo estos procesos estuvieron atravesados por las dictaduras cívico-militares que azotaron a la región desde entonces.

La introducción de este eje temporal en el análisis implica dar cuenta de otra cuestión. Porque algunos autores —por ejemplo, Borón (2013)— afirman que en realidad el fenómeno populista se circunscribe a un determinado momento histórico. Esto es, a un momento en el que se hace presente una forma particular de capitalismo que permitió articular un modo de acumulación —de características keynesianas o poskeynesianas— basado en la expansión de la demanda y, por tanto, del consumo, con una forma de organización laboral —conocida como “fordismo”— donde se incrementaba la productividad a partir del uso de la cadena de montaje y de la tecnificación del proceso de trabajo, con un modo político que dio en llamarse Estado de bienestar. Ahora bien, si en América Latina también se encontraba presente esta “forma” particular capitalista que describimos, tenía que presentar algunas diferencias, dado el carácter periférico de funcionamiento del capitalismo latinoamericano, respecto a la que se había hecho presente en los países capitalistas “centrales”. Esas diferencias fueron las que caracterizaron a los gobiernos y a las formas estatales denominadas “populistas” en América Latina y el Caribe, que se diferenciaban en el

análisis de los gobiernos y las formas estatales “de bienestar” presentes en Europa o en los Estados Unidos.¹

Esta perspectiva nos conduce a dos problematizaciones respecto del fenómeno del populismo. Por un lado, a poner en tensión una mirada que es el principal blanco de discusión política de las interpretaciones de carácter historicista, el punto de vista posestructuralista o posmarxista de Ernesto Laclau. Por el otro, a avanzar en la caracterización de lo que podríamos denominar un fenómeno conexo con el del populismo, pero que es posterior, y por tanto se lo suele denominar con el prefijo neo. Es decir, el fenómeno “neopopulista” (o de los llamados neopopulismos).

En lo que refiere al primero de los ejes problemáticos, aquel que corresponde a la perspectiva de Laclau, la mirada histórica depositada sobre el fenómeno populista se desplaza hacia un tipo de análisis político —tal como el que ejercita Laclau— que busca más bien observar regularidades entre distintos fenómenos populistas que se hicieron presentes en países y momentos históricos diversos, como ser los relevados en los Estados Unidos, en la Rusia pre-soviética y también —entre otros— en América Latina y el Caribe.

A partir de la comparación de estas experiencias —muy diferentes— situadas a la vez en momentos históricos diversos, Laclau construye una suerte de “tipo ideal” populista, que presenta una serie de características compartidas, entre las cuales puede referirse la apelación política a la figura del “pueblo”, la presencia de un líder carismático que conduce la orientación y organización de las masas, el surgimiento del movimiento a partir de una suerte de crisis de hegemonía y de quiebres en la clase o el bloque dominante y de una ideología poco definida e imprecisa, no basada en criterios de racionalidad o de clase, que puede ubicarse en la derecha o en la izquierda o bien en una combinación de ambas perspectivas, según coyunturas y conveniencias.

1 Si bien no nos extenderemos en esta presentación sobre la realización de ciertas distinciones, cabe indicar que algunos autores, como por ejemplo Astarita (2008) o Thwaites Rey (2001), diferencian, en lo que refiere al empleo de políticas de raigambre keynesiana, entre una “forma estado” benefactora como la presente en los países europeos occidentales de la segunda posguerra y la “forma estado” intervencionista —o aun keynesiana— presente en países como los Estados Unidos o como Japón. A la vez, podría también establecerse una distinción entre las “formas estado” benefactoras y redistributivas presentes en los países europeos occidentales durante la segunda posguerra y lo que serían las “formas Estado” populistas presentes entre las décadas del cuarenta y cincuenta en América Latina, dado que estas últimas presentarían, en el marco de un capitalismo “en vías de desarrollo” o periférico, características más modernizadoras o desarrollistas que benefactoras o distributivas. Para una discusión de ambas cuestiones ver Gómez (2016 y 2021).

El populismo así definido, desde este posicionamiento donde sus características generales se presentan en términos más bien ontológicos y no ligados a un momento histórico determinado, se termina absolutizando. Esto permitiría identificar populismos en cualquier práctica política, en cualquier ideología y en cualquier momento histórico, asumiéndose prácticamente en términos pan-discursivos y desplazando no solamente relación con un determinado tipo de coyuntura histórica que permite configurar las experiencias caracterizadas como populistas, sino que, además, debilita la consideración de la incidencia de ciertos elementos socioeconómicos estructurales en estos fenómenos.

En el primer texto que abre este volumen que analiza el fenómeno del populismo en América Latina, "Populismo en América Latina: desarrollo, democracia y transformación social", Ronaldo Munck expresa sobre los aportes de la obra de Laclau:

Ernesto Laclau rechazó la teleología de la teoría de la modernización y la noción de que el populismo representaba simplemente una fase de transición. Tampoco adhirió a la determinación histórica de la clase, como en las explicaciones marxistas ortodoxas. La tesis que plantea Laclau sostiene que "el populismo consiste en la presentación de las interpelaciones popular-democráticas como un conjunto sintético-antagónico respecto a la ideología dominante" (Laclau, 1977, pp. 172-173). Al igual que con el nacionalismo, el populismo no tiene necesariamente una connotación de clase, ya que tanto un proyecto fascista como uno comunista pueden articularlo igualmente. El populismo se inscribe más bien en el contexto de una crisis de hegemonía, cuando las clases dominantes buscan una solución apelando al "pueblo". También puede ser articulado por las clases subalternas, en relación a lo cual y a contramano de la idea comúnmente aceptada, Laclau señalaba que "el populismo socialista no es la forma más atrasada de ideología obrera, sino su forma más avanzada" (Laclau, 1977, p. 174). [...] Laclau volvió a tratar el tema del populismo en 2005 para proponer una nueva teoría, en un extenso estudio sobre *La razón populista* (Laclau, 2005), superador de su trabajo anterior. [...] Laclau se encuentra ahora en un ámbito firmemente orientado por el discurso postmarxista. El populismo es visto entonces como un "significante flotante" que puede ser tomado por ideologías y objetivos radicalmente opuestos. En un proceso de lo que veo como cierta "inflación conceptual", Laclau comienza a argumentar que "lo político se convierte en sinónimo de política" o, más precisamente, que "la operación política por excelencia va a ser siempre la construcción de un pueblo" (Laclau, 2005, p. 154). [...] Mientras que en su obra anterior Laclau había equiparado la hegemonía con la política, en *La razón populista* cambió a una posición en la que "el populismo es la vía real para comprender algo relativo a la constitución ontológica de lo político como tal" (Laclau, 2005, p. 6). En el mejor de los casos, podemos decir que Laclau pone el populismo y la hegemonía en el mismo plano. En la prácti-

ca, cuando Laclau se comprometió con los gobiernos de centro-izquierda en América Latina, dio prioridad al movimiento populista y a la participación exitosa en las elecciones centrándose menos en la lucha de la izquierda por la hegemonía o en el modo en que los movimientos sociales fueron cooptados por los “gobiernos progresistas” de principios de los años 2000.

En una línea crítica similar a la de Munck, aunque haciendo hincapié en otros aspectos de la obra de Laclau y de ciertas ausencias en sus formulaciones, el economista ecuatoriano Pablo Dávalos, en otro de los artículos incluidos en esta obra que presentamos, dedicado a analizar la experiencia correísta en el Ecuador, sostiene que:

El giro epistemológico de Laclau se sustenta en las debilidades teóricas que tiene el concepto de populismo en sí mismo para generar una definición canónica. La resistencia a otorgar un sustento epistemológico fuerte a esta noción del populismo se debe a una posición de principio con respecto a la teorización de la democracia liberal que se asume a sí misma desde posiciones ontológicas y esenciales, es decir universales y teleológicas, y con un sujeto político fundamentado, asimismo, esencialmente. Es por ello que, desde esta visión, se considera al populismo como un síndrome de la democracia liberal (Wiles, 1969), o como una patología de sociedades en pleno desarrollo económico y modernización política que impediría ese desarrollo y ese crecimiento económico (Edwards, 2019). El populismo, en realidad, sería el intento de las sociedades por superar esas cesuras radicales de la modernidad y del liberalismo y provocar una sutura entre política y economía, entre derecho y política. Es, como lo diría Canovan, el rostro de redención de la democracia (Canovan, 1999). El populismo, de esta forma, sería algo más que una “lógica política” como la asume Laclau (Laclau, 2005, p. 150), el populismo sería un síntoma, un indicador de lo que falla en la propia estructura que se ve amenazada por arrebatos “patológicos” (Žižek, 2006, p. 556). La supuesta patología del liberalismo y que se expresa en esa aparente sutura en el populismo, es, en realidad, la expresión de la cosificación, como el proceso que separa a los seres humanos de sus propias condiciones de existencia y posibilidad en tanto humanos (Lukács, 1985). Al excluir de su análisis teórico a la reificación, el análisis de Laclau, que había logrado dar al populismo una dignidad que le había sido negada en el análisis liberal, no podría dar cuenta de esas cesuras radicales del capitalismo. La cruda realidad del capitalismo, en su “danza solipsista” que “persigue su objetivo de rentabilidad en una bendita indiferencia respecto a cómo su movimiento afectará a la sociedad” (Žižek, 2006, p. 566), no empata con las nociones teóricas sobre el populismo. Los problemas inherentes a los procesos de acumulación de capital y sus formas políticas de dominación se le escapan como arena entre los dedos.

Pero si en lugar de analizar el fenómeno de los populismos en los términos universalistas y “típico-ideales” del posmarxismo de Laclau,

asumimos una perspectiva centrada en la configuración histórica y las singularidades de cada coyuntura, deberíamos referir a un primer momento populista en América Latina y el Caribe; aquel que correspondió a los gobiernos así designados que tuvieron lugar en las décadas del cuarenta y cincuenta del siglo XX, que —como indicamos— eran cuestionados tanto por derecha como por izquierda. Luego, podemos identificar un segundo momento, donde pareciera volver a emerger la tónica del populismo, pero de forma modificada, incorporando en su caracterización el prefijo “neo”.

Sin embargo, si suele haber coincidencias en caracterizar como “populistas” a gobiernos —como los de Perón o Vargas— o perspectivas políticas —como la aprista— que tuvieron lugar en América Latina durante las décadas del cuarenta o del cincuenta; estas parecen ser menores a la hora de definir el momento y el carácter de los gobiernos o las fuerzas “neopopulistas” posteriores.

Por ejemplo, en el artículo “El populismo de derecha y el ‘liberalismo del miedo’ en América Latina” de Barry Cannon, incluido en este volumen, el autor se plantea una serie de distinciones, por ejemplo, entre un “neopopulismo neoliberal” y un “neoliberalismo progresista”, que ubica como “neopopulistas” a gobiernos como los de Carlos Menem en Argentina, Alberto Fujimori en Perú, Collor de Melo en Brasil o Salinas de Gortari en México. Esto es, a todo un conjunto de gobiernos que también han sido caracterizados como “neoliberales” o “neoconservadores”. En una línea similar, otro de los artículos que hacen parte de este libro, el de Victor de O. P. Coelho, que se titula “Bolsonarismo, o fenômeno populista conservador brasileiro: reacionarismo e neoliberalismo”; analiza las características particulares que pueden verse en el gobierno —que define como— “populista de derecha” de Jair Bolsonaro en Brasil y las diferencias que presenta con la anterior experiencia populista también “de derecha” que tuvo lugar en ese país durante la década del noventa. Para el autor estas últimas experiencias son claramente “neoliberales” y de algún modo también lo es la de Bolsonaro, aunque este gobierno, en su radicalidad confrontativa con las instituciones de la democracia liberal, bien podría ubicarse dentro de una perspectiva francamente “neofascista”. También Coelho avanza en el abordaje de anteriores experiencias populistas que califica como “de izquierda”, entre las que ubica las consideradas “clásicas” de las décadas del cuarenta y del cincuenta y los actuales gobiernos de la llamada “marea rosa” latinoamericana, donde no solamente refiere al gobierno de Lula en Brasil, sino además a los de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, entre otros.

Si bien pareciera que el artículo comparte con el punto de vista de Laclau la idea de que pueden encontrarse características populistas en todas las posiciones políticas y en diversos momentos históricos; por otro lado, la distinción entre populismos de izquierda y derecha vuelve a reponer la tradicional diferenciación binaria que signa los análisis políticos clásicos. Además, la introducción en el análisis por parte del autor de la noción de “neofascismos” da cuenta de un elemento que permite establecer distinciones entre gobiernos y perspectivas de una derecha radicalizada —como la actual— y las viejas fuerzas de derecha que, como bien sostiene Grüner (2021), por lo menos se preocupaban por encontrar un argumento o justificación racional de sus propias posiciones políticas.

En el mencionado artículo que abre este libro, también Ronald Munck aborda estas distinciones entre los populismos “históricos” que tuvieron lugar promediando el siglo XX, los neopopulismos “de derecha” posteriores que tuvieron lugar hacia fines del mismo siglo XX y los neopopulismos progresistas que alumbraron en su mayoría en las primeras décadas del siglo XXI y, en Argentina, lo que caracteriza como “post” populismo. Luego de un más que interesante recorrido analítico, donde aborda los trabajos —ya clásicos— sobre el populismo de autores latinoamericanos como Gino Germani, Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero, Francisco Weffort, Octavio Ianni, entre otros, Munck propone una suerte de balance que busca brindar elementos para caracterizar los procesos políticos actuales, donde el “populismo” parece constituirse sobre todo como “una metodología”, que incluso permite pensar —como tópica propiamente latinoamericana— la problemática del “buen vivir”.

Iniciada la discusión teórica sobre qué es el populismo o sobre cómo este ha sido caracterizado; el resto de los artículos que componen este libro abordan diferentes estudios de caso organizados de acuerdo con los países con gobiernos que en la actualidad han sido caracterizados como populistas o como neopopulistas. Ya mencionamos el artículo de Coelho sobre Bolsonaro. Siguiendo con el abordaje del fenómeno populista en Brasil, Reinaldo Lohn y Silvia Maria Fávero Arend, en su artículo “Um partido entre populismo, políticas sociais e voto popular: interpretações sobre o Partido dos Trabalhadores —PT—”, se preguntan sobre la posibilidad de caracterizar los gobiernos de Lula, e incluso el posterior de Dilma Rousseff, como populistas, o si —en cambio— sería más correcto hablar de gobiernos populares. Siguiendo algunos trabajos de André Singer, que analizaron los cambios en los discursos políticos de las diferentes campañas presidenciales de Lula, los autores afirman que desde sus orígenes el PT no fue un partido populista ni tampoco personalista; pero que a lo largo de las

campañas y gobiernos, se fue transformando en un partido “Lulista”, al mismo tiempo que se fue modificando el perfil de su votante, que pasó de ser apoyado por los sectores medios urbanos a pasar a ser apoyado por los sectores populares, tanto urbanos como rurales, y por lo que denominan como “subproletariado”.

Por su parte, Roberto López Sánchez, en su artículo “El proceso bolivariano en Venezuela: ¿socialismo, populismo o neoliberalismo?” analiza, desde una perspectiva clasista, los gobiernos de Hugo Chávez Frías y de Nicolás Maduro. Dando por entendido que ambos gobiernos son caracterizados por la derecha como populistas, el autor los examina con detalle y los compara a partir del uso de una buena cantidad de fuentes; analizando sobre todo la trayectoria de Hugo Chávez y la posterior evolución de sus gobiernos, como así la radicalización sufrida por el proceso bolivariano luego del frustrado intento golpista organizado por la derecha venezolana en el año 2002. Si bien en dicho análisis se da cuenta que fue a partir de ese momento que en términos discursivos dio inicio la retórica del “Socialismo del siglo XXI”, el autor va analizando las diferentes políticas desarrolladas durante los gobiernos de Hugo Chávez que buscaron desplazar el neoliberalismo hasta entonces predominante en el país caribeño, implementado incluso por gobiernos que se decían socialdemócratas; mostrando de algún modo que la interpretación que sostiene que los fenómenos populistas podían surgir en momentos de desdiferenciación política —en este caso entre partidos socialcristianos o socialdemócratas, de centroderecha o centroizquierda— tenía todavía asidero.

De renovado y actual interés resulta la evaluación crítica que el mismo autor realiza de los actuales gobiernos de Nicolás Maduro, cuyas políticas son abordadas —desde la misma perspectiva clasista— en franca comparación con los años previos chavistas, sobre todo en lo que refiere al combate contra —o la adhesión hacia— el neoliberalismo.

Siguiendo la tónica de abordaje de gobiernos actuales que podrían ser, o bien son (sobre todo por parte de la derecha mass-mediática y política), caracterizados como populistas, Patricia Pensando Leglise lleva adelante un pormenorizado y riguroso análisis del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (A.M.L.O.) en México, en su artículo “Dilemas políticos del gobierno de López Obrador: entre populismo, democracia e izquierda”. Como en los textos ya mencionados de Munck y de Dávalos, también en este caso la autora comienza el abordaje haciendo referencia a fenómenos populistas históricos, como los registrados en Rusia y Estados Unidos a fines del siglo XIX, a gobiernos populistas previos como los de Perón y Vargas promediando el siglo XX —de un modo algo llamativo, y a diferencia de otros au-

tores estudiosos del populismo cuyos artículos incluyen en este libro, no hay referencias a gobiernos mexicanos previos como por ejemplo el de Lázaro Cárdenas— y a gobiernos actuales como los del MAS en Bolivia, durante las primeras décadas del siglo XXI, para pasar luego a examinar al actual gobierno mexicano.

En lo referido a las características del populismo del actual gobierno mexicano, la autora rescata el predominio en el discurso político de la noción de “pueblo” y cómo, dentro de la tradición populista, adopta un punto de vista más bien “plebeyo” que la enfrenta a lo establecido (el “establishment”), esto es, a las “oligarquías” previas.

Según Pensando Leglise, el discurso político de López Obrador, tanto en su calidad de presidente, como en su carácter de candidato, presenta estas características, aunque agrega, en un contexto diferente al de las anteriores experiencias populistas en las que —como afirma Rosanvallon en una entrevista (2020)— el fenómeno del populismo se ha mundializado, haciéndose presente ya no en movimientos políticos, sino en experiencias gubernamentales como las de Trump en Estados Unidos, Meloni en Italia o bien en diferentes países de Europa del Este. Más allá de los puntos en común, si seguimos a esta autora, descubriremos que estas expresiones europeas presentan claras diferencias con las de los gobiernos tildados de populistas en América Latina, donde estas características populistas se articulan en el marco de posicionamientos políticos tanto “democráticos” como “de izquierda”, de acuerdo a lo que la autora expresa desde el mismo título del capítulo.

Asimismo, Pensado plantea la existencia de políticas ambiguas en el gobierno de López Obrador, que combinan posicionamientos progresistas con otros conservadores. Un rasgo que la autora asigna a los gobiernos populistas, junto con otro que también está presente en el de López Obrador, donde se apela a la noción de “pueblo”, al que caracteriza como “puro y bueno”, y se la contrapone a la —más neoliberal— de “ciudadanía”. Sin embargo, dice Pensado, la crítica de López Obrador a la corrupción, asociada con los gobiernos previos de tinte neoliberal (sean estos del PRI o del PAN), a la que le otorga una importancia notable en su gestión, es más propia de los gobiernos progresistas latinoamericanos que de los populistas de diverso tipo, tanto los “históricos” como los actuales. Esta autora también señala que las limitaciones de ciertas críticas que hacía el populismo se despliegan desde perspectivas políticas tanto liberales de izquierda como socialdemócratas, donde la falta de distinción entre populismos de derecha y de izquierda conduce a posiciones cerradas, sectarias y a veces poco democráticas.

Si bien, como en el artículo de Pensado para el caso de López Obrador, se describe históricamente la evolución partidaria del MAS y la trayectoria política de Evo Morales en Bolivia, problematizándola en su vínculo con diferentes movimientos sociales y, en particular, con el movimiento indígena; el artículo de John Brown “Crisis de la democracia de mercado y las respuestas populistas: el caso de Evo Morales de Bolivia”, caracteriza sin ambages como populistas —desplazando la posibilidad de interpretarlos en términos socialistas— a los gobiernos de Morales.

Según este autor, esto se debe a que, como en el caso de los diferentes tipos de gobiernos que podrían definirse como populistas, estos gobiernos surgen cuando se produce una crisis de representación y cuando diferentes reclamos de los sectores populares no pueden ser satisfechos por las élites o bien estas se niegan a satisfacerlos. Esta crisis de la legitimidad democrática, que a veces remite a una desdiferenciación entre los partidos y las y los políticos del “sistema”, se proclaman estos de derecha o de izquierda, lleva a la aparición o presencia de liderazgos populistas, que en general y por tanto se gestan por fuera del ámbito político tradicional, y se auto consideran “outsiders”.

Al igual que Pensado, también este autor señala las limitaciones de los enfoques institucionalistas —liberales y socialdemócratas— para abordar los fenómenos populistas y la necesidad de ubicarlos, para un análisis histórico concreto, en los contextos políticos post-neoliberales: “Como lo demuestra el caso boliviano, para comprender las acciones de los gobiernos antineoliberales recién elegidos, incluyendo la disposición de participar en conductas antiliberales, y para comprender el apoyo o el rechazo del sector popular a las acciones gubernamentales, es esencial ver el proceso post-neoliberal a través de un lente histórico que encapsule la era de la democracia de mercado. Al entender quiénes fueron incorporados y quiénes fueron excluidos bajo la democracia de mercado (inclusión política y socioeconómica de la clase media y de las élites, exclusión de los sectores populares e indígenas), así como el anterior dominio de fuentes ideológicas, económicas, militares y políticas de poder por parte de un bloque selecto de élite, podremos comprender mejor por qué los gobiernos pueden torcer las normas liberales y por qué conservan el respaldo popular para hacerlo”.

Siguiendo con el recorrido que propone esta obra, en el artículo “La revolución ciudadana en el Ecuador de 2007-2017: Más allá del populismo”, Pablo Dávalos analiza el caso concreto de los gobiernos de Rafael Correa y evalúa si es posible considerarlos como populistas. Para hacerlo, como mencionamos, comenzó analizando de modo crítico la obra de Laclau y la interpretación que realizó del populismo,

para pasar a posteriori a observar el estilo de gobierno de Correa, las políticas que se implementaron, sus votantes y sectores que brindaron apoyo y quienes se opusieron, la Reforma Constitucional ecuatoriana y las contradicciones que —como en el caso de López Obrador— tuvieron lugar a lo largo del período en el que gobernó.

Ya señalamos que para Dávalos el planteo de Laclau resulta a las claras insuficiente para analizar los populismos en general y los latinoamericanos en particular, aunque ello no suponga que se deba adoptar una perspectiva liberal para analizarlo. Al contrario, el planteo para el análisis teórico del populismo y para el análisis de caso debe ser superador tanto de las miradas liberales como la que sostiene Laclau.

En lo que respecta al análisis del gobierno de Correa, Dávalos insiste en que se trata de

un proceso político que rebasa a todo marco de interpretación que pueda definirse desde el populismo. El ciclo político que empezó en el año 2007, fue algo mucho más complejo, más vasto, más profundo que un ciclo populista, al menos en sus términos tradicionales. El sistema político del Ecuador no había visto la construcción de una maquinaria tan eficiente y expedita al momento de hacer la política, como lo fue el movimiento Alianza País.

Dávalos presenta a los gobiernos correístas, sobre todo a los ungidos a posteriori de la reforma constitucional, como una suerte de “tecnocracia” orientada —casi diríamos en términos frankfurtianos— a la manutención y reproducción del propio poder, que —contrariamente a los procesos tanto constituyentes como populistas que tuvieron lugar en Venezuela y Bolivia— tuvo como destinatarios no a las clases populares sino más bien a los sectores medios ecuatorianos.

Según el autor ecuatoriano, el crecimiento de buena parte de estos sectores medios tuvo que ver con esta “tecnocracia” gestada al calor de la Revolución Ciudadana, lo que redundó en la utilización del “miedo” por parte del gobierno, como forma de construcción política.

Sin embargo, el crecimiento de un entramado de características tecnocráticas no permite explicar por sí solo el funcionamiento de la economía. Ahí Dávalos refiere al gobierno de Correa como un gobierno de características extractivistas, tanto en el caso de la producción de petróleo como en el caso de la explotación de otros tipos de recursos, que llevaban a la confrontación directa con los pueblos originarios y con el movimiento indígena:

Para obtener las rentas necesarias del extractivismo, el régimen de la revolución ciudadana tenía que entrar de lleno en una dinámica de violencia y

desposesión en contra de los pueblos indígenas, sobre todo de la amazonía [...]; el gobierno de Rafael Correa era la continuación del neoliberalismo por otros medios.

Esta referencia al basamento político de clase media para el correísmo, como así el enfrentamiento con los sectores populares, sobre todo con el movimiento indígena, permiten inferir, según Dávalos, que el gobierno de Correa —y el partido Alianza País— no fue populista, aunque tampoco de izquierda. La caracterización correcta, para el autor, es la de un gobierno de características, a lo más, progresistas, con las contradicciones que pueden encontrarse en esos gobiernos y movimientos, sobre todo respecto de los beneficios obtenidos por las y los trabajadores; pero también respecto de políticas de derechos que fueran más allá de las y los trabajadores. Políticas —como las que promueven igualdad de derechos para mujeres y hombres o como las que promueven la despenalización del aborto— en las que el gobierno de Correa asumió un perfil claramente conservador.

En su artículo “Ortega y el fantasma de Luis Bonaparte”, William I. Robinson retoma la clásica caracterización que asimila el populismo con el bonapartismo. Esto fue planteado en general desde el campo de la izquierda política y cultural, que retomó lo planteado por Marx en su texto “El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte” (de 1851). Ya desde los primeros renglones del artículo puede encontrarse la analogía marxiana empleada para describir a los gobiernos bonapartistas, en la famosa frase del paso de la “tragedia” a la “farsa”, aplicada a la descripción de los dos gobiernos del Frente Sandinista de Liberación Nacional presididos por Daniel Ortega en Nicaragua, durante los años ochenta, esto es, inmediatamente después del triunfo de la Revolución Sandinista que derrocó al gobierno del dictador Anastasio Somoza en el año 1979 y gobernó ese país hasta 1990; y en la actualidad, con el retorno del sandinismo al gobierno tras ganar las elecciones en los años 2006, 2011, 2016 y 2021.

En una mirada que se asemeja a la que podemos encontrar en el artículo dedicado al caso venezolano, también aquí puede observarse menos un análisis sobre la presencia o ausencia de características populistas en ambos gobiernos que un balance crítico respecto de estas dos etapas del gobierno sandinista; donde se pasó —según el autor— de la tragedia de haber perdido las elecciones a manos de la oposición restauradora del capitalismo en el año 1990, a la farsa de la idea de que los gobiernos sandinistas actuales son de izquierda o antiimperialistas.

El autor describe a lo largo del artículo lo que entiende es una reconversión de un político socialista durante la primera etapa a otro conservador y autoritario en la segunda:

Una parte importante de la izquierda internacional, sin embargo, ha tragado sin cuestionamiento el discurso legitimador del régimen de Ortega, con algunos argumentado que, a partir de su retorno al poder en 2007, Ortega ha retomado la Revolución Sandinista de los años 1980, y que por tanto está bajo el asedio de Estados Unidos. Se trata de una reacción reflexiva “anti-imperialista” de parte de estos sectores de la izquierda, quienes confunden la apariencia con la esencia y la retórica con la realidad al mismo tiempo que hacen caso omiso de las evidencias o de un análisis izquierdista acerca del verdadero contenido programático, o de las relaciones clasistas, del gobierno de Ortega.

Más allá del carácter, a su juicio, neoliberal del actual gobierno de Ortega, Robinson caracteriza al mismo como una franca dictadura, sobre todo luego de los comicios del 2021 y de la continua represión desatada sobre sus oponentes, sean estos de derecha o de izquierda.

Los tres artículos restantes que componen este libro prosiguen los análisis de caso respecto del fenómeno del populismo latinoamericano desde una perspectiva clasista, pero examinándolo en su vinculación o confrontación con las expresiones políticas de izquierda.

El artículo de Igor Goicovic, que analiza el caso chileno desde una perspectiva histórica, lleva por título “Comunistas, socialistas y populistas. Chile 1936-1973”. Para el autor, en términos políticos, los populismos resultan una suerte de “tercera fuerza” entre el liberalismo y el marxismo, que puede girar a derecha o izquierda según la coyuntura política de ese momento. Sostiene también que en Chile sería posible hablar de un nacional-populismo de izquierda que surge en la década del veinte y culmina en la del sesenta, aunque con fuerte impacto posterior tanto en el Partido Socialista como en el Partido Comunista. Al analizar los discursos de estos dos partidos de izquierda en el período señalado, encuentra allí ciertos rasgos populistas, que sintetiza en a) el respeto a la institucionalidad, b) la participación en elecciones, c) la promoción de alianzas entre distintos sectores de la clase obrera, el campesinado y la burguesía progresista, d) el rechazo tanto de la noción de autonomía obrera como de la posibilidad de acceso al poder a través de una vía revolucionaria (de allí el cuestionamiento por parte del gobierno de la Unidad Popular a la estrategia foquista de conquista del poder, y la postulación de la llamada “vía pacífica” hacia el socialismo, o bien la vía “no armada” que postulaban los comunistas).

El golpe de Estado contra el gobierno democrático de Salvador Allende, llevado adelante por Pinochet, según Goicovic termina no solo con la experiencia de un líder populista como Allende sino además sepulta la tradición populista dentro de la izquierda chilena.

Por su parte, Marcelo Raimundo, en su texto “¿Izquierda o derecha? El peronismo y la clase obrera”, considera los vínculos entre el peronismo, al que define como un tipo particular de populismo y la clase obrera en la Argentina, evaluando si el papel desempeñado por la tradición populista supuso una posibilidad de emancipación de las clases trabajadoras y populares o bien si desempeñó más bien un papel de conservación de lo establecido.

Para Raimundo deben comprenderse los populismos, sobre todo en América Latina, como un “acontecimiento”, por el carácter en un principio imprevisto de su irrupción política (“nadie los esperaba, pero irrumpieron”). Se trata de movimientos que, por lo general, asumen una característica popular que se contraponen con lo establecido y que, en el caso del peronismo en Argentina, presentan una importante articulación con el movimiento obrero organizado.

El autor presenta una interpretación del peronismo que, en cierto modo, sigue algunos de los planteos que al respecto realizaron Murmis y Portantiero en su texto clásico, donde se interroga al peronismo de un modo contrario a la interpretación de Germani y de un modo más complejo que aquellas formulaciones que hacen hincapié en la característica personalista y demagógica de Perón. Según Raimundo se debe analizar al peronismo en su vinculación con la clase obrera, como una suerte de laborismo que pudo ser incorporado a las políticas desarrolladas desde el Estado por el gobierno peronista, en cierto modo como aquella “revolución pasiva” a la que había hecho referencia Gramsci en su momento.

El último artículo —previo al epílogo de Francisco Panizza— que compone este libro que nos invita a revistar los debates sobre el populismo, fue escrito por Mariana Mastrángelo y Pablo Pozzi y lleva por título “Populismo e izquierda en América Latina”. El texto comienza considerando el fenómeno del populismo planteando su génesis inicial a partir de una “cuestión nacional” que a posteriori se va a vincular con lo “popular”; aunque agregan que muchas veces estos movimientos presentan fuertes indefiniciones políticas. Desde este punto de vista, y considerando las experiencias históricas previas de gobiernos populistas latinoamericanos, los autores afirman que Bolsonaro no sería estrictamente un líder populista, sino que expresaría una opción política de derecha radicalizada, y que tampoco lo sería Fidel Castro, más un líder izquierdista que populista:

Aquí denominaremos “Izquierda” a todos aquellos movimientos políticos que cuestionan el capitalismo como sistema social y económico y consideraremos “Populistas” a aquellos movimientos que tiendan a considerarse como un vehículo del pueblo y sus aspiraciones, lo que

implica un sesgo progresista en sus políticas. y un desafío para las élites establecidas.

La perspectiva histórica asumida por Mastrángelo y Pozzi se asienta sobre todo en el análisis de las experiencias latinoamericanas y les permite por un lado, distinguirlas de las surgidas en otras latitudes (cuestionando aquellos análisis que tienden a asimilar todos estos movimientos como parte de un mismo proceso). Por el otro, posibilita problematizarlas para dar cuenta de muchas de sus contradicciones, que supusieron la implementación al mismo tiempo de políticas emancipatorias y conservadoras. Además, este enfoque histórico les permite también establecer puntos de conexión como de diferenciación entre los gobiernos populistas que tuvieron lugar en la región entre 1930 y 1960, y los gobiernos que se consideran parte de la “Marea rosa” actual y que algunos han calificado de neopopulistas:

Fuera de América Latina, se cree que los movimientos tradicionalmente asociados con el populismo, como el Narodniki ruso, el Poujadisme francés o el Partido Popular Estadounidense, por lo general se considera que tienen vínculos con perspectivas conservadoras, se remontan a una mítica nación representada en formas “tradicionales”, valores y una “idílica” sociedad campesina/agricultora. En cambio, el populismo latinoamericano tiende a ser visto como un movimiento popular, multclasista y de reforma progresista, que compite con la izquierda tradicional por la lealtad de los trabajadores, empleados y campesinos [...]. Al mismo tiempo, organizaciones como los Partidos Comunistas consideraban a los nuevos movimientos como versiones autóctonas del fascismo europeo, mientras que los populistas tendían a ver a las izquierdas tradicionales como competidores, extrañas y ajenas a las realidades latinoamericanas. Más de medio siglo después, la Marea Rosa incluía a gran parte de la izquierda organizada, que consideraba las reformas de Hugo Chávez en Venezuela, o de Evo Morales en Bolivia, como el camino hacia una revolución popular.

En síntesis, según los autores, en la primera etapa populista, los líderes y los partidos que construyeron compitieron con los partidos y organizaciones de izquierda, buscando desplazarlos —o en ciertos casos perseguirlos— en pos de ganarse las simpatías de las clases trabajadoras y populares; adoptando para ello un lenguaje, unas reivindicaciones y cierta simbología de la izquierda, lo que implicaba por otro lado “nacionalizarla”, esto es, teñirla de una mirada política asentada en las culturas “nacionales” establecidas. La reacción de la izquierda frente a estos movimientos fue, en un primer momento, el de caracterizarlos como tipos de fascismo propiamente latinoamericanos; aunque hacia la década del sesenta del siglo XX se produce un viraje —sobre todo en la izquierda comunista— donde se reconoce el componente popular

de estos movimientos y se plantea que muchas de sus intervenciones pueden ser orientadas en un sentido revolucionario.

La principal diferencia que plantean con los movimientos populistas de la segunda oleada (la “Marea rosa”) es que, en principio, estos últimos no cuestionaron de manera firme las políticas neoliberales implementadas durante los noventa por los gobiernos de entonces en la región. Por otro lado, existieron y existen diferencias en los procesos que se desarrollaron en los diferentes países, donde, por ejemplo, Hugo Chávez se reivindicaba como socialista en tanto que Cristina Fernández se define como peronista y no de izquierda. Otros casos como el de Brasil, supusieron que partidos como el PT, originalmente definido como socialista, virara —a partir de 1998— hacia una perspectiva que podría calificarse de populista. De modo tal que, finalmente, los autores concluyen que, a diferencia de los populismos de los años cuarenta, que se distinguían claramente de las izquierdas; en el caso de las experiencias actuales, esa diferencia se ha transformado en cierta indistinción.

Un hecho, el de la indistinción actual, que merece la pena sea considerado en primer lugar históricamente. Porque no parece ser menor que en el período que transcurre entre la primera etapa populista y la segunda, neopopulista, se implantan, sobre todo en el Cono Sur, las dictaduras cívico-militares. Dictaduras que no solamente buscaron restaurar el “buen” funcionamiento capitalista sino, además —o, precisamente para ello— provocar un “borramiento”; una “desaparición” de cualquier elemento revolucionario y de cualquier memoria social de organización transformadora que se hubiera presentado como crítica al capitalismo. La llegada posterior de las llamadas “transiciones democráticas” abordaron el fenómeno populista como intento de balance de los períodos anteriores y en relación con la búsqueda de consolidación de las recientemente llegadas democracias capitalistas, instaladas como régimen político luego de los períodos dictatoriales, pero sin que su caracterización sea como “capitalista” sino como democracia “a secas”. En este sentido, el fenómeno populista fue observado en general como contradictorio a ese proceso de consolidación de las democracias en la región.

Como señalamos, en los años noventa del siglo XX nos encontramos con la emergencia y posterior consolidación de gobiernos que llevaron adelante políticas neoliberales, aunque de modo algo paradójico buena parte de esos gobiernos —en Argentina, en Bolivia, en Perú, etc.— se hayan gestado a partir de transformaciones en los partidos políticos antes considerados “populistas”, como el peronismo en Argentina, el PNR de Bolivia o el APRA en Perú. Lo que dio origen a la caracterización de los mismos como “neopopulistas de mercado”

(Sarlo, 1994). Sin embargo, el uso del prefijo “neo”, utilizado en este caso para cuestionar desde una perspectiva progresista o de izquierda a los gobiernos neoliberales, no se utilizó políticamente a posteriori, una vez entrados en crisis esos gobiernos y sus políticas.

Una vez llegados a la presidencia nuevos gobiernos, que a grandes rasgos podrían ser caracterizados como “posneoliberales”, se produce el retorno de la —maldita— palabra “populismo” para caracterizarlos; sobre todo por parte de las derechas regionales (cuyas características precisamente “populistas de mercado” y demagógicas se hacen presente de manera flagrante, sobre todo en los medios masivos de comunicación capitalistas dominantes).

Estas y otras cuestiones son abordadas minuciosamente por Francisco Panizza, en el epílogo que acompaña a este libro, donde el autor busca, utilizando de manera reformulada los planteos de Laclau, comprender las continuidades y diferencias que podrían encontrarse entre los gobiernos populistas que se hicieron presentes en la región entre mediados de las décadas del cuarenta y del setenta; y los que surgieron entre las dos primeras décadas del siglo XXI, resultante de la crisis del neoliberalismo.

El análisis no desplaza que esto se produce en un momento histórico donde las derechas regionales se enfrentan de manera radicalizada con los “populismos” latinoamericanos, pero al mismo tiempo en un contexto donde— en términos tanto políticos como culturales— parece haberse desplazado cualquier crítica hacia el capitalismo y la posibilidad de un horizonte socialista.

La publicación de este libro sobre el populismo, sus debates y su vigencia, elaborado en esta coyuntura histórica regional y mundial por autores diversos, muchos de los cuales forman parte del Grupo de Trabajo de CLACSO “Izquierdas y luchas sociales en América Latina”, tal vez suponga un renovado punto de partida para abrir preguntas innovadoras al respecto, para que revisitemos el interrogante —a pesar de ese “borramiento”— sobre la pervivencia de un sistema injusto que ya no solo amenaza con despojar a las y los trabajadores de las posibilidades de vivir una “vida buena”, sino que jaquea la supervivencia de la humanidad en su conjunto y de todo el planeta y su diversidad vital.

BIBLIOGRAFÍA

- Annunziata, Rocío (2021). El populismo como democracia límite. Entrevista a Pierre Rosanvallon. *Andamios*, 18(46). https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632021000200259
- Astarita, Rolando (2008). *Keynes, poskeynesianos y keynesianos neoclásicos. Apuntes de economía política*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
- Bonnet, Alberto (2014). Populismo y nueva izquierda. Algunas ideas. *Revista Herramienta número, 54*, otoño. Buenos Aires.
- Borón, Atilio (2011). ¿Una nueva era populista en América Latina? En Borón, Atilio (Comp.), *Sujeto y conflicto en la teoría política*. Buenos Aires: Ediciones Luxemburg.
- Gómez, Rodolfo (2018a). Políticas estatales keynesianas, poskeynesianas, neodesarrollistas: ¿Progresistas, poscoloniales o de un neoliberalismo regulado? *Revista de ciencias sociales*, 10(34), 103-116. Universidad Nacional de Quilmes.
- Gómez, Rodolfo (2018b). Neopopulismos y neodesarrollismos latinoamericanos en momentos de crisis y de balances. En Ouviña, Hernán y Thwaites Rey, Mabel (Comps.), *Estados en disputa. Auge y fractura del ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO.
- Grüner, Eduardo (2021). *Lo sólido en el aire. El eterno retorno de la crítica marxista*. Buenos Aires: CLACSO.
- Sarlo, Beatriz (1994). *Escenas de la vida posmoderna*. Buenos Aires: Espasa Calpe.
- Thwaites Rey, Mabel (2001). *El Estado de bienestar keynesiano. Una revisión bibliográfica*. Mimeo.

POPULISMO EN AMÉRICA LATINA: DESARROLLO, DEMOCRACIA Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL¹

Ronaldo Munck

TANTO EN EL LENGUAJE coloquial como en el académico, el término “populismo” ha adquirido una connotación negativa más o menos uniforme, que abarca desde ser enemigo de la democracia, anti-inmigrante, hasta su sentido más extendido: estar bajo la influencia irracional de un líder carismático. Sin embargo, en América Latina, el populismo ha sido un factor integral del proceso de desarrollo y democratización, y contemporáneamente juega un papel importante en el proceso de transformación social iniciado por los gobiernos de centro-izquierda surgidos desde la virada del siglo. Es por ello que se hace necesario deconstruir el término “populismo”, como así también explorar sus diversas manifestaciones históricas, para entonces repensar su significado y sus perspectivas a futuro.

En esta introducción a una obra compuesta por estudios de caso detallados sobre el populismo latinoamericano —o el populismo en América Latina— avanzaremos por etapas. En la primera sección me acerco al creciente debate internacional sobre *Repensar el Populismo*, para extraer algunas líneas generales de investigación que podrían servir para orientar nuestras investigaciones. Comienzo establecien-

1 Traducido por Luz Espiro.

do una distinción entre un primer marco estructural/socioeconómico para entender el populismo, otro en el que la mirada se centra en el populismo como estrategia/estilo político y, por último, un enfoque en el que el populismo se entiende dentro de un marco ideacional o discursivo. En esta etapa también introduzco la compleja y —a veces contradictoria— relación entre populismo y desarrollo, democracia y transformación social. En la segunda sección presento varias *Perspectivas Latinoamericanas* sobre el populismo, en un sentido conceptual amplio. Para ello, examino el enfoque estructural funcionalista de la década del cincuenta, la interpretación del “Estado de compromiso” del desarrollo dependiente de los años setenta y, finalmente, el enfoque del discurso y sus críticas que dominaron en la década del noventa. A continuación, pasamos de lo abstracto a lo concreto con dos explicaciones ilustrativas del *Populismo Clásico* del periodo 1930-1970 y del *Populismo Contemporáneo* que surgió en la década del noventa y, especialmente, en el contexto de los gobiernos progresistas posteriores al año 2000. Este análisis se inscribe en el marco más amplio de la economía política, y se enfoca en los patrones cambiantes de acumulación de capital, el papel del Estado y las fases de movilización popular que han caracterizado a América Latina desde 1930.

REPENSAR EL POPULISMO

Cualquier persona que en la región del Atlántico Norte se tope con la palabra “populismo” va a asumir que tiene una connotación negativa, ya sea que refiera a gobiernos que no ejercen la prudencia financiera y solo dan subvenciones a la población para asegurar su popularidad —como en el llamado “populismo económico”—, o a algo oscuro y peligroso que usa a las minorías o a los extranjeros como chivos expiatorios para ganar popularidad entre la población nativa —como el llamado “político populista”—. Inclusive, aquellas personas que votan a estos políticos populistas son vistas como afectadas por alguna forma de “falsa conciencia” o, simplemente, necesitan hacer terapia. Estos partidarios del populismo económico deberían entonces ser disciplinados por el mercado y una buena dosis de política de austeridad, que pronto les hará bajar a la tierra. Por mi parte, tomo las cuestiones planteadas por el populismo y la política populista como reales y válidas. Además, no voy a entrar en el juego académico estéril de buscar *qué es* el populismo, sino que voy a situarlo en su contexto histórico y geográfico concreto, dejando en claro que mi ámbito de análisis es América Latina.

Simplificando la vasta literatura internacional, es posible discernir tres perspectivas principales que son relevantes a nuestro propósito. La primera es estructural y se centra en el contexto socioeconómico

mico del populismo. Esta hace hincapié en el patrón histórico de la industrialización y el impacto que ha tenido en el desarrollo de las clases sociales, así como en las manifestaciones políticas de la lucha de clases. Dicha perspectiva también enfatiza la aparición de nuevas clases trabajadoras y su entrada en la arena política. En años posteriores, puso más énfasis en el carácter “populista” de las políticas económicas, calificando así a cualquier forma de redistribución económica. Desde una perspectiva latinoamericana (ver el siguiente apartado), este enfoque podría seguir siendo valioso, al proporcionar un fundamento de los procesos políticos en términos de las estructuras sociales de acumulación.

La segunda perspectiva se centra en el populismo como estrategia política y/o estilo político. En este caso, el populismo forma parte de una estrategia de poder y las diversas construcciones de “el pueblo” son un elemento integral de dicha perspectiva. Puede tratarse de una figura carismática que desarrolle una relación directa y sin intermediarios con las masas, pero no siempre es así. En América Latina ha habido ejemplos destacados de este caso —hasta el punto de ser caricaturizados—, pero la construcción de un “pueblo” con fines electorales y/o de movimiento social puede ser llevada a cabo también por los partidos políticos. Una variante de este enfoque, menos relevante en mi opinión, es el enfoque en los estilos “populistas” de liderazgo, en los que se fomenta la movilización de las masas manteniendo códigos lingüísticos y de vestimenta que buscan retratar al líder como una persona “del pueblo”. Este paradigma, considerado en su conjunto, dirige nuestra atención al poder estatal y a la forma en que el populismo forma parte del normal proceso político.

La tercera perspectiva es la postestructuralista, centrada en el discurso del populismo, a veces también llamado enfoque ideacional, según la cual más allá del contexto socioeconómico y sociopolítico en el que surja el populismo, siempre se construye ya sea como idea o discurso. Es a través de esta construcción que surge “el pueblo” y su contraparte, “la élite”. Mudde y Rovira Kaltwasser proponen una definición del populismo como una “ideología levemente de centro” (*thin-centered ideology*) que nos permite captar la maleabilidad del concepto y la forma en que puede adscribirse a proyectos tanto de derecha como de izquierda (Mudde y Rovira Kaltwasser, 2017, p. 6). El populismo, desde esta perspectiva, nunca es “puro” en el sentido de tener un contenido ideológico determinado y, frecuentemente, es “transitorio” en el sentido de que persistirá o se transformará en otra cosa.

A continuación, vamos a especificar nuestro marco teórico, examinando la relación del populismo con tres problemáticas distintas

pero interrelacionadas: el desarrollo, la democracia y la transformación social. En los años setenta, una primera oleada de estudios sobre el populismo se centró mayormente en el populismo como característica del atraso. En esta línea, Andrzej Walicki afirmó que “los estudios sobre el populismo ruso pueden ayudarnos a entender algunos patrones ideológicos que surgen hoy en día en las zonas atrasadas del mundo contemporáneo” (Walicki, 1969, p. 92). Peter Worsley, por su parte, construyó toda su teoría del populismo en torno a lo que consideraba la “afinidad electiva” entre el populismo y el capitalismo atrasado de lo que para entonces era llamado el Tercer Mundo (Worsley, 1969). El populismo era concebido como una ideología puente, mientras la “modernización” se pone en marcha y el capitalismo socava los modos de producción precapitalistas y comunales. Se consideraba así una respuesta campesina particular al avance del capitalismo, la modernidad y la industrialización. En este punto, es relevante la historia de los “populistas” rusos de finales del siglo XIX al situarla en el contexto del desarrollo y no solo como precursora ideológica del concepto actual de populismo. Se trataba de un movimiento que, basado en los principios sociales de la comuna tradicional rusa, pretendía eludir la fase de desarrollo capitalista. Una opinión que, en cierta medida, el último Marx compartía y que le llevó a rechazar las tradicionales teorías unilineales del desarrollo (ver Munck, 2021). Sin embargo, en 1895 Lenin atacó el movimiento en *El contenido económico del populismo* (Lenin, 1969) e, inadvertidamente, señaló un uso confuso del término “populista” dentro del marxismo. Este restableció una teoría marxista mecanicista del desarrollo, con el énfasis en la diferenciación social del campesinado y la necesidad imperiosa de una etapa capitalista del desarrollo. Los intentos posteriores de aprovechar las estructuras agrarias colectivistas para generar un desarrollo democrático han sido tachados, según esta tradición, de “neopopulistas” (Blaikie, 2000). Sin embargo, persisten e incluso han aumentado su importancia, por ejemplo, en el discurso del *Buen Vivir/Sumak Kawsay* presente en los países andinos.

En el ámbito del Atlántico Norte, la relación del populismo con la democracia se da por sentada: el populismo es, básicamente, un enemigo de la democracia liberal. Peter Worsley fue uno de los pocos que, en la década del setenta y en contra de las creencias de la época, declaró categóricamente que: “El populismo como participación ‘directa’ es [...] una dimensión de la tradición democrática y socialista” (Worsley, 1969, p. 247). La realidad del “populismo realmente existente”, como señalé antes, es que puede al mismo tiempo promover la democracia, así como llevar a una degradación de la misma; puede dar lugar tanto a la incorporación de las clases populares, antes excluidas del

proceso político, como también puede desarrollar rasgos autoritarios al tratar de mantenerse en el cargo. Margaret Canavan propone una forma elocuente de describir la relación del populismo con la democracia, según la cual, el populismo se encuentra en la brecha entre los “lados redentores y pragmáticos de la política”, con la democracia moderna situada en la intersección (Canavan, 1999, p. 9). Siguiendo esta perspectiva, la democracia no es —o no debería ser— solo una forma pragmática de tratar los conflictos, sino que debería conservar un aspecto edificante al considerarse como parte de un proyecto democrático radical.

Sostengo que las oposiciones binarias recurrentes entre políticos “populistas” y “no populistas” no tienen realmente sentido en la práctica y llevan a taxonomías algo absurdas. Para superar este paradigma, podemos retomar la conclusión de Francisco Panizza que sostiene que el “significado central” del concepto de populismo puede definirse como “un modo de identificación para la construcción de identidades populares” (Panizza, 2005, p. 211). Al igual que con la democracia, el populismo puede considerarse una metodología política más que una ideología establecida. Si acordamos con este enfoque, estaremos menos divididos por la oposición binaria de populista/no populista y democrático/no democrático. Como señala este autor en relación con el populismo, “su ambigüedad inherente se vuelve menos problemática si las identidades no están fijadas de manera definitiva y, en general, posee identidades divididas y superpuestas; lo mismo se aplica a los modos de identificación que buscan, con más o menos éxito, constituir estas identidades” (Panizza, 2005, p. 211). Nuestras identidades no son simples, sino complejas y a veces contradictorias. De ello se desprende que el populismo y la democracia, como toda la política, son complejos y contradictorios, lo cual abre una agenda de investigación dinámica para el estudio del populismo.

Por último, es necesario considerar la relación entre populismo y transformación social. Surge entonces preguntarnos —en el sentido más amplio—, ¿esta relación es regresiva —conservadora— o progresista? Tanto desde una perspectiva marxista como liberal, es fácil argumentar que se trata de un fenómeno regresivo, puesto que se trata de una ideología que refleja el atraso y no el “progreso de la historia”; que se opone explícitamente a la democracia liberal y pretende construir, en vez de ciudadanos, un “pueblo” mítico —incluso racializado—. En realidad, la “democracia liberal” también puede considerarse un mito que ha prevalecido solo durante períodos limitados, en regímenes específicos y beneficiando a determinadas poblaciones. El marxismo ha tenido sus propias tendencias teleológicas —que se remontan a las polémicas de Lenin con los populistas rusos—, las cua-

les también ignoraban la naturaleza unificada y desigual del desarrollo. Entonces, bien por el contrario, el populismo puede considerarse, como un aspecto perfectamente normal de la política y como una respuesta abierta, transitoria o mixta, al desarrollo capitalista. Tenemos que aceptar que tanto Hitler como Mao eran “populistas” y en ese sentido este está, efectivamente, más allá de la izquierda y la derecha. También podemos afirmar que el populismo es progresista de cara a la transformación social de una forma muy concreta. Como dice Ernesto Laclau “el populismo se presenta a sí mismo como subversivo del estado de cosas existente y también como el punto de partida de una reconstrucción más o menos radical de un nuevo orden una vez que el anterior se ha debilitado” (Laclau, 2005, p. 177). El populismo forma parte del proceso de transformación social, pero este no tiene necesariamente un final.

En este punto podemos marcar un paralelismo útil con el análisis de Karl Polanyi sobre la transformación social como una interacción entre la expansión del libre mercado y los mecanismos de protección de la sociedad (Polanyi, 2000). Comentando las diversas reacciones a la gran crisis de los años treinta, Polanyi observó que “el descarte de la utopía del mercado nos enfrenta a la realidad de la sociedad. Es la línea divisoria entre el liberalismo, por un lado, y el fascismo y el socialismo, por otro” (Polanyi, 2000, p. 267). La crisis de los años treinta y la reacción de la sociedad pudieron desembocar igualmente en Hitler, Stalin o Roosevelt. Del mismo modo, es posible considerar que el populismo no tiene necesariamente una pertenencia de clase y que su política depende de cómo se articule con las distintas ideologías de clase. Esta premisa podría ser un pilar útil para una agenda de investigación comprometida acerca del populismo en la política contemporánea.

PERSPECTIVAS LATINOAMERICANAS

Los teóricos de la política latinoamericana, entre los que destaca Ernesto Laclau, han hecho una importante contribución a los debates internacionales mencionados antes en torno al populismo. Para entender estas teorías es fundamental situarlas en su contexto latinoamericano, y al enfoque de Laclau en términos de la experiencia del peronismo en Argentina. En términos más generales, debemos situar a América Latina como una región global periférica con su modelo distintivo de acumulación de capital y sus regímenes políticos (Munck, 2012). Esta región, a grandes rasgos, ha tendido a una dinámica más exógena, en comparación con el desarrollo más endógeno de los países capitalistas centrales, y se ha caracterizado por un mayor grado de intervención estatal, tanto en términos económicos como políti-

cos. Pero, a diferencia del África subsahariana (ver Saul, 1969), se ha integrado en el sistema capitalista global desde la colonización y cuenta con bastantes menos economías comunitarias. Por lo tanto, el populismo no desempeña el mismo papel de ideología “nacional” o cohesiva para la comunidad campesina.

Gino Germani fue un refugiado de la Italia de Mussolini que se instaló en Argentina en 1934 y se dedicó a sentar las bases de una sociología “científica”. Su modelo siguió una perspectiva estructural-funcionalista, diseñada para afianzar el enfoque modernizador de los Estados Unidos orientado a crear un nuevo colonialismo tras la desaparición del colonialismo europeo. En su clásico estudio *Política y sociedad en una época de transición* (1965), Germani examinó la destrucción de las formas tradicionales de consenso y la búsqueda de otra forma de identidad personal por parte de las masas. La nueva clase obrera argentina, surgida a partir de la industrialización y de la migración interna, fue movilizada por el General Perón al margen de las ideologías tradicionales de la clase obrera —socialismo, sindicalismo, anarquismo y comunismo. Para este investigador, el liderazgo carismático y las masas urbanas “desechables” recién movilizadas crearon las condiciones para un “populismo nacional” autoritario amorfo, que era la antítesis misma de la democracia y se aproximaba mucho al fascismo.

Una crítica decisiva al modelo de Germani se dio tanto a nivel empírico como teórico. Frente a su planteo de que el peronismo era simplemente un movimiento populista que convocaba a masas ingenuas, Murmis y Portantiero (1970) mostraron cómo los sindicatos, y la “vieja” clase obrera, fueron motores clave en la creación del movimiento peronista que acabó llevando a un coronel poco conocido a la presidencia. El marco teórico de Germani era cuestionable en términos amplios. Por un lado, la Argentina no disponía de datos sociales necesarios para “aplicar” el modelo estructural funcionalista y, de hecho, Germani se distanció de dicho modelo cuando estaba en Harvard, a fines de la década del sesenta (ver trabajos posteriores como Germani, 1978 y una amplia reseña de su obra en Serra, 2019). En cuanto al modelo en sí, Murmis plantea que los primeros análisis de clase de Germani mostraban “cierta confianza evolucionista en un proceso unidireccional de cambio” (Murmis, 2010, p. 75). Desde esta perspectiva, el populismo peronista fue un desafortunado desvío en la evolución “normal” de las estructuras e ideologías de clase.

El énfasis de Germani en la forma en que el populismo desmovilizaba a la clase obrera fue un tema retomado tiempo después desde una perspectiva marxista por Francisco Weffort (1978), quien destacó los aspectos positivos de la participación popular como resultado de

los gobiernos populistas en Brasil durante la década del sesenta, pero después del golpe de 1964 Weffort comenzó a criticar los aspectos desmovilizadores del populismo y la necesidad de la autonomía proletaria. Sin embargo, este autor siempre sostuvo que el populismo era algo más que la manipulación de las masas, y criticó todas las interpretaciones elitistas de la política. Uno de los aportes más interesantes de Weffort fue la noción del populismo como “Estado de compromiso”, derivado de la incapacidad de la burguesía latinoamericana en lograr la hegemonía en un contexto de relativa autonomía del Estado, el cual, a través del populismo, sustituye la crisis de hegemonía de las clases dominantes.

Otra contribución teórica importante al análisis del populismo fue la de Octavio Ianni (1975) —cercana al paradigma de la dependencia— que postulaba la dominación por parte de las economías industriales avanzadas como el rasgo determinante de la sociedad latinoamericana. Ianni vio el surgimiento del populismo clásico latinoamericano —Perón, Arbenz, Goulart— como el producto de la lucha entre las clases urbanas y los centros industriales contra las oligarquías agrarias y las formas arcaicas del imperialismo. Según Ianni, debemos distinguir entre un “populismo desde arriba”, que promueve la armonía de clases y acaba abandonando a las masas a su suerte, y un “populismo desde abajo”, impulsado por las masas urbanas, los emigrantes, la clase media baja y la izquierda, en una disputa en la que las masas pueden participar en la lucha de clases. Para este autor, el populismo también representa un proceso de secularización a nivel cultural, y una alianza política moderna que, lejos de ser una anomalía, es congruente con la historia de la clase obrera.

Retomando a Laclau, su primer compromiso sistemático con el populismo comenzó a mediados de los setenta con una crítica a Germani, de quien había sido asistente de investigación poco más de una década antes. Ernesto Laclau rechazó la teleología de la teoría de la modernización y la noción de que el populismo representaba simplemente una fase de transición. Tampoco adhirió a la determinación histórica de la clase, como en las explicaciones marxistas ortodoxas. La tesis que plantea Laclau sostiene que “el populismo consiste en la presentación de las interpelaciones popular-democráticas como un conjunto sintético-antagónico respecto a la ideología dominante” (Laclau, 1977, pp. 172-173). Al igual que con el nacionalismo, el populismo no tiene necesariamente una connotación de clase, ya que tanto un proyecto fascista como uno comunista pueden articularlo igualmente. El populismo se inscribe más bien en el contexto de una crisis de hegemonía, cuando las clases dominantes buscan una solución apelando al “pueblo”. También puede ser articulado por las clases

subalternas, en relación con lo cual y a contramano de la idea comúnmente aceptada, Laclau señalaba que “el populismo socialista no es la forma más atrasada de ideología obrera, sino su forma más avanzada” (Laclau, 1977, p. 174).

Laclau volvió a tratar el tema del populismo en 2005 para proponer una nueva teoría, en un extenso estudio sobre *La razón populista* (Laclau, 2005), superador de su trabajo anterior. Su nueva definición sostiene que “por ‘populismo’ no entendemos un tipo de movimiento —identificable con una base social especial o con una determinada orientación ideológica—, sino una lógica política” (Laclau, 2005, p. 117). Mientras que en su momento gramsciano el concepto de “hegemonía” había servido para romper con la lógica social esencialista del marxismo ortodoxo, Laclau se encuentra ahora en un ámbito firmemente orientado por el discurso postmarxista. El populismo es visto entonces como un “significante flotante” que puede ser tomado por ideologías y objetivos radicalmente opuestos. En un proceso de lo que veo como cierta “inflación conceptual”, Laclau comienza a argumentar que “lo político se convierte en sinónimo de política” o, más precisamente, que “la operación política por excelencia va a ser siempre la construcción de un ‘pueblo’” (Laclau, 2005, p. 154). En síntesis, el concepto de “pueblo” —que se encuentra en el corazón del populismo— no está vinculado a ninguna matriz simbólica particular.

La obra de Laclau atrajo gran atención y fue retomada por muchas de las teorías del populismo a nivel global. En el contexto latinoamericano fue apreciada pero también fuertemente criticada por lo que algunos consideraron la orientación filo populista del autor en su abierto apoyo a los gobiernos de este cuño en Argentina y otros lugares. En términos teóricos, como sostiene Francisco Panizza, “el populismo no puede entenderse, como afirmaba Laclau, en términos puramente formales y ontológicos” (Panizza, 2005, p. 197). Ciertamente, el populismo tiene que ver con la construcción de fronteras políticas, una articulación del pueblo frente a la élite. Los discursos populistas en torno a la soberanía del pueblo no son autónomos, sino que extraen su significado de otros discursos, como los de la democracia, la justicia y los derechos. Dicho de otra forma, “si los discursos populistas transmiten significado y valores, no son una ideología” (Panizza, 2005, p. 197).

Una de las críticas a Laclau que me gustaría retomar aquí es la de Samuele Mazzolini (2020), quien básicamente pide una “re-gramscianización” de su enfoque del populismo. Mientras que en su obra anterior Laclau había equiparado la hegemonía con la política, en *La razón populista* cambió a una posición en la que “el populismo es la vía real para comprender algo relativo a la constitución ontológica

de lo político como tal” (Laclau, 2005, p. 6). En el mejor de los casos, podemos decir que Laclau pone el populismo y la hegemonía en el mismo plano. En la práctica, cuando Laclau se comprometió con los gobiernos de centro-izquierda en América Latina, dio prioridad al movimiento populista y a la participación exitosa en las elecciones centrándose menos en la lucha de la izquierda por la hegemonía o en el modo en que los movimientos sociales fueron cooptados por los “gobiernos progresistas” de principios de los años dos mil (ver Munck y Sankey, 2020a y 2020b). Como dice Mazzolini, “el populismo puede derivar en un nuevo orden hegemónico, pero no está garantizado que lo haga. La cuestión es qué decide si lo hace” (Mazzolini, 2020, p. 770).

No es nuestro propósito aquí producir una teoría “latinoamericana” del populismo. Sin embargo, considero que es necesario contar con una teoría fundamentada que sustente las secciones posteriores de este libro, las cuales esbozarán, más concretamente, las características del populismo “clásico” y “contemporáneo” en América Latina. Partiendo del enfoque estructural funcionalista de los años cincuenta y sesenta vamos a centrarnos en los patrones sociales cambiantes que precedieron a la aparición del populismo. Luego, siguiendo el paradigma de la dependencia estructural de los años sesenta y setenta, vamos a centrarnos sistemáticamente en el “Estado de compromiso” que sustenta los regímenes populistas. Por último, es la figura de Ernesto Laclau la que va a dominar, desde una fase gramsciana en la década del ochenta hasta un enfoque más formal de la teoría del discurso en los años dos mil. Sin dejar de lado los avances de Laclau en pos de crear una teoría formal del populismo, aquí desarrollaré su previa lente gramsciana. Considero que esto es lo más adecuado para nuestro análisis del populismo, en el contexto de las diversas fases de acumulación del capital y de construcción social de la hegemonía capitalista.

POPULISMO CLÁSICO

El estudio del populismo en América Latina tiene gran importancia en los debates internacionales sobre el populismo, en la medida en que “América Latina es la región con la tradición populista más duradera y prevalente” (Mudde y Rovira Kaltwasser, 2017, p. 27). Sin embargo, los observadores internacionales suelen malinterpretar a América Latina como si el “populismo” fuera simplemente parte del ADN de la región —es sorprendente lo equivocados que pueden llegar a estar—. Tal es el caso de Margaret Canovan, una de las principales estudiosas del populismo, quien suele referirse al peronismo como un clásico caso de “dictadura populista” (Canovan, 1980, p. 138), a pesar de que Perón ganó elecciones democráticas en 1946, 1951 y 1973. Lo que intentaré

a continuación es deconstruir el populismo en su contexto histórico, y no simplemente contrastarlo con lo que no es, es decir, la democracia liberal. Mi postura es que América Latina representa un verdadero laboratorio para analizar críticamente y en toda su complejidad el fenómeno del populismo.

Parto de la premisa de que el surgimiento de un movimiento populista suele estar relacionado con una crisis, ya sea la del Estado oligárquico en el caso del populismo clásico de los años cuarenta, o la del neoliberalismo en el caso del populismo de izquierdas de los años dos mil. En palabras de Ardití, “el populismo surge como resultado de una crisis de representación, como respuesta a la incapacidad, o rechazo, de las élites para responder a las preocupaciones de la gente” (Arditi, 2010, p. 56). Una crisis de representación crea un terreno en el que se pueden forjar nuevas identidades y crear alianzas para articular respuestas progresistas a las demandas tanto distributivas como de representación. La crisis que originó las condiciones para el surgimiento del populismo clásico fue la del Estado oligárquico de base agroexportadora, el cual para 1930 ya no era plenamente funcional. En términos políticos, este modelo de dominación había comenzado a fracturarse antes de la Gran Depresión del 30, pero fue este factor internacional el que selló su destino.

El modelo económico agroexportador había favorecido a las clases dominantes desde aproximadamente 1870 hasta 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial. El Crac del 29 y la depresión de los años treinta actuaron como catalizadores para la aparición de un nuevo modelo de acumulación y control político. No se trató de un giro brusco —ni se dio en todas partes—, pero efectivamente se produjo un cambio socioeconómico y el surgimiento de nuevas fuerzas políticas. La actitud de *laissez faire* hacia el Estado —el modelo de “vigilante nocturno” (supervisor, pero no protagonista)— ya no era viable. La clase obrera —fruto del desarrollo capitalista— y una creciente clase media urbana ya no pudieron ser excluidas de la política. Las clases dominantes ya no podían decir, como planteó una vez un ministro brasileño, que los sindicatos “eran cosa de la policía”. La necesidad de incorporar a las nuevas clases emergentes, y de reacomodar el equilibrio entre las clases dominantes de base agraria e industrial, creó una presión considerable para el cambio de régimen.

Argentina fue, en muchos sentidos, el caso paradigmático de una reacción nacional-popular a las prolongadas crisis de la década del treinta, conocida como la “década infame” en este país. Perón construyó un movimiento “populista”, con la colaboración activa de los sindicatos que pensaban en términos de un partido obrero. Durante el primer período del peronismo (1946-1955), la participación de los

trabajadores en la renta nacional aumentó considerablemente, pasando del 41% entre 1946-1948 al 49% en 1952-1955. Además, la organización sindical tuvo un impulso sorprendente, aunque esos sindicatos estuvieran firmemente vinculados al Estado peronista a través de estructuras corporativas. De este modo, los trabajadores alcanzaron un grado de “dignidad laboral”, aunque también se esperaba de ellos una mayor productividad. Asimismo, mientras que el Estado alentó a los industriales nacionales, también forjó relaciones cordiales con el capital extranjero. Este Estado desarrollista fomentó, por sobre todo, la expansión capitalista y garantizó la reproducción estable de la mano de obra mediante una mejor educación y el inicio de un estado de bienestar, algo que el anterior Estado oligárquico no consideraba necesario.

El peronismo es un caso de estudio interesante, fundamentalmente porque las interpretaciones de este movimiento “populista” van desde el fascismo hasta el socialismo. Sin embargo, también puede tomarse como modelo de lo que Garretón llama la “matriz sociopolítica estatista-nacional-popular” que prevaleció desde 1945 hasta 1975 en la mayor parte de América Latina (Garretón *et al.*, 2003). El modelo de desarrollo se basaba en la industrialización hacia adentro, o por sustitución de importaciones. En este modelo el Estado tenía un gran protagonismo, organizando la producción y la gestión de la economía y actuando como punto de referencia de todas las reivindicaciones sociales. Los movimientos sociales se incorporaron a través de diversos grados de corporativismo. El viejo orden de un Estado oligárquico y una democracia liberal muy limitada, fueron sustituidos por un discurso nacional-popular —no reducible simplemente a “populismo”— en el que el pueblo versus la oligarquía se convirtió en la oposición dominante en la sociedad, articulando un “bloque histórico” (en términos gramscianos) entre las aspiraciones nacionales y populares.

Si bien el peronismo puede tomarse como un caso emblemático de populismo clásico, en otros países se produjeron dinámicas políticas similares, aunque con modalidades propias. Tal es el caso del populismo en Brasil, que fue muy diferente al de Argentina. Como plantean Cardoso y Faletto, “el populismo de Vargas era un movimiento más bien vago de incorporación del pueblo a la nación [...] era menos una definición económica de los derechos de los trabajadores que implicase participación política, que un movimiento político a favor de los ‘humildes’” (Cardoso y Faletto, 1979, p. 141). Aun así, el *trabalhismo* brasileño carecía del dinamismo y el impacto radicalizador de la organización sindical peronista, en cuanto a la creación de una identidad obrera. Vargas promovió un programa de expansión industrial nacionalista, especialmente en torno a los sectores del hierro

y el acero, pero podría decirse que simplemente siguió las tendencias mundiales de la época. Sus sucesores “populistas”, en particular João Goulart, que llegó al poder en 1961, sí presidieron una variante más radicalizadora —que por ejemplo permitía la sindicalización rural— que condujo al golpe militar de 1964 para mantener el orden dominante.

Otra variante del “Estado de compromiso” fue la del “Cardenismo” en México, durante la década del treinta. Lázaro Cárdenas, aprovechando el impacto histórico de la primera revolución de América Latina en 1910, cambió totalmente el curso de la historia del país. Sus principales iniciativas fueron la creación de un régimen de acumulación de capital estable y viable, una reforma agraria de gran alcance —duplicando la cantidad de tierra redistribuida desde la revolución— y el desarrollo de un movimiento sindical para organizar al proletariado emergente. Está claro que el cardenismo no fue una ideología socialista y que además sirvió para consolidar la hegemonía burguesa en México después de la revolución, mediante la cooptación de las masas subalternas bajo una vaga ideología “revolucionaria”. Sin embargo, como señala Knight, “el cardenismo fue un movimiento genuinamente radical en cuanto a sus objetivos, el cual prometía cambios sustanciales y que además contaba con un importante apoyo popular, aunque este no estuviera mediado por formas democráticas liberales de representación” (Knight, 1994, p. 79). La diferencia entre un movimiento radical y la democracia liberal empezaba a quedar clara después de todas las lecturas eurocéntricas de América Latina.

Los historiadores suelen señalar que no todos los países de América Latina siguen este mismo patrón, y ciertamente el populismo no siempre surge de una crisis de hegemonía. En los países andinos, por ejemplo, el desarrollo dependiente se basó en una economía de enclave, generalmente productora de minerales y posteriormente de petróleo. La persistencia de un Estado oligárquico fuerte hizo que los sectores medios solo pudieran buscar su incorporación a través de alianzas con las clases subalternas, lo que podía generar una dinámica peligrosa. En esta línea, la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) fue lo más parecido a un movimiento populista en Perú, que intentó crear una movilización de masas a mediados de los treinta, pero fue brutalmente reprimido. En Ecuador, la política estuvo dominada durante mucho tiempo por Velasco Ibarra (1934-1972), aunque su “populismo” no fue nada radical, ya que consistía en un Estado laico con protección de los derechos religiosos, una defensa del progreso, un sentido de nación y un *ethos* general según el cual debía permitirse la participación popular (ver Burbano y De la Torre, 1980).

Los regímenes populistas llegaron a su fin en los años setenta, en parte porque el modelo económico en el que estaban basados dejó de ser eficaz. Había una sensación de que la industrialización por sustitución de importaciones se había “agotado”, en la medida en que se había alcanzado la etapa “fácil” y los aranceles estaban resultando contraproducentes. El orden mundial también había cambiado, con políticas globales de disciplinamiento de las economías capitalistas periféricas impulsadas por un régimen de mercado disciplinario. Lo que emergió, fundamentalmente, fue una contradicción entre el “populismo desde arriba” y el “populismo desde abajo”. El “Estado de compromiso”, que había favorecido a las clases dominantes y actuado como amortiguador de las luchas políticas, ya no era capaz de hacer frente a la intensificación del conflicto de clases en el período posterior a la Revolución Cubana de 1959. El guevarismo, los sindicatos combativos y las ligas agrarias no se prestaban tanto al transformismo (absorción y domesticación) como antes. El populismo se estaba convirtiendo en un capricho peligroso y la lucha de clases iba a quedar mucho más en evidencia.

Las clases dominantes superaron la fase en la que tenían que confiar en el “Estado de compromiso” y buscaron un reequilibrio drástico y definitivo de las fuerzas de clase. Este cambio comenzó en Brasil con el golpe de 1964 que pretendía poner fin a la era política “populista”, al borde de algo más peligroso. El golpe chileno de 1973 sepultó un régimen socialista constitucional el cual también había abierto el espacio para las movilizaciones de masas que amenazaban con sobrepasar los límites establecidos. Finalmente, en 1976 los militares en Argentina dieron un paso determinante, no solo para poner fin al populismo peronista —que ya contaba con un brazo armado eficaz—, sino para crear un nuevo modelo económico, político y social basado en la plena incorporación en la economía global, la reducción drástica de la función económica del Estado y el permanente disciplinamiento y atomización de la sociedad civil. Se inauguraba así una nueva era en la que el “populismo” sería el culpable de los fracasos económicos y la inestabilidad política.

POPULISMO CONTEMPORÁNEO

El nuevo proyecto hegemónico de las clases dominantes, apoyado por las instituciones financieras internacionales, consistía en crear una nueva matriz de acumulación y control político. La asignación del mercado sería el mecanismo prioritario para la distribución de los recursos, el Estado tendría un papel enormemente reducido y el sistema de representación política estaría muy debilitado (Garretón *et al.*, 2003, pp. 95-96). Contrariamente a la primacía de la política

como agente organizador de la sociedad, el mercado autorregulado se convertiría en el regulador racional de la sociedad. De esta manera, la sociedad se desarticuló y reestructuró principalmente en lo que se conoció como la “década perdida” de los años ochenta. No solo se desvanecieron los proyectos contrahegemónicos, sino también la imaginación contrahegemónica. Pero a pesar de que el autoritarismo caló hondo en la sociedad, sobrevivieron lazos de solidaridad en los sindicatos, los grupos comunitarios, las organizaciones de mujeres, los círculos eclesiásticos y los nuevos movimientos de familiares de desaparecidos.

Los años noventa fueron testigos del surgimiento de una extraña política híbrida que se describió como “neopopulista”: populista en la forma, pero neoliberal en su esencia. Carlos Menem (Argentina, 1989-1999), Alberto Fujimori (Perú, 1990-2000) y Carlos Pérez (Venezuela, 1989-1993) fueron figuras públicas emblemáticas de la época. Estos líderes, junto con otros en Brasil y Ecuador, llegaron al cargo con todos los rasgos del populismo como estilo político —junto a sus promesas—, pero pronto recayeron en la ideología económica para entonces dominante. No compartían ninguna de las características estructurales del populismo clásico y las políticas que promulgaron eran exactamente lo contrario de las de este tipo de populismo. Pareciera que el término “neopopulismo” se acuñó para describir lo que era esencialmente una forma de caudillismo que pronto se desvanecería en los debates (ver Viguera, 1993), aunque sí tuvo un impacto en la forma en que la política era percibida.

Por un lado, había marxistas para quienes esta supuesta muerte del populismo devolvería la historia al verdadero camino de la lucha de clases. En esta línea, Jeremy Adelman proclamó audazmente el surgimiento del “postpopulismo” en Argentina, con el contundente respaldo de Menem al neoliberalismo de los años noventa, que incluso ató la moneda argentina al dólar estadounidense, lo cual había “cerrado el círculo del país, reabriendo la naturaleza clasista del Estado argentino que Perón había tratado de evitar con una alianza populista” (Adelman, 1994, p. 89). El peronismo y el populismo habían tratado de correr un velo sobre el dominio de clase, pero ahora este se abría y la lucha de clases se reanudaba. Voces más fundadas, como la de Sergio Zermeno (1989), ya venían pronosticando la “vuelta al líder” como resultado de la atomización y la anomia provocadas por el neoliberalismo. De hecho, después de Menem y del colapso del neoliberalismo en Argentina en 2001, quien emergió a la cabeza de un nuevo proyecto hegemónico fue un representante del peronismo de izquierda de los años setenta, Néstor Kirchner específicamente.

Los gobiernos “populares progresistas” posteriores al año 2000 nacieron de la crisis de la matriz neoliberal y de la búsqueda de algún tipo de estrategia de desarrollo postneoliberal. En general, también formaron parte de intensos episodios de lucha de clases y conflicto social. En la Argentina de 2002 hubo durante un tiempo una situación semi-insurreccional o de doble poder, mientras que en Ecuador y Bolivia estallaron luchas masivas después del año 2000 en torno a los recursos naturales y los levantamientos indígenas. Todos estos nuevos gobiernos tenían en común el compromiso con una especie de nacionalismo económico y la recuperación de la categoría “pueblo”. Por ejemplo, en Argentina Néstor Kirchner “estableció una línea divisoria discursiva” (Panizza, 2009, p. 245) entre sus políticas y las del anterior neoliberalismo antinacional de Menem y los militares, para definir su propio proyecto económico y político a través de una reformulación de la política nacional-popular de los años cuarenta. En ese momento, se tendía a considerar una división algo simplista entre una izquierda “democrática” y una izquierda “populista” (por ejemplo, Castañeda, 2006), que reflejaba más la política de quienes la proponían que una división real en la práctica.

Carlos de la Torre y Cynthia Arnson reconocieron que “el resurgimiento del populismo como parte de la discusión [en Estados Unidos] de la política contemporánea en América Latina es, en gran medida, producto del régimen y la persona de Hugo Chávez” (De la Torre y Arnson, 2013, p. 2). De un modo que reflejaba la reacción anterior hacia Juan Domingo Perón en Argentina, toda la atención sobre Venezuela y Chávez se centró en su supuesto autoritarismo y liderazgo carismático. Sin duda, no se trataba de una democracia liberal. Una nueva constitución creó otra forma de democracia directa —claramente, imperfecta y desigual— que sustituyó a la “democracia pactada” o “partidocracia” que había precedido a Chávez y marginado la participación popular. Cuando este murió en 2013, el chavismo se hundió en una espiral de confrontación y desmoralización, mostrando el lado débil de este tipo de régimen populista de “alta intensidad”. Sin embargo, el chavismo actuó como polo de atracción para un renacimiento de la izquierda en todo el continente que, de modo significativo, estableció fuertes vínculos discursivos con la historia precolonial de la resistencia.

Aunque considero que la división entre una izquierda “populista” y una “democrática” es exagerada y tiene motivaciones políticas, los desarrollos posteriores al año 2000 permiten distinguir entre las modalidades de “populismo desde abajo” y “populismo desde arriba”. Por ejemplo, en Venezuela, Bolivia y Ecuador se produjeron importantes niveles de activación social que presionaron a los respectivos gobier-

nos “progresistas” de Morales y Correa. Sus innovadoras estrategias constitucionales crearon un nuevo orden político más inclusivo y participativo, pero chocaron con los movimientos sociales —sobre todo los ecologistas e indígenas— por el modelo económico que seguían. Estos consideraban que el extractivismo era simplemente la cara moderna de las antiguas “economías de enclave” anteriores a 1930, aunque los gobiernos utilizaran los ingresos para la redistribución social. En el caso de Ecuador, el papel económico del Estado aumentó considerablemente —del 25% en 2006, al 50% en 2011—, lo que indica un retorno parcial a la matriz de desarrollo nacional-popular de los años cincuenta.

Aunque nacieron de levantamientos masivos y de la movilización social, los gobiernos progresistas de Ecuador y Bolivia tuvieron que enfrentarse, de modo diferente, al problema de cómo institucionalizar su base de poder y crear una alianza hegemónica duradera. Como señalan Errejón y Guijarro, “las lealtades creadas a través del conflicto son difíciles de trasladar a una institucionalización de la nueva correlación de fuerzas” (Errejón y Guijarro, 2016, p. 34). Este fue especialmente el caso de Ecuador, donde Correa, con una débil base partidista creada por él mismo, trató de marginar a los movimientos sociales y se apoyó principalmente en su carisma individual. Mientras que en Bolivia, si bien había un “gobierno de los movimientos sociales”, existía una creciente tensión dentro de la coalición gobernante que Morales trató de superar mediante un plebiscito para presentarse como candidato a la presidencia por tercera vez. Desmintiendo hasta cierto punto la etiqueta de “populista”, el partido creado por Morales fue capaz de volver a ganar las elecciones en 2021, demostrando que se había construido cierta fuerza hegemónica duradera.

Los gobiernos de centro-izquierda que surgieron en Argentina, Brasil y Uruguay después de 2000 podrían clasificarse como “populismo desde arriba”, en la medida en que no han visto los mismos conflictos de alta intensidad que caracterizaron a los países andinos y a Venezuela. Simbólicamente, estaban mucho menos comprometidos con el proyecto bolivariano o con el discurso del socialismo del siglo XXI. El proceso por el que llegaron al poder los gobiernos progresistas en Brasil y Uruguay no se configuró mediante conflictos sociales masivos sino, más bien, mediante una lenta acumulación de fuerzas sociales y políticas por el cambio. Por su parte, si bien los gobiernos neoperonistas en Argentina nacieron de un movimiento insurreccional, pronto establecieron su hegemonía sobre los movimientos sociales. Cabe remarcar que en todos los casos hubo una astuta construcción de una coalición nacional-popular que pudiera ganar las elecciones. Llamarlos “populismo de clase media” (Svampa, 2013) o “izquierda

populista” (Castaneda, 2006) puede aportar o no a nuestra comprensión de estos procesos.

Lo que podemos decir, siguiendo a Grigera, es que estos casos muestran que “la tarea histórica del populismo es la institucionalización del conflicto social” (Grigera, 2017, p. 447). Ya sea el “kirchnerismo”, que se ocupa del movimiento *piquetero* de desocupados, o el “lulismo”, que se ocupa del movimiento de los sin tierra, vemos un patrón de cooptación y domesticación de movimientos contestatarios. A diferencia de la situación en los países andinos, ambos movimientos políticos progresistas operaron dentro de los parámetros del sistema político establecido. Tanto es así que, en Brasil, el otrora Partido de los Trabajadores, de orientación autónoma, fue absorbido por la política clientelar de los partidos del *establishment*. En Uruguay, aun más claramente, prevaleció el sistema de partidos y simplemente no podemos referirnos al “populismo” en el sentido prejuicioso común de despilfarro económico e irracionalidad política. Sin embargo, los tres gobiernos de izquierda (o centro-izquierda) reflejan la economía política del populismo, como un movimiento orientado a corregir las desigualdades de riqueza en la sociedad.

A partir de 2013 se predijo que los gobiernos populistas-progresistas que arrasaron en América Latina a partir del año 2000 desaparecerían. Sin embargo, estos han demostrado ser notablemente resistentes, a pesar del considerable desencanto. Mi conclusión es que la matriz sociopolítica neoliberal impulsada por el mercado, que prevaleció en los años ochenta y noventa, fue superada de forma contundente. Sin embargo, esto no condujo a la consolidación de un nuevo orden hegemónico estable, sobre todo debido a las divisiones internas, lo cual parece reflejar la famosa afirmación de Gramsci de que “la crisis consiste precisamente en que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer” (Gramsci, 1970, p. 276). A juzgar por el análisis aquí propuesto y la historia reciente, parece que el “populismo progresista” seguirá desempeñando un papel. En su estudio continuo tendremos que priorizar el enfoque estratégico, sin dejar de lado el enfoque estructural del cambio socioeconómico y el énfasis postestructural en la construcción del discurso.

BIBLIOGRAFÍA

- Adelman, Jeremy (1994). Post-Peronist Argentina. *New Left Review* 1(203). January- February.
- Arditi, Benjamin (2010). ¿Populismo es hegemonía es política? *Revista Constellations*, 17(2), 488-497.
- Blaikie, Piers (2000). Development, post-, anti-, and populist: a critical review. *Environment and Planning*, 32, 1033-1050.

- Burbano, Felipe y De la Torre, Carlos (1980). *El populismo en el Ecuador*. Quito: ILDIS.
- Canovan, Margaret (1981). *Populism*. London: Junction Books.
- Cardoso, Fernando Henrique y Faletto, Enzo (1979). *Dependency and Development in Latin America*. California: California University Press.
- Castaneda, Jorge (2006). Latin America's Left Turn. There is more than One Pink Tide. *Foreign Affairs* (May-June).
- De la Torre, Carlos y Arnson, Cynthia (2013). Introduction. En De la Torre, Carlos y Arnson, Cynthia (Eds.). *Latin American Populism in the Twenty-First Century*. Baltimore / Washington, DC: Johns Hopkins University.
- Di Tella, Guido (1983). *Política y Clase Obrera*. Buenos Aires: CEAL.
- Errejón, Iñigo y Guijarro, Juan (2016). Post-Neoliberalism's Difficult Hegemonic Consolidation: A Comparative Analysis of the Ecuadorean and Bolivian Processes. *Latin American Perspectives*, 43(91), 34-52.
- Garretón, Manuel Antonio; Cavarozzi, Marcelo; Cleaves, Peter; Gereffi, Gary y Hartlyn, Jonathan (2003). *Latin America in the 21st Century: Toward a New Sociopolitical Matrix*. Miami: North South Centre Press.
- Germani, Gino (1965). *Política y Sociedad en una época de transición*. Buenos Aires: Paidós.
- Germani, Gino (1978). *Authoritarianism, Fascism and National Populism*. New Brunswick: Transaction Publishers.
- Gramsci, Antonio (1970). *Selections from the Prison Notebooks*. London: Lawrence and Wishart.
- Grigera, Juan (2017). Populism in Latin America: Old and New Populisms in Argentina and Brazil. *International Political Science Review*, 38(4), 441-455.
- Ianni, Octavio (1975). *La formación del Estado Populista en América Latina*. Buenos Aires: Era.
- Knight, Alan (1994). Cardenismo: Juggernaut or Jalopy? *Journal of Latin American Studies*, 26(1), 73-107.
- Laclau, Ernesto (1977). *Politics and Ideology in Marxist Theory*. London: New Left Books.
- Laclau, Ernesto (2005). *On Populist Reason*. London: Verso.
- Lenin, V. I. (1969). The economic content of populism, the economic content of narodism and the criticism of it in Mr. Struve's Book. *En Collected Works Volume 1*. Moscow: Progress Publishers.

- Mazzolini, Samuele (2020). Populism is not Hegemony: Towards a Re-Gramscianization of Ernesto Laclau. *Theory & Event*, 23(3), 765-786
- Mudde, Cas y Rovira Kaltwasser, Cristóbal (2017). *Populism. A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Munck, Ronaldo (2013). *Rethinking Latin America, Development, Hegemony and Social Transformation*. London: Palgrave.
- Munck, Ronaldo (2021). *Rethinking Development: Marxist Perspectives*. New York: Palgrave.
- Munck, Ronaldo y Sankey, Kyla (Eds.) (2020a). *Latin American Perspectives, Issue 4: Social Movements in Latin America: The Progressive Governments and Beyond Part 1*, 4-255, July.
- Munck, Ronaldo y Sankey, Kyla (Eds.) (2020b). *Latin American Perspectives, Issue 5: Social Movements in Latin America: The Progressive Governments and Beyond Part 2*, September, 4-245.
- Murmis, Miguel (2010). Clases sociales en el primer Germani. En Mera, Carolina y Rebón, Julián (Eds.), *Gino Germani La sociedad en cuestión. Antología comentada*. Buenos Aires: CLACSO.
- Murmis, Miguel y Portantiero, Juan Carlos (1971). *Estudios sobre los orígenes del Peronismo*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Panizza, Francisco (2005). Introduction: Populism and the Mirror of Democracy. En *Populism and the Mirror of Democracy*. London: Verso.
- Saul, John (1969). Africa. En Ionescu, G. y Gellner, E. (Eds.), *Populism: its meanings and national characteristics*. London: Macmillan.
- Serra, Pasquale (2019). *El populismo argentino*. Buenos Aires: Prometeo.
- Svampa, Maristella (2013). La década kirchnerista: Populismo, clases medias y revolución pasiva. *LASA Forum fall 2013*, XLIV(4).
- Walicki, Andrzej (1969). Russia. En Ionescu, G. y Gellner, E. (Eds.), *Populism: its meanings and national characteristics*. London: Macmillan.
- Weffort, Francisco (1978). *O Populismo na Política Brasileira*. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
- Worsley, Peter (1969). The Concept of Populism. En Ionescu, G. y Gellner, E. (Eds.), *Populism: its meanings and national characteristics*. London: Macmillan.

¿IZQUIERDA O DERECHA? EL PERONISMO Y LA CLASE OBRERA

Marcelo Raimundo

SER O NO SER

Los populismos acostumbran a emerger como acontecimientos, nadie los espera, pero de repente suceden. Al afectar directamente a los regímenes de dominación vigentes, pues suelen ser movimientos *anti-establishment* con apoyo de importantes sectores de las clases subalternas, tanto adherentes como oponentes tienden a subrayar su carácter disruptivo. Los primeros, lo viven como algo revolucionario, los segundos, como la maldita creación de un líder con tendencias autoritarias y atributos carismáticos que logra manipular ideológicamente a las masas populares apelando a elementos irracionales. Pero como se señaló hace tiempo, los grandes personajes de la historia son figuras que nos hacen víctimas de cierta ilusión óptica, alejándonos de la comprensión de las condiciones que hacen posible tal configuración. Afortunadamente, estas categorizaciones, fuertemente arraigadas durante años y generadas muchas veces por los mismos contemporáneos a los hechos, progresivamente han perdido fuerza y fueron criticadas, complejizadas o reformuladas, pues la distancia temporal y conceptual con los acontecimientos fue abriendo camino hacia análisis menos atravesados emocional y políticamente. Sin embargo, permanece una tendencia a conservar la sustancialización del fenómeno. Esto se refleja justamente en preguntas como la del título de este artículo, que como muchos otros pretende analizar el caso populista argentino: el

peronismo, ¿es de derecha o de izquierda? Sin embargo, ¿tiene sentido preguntar de este modo para entenderlo? La pregunta por el *ser*, ¿resulta la adecuada para *conocer* mejor estos fenómenos históricos?

Una perspectiva anclada en la polaridad *es o no es*, garantiza en parte un acercamiento crítico y objetivo para la explicación del peronismo. Ahora bien, aquí intentaremos aprovechar el potencial conceptual brindado por la idea de *simultaneidad*, que permite poner en juego la heterogeneidad de la realidad histórica, de lo que sucede a la vez, recorriendo la relación del peronismo con la clase obrera como *revolución pasiva*.

ORIGEN EX MACHINA

Una tendencia predominante en las interpretaciones del peronismo es buscar sus características permanentes en su etapa original. Esto lo podemos hallar como constante en sociólogos, historiadores y politólogos, que paulatinamente y desde mediados de la década del cincuenta se interesaron académicamente por entenderlo. Con el paso del tiempo, definir el momento genético del movimiento pasó a tener algo de elasticidad: su nacimiento fue transitando de una fecha precisa (la movilización por la libertad de Perón el 17 de octubre de 1945), a sumarle la etapa previa (1943-1945), para luego ampliarse a un período mucho más extenso que pasó a incluir también el momento de la gestación (1930-1942).

De esta manera, un análisis que partió de encontrar explicaciones sociológicas en una masa obrera migrante interna, joven, básicamente anómica y atrasada ideológicamente, por lo tanto, fácilmente captada por un líder autoritario y carismático, fue sumando progresivamente elementos que precisaron más la dinámica particular argentina respecto a la clasificación general de “movimiento nacional-popular”. Gino Germani, sociólogo italiano que vino al país escapando del fascismo, fue el padre de aquel esquema inicial, construido en base a una interpretación estructural-funcionalista basada en una fallida correspondencia entre modernización socioeconómica y participación política. Ya sea por seguidores o por adversarios, esta concepción fue paulatina y necesariamente tanto completada como criticada, pues con el paso de las décadas una explicación anclada en el origen ya no alcanzaba ni para explicar una identidad política que permanecía incommovible en la mayoría de la clase obrera argentina, ni para responder a las evoluciones político-ideológicas que se dieron en el país desde los años sesenta.

Una de las tácticas reinterpretativas que mayor impulso cobró fue la incorporación de nuevos actores y nuevas escalas de observación al entramado analítico, complejizando así la conformación de la alianza

policlasista, elemento común a toda experiencia populista. Así el líder como mecanismo explicativo singular, el personaje histórico, debió ceder algunos lugares: pasó a ser parte de una élite militar inconforme, que a su vez se revelaba también como parte de una más amplia élite anti *status quo*, conformada por un diverso elenco de grupos de poder locales o regionales, que se definían según su pertenencia a viejas instituciones, fracciones políticas preexistentes o determinados sectores económicos. Eran un conjunto de actores de peso disímil, que no encontraban representación en el marco de la restauración conservadora desatada en los años treinta, y que buscaban legitimidad y poder en medio de las consecuencias de la Crisis de 1929, la influencia de la Segunda Guerra Mundial en la política nacional y la degradación moral de la clase dominante producto del afianzamiento del fraude político y la corrupción estatal.

Por el lado subalterno, el revisionismo tomó fuerza a partir de reformular de la dinámica de la clase obrera. No hay que olvidar que el hecho fundador y distintivo del peronismo como fuerza política argentina, estuvo en incorporar al movimiento obrero en la arena pública, pero de un modo más decisivo que como el radicalismo lo había hecho con los sectores medios unos treinta años antes. La interpretación germaniana había operado sobre un importante borramiento que se tornó imposible de sostener: detrás de la imagen heterónoma de obreros irracionales y sugestionados, comenzó a emerger el rol que desempeñaron los antiguos sindicalistas, la mayoría de ellos vinculados a tradiciones de izquierda, militantes conscientes e internacionalistas. Esta “vieja guardia sindical” finalmente dejaba de ser un bloque homogéneo de oposición a un liderazgo nacionalista y antidemocrático. En base a su negativa experiencia en común con los “nuevos obreros”, un importante sector de sus dirigentes sindicales apoyó la disposición que les mostraba Perón para responder su largo pliego de demandas acumuladas, brindándole sus estructuras sindicales e incluso ensayando nuevas formas políticas como la organización de un partido laborista (Murmis y Portantiero, 1987; Torre, 1990). Se libraban así —al parecer y por un tiempo— de las divergencias entre lógicas políticas y sindicales que recurrentemente atormentaban a la militancia obrera cuando la línea partidaria condicionaba su accionar gremial, en momentos que encontraban un estado dispuesto a atender sus reclamos.

En momentos de crisis, la acción de una voluntad política que entiende la necesidad de actuar como capitalista colectivo para garantizar el sistema, a la vez abre un proceso temporal de *autonomía relativa* del estado respecto al esquema de acumulación capitalista vigente. En el caso argentino, esto generó que distintas fracciones obreras vean

un estado neutral y un “líder permeable” en los que era posible influir. Llamativamente, ello sucedió aun a pesar de la situación extremadamente represiva mantenida tanto por los gobiernos militares como civiles, que durante aquella época llegaron al poder vía diversas prácticas de manipulación del voto, a las que en esos años sus beneficiarios llamaron irónicamente “fraude patriótico”. Ante esa realidad de años, muchos líderes gremiales sindicalistas, socialistas y quizás varios de otras corrientes estaban dispuestos a escuchar a quien representara algo diferente a un *establishment* vinculado a la llamada oligarquía terrateniente y a potencias extranjeras. La falta de representación política que padecía el movimiento obrero argentino en un país que venía desarrollando una importante industrialización urbana desde hacía dos décadas se replicaba en otros sujetos sociales, lo que provocó un vacío político que finalmente llenó el peronismo, abriendo un proceso de participación desde arriba.

Seguir la pista del estado como mediador de la lucha de clases en vez de centrarse en la voluntad de poder de un líder providencial, llevó a una proliferación de nuevos análisis que permitieron hallar líneas de continuidad histórica frente a la imagen rupturista del peronismo. Propagandizar la superación del pasado, fue una de las políticas legitimadoras que más le preocupó al nuevo régimen, por lo que cada medida nacionalizadora, de intervención económica o de carácter social se presentó como nueva, original y, sobre todo, producto de las virtudes y genialidad política de Perón. Su misma carrera como personaje público que sale del anonimato de ser un coronel entre tantos de un gobierno militar más, se da a partir de la creación de un inédito organismo similar a un ministerio de trabajo, la Secretaría de Trabajo y Previsión (STyP), pieza clave que le permitió conformar su alianza con los trabajadores. El grado de iniciativa estatal fue tal que Germani, a partir de comprobar empíricamente que durante el quinquenio de 1940-1944 el promedio de huelgas, huelguistas y días de trabajo perdidos había sido el menor desde comienzos del siglo XX llegó a afirmar que: “(L)a afiliación al sindicato e incluso la participación en las huelgas no eran realmente necesarias para las conquistas de los trabajadores. La mayoría de los beneficios se obtuvieron por presión del Ministerio” (Germani, 1973, p. 474). La intervención estatal sobre el conflicto laboral tenía más de treinta años de historia en el país, pero nadie hasta 1943 se animó a aprovechar políticamente dicho recurso: “Perón hace su primera jugada. La originalidad de su visión está claramente indicada por la calma con la cual sus enemigos dentro del Ejército tomaron su designación, el 27 de octubre, como jefe del Departamento Nacional de Trabajo” (Little, 1979, p. 332). Dicho departamento laboral era dependiente del Ministerio del Interior,

y había sido creado en 1907 a instancias de un grupo de reformistas liberales que buscaban contener y prevenir la conflictividad obrera a partir de una política dual, de integrar vía instancias de negociación a los sindicatos socialistas y sindicalistas revolucionarios y a la vez reprimir sin miras al anarquismo. Aunque no tuvo mucha capacidad ejecutiva si se compara con las lógicas del período peronista, para los años treinta había incrementado ampliamente su actividad regulatoria y desde 1937 cerca de la mitad de los conflictos habían registrado algún tipo de mediación por su parte (Korzeniewicz, 1993, p. 340). Al calor de la organización de los primeros sindicatos industriales a mediados de 1930, hasta los comunistas que encabezaban tal proceso buscaron la intervención del departamento, para negociar salarios, condiciones y ritmos de trabajo, o crear comisiones mixtas para evitar las represalias empresariales y la intervención policial en los conflictos. Es decir, Perón no inventó las relaciones laborales, lo que hizo fue encauzar y subsumir en una lógica estatista un movimiento sindical con altibajos, pero en ascenso —principalmente en los gremios industriales— antes que se transforme en un aluvión incontrolable. Pero hay algo que hizo la diferencia histórica respecto al Departamento Nacional de Trabajo (DNT): la STyP generó oportunidades sin parangón para la lucha reivindicativa de los trabajadores desde mediados de 1944. La cuestión llegó a un punto tal, que solo un año de medidas laborales alcanzaron para convocar la movilización de más de 300 organizaciones patronales, quienes dieron a conocer un manifiesto público claramente crítico con la figura de Perón:

Las fuerzas vivas del país están profundamente preocupadas y alarmadas ante el ambiente de agitación social que daña la disciplina y el esfuerzo productivo de la colectividad. El clima de descontento se origina y es instigado desde las esferas oficiales. [...] Contra lo que nos oponemos es contra la creación de un clima de sospecha, provocación y rebeldía, que estimula el resentimiento y genera reclamos permanentes. (Citado en Famá, 2014, p. 20)

En un breve lapso temporal, la actitud de un sector del aparato estatal hacia los trabajadores había girado 180 grados: de ser un gobierno militar que perseguía al movimiento gremial, pasó a tener una secretaría de trabajo que organizaba sindicatos. Para captar la significación del cambio, se puede tomar como ejemplo el caso del sindicato de los trabajadores del vidrio. A partir de los esfuerzos de un grupo de militantes comunistas, socialistas y algunos anarquistas que junto a obreros interesados en negociaciones a nivel planta se organizaron luego de mucho esfuerzo en las tres fábricas del ramo más grandes del país —ubicadas al sur del gran Buenos Aires— se funda en marzo

de 1942 el Sindicato de Obreros Vidrieros y Anexos (Angélico y Forni, 1995). Pero con la puesta en marcha de la estrategia peronista, lo que años antes hubiera sido un proceso doloroso y de largo aliento, estaba cambiando. Varios de los militantes comenzaron una relación con Perón cuando este era ministro de Guerra y los convocó para pedirles su opinión sobre la gran huelga frigorífica iniciada en septiembre de 1943, un hito que la historiografía reconoce como el primer encuentro del entonces coronel con la problemática obrera. Esta conjunción operó como motor para entablar un proceso de unificación de otras experiencias sindicales en empresas de menor tamaño y más vinculadas a la actuación de obreros calificados, siempre con el respaldo de la STyP. Hasta que en junio de 1944 en asamblea se decide finalmente la formación a nivel nacional del Sindicato de Obreros de la Industria del Vidrio (SOIV), que incluía fábricas de Córdoba, Rosario, Gran Buenos Aires y la Capital Federal. En tiempo récord —solamente 2 semanas— la secretaría le otorgó la personería gremial y el sindicato de inmediato comenzó a actuar en las negociaciones colectivas: un gremio con un pasado fragmentado y menor respecto a otros industriales, en tres meses pudo poner en vigencia convenios laborales en tres de las más importantes empresas de la rama. Más adelante, su secretario general José María Freire, un socialista obrero del vidrio desde su infancia, fue quien reemplazó en su cargo de secretario de Trabajo a Perón en junio de 1946 (Luciani, 2014).

EL PERONISMO COMO REVOLUCIÓN PASIVA

A mediados de los años cuarenta, el parteaguas de *fascismo/antifascismo* impuesto por la guerra mundial condicionó la capacidad de interpretación de muchas fuerzas políticas y sindicales argentinas, que no llegaron a apreciar los cambios que estaban emergiendo hacía años desde lo profundo de la sociedad. En ese contexto, como sugiere Daniel James (2006), la célebre consigna oficial “Perón cumple” reflejaba un estilo político disruptivo que convocó a los trabajadores en base a avances concretos, que lo hacía *creíble*. Con ello se abrió paso en una época donde reinaba un total descrédito de la clase dominante, en paralelo con un estancamiento político de las organizaciones de izquierda, perseguidas por el gobierno y presionadas ideológicamente por el conflicto bélico mundial:

La primera regla que yo cumplí fue: decir la verdad y actuar sincera y lealmente, porque sabía que la masa estaba descorazonada por la falta de sinceridad y de lealtad y por la mentira permanente con que habían procedido los que habían actuado antes que yo. Le prometían todo y no le daban nada. Entonces yo empleé un sistema distinto. No prometer nada y darles

todo. En vez de la mentira, decirles la verdad. En vez del engaño, ser leal y sincero y cumplir con todo el mundo. (Perón, 1952, p. 33)

James procuró subrayar la innovación política de Perón, aunque debió reconocer que estuvo acompañada de varios aspectos comunes respecto a experiencias anteriores que interpelaron lo popular, como el radicalismo. Si vamos a comparaciones internacionales, la cuestión de las semejanzas políticas del peronismo podría ir más allá del estigma totalitario asociado a simpatías fascistas, al pensar en las nacionalizaciones de los ferrocarriles, teléfonos y el banco central, a tono con la oleada iniciada en Europa en 1945. Para el movimiento obrero argentino, estas medidas tuvieron gran significación pues las nacionalizaciones venían siendo una demanda muy asentada desde hacía años en algunos sindicatos fuertes, como el ferroviario. Sin embargo, fue otra emulación la que resultó más significativa para la clase obrera:

Siguiendo las pautas del New Deal, especialmente la ley Wagner, Perón legalizó la sindicalización y estableció una serie de leyes que protegían la negociación laboral y la organización sindical. En 1946, la mayoría de los argentinos apoyaba la implementación de políticas similares a las de Roosevelt. En vista de esto, Perón tuvo bastante éxito presentándose como la versión argentina del presidente de los Estados Unidos. (Pozzi, 2011)

Como el saber histórico no se conforma con la generalización y apuesta por analizar las diferencias específicas de los procesos sociales, cabría preguntarse por qué las semejanzas no pasan de allí, pues como muestra la evidencia Roosevelt no llegó a ser un Perón: no logró como en la Argentina articular en la clase trabajadora una identidad política, que llega hasta la actualidad. La mayoría de las y los sindicalistas argentinos se declaran hasta hoy peronistas y casi con seguridad quien entre a un sindicato argentino se topará rápidamente con una foto de Perón, probablemente acompañada con otra de su esposa Eva. Obviamente, esta peculiaridad del peronismo es lo que lo hace caso de interés político, histórico e intelectual tanto para nativos como para extranjeros: un arreglo político de corte populista, que más allá del reemplazo de personajes, se mantiene funcionando con éxito hasta el presente en base a un esquema de alianzas sociales y políticas muy semejante al de su formación. Ello ha provocado la permanencia de un nudo relacional muy difícil de cortar: como señalamos, al mantener el peso interpretativo en torno al origen, todos los atributos del peronismo terminan atados a la figura de Perón y a su genio político. Con el paso del tiempo las explicaciones procuraron incorporar “el contexto” o “la coyuntura” que hizo posible la emergencia de su liderazgo, lo que como vimos desplazó el momento genético hacia atrás

algunos años. Sin embargo, el innegable papel de líder en dar forma singular al fenómeno no ha podido soslayarse y los análisis entonces han terminado construir un camino que transita, leído desde categorías maquiavélicas, entre la *fortuna* y la *virtud*: si el origen le debe a la primera, su porvenir se entiende por la segunda (Torre, 1990).

Pero lo que nos permitirá entender mejor el significado del peronismo, y en particular, sus efectos en términos de lucha de clases, es acercarnos al aspecto más complejo, el de la personalidad histórica que juega Perón, aunque no tomando la virtud a modo de un atributo, sino como la potencia de una articulación entre fuerzas. Indudablemente Perón hizo algo que otros no vieron, o que vieron, pero no quisieron hacer, y eso hizo la diferencia: “Señores: Cuando yo fui a la Secretaría de Trabajo y Previsión, repito, la gente que iba conmigo no quería ir hacia donde iba yo; ellos querían ir a donde estaban acostumbrados a pensar que debían ir” (Perón, 1952, p. 44).

Perón mismo describe la manera en que se apropió de la oportunidad histórica, en tanto realidad como de expectativas de los sujetos, con una *iniciativa* inédita:

Quando fui a la Secretaría de Trabajo y Previsión, en 1944, me hice cargo, primero, del Departamento Nacional del Trabajo y desde allí pulsé la masa. Comencé a conversar con los hombres, a ver cómo pensaban, cómo sentían, qué querían, qué no querían, qué impresión tenían del gobierno, cómo interpretaban ellos el momento argentino, cuáles eran sus aspiraciones y cuáles eran las quejas del pasado. [...] Llegué a una conclusión y comencé una prédica, para llevar la persuasión a cada uno de los que me escuchaban sobre qué era lo que había que hacer. Lo que había que hacer era parte de lo que ellos querían y parte de lo que quería yo (sic). Quizá alguna vez no les satisfacía del todo lo que yo quería; pero, en cambio, les satisfacía todo lo que ellos querían y que yo había interpretado, y se lo decía. Algunos, cuando yo pronuncié los primeros discursos en la Secretaría de Trabajo y Previsión, dijeron: “Este es un comunista”. Y yo les hablaba un poco en comunismo. ¿Por qué? Porque si les hubiera hablado otro idioma en el primer discurso me hubieran tirado el primer naranjazo. Porque ellos eran hombres que llegaban con cuarenta años de marxismo y con dirigentes comunistas. Lo que yo quería era agradecerles un poco a ellos, pero los que me interesaban eran los otros, los que estaban enfrente, los que yo deseaba sacarles. Los dirigentes comunistas me traían a la gente para hacerme ver a mí que estaban respaldados por una masa. Yo los recibía y les hacía creer que creía eso. Pero lo que yo quería era sacarles la masa y dejarlos sin masa. [...] Cuando les hablaba a los hombres, les decía primero y mezclado lo que había que hacer, lo que yo creía y que quizás ellos no creían. Pero cuando yo les decía la segunda parte, que era lo que ellos querían, entonces creían todos, y se iban con sus ideas y con mis ideas, y las desparramaban por todas partes. Empezaron por decir: hay un loco en la Secretaría que dice algunas cosas que son ciertas, que nos gustan a no-

sotros. Llegaban diez y les hablaba a diez; si llegaban diez mil, les hablaba a diez mil; si llegaba uno, le hablaba a uno. Era mi tarea. Mi tarea era persuadir. Durante casi dos años estuve persuadiendo, y como iba resolviendo parte de los problemas que me planteaba la gente que yo iba recibiendo, la gente fue creyendo no solamente por lo que yo decía, sino también por lo que hacía. Esa persuasión paulatina me dio a mí un predicamento político del que yo carecía anteriormente. Yo no tenía antes nada de eso dentro de la masa, pero lo fui obteniendo con mi trabajo de todos los días y con una interpretación ajustada de lo que era el panorama de lo que esa gente quería y de lo que era [...]. (Perón, 1952, pp. 215-216)

En verdad, su práctica persuasiva resultó exitosa no solamente por la combinación retórica y material, sino que debió complementarse de la mano de distinto tipo de coerciones sobre los sindicatos irreverentes: negarles reconocimiento del gobierno para negociar, aliento de oposiciones para construir sindicatos paralelos, persecución y encarcelamiento tanto de trabajadores izquierdistas como de leales caídos en desgracia, entre otros mecanismos. Como ha señalado Walter Little (1979), la peronización del movimiento obrero no se concretó en el mítico período inicial (1943-1945) sino que fue un largo proceso con etapas, donde los líderes sindicales que no aceptaron totalmente la política de sindicalización alentada por el estado y quisieron guardar cierta autonomía organizativa, fueron desplazados progresivamente, cuestión facilitada por la confianza de las bases obreras en Perón. Sin embargo, lo importante del extracto es cómo en el mismo Perón reconoce al proceso de construcción de su poder no simplemente como producto de un cautivante carisma que pudo convencer a una enorme masa de trabajadores migrantes anómicos y disponibles a la dominación de un líder externo a la clase, sino que debió enfrentar el desafío de un activismo obrero con una fuerte cultura de izquierda, a la que tuvo que responder concreta y necesariamente con una alguna “parte” del “todo” al que aspiraban. El grado en que efectivamente resolvió demandas laborales acumuladas fue tal, que llegó a descolocar a las direcciones obreras y organizaciones de izquierda. Un registro revelador de esto es el caso del Partido Socialista durante su congreso nacional de 1946, donde su conducción tuvo que enfrentar enérgicamente a varios militantes y centros disidentes que presionaban por afianzar posiciones revolucionarias y definir un programa máximo, pues a su criterio consideraban que las demandas del “programa mínimo socialista” ya habían sido realizadas por el gobierno militar (Graciano, 2007).

Este tipo de sucesos son los que hacen sugerente articular al peronismo a la categoría *revolución pasiva*, pues nos puede acercar a una comprensión mejor de la lógica del fenómeno histórico, y a la vez, nos

permite escrutar a dicha noción teórica desde el análisis histórico, a partir de las acciones subjetivas y sus consecuencias en la realidad. El objetivo funcional de la revolución pasiva según Antonio Gramsci es el de establecer un dispositivo de poder estatal que logre vehiculizar “las necesidades de la ‘tesis’ de desarrollarse enteramente, hasta el punto de llegar a incorporar una parte de la antítesis misma, para no dejarse ‘superar’, o sea que en la oposición dialéctica solo la tesis, en realidad, desarrolla todas sus posibilidades de lucha hasta ganarse a los que se dicen representantes de la antítesis” (Gramsci, 1999, p. 188). Esto último es una característica definitoria de las revoluciones pasivas: la iniciativa política es desde arriba, pues lo que falta es justamente iniciativa popular. No es una decisión autónoma desde las clases subalternas, es una determinación que nace desde fracciones de las élites de poder que actuando como capitalista colectivo ante una perspectiva de crisis orgánica busca organizar una salida esquivando la posibilidad de una guerra civil, al estilo del proceso de unificación estatal italiana, aunque es generalizable a todo intento modernizador socioestatal: “Precisamente la brillante solución de estos problemas hizo posible el *Risorgimento* en las formas y los límites en que se realizó, sin ‘Terror’, como ‘revolución sin revolución’” (Gramsci, 1999, p. 387). Lo que gatilla a estos movimientos desde las alturas del poder, son situaciones consideradas de equilibrio catastrófico, dadas a partir de que ninguna de las fuerzas en choque puede imponerse como Estado, y con ello mantener latente el riesgo de que se destruyan recíprocamente. Gramsci apela a que cada solución debe ser explicada a partir del análisis histórico concreto y no simplemente siguiendo un modelo, prestando atención especial a la emergencia de una gran personalidad histórica, fenómeno conocido como cesarismo, que da una solución “arbitraria” a la crisis, pudiendo esta tener tanto un carácter regresivo como progresivo. Aquí no seguiremos esa manifestación del fenómeno, pues nos reconduce a la interpretación que potencia la figura de Perón como dispositivo y como advirtió el intelectual italiano en uno de sus cuadernos: “Sobre la revolución pasiva. Protagonistas los ‘hechos’, por así decirlo, y no los ‘hombres individuales’” (Gramsci, 1999, p. 229).

Por ello dejaremos anotadas algunas de las peculiaridades que presenta el peronismo desde estas categorías. Si se parte de que “la fase catastrófica puede establecerse por deficiencia política ‘momentánea’ de la fuerza dominante tradicional, y no ya por una deficiencia orgánica insuperable necesariamente” (Gramsci, 1999, p. 67), este parecería ser el caso argentino a principios de la década del cuarenta, al menos según la logia de oficiales del ejército que desempeñó un papel clave en la etapa:

Consideraban que existía un frente interno en plena descomposición, una gran presión externa angloamericana y la amenaza cierta de que una fuerza política tipo “frente popular” conquistaría el poder en las elecciones que se avecinaban, lo que facilitaría el advenimiento de un gobierno de izquierda, como había sucedido en España y en Chile. (AA. VV., 1972, p. 45)

Perón fue uno de los miembros fundadores de dicha logia y posteriormente pasó a coordinar dentro de ella al Grupo Organizador y Unificador —conocido por sus siglas GOU— que estuvo dedicado a difundir sus ideas y enrolar adeptos. En segundo lugar, es importante destacar que si bien la iniciativa siempre es desde arriba, se desatan procesos de “revolución-restauración”, “que no son por cierto revoluciones, pero que tampoco son por completo reaccionarios” (Gramsci, 1999, p. 116), o sea, movilizan fuerzas en ambos sentidos de forma simultánea. En el caso argentino, el proceso de industrialización de sustitución de importaciones —fortalecido por los efectos de la crisis de 1929 y luego por la Segunda Guerra Mundial— provocó el crecimiento de la clase obrera y estimuló la actividad gremial de la mano de nuevas fuerzas de izquierda como el comunismo, aunque se debe reconocer que el sindicalismo de la época todavía era débil como fuerza social antagonica (Torre, 1990). Sin embargo, y dentro de la lógica del análisis gramsciano que plantea las relaciones de fuerzas entre las clases no en términos absolutos sino relativos, la situación argentina en la década del cuarenta produjo un tipo de revolución pasiva que debió acoger varias demandas populares:

Estos movimientos pueden tener un contenido relativamente “progresista” en cuanto indican que en la vieja sociedad estaban latentes fuerzas activas que los viejos dirigentes no supieron explotar. [...] Se hacen históricamente eficientes gracias a la debilidad constructiva del adversario, no por una fuerza íntima propia, y por lo tanto están ligadas a una determinada situación de equilibrio de las fuerzas en lucha, ambas incapaces en su propio campo para expresar una voluntad reconstructiva por sí mismas. (Gramsci, 1999, p. 116)

Analizaremos en lo que sigue algunos de los efectos “por abajo” que provocan estos procesos a la luz de la experiencia peronista. La cuestión tiene dos caras, una es la iniciativa desde arriba, una voluntad política puesta para lograr salir de una crisis de dominación de clase; la otra, la de desatar procesos ulteriores que tienen la posibilidad desarrollarse autónomamente: “modificaciones moleculares que en realidad modifican progresivamente la composición precedente de las fuerzas y por lo tanto se vuelven matrices de nuevas modificaciones”

(Gramsci, 1999, p. 188). Este criterio es fundamental cuando tratamos de entender la dinámica histórica, pues dichas “nuevas modificaciones” no siguen forzosamente los lineamientos de la voluntad que puso en movimiento el proceso: la necesidad inicia, luego comienza a jugar la contingencia.

TODO FLUYE

Si se reduce el peronismo simplemente a una experiencia de manipulación autoritaria de masas, es difícil explicar su perduración como identidad política de la mayoría del movimiento obrero, pues no siempre estuvo en el poder, e incluso cuando lo estuvo, llegó a implantar duras medidas antiobreras, como sucedió durante la experiencia de los gobiernos peronistas de Carlos Menem en la década de los noventa. Si hay algo acertado de este estilo político, es que justamente no descansa solo en el dominio, sino que sabe muy bien plantearse como dirección, como hegemónico. Esta es una cuestión que resulta fundamental, pues es lo que permite la modificación de la relación de fuerzas mencionada anteriormente, que se manifiesta como *transformismo*, o sea el proceso de incorporación de los representantes de las clases subalternas al nuevo estado:

(C)on la absorción gradual, pero continua y obtenida con métodos diversos en su eficacia, de los elementos activos surgidos de los grupos aliados e incluso de los adversarios y que parecían irreconciliablemente enemigos. En este sentido la dirección política se convirtió en un aspecto de la función de dominio, en cuanto que la absorción de las élites de los grupos enemigos conduce a la decapitación de estos y a su aniquilamiento durante un período a menudo muy largo. (Gramsci, 1999, p. 387)

Clásicamente, se ha tendido a destacar las incorporaciones por derecha cosechadas por Perón: políticos conservadores del interior, sectores eclesiales, nacionalistas variados, incluso simpatizantes fascistas. Pero ¿qué hay de la absorción hegemónica de las vanguardias de las clases subalternas, o sea, del núcleo de apoyo popular a Perón a largo plazo? Aquí entra en juego, el esquivar las rigideces que provocó el debate sobre los orígenes del peronismo que bosquejamos en la anterior sección: el viejo sindicalismo (aunque muchos de sus militantes eran jóvenes) no fue un bloque rígido, y como se hace evidente a quien profundiza en el análisis, ni quienes tenían la misma pertenencia ideológica podían asegurar posiciones similares frente a la política sindical, y ese factor ayudó al despliegue de la aspiradora transformista. Puede pensarse que la atracción que ejercía Perón influyó principalmente en sectores gremiales de larga trayectoria como sindicalistas revolucionarios y anarcosindicalistas que hacía tiempo cedían rigideces

ideológicas a cambio de negociar directamente con representantes del poder ejecutivo cuando las oportunidades lo permitían, como sucedió durante parte de los gobiernos radicales. Pero esta vez el fenómeno fue mucho más allá, llegando paradójicamente a incluir sectores enteros de fuerzas opositoras que eran perseguidas por el régimen militar, dando inicio a una serie de insólitos *crossovers*. Arriba citamos el caso de Freire, pero quizás los socialistas peronizados que más prensa tuvieron son los que el historiador Raanan Rein (2008) ha denominado la “segunda línea” de Perón: Ángel Borlenghi, que de ser secretario general del Sindicato de Comercio pasó a ocupar el cargo de ministro del Interior de sus primeros dos gobiernos y el abogado del gremio ferroviario Atilio Bramuglia, que llegó a ser ministro de Relaciones Exteriores. Pero si tomamos exclusivamente la actividad sindical — descontando una participación directa en el gobierno o identificación directa con el peronismo la lista de los que se acercan es mucho más extensa e incluyó entre otros socialistas a: José Domenech, secretario general de la poderosa Unión Ferroviaria y líder de la CGT, al que se le atribuye haber bautizado a Perón como “el primer trabajador” y la organización a mediados de 1945 de una enorme marcha en su apoyo llamada “Contra la reacción capitalista”, cuando comenzaba a ser duramente cuestionado desde el *establishment* por sus posturas pro-obreras; David Diskin, del gremio de comercio, fundador junto a varios líderes sindicales más del Partido Laborista, que dio la estructura política para el triunfo electoral de Perón en 1946; José Espejo, del sindicato de la alimentación que llegó a ser secretario general de la CGT desde 1947; Alcides Montiel, fundador del Sindicato de Cerveceros e Hilario Salvo, ligado al socialismo metalúrgico y luego secretario general del sindicato de esa industria. Si bien estas referencias incluyen a líderes sindicales de primera línea, bajo la superficie también existieron movimientos transformistas escasamente registrados, muchas veces vinculados a rivalidades internas, como muestra la siguiente referencia de Joel Horowitz (2004) sobre lo sucedido en el Sindicato de Municipales de la Ciudad de Buenos Aires: “A principios de 1944, un grupo de dirigentes socialistas de menor envergadura manifestaron su descontento con este tipo de conducción autoritaria, muy probablemente porque frustraba sus propios anhelos de poder. Cuando Pérez Leirós se negó a entrar en contacto con Perón, sus opositores se movilizaron para que el gobierno interviniera el sindicato. El gobierno así lo hizo, sin duda llevado por sus propias razones, y los opositores a Pérez Leirós pasaron a ser asesores de la intervención, lo cual les permitió gozar de un poder que no habrían conseguido de otro modo” (p. 310). A esto habría que sumarle casos donde se daba la creación de sindicatos alternativos, incluso muchas veces a iniciativa de la propia

STyP: rápidamente se les otorgaba personería gremial y por lo tanto la posibilidad exclusiva de negociar con reconocimiento estatal, funcionando así como método de vaciamiento de los sindicatos opositores.

Sectores sindicales más a la izquierda del Partido Socialista también fueron puestos ante el dilema de las prácticas de la STyP, y aunque es probable que el éxodo de comunistas hacia un peronismo que profesaba abiertamente el anticomunismo no haya tenido el mismo volumen que el de socialistas, puede comprobarse que al menos generó tensiones entre el partido y los militantes fabriles. El gremio textil es un ejemplo, donde una disputa entre el sindicato socialista y el comunista, que competían en la rama y que también tenían sus propias luchas internas, fue aprovechada por la STyP para crear un nuevo sindicato afín al proyecto peronista. Es importante señalar que algunos militantes fabriles intuían lo que se podía avecinar:

El hecho de que estuviera en la clandestinidad no fue problema para que Jorge Michellón, secretario general de la UOT comunista, se reuniera con Perón en 1943. En total tuvo seis o siete entrevistas. Antes, había solicitado autorización al Partido Comunista para concurrir a las mismas. Sin embargo, un tiempo después, el partido dio por finalizadas las reuniones. No dio crédito a la convicción de Michellón de que se podía ganar más cooperando que oponiéndose y fue suspendido luego del comité central del partido, pero sin perder su cargo en el sindicato. En una entrevista realizada años después afirmó: “Le dije a la dirección del partido que podíamos sacar más de los militares que de Santamarina (gran propietario rural y conocido político conservador). Pero no fui escuchado”. (Citado en Torre, 1990, p. 77)

Hay que agregar al cuadro la efectiva incorporación a las filas peronistas de un número indefinido de activistas sindicales con pasado comunista, como es el caso de Aurelio Hernández, un militante del “sindicalismo rojo” en los veinte y luego del comunismo en el Sindicato de la Madera, que llegó por un breve lapso de tiempo a la jefatura de la CGT peronista en 1947. Incluso, la atracción del peronismo llegó a deslumbrar tempranamente a militantes obreros vinculados al trotskismo argentino. El significado que tenía la nueva política estatal obrera para los activistas que intentaron organizar sindicatos industriales en la dura etapa abierta en los años treinta, se plasmó en testimonios como el de Ángel Perelman, militante fabril que estuvo entre los fundadores, y luego en la dirigencia, del que sería uno de los más importantes sindicatos que apoyaron a Perón, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM):

En nuestro trabajo sindical advertimos a partir de 1944 cosas increíbles: que se hacían cumplir las leyes laborales incumplidas en otra época; que no había necesidad de recurrir a la justicia para el otorgamiento de va-

caciones; otras disposiciones laborales, tales como el reconocimiento de los delegados de fábrica, garantías de que no sería despedidos, etc., etc., tenían una vigencia inmediata y rigurosa. Las relaciones internas entre la patronal y el personal de las fábricas habían cambiado por completo de naturaleza. [...] Los patrones estaban tan desconcertados como asombrados y alegres los trabajadores. La STyP se había convertido en un factor de organización, desenvolvimiento y apoyo para la clase trabajadora. No funcionaba como una regulación estatal por encima de las clases; en el orden sindical, actuaba como un aliado estatal de la clase trabajadora. (Perelman citado en Schiavi, 2011)

Para resumir, si queremos registrar y entender realmente la gama de efectos del peronismo (un populismo con características argentinas) todo este proceso transformista se debe entender saliendo de esquemas fijos producto de modelos estáticos e interpretarlo dentro de las coordenadas dinámicas que puso en marcha la misma iniciativa desde arriba. La crisis de deferencia hacia las élites, acelerada por la actitud política de Perón y sus allegados durante esos años, simultáneamente aflojó lazos y aumentó tensiones entre ideología y política en el campo obrero, provocando una reconfiguración y un dinamismo desconocido que Horowitz (2004) eligió sintetizar así: “la situación argentina en 1943-1945 era extraordinariamente fluida” (p. 310).

SORPRESAS HISTÓRICAS

Mientras aumentaba estrepitosamente el volumen de afiliados sindicales, que de sumar casi 900.000 cotizantes en 1946 pasó en 1954 a representar más de 2.200.000 (Doyon, 2002), la dinámica del dispositivo transformista en funcionamiento, acompañado de diversos mecanismos de coerción estatal y represión directa, lograron completar el proceso de peronización del movimiento obrero argentino. Según el análisis de Little (1979), las oposiciones político-ideológicas más duras fueron eliminadas mayormente entre 1943 y 1946, mientras que los sindicatos que apoyaban al gobierno procurando mantener un nivel de neutralidad fueron desplazados recién hacia 1951, quedando en la legalidad solo los peronistas “leales”. A partir de allí, la autonomía de las organizaciones sindicales frente al estado llegó a su fin y pasaron a ser prácticamente organismos del gobierno, hasta su caída en 1955. Hubo una condición que resultó fundamental para acentuar este proceso de burocratización de los aparatos sindicales: las bases obreras apoyaban mayoritariamente al líder, ya sea por pasividad política o porque tenían preferencia por necesidades materiales más que por definiciones ideológicas, como se puede ver sintetizado en las palabras del militante textil Jorge Michellón:

Miren: yo ya sabía que esto iba a ocurrir. En los años 1943-1944 la gente en las fábricas lo seguía a Perón, y yo traté de que los compañeros se pusieran a la cabeza de la gente. Claro que no podían aparecer como comunistas. [...] La gente decía: "Somos de Perón" y marchaba hacia la Secretaría de Trabajo por sus reivindicaciones. (Michellón, 1979, p. XI)

Con las bases obreras satisfechas y los liderazgos sindicales controlados, podría parecer que finalmente también "Perón cumplía" con su prometedor discurso pronunciado en agosto de 1944 como Secretario de Trabajo y Previsión, ante buena parte de la élite económica argentina, en donde anticipaba:

Para evitar que las masas que han recibido la justicia social necesaria y lógica no vayan en sus pretensiones más allá, el primer remedio es la organización de esas masas para que, formando organismos responsables, organismos lógicos y racionales, bien dirigidos, que no vayan tras la injusticia, porque el sentido común de las masas orgánicas termina por imponerse a las pretensiones exageradas de algunos de sus hombres. Ése sería el seguro, la organización de las masas. Ya el Estado organizaría el reaseguro, que es la autoridad necesaria para que cuando esté en su lugar nadie pueda salirse de él, porque el organismo estatal tiene el instrumento que, si es necesario, por la fuerza ponga las cosas en su juicio y no permita que salgan de su cauce. (Perón, 1944)

Sin embargo, la historia frecuentemente da sorpresas. Una vez más, con el peronismo se repitió lo que alguna vez afirmó Friedrich Engels (1890) hablando del acontecimiento histórico: "lo que resulta de todo ello es algo que nadie ha querido". Lo que siempre hay que considerar en procesos como el que analizamos, es que la iniciativa hegemónica es una voluntad puesta en juego entre muchas otras y por más que en el caso populista corre con la ventaja de contar con los recursos estatales, debe enfrentar las resistencias de las fuerzas que busca conducir, inclusive las de sus propios beneficiarios. La hegemonía consiste más en dirección que imposición, y como la revolución pasiva busca generar un nuevo arreglo entre las clases para salir de una crisis orgánica, debe necesariamente liberar fuerzas sociales que posteriormente pueden tomar un rumbo autónomo, o parafraseando al líder popular, "salirse del cauce". Si es cierto que Perón sujetó a la clase trabajadora, también lo es que quedó sujetado por ella.

Entre 1946 y 1948 se desató un estado de movilización y protesta obrera sorprendente. Al tomar los datos de conflictividad obrera para la ciudad de Buenos Aires, que son los mejores registrados estadísticamente, las cifras hablan por sí solas: durante el cuarto de siglo que precedió a la asunción de Perón —entre 1919 y 1945— las huelgas de-

claradas habían convocado en total alrededor de 750.000 huelguistas, en cambio solamente durante los tres años en cuestión la cifra superó un 50% el período anteriormente mencionado, con cerca de 1.150.000 huelguistas. En cuanto a la frecuencia de huelgas, solo en 1946 se contabilizaron un total de 146, la mayor cantidad anual desde el año 1920. Si observamos los días de trabajo perdidos, en 1947 hubo casi 3.500.000, el mayor número desde los orígenes del movimiento obrero en el país (Doyon, 1977). A pesar que la tendencia de los indicadores tendió a la baja hasta el final del régimen peronista, ya sea por la satisfacción de las demandas obreras como por el mayor disciplinamiento que puso en marcha el estado para controlar la protesta obrera en el contexto de un estancamiento económico y aumento inflacionario que se manifiesta desde 1949, durante 1950 y 1954 retornó con fuerza la conflictividad, aunque esta vez no se manifestó en la frecuencia de huelgas, sino en la cantidad de días de trabajo perdidos de trabajo —alrededor de 2.000.000 y 1.400.000 respectivamente— a raíz de la prolongada duración de las protestas. En la interpretación de las luchas obreras durante el peronismo —desde junio de 1946 cuando asume la presidencia Perón, hasta su derrocamiento en septiembre de 1955— primó durante largo tiempo la versión oficial, que hacia 1947 insistentemente comenzó a señalar la existencia de un “complot comunista”. Ya con las oposiciones políticas e ideológicas controladas para 1950, se observa en conflictos como el ferroviario, que la figura del conspirador mutó a la de “falso peronista”, pues a esa altura cualquier conflicto seguro estaba cruzado con alguna lucha interna dentro del campo oficialista (Aldao, 2020).

Se suele coincidir en que la protesta obrera nunca llegó a significar una ruptura ideológica de las bases trabajadoras con el peronismo, sino más bien

un fenómeno que pareció reflejar la decisión de los trabajadores de replicar la victoria alcanzada en las urnas también en el terreno económico; [...] la expansión de las reformas laborales [...] fue el resultado de las luchas emprendidas por los trabajadores organizados, las cuales en muchos casos se proyectaron más allá de las iniciativas del gobierno, llegando incluso a entrar en colisión con él. (Doyon, 2002, p. 274)

Este último aspecto, es el que explica la decisión de catalogarlas desde el poder como parte de un plan siniestro, aunque paradójicamente, la mayoría de los grandes sindicatos que activaban las protestas pertenecían al sector industrial, es decir, los más beneficiados por las políticas de la STyP, como por ejemplo los trabajadores de frigoríficos, de ingenios azucareros, metalúrgicos y textiles. Aunque no es posible descar-

tar la participación en tales conflictos de grupos de activistas políticos y sindicales desplazados o perseguidos, las huelgas en sí no tenían un carácter opositor al gobierno: “A lo largo de los conflictos estos se esforzaron por mantener a Perón al margen de la protesta”, y a la hora de definir adversarios apuntaron contra empresarios o funcionarios gubernamentales (Doyon, 2002, p. 299). Consenso político y conflicto obrero fueron entonces dos caras de la misma moneda, cuestión que suele ser solapada si se reduce el peronismo al viejo esquema del populismo como conciliación de clases. Según James (1981) la ideología reformista peronista tenía aceptación general, pero la resistencia de los trabajadores ante lo que amenazara sus triunfos llegó a desafiar aspectos fundamentales de la organización capitalista de la producción dentro de la fábrica. Cuando a principios de los años cincuenta, con una economía en crisis el gobierno comenzó a ceder a la presión de los empresarios capitalistas y lanzó una campaña para aumentar la productividad obrera a través de la misma CGT, debió enfrentarse a una férrea cultura obrera asentada en los lugares de trabajo que resistió, convencida de su derecho a negociar su rendimiento —*effort bargain*—, o sea cuánto trabajo por cuánta paga, según sus propias pautas.

Al buscar factores que expliquen el ciclo huelguístico, resulta útil una muy perspicaz observación de Gino Germani (1973), quién a pesar de ser bastante criticado, fue el primero que planteó algunos registros que luego, sin llegar a referenciarlo expresamente, recogieron varios autores con el correr de los años:

Si bien la masa obrera perdió su autonomía en la cúspide dirigente durante la época peronista, debe reconocerse que continuó ejerciendo una importante presión a nivel de bases, presión que a veces impuso limitaciones y condiciones a la conducción de la CGT. En las condiciones de los gobiernos posteriores a Perón, esta experiencia se intensificó aun más. (Germani, 1973, p. 475)

Hacerse de esta cuestión, tuvo el mérito de poner en marcha renovadas interpretaciones sobre la relación entre peronismo y clase trabajadora, que de centrarse en el origen y en un clivaje entre nuevos y viejos obreros, pasaron a explorar la relación entre las dirigencias sindicales y las bases trabajadoras. Con los sujetos del proceso situados de este modo, es posible entender las luchas obreras más allá de esquemas pensados desde las oportunidades políticas que brindó a los trabajadores un régimen que buscaba sustentarse en el apoyo popular, pues cuando estas condiciones desaparecen con la caída de Perón en 1955, la disposición combativa de la clase obrera permaneció intacta, como

lo reflejaron posteriormente las olas de huelgas de 1957, 1959, 1965 y el ciclo de revueltas obreras que se desataron desde fines de los años sesenta hasta mediados de los setenta. Es importante tener en cuenta que el disciplinamiento de las bases obreras fue una probabilidad más que una certeza ya desde la misma génesis del peronismo. Es una dinámica que Daniel James ya descubre durante las violentas protestas del 17 y 18 de octubre de 1945 en la ciudad de La Plata, capital de la provincia más importante del país, relatando la experiencia que llegó incluso a afectar a Cipriano Reyes, uno de los líderes sindicales más importantes del momento, quién más allá de su legitimidad y autoridad no pudo asegurar la pacificación de la protesta para la realización de un acto público:

Mientras recorrían las calles en automóvil, hicieron un llamamiento a los trabajadores para que depusieran sus piedras y garrotes, a fin de demostrar que quienes habían causado daños a la propiedad no eran auténticos trabajadores. En el mitin, tanto Reyes como el secretario de gobierno de la provincia, coronel Benito, apelaron a la calma de los manifestantes y los instaron a abstenerse de usar armas y regresar a sus hogares. Esta apelación surtió algún efecto, pero de ningún modo puso fin a la perturbación del orden. Mientras se desarrollaba el mitin, ciertos grupos apedrearon las oficinas cercanas de *La Prensa* y *La Nación*. Al anochecer se lanzó también un ataque sobre una manzana céntrica poblada de finos negocios y confiterías [...] las escaramuzas continuaron hasta las 22.30, cuando centenares de huelguistas, con emblemas donde se leía la consigna “Esta noche quemaremos *El Día*”, arrojaron piedras y bombas “molotov” contra el edificio del periódico. (James, 1987, p. 100)

Podríamos quedarnos con la idea que esta indisciplina obrera derivó aquí de los imponderables de una lucha de masas callejera, episodio donde se desataron múltiples actos de “iconoclasia laica” (destrucción de símbolos establecidos) que fueron contra representantes de la élite local y a la vez desvirtuaron varios de los cánones habituales de la izquierda, por lo que tanto socialistas como comunistas se rehusaron a aceptar que los “auténticos obreros” se comportaran de modo tan irreverente, por lo que tildaron a los movilizados de hordas de “hampones”, “compadritos” y “lúmpenes” (James, 1987). Pero como hemos planteado, durante los gobiernos peronistas la subordinación al estado y la verticalización de los distintos niveles organizativos del movimiento obrero —cuestión esta ligada al creciente poder de intervención de la CGT y la centralización de las finanzas sindicales en las uniones y federaciones nacionales— no alcanzaron para sofocar totalmente la autonomía de las bases respecto a sus dirigencias, cada vez más comprometidas con las políticas gubernamentales. Parale-

lamente a la burocratización de los sindicatos, la existencia de una fuerte penetración de la organización obrera a nivel planta sirvió para mantener espacios de representación y acción de los trabajadores de base. Esas organizaciones fueron conocidas como las *comisiones internas*, formadas por delegados elegidos por los obreros en los lugares de trabajo. Aunque databan de años anteriores al peronismo, con este adquirieron un grado de poder real en la fábrica para garantizar y defender los beneficios y derechos alcanzados en los convenios colectivos, representar a los trabajadores de la planta ante la patronal y el sindicato, iniciar reclamos directamente a la gerencia, fomentar la participación obrera e incluso una cuestión clave, iniciar medidas de fuerzas. Su estatuto legal era muy difuso y en los convenios no se las reglamentaba pues los empresarios se rehusaban a hacerlo, por lo que claramente fueron impuestas por la lucha obrera: “Los patrones se oponían tenazmente al establecimiento de estas comisiones sindicales porque sabían muy bien que significaba el fin del control unilateral que ejercían sobre la vida laboral de la empresa” (Doyon, 1984, p. 211).

Si nos preguntamos dónde estaría el aspecto “revolucionario” del peronismo al considerarlo como un proceso de revolución pasiva, lo que podría arrimarse más en términos históricos, fue que provocó un importante cambio en la relación de fuerzas entre clases en el lugar de trabajo en favor de los trabajadores. Con la política obrera de Perón, un movimiento obrero con más de 50 años de historia y con una cultura de izquierda arraigada (Pozzi, 2020), por fin logró —aunque para nada del modo como muchos sus líderes sindicales deseaban— tener poder real en las plantas sin necesidad de poner en juego la organización sindical, y esa disminución de los costos de la lucha estimuló el activismo fabril al punto que muchas veces se tornó incontrolable por más que los obreros se sintieran peronistas. James (2006) llamó a esto el *legado ambivalente* del peronismo, y propuso que aceptarlo, más que opacarlo confeccionando definiciones o restauradoras o revolucionarias, resulta más productivo para entender la historia en profundidad. En un marco interpretativo que encuentra en el peronismo solo una restauración autoritaria capitalista, se hace difícil pensar sobre y explicar el tenor de eventos y prácticas obreras como las que según este observador se daban por ejemplo en los ingenios azucareros del norte:

Anoche a las veintitrés [...] un grupo de personas formado por obreros huelguistas cortó el agua y la luz para la población del ingenio “La Trinidad”. Cortó además las líneas telefónicas, dejando aislado el establecimiento. Inmediatamente, y ante la impotencia policial, cometieron toda clase de

desmanes, como ser disparos de armas de fuego y piedras contra las casas del ingenio, especialmente contra el domicilio del contador, cuyas puertas pretendieron forzar. (Gutiérrez, 2014, p. 10)

Eran luchas que habitualmente tenían muy buenos resultados, como puede verse reflejados en los convenios laborales alcanzados en dichos ingenios: si en 1945 se reconocían 112 categorías ocupacionales, para 1946 saltaron a 285 y llegando en 1947 a 444, por lo que los trabajadores se vieron en pocos años altamente beneficiados en términos salariales, de antigüedad laboral y de reducción de la arbitrariedad patronal en relación a la rotación entre puestos.

El peronismo vino para dar una salida burguesa a la crisis de dominación que se palpaba en la época, pero el proceso se conformó de manera tal que Perón “el General” no pudo con Perón “el aprendiz de brujo”: desató fuerzas que, tanto como juraban fidelidad, igualmente se le salían de las manos. Un empresario de una de las más importantes metalúrgicas argentinas, quién aparte tuvo muy buenas relaciones con el presidente, fue al nudo en una entrevista:

Lamentablemente en la época de Perón se dio una suerte de ruptura de jerarquías dentro de la fábrica. Ese es uno de los cargos que se puede hacer al período peronista; porque se distorsionó el manejo de la autoridad dentro de las fábricas como consecuencia de la intervención de los capataces en el mismo sindicato y como consecuencia de una protección indiscriminada a las peticiones obreras en los conflictos que podían estar originados en la aplicación de ciertas normas básicas de disciplina, orden y autoridad dentro de la fábrica. (Schiavi, 2013)

Dadas estas condiciones, la organización a nivel fábrica permitía la generalización acciones obreras de corte clasista, que en otros tiempos serían impensables, según relata una publicación de 1948 de la Cámara Argentina de Industrias Metalúrgicas:

Ya un jefe no puede observar a un subordinado, sin que este responda airadamente, porque sabe que, aunque la observación fuera justa toda una organización sindical está de su parte y no son pocos los jefes, capataces o encargados que se han visto suspendidos por la imposición de una comisión interna. El patrón que antes adoptaba una actitud enérgica en esas emergencias opta hoy por dejar pasar hechos y actos que antes no hubiera tolerado. Influye muchas veces el temor a un paro u otros actos pasivos o de fuerza, que pueden perjudicarlo doblemente. (Schiavi, 2013)

Lo importante a tener en cuenta, como bien identifica la patronal en la cita anterior, es que tanto esa subjetividad obrera rebelde como el

sostén de la nueva relación de fuerzas, dependían de la organización en los lugares de trabajo.

Esta cuestión se les hizo patente a los empresarios cuando intentaron recuperar los niveles de productividad obrera durante el peronismo, y luego también. A pesar de que a partir de 1955 la coyuntura política post golpe y una represión abierta contra el movimiento laboral parecían despejar el horizonte racionalizador, el gobierno y muchas patronales debieron enfrentar una feroz resistencia en los lugares de trabajo:

Después del primer momento de desmoralización que sucedió al golpe de noviembre, encontramos a mediados de 1956 la aparición de una red semi-clandestina de comisiones internas lideradas por una nueva generación de militantes que había tenido muy poca o ninguna experiencia gremial antes de 1955. [...] A lo largo de 1956 y 1957 se llevó adelante una obstinada y dura lucha defensiva contra los planes de racionalización. [...] Además, en vista de la intervención oficial a la estructura formal de los sindicatos, el rol de organizar y expresar su resistencia cayó, por fuerza, sobre las comisiones internas. (James, 1981, p. 339)

En síntesis, podemos afirmar entonces que la revolución pasiva peronista, para los trabajadores significó un mayor poder obrero en los lugares de trabajo, aunque un poder que había que defender cada día, incluso a veces a pesar de los mismos sindicatos.

DERIVACIONES

Pero entonces, el peronismo ¿es de derecha o de izquierda? En principio, parece que encontrar una respuesta estaría dependiendo de qué método escogemos para hacerlo. ¿Contamos cantidades de medidas de gobierno según sean de derecha o de izquierda? ¿Nos fijamos en el pasado político de los funcionarios de estado, gobernadores, intendentes, legisladores? ¿Las nacionalizaciones, las consideramos de derecha o de izquierda? ¿Y el control del comercio exterior? ¿Y las leyes laborales? O quizás sería mejor armar un índice con varias variables, pero ¿cómo las ponderamos?

Tengamos también en cuenta, que la misma posibilidad de hacer la pregunta por la orientación política del peronismo, es parte y resultado del proceso histórico: para el campo político intelectual argentino en 1945 era directamente imposible asociar al peronismo con la izquierda. El peronismo era por entonces demagogia, totalitarismo puro o “el fascismo posible” de la Argentina (Melo, 2014), salvo obviamente para los peronistas, que, por el contrario, se sentían los protagonistas de la “Revolución Justicialista” iniciada por Perón. Sin embargo, el gran apoyo obrero a Perón y reacomodamientos de la

posguerra, hizo que por ejemplo el Partido Comunista (PC) desde mediados de 1946 aflojara de posiciones de oposición extrema, hacia una línea de “criticar lo negativo y apoyar lo positivo”. Unos años después, el PC retornó a una clara línea opositora a raíz de:

(L) a política contradictoria seguida por los círculos dirigentes del peronismo desde 1943 hasta 1949, política que por momentos fue “antiimperialista” y por momentos fue de entendimiento con los imperialistas, que por momentos fue “antioligárquica” y por momentos fue favorable a los intereses de la oligarquía, que por momentos fue “anticapitalista” y por momentos fue favorable a los capitalistas, que por momentos “alentó” las luchas obreras y populares por mejores condiciones de vida y de trabajo y por momentos recriminó a los trabajadores sus “exigencias excesivas”, reprimiendo sus luchas [...]. (Gurbanov y Rodríguez, 2016)

Sin embargo, los motivos no eran simplemente estos, sino que estaban muy relacionados con el florecimiento de tensiones internas dentro del partido para principios de 1949 producto de “apoyar lo positivo”, que llegaron a provocar la expulsión de células partidarias que buscaron establecer una relación más orgánica con el peronismo. El acercamiento retorna en 1951, en razón de un fallido golpe de estado contra Perón, donde el comunismo apoyó al gobierno y decidió avanzar aun más proponiendo la unidad de acción entre peronistas y comunistas. Durante 1952 se buscó profundizar la relación para “debilitar al imperialismo” y el PC pasó expresamente a reivindicar acciones del gobierno. El romance duró poco, hasta principios de 1953, ya que ante el crecimiento de las corrientes filoperonistas a su interior, el aparato partidario resolvió nuevas expulsiones para evitar el riesgo de perder identidad propia. Todos estos coqueteos estaban basados en la valoración de la presencia de fuerzas “progresistas” en el peronismo, que servían a la lucha contra el imperialismo y los sectores de poder económicos tradicionales del país. Debemos tener el claro que en general la izquierda argentina hacia fines de los años cuarenta contenía a su interior apenas resabios de posiciones revolucionarias, el socialismo partidario era reformista, del anarquismo poco quedaba en pie, el trotskismo estaba en pañales y los comunistas se habían embarcado en un etapismo en el que por el momento solo preocupaba la “revolución democrático burguesa”, donde no era mal vista una conducción progresista no necesariamente proletaria. Luego del golpe de 1955, la narrativa vuelve a desplazarse y de valorar el aspecto progresivo del peronismo por sobre la original caracterización fascista, la izquierda pasa a debatir más intensamente acerca de su potencial papel revolucionario: “¿había que pensar al peronismo como un desvío o como un retraso en el camino al socialismo, o podía ser concebido como una

etapa de dicho camino?” (Melo, 2014, p. 82). En verdad, la época abrió una discusión sobre el carácter revolucionario o no de los populismos en buena parte de Latinoamérica, donde el caso argentino vendría a ser el más intenso, si consideramos que una parte importante de la nueva izquierda surgida en los años sesenta y con protagonismo en los setenta se identificó con el peronismo, como es el ejemplo de Montoneros, considerado uno de los movimientos guerrilleros urbanos más grande del continente, cuyo objetivo era construir un *socialismo nacional*.

No se trata aquí ir desde una visión simplemente negativa del populismo a cargarlo de positividad sin más, al considerar el cambio de relación de fuerzas favorable a las clases subalternas que, por un tiempo, dinamizó el peronismo. Lo cierto es que la clase obrera perdió a sus vanguardias históricas en el proceso, aunque también Perón pagó un precio por su capacidad dirigente, que como bien señala James (2006), “no era de decreto, sino más bien, de trato que se debe negociar” (p. 57). Y es por ello que, aunque el peronismo significó garantizar el capitalismo argentino, nunca terminó de ser una opción hegemónica definitiva para el mismo. En el caso peronista, no resulta muy revelador preguntar de qué lado del espacio político está, pues el riesgo es perder la comprensión del fenómeno. La idea de revolución pasiva permite captar algo de esa fuerza dinámica de lo simultáneo, y por lo tanto, de la necesidad del análisis histórico concreto para comprender las distintas situaciones observables. A la vez, su puesta en juego para entender rasgos claves del peronismo, permite enriquecer dicha categoría gramsciana, pues como hemos tratado de mostrar aquí, la iniciativa burguesa puede tener efectos no deseados para quienes la motorizan, y abrir así paso a la contingencia histórica, desatada por la lucha de clases al interior del mismo movimiento peronista.

¿Es posible leer con esta perspectiva a los gobiernos de los Kirchner? Obviamente que sí, porque podemos reconocer fenómenos análogos de pasivización de muchos sectores sociales y políticos que se opusieron tenazmente a la ola neoliberal de la década de los años noventa en Argentina: organizaciones de trabajadores, movimientos de desocupados, corrientes de derechos humanos, entre otros. Pero la evidencia indica que no son totalmente comparables en un punto: sus resultados en tanto poder subalterno. No hay registros visibles que el kirchnerismo haya producido autonomía en los sectores mencionados, que se han revelado mucho más dependientes de la autorización y sostén estatal para sus acciones y que no han mostrado una resistencia activa a gobiernos posteriores como sucedió luego de la caída de Perón en 1955, sino más bien se han acomodado a las directrices del liderazgo peronista. ¿Por qué?

Nuestra conjetura, es que esta cuestión está estrechamente relacionada con el funcionamiento de cambios profundos que han provocado una recomposición de la clase trabajadora argentina desde los años setenta y que se consolidaron en la década de las políticas neoliberales de los noventa impulsadas por el gobierno peronista de Carlos Menem. A las tendencias mundiales de transformaciones en la estructura productiva, como la automatización y descentralización de los procesos de trabajo y el aumento del desempleo, se le sumó un entramado de relaciones laborales que fomentaron la precarización de la estabilidad, la flexibilización contractual y el incremento de la negociación individual o fuera de convenio. Así se desataron dinámicas en los lugares de trabajo que implicaron la pérdida de solidaridades en los lugares de trabajo, la sectorialización de las luchas y el relajamiento en las identidades obreras. Todo ello, impactó negativamente en la permanencia de lo que Pozzi (2020) consideró clave en la formación histórica de la clase obrera argentina: una fuerte cultura obrera en términos clasistas, un sentido común rebelde y de oposición, que se manifestaba como una identidad obrera vivida como un “nosotros versus ellos”. Este fenómeno que servía de base para todas las expresiones contestatarias que emergieron en la historia obrera del país, entró en una resignificación que aún permanece abierta, más allá de que los gobiernos peronistas de los Kirchner han buscado presentar sus políticas laborales como antineoliberales, en pos de recomponer una legitimidad estatal casi destruida luego de la crisis económica, política y social de año 2001.

El kirchnerismo tuvo su caballo de batalla sindical en el retorno de un sistema estable de negociaciones colectivas, pero como ha señalado Marticorena (2020), la realidad estuvo muy lejos de las políticas obreras del peronismo clásico:

El dinamismo de la negociación colectiva se expresó principalmente en la firma de acuerdos de contenido salarial, siendo significativamente menor la firma de convenios colectivos de trabajo, aspecto que se profundiza frente a la aceleración inflacionaria posterior al año 2007. En cuanto a los contenidos no salariales negociados, se ha subrayado la permanencia de diversas cláusulas y condiciones de flexibilización laboral introducidas en los años noventa, así como la usual incorporación de cláusulas de “paz social” en los acuerdos y convenios colectivos. (Marticorena, 2020, pp. 2007-2008)

Además, que las estadísticas muestren un aumento en la conflictividad laboral, una tendencia en aumento sostenido si partimos de un mínimo de 785 conflictos con paro en 2006 a 1336 conflictos en 2014, no deben llevarnos tampoco a analogías fáciles respecto a la época de Perón. Habíamos destacado que la clave específica de ese período fue

un mayor poder de los trabajadores en las plantas incluso a pesar de sus dirigentes y el gobierno, pero durante los mandatos kirchneristas más allá de un aumento en la participación sindical y la movilización de las bases en períodos concretos, el fenómeno fue cualitativamente mucho más moderado:

(E)sta activación de las bases obreras adopta distintas formas, y grados, de fiscalización, interés, participación, que, aun cuando no suponga una oposición a las dirigencias sindicales implica cierto control sobre su política gremial. Los procesos de activación de las bases surgen en muchos casos en oposición a dirigencias tradicionales burocráticas y otras veces resultan de un impulso de las dirigencias o intentos de renovación de sectores sindicales con el fin de ocupar el espacio de trabajo de modo de evitar un avance de sectores antiburocráticos y/o combativos. (Marticorena, 2020, p. 2017)

Es decir, el desafío de las bases a las dirigencias fue muy poco problemático para estas pues, como documentan un buen número de análisis de caso, en la mayoría de los casos la movilización obrera era iniciativa de los líderes sindicales. Y al parecer, la activación de las bases bajo el kirchnerismo tampoco afectó demasiado el control patronal de la producción, si tenemos en cuenta que la productividad laboral por puesto de trabajo entre 2004 y 2011 aumentó aproximadamente un 40%. Si ponemos estos datos en perspectiva con el peronismo clásico donde dicha productividad cayó, ¿qué podríamos concluir? ¿El kirchnerismo fue un populismo de derecha o de izquierda?

En general, la idea de que el kirchnerismo se corresponde con un populismo de izquierda fue en gran medida instalada por la prensa argentina e internacional y parte de la oposición política. En particular, en el ámbito académico la valoración positiva de sus políticas laborales estuvo muy marcada por la recepción del debate anglosajón sobre la “revitalización sindical” surgido a principios de los 2000 (Ghigliani, 2018). De este modo, la oleada de conflictividad sindical iniciada en 2004 fue entendida como un período de oportunidades políticas para el movimiento obrero, abierto por la iniciativa de un gobierno que buscaba fortalecer a las instituciones sindicales y devolverles su credibilidad, con el fin de recomponer la hegemonía estatal y contener así el proceso generalizado de protesta social abierto en la crisis de 2001 integrando a las cúpulas sindicales en una coalición gubernamental (Natalucci, 2015). Pero incluso quienes adhieren a estas líneas interpretativas deben arreglárselas para reconocer lo limitado de dicha “revitalización”. La recuperación del salario real recién en 2007 tocó sus niveles previos a la crisis del 2001 y a partir de allí las negociaciones por aumentos salariales estuvieron tuteladas por el poder ejecutivo, que fijó topes porcentuales anuales. Además, los asalariados formales

perdieron progresivamente el derecho al denominado salario familiar (asignaciones por hijo), los incrementos salariales comenzaron a pagarse en cuotas diferidas en el tiempo y cada vez más trabajadores fueron afectados por el llamado “impuesto a las ganancias”, cuestión esta que progresivamente provocó tensiones en la alianza del gobierno con los jerarcas sindicales. Si bien con altibajos, la recuperación de los ingresos de los trabajadores siguió en aumento durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, aunque en su punto más alto en el año electoral 2015, solo por poco lograron superar momentáneamente los máximos registrados en 1996, tiempos del gobierno neoliberal del peronista Carlos Menem. Fueron años donde además retornó la represión a las protestas obreras, ya sea de forma directa por fuerzas de seguridad estatal, como indirecta a través de patotas organizadas por dirigentes sindicales, cuyo ejemplo más trágico se dio con el asesinato del joven militante Mariano Ferreyra en manos de una de ellas. Dicho enfrentamiento ocurrió en el marco de una protesta de obreros ferroviarios que luchaban contra la tercerización laboral, herencia de las reformas neoliberales que sigue en pie hasta la actualidad y ha resultado clave en la fragmentación de los trabajadores como clase, calculándose que representa entre el 30% y 40% del empleo formal del país. A partir del segundo gobierno de Cristina Fernández, la misma presidenta en persona arremetió en varios de sus discursos contra las demandas de los trabajadores, como en el caso de los trabajadores de subterráneos y los docentes provinciales.

Entonces, si hemos de elegir categorías políticas para caracterizar tanto al kirchnerismo como al peronismo de mediados del siglo XX, quizás sea más acertado salir de la disyunción que instala el “o” y reconocer que la conjunción copulativa “y” capta mejor fenómenos que en estas experiencias se dan *a la vez*. Y que la combinación específica de contenidos sociales, políticos y económicos de esas categorías, son lo que nos pueden concretamente llevar a lo profundo, superando definiciones basadas en orientaciones políticas, y encontrar la *economía política* de los populismos. Para decirlo de otra manera, ir del *ser* al *efecto*, al *devenir*, a las relaciones de fuerzas entre las clases que se configuran, a la composición política de clase que producen, que son las dimensiones verdaderamente históricas de la cuestión.

En el caso del kirchnerismo, si este fue un populismo de izquierda, lo fue básicamente en lo superestructural, ya que la dinámica económica continuó girando en torno a los términos estructurales que estableció en la década del noventa el menemismo. Y justamente eso a la vez juega como la distinción entre ambos: la revolución pasiva la hizo el kirchnerismo. El menemismo logró una relativa adhesión del sindicalismo, y su fuerte se ancló en mantener un alto nivel de

consumo en medio de reformas estatales, privatizaciones y aumento del desempleo, gracias un esquema económico sostenido por la cuasidolarización que logró una ley de convertibilidad del peso. Cuando el volumen de deuda externa la hizo entrar en crisis en la segunda mitad de los noventa, ese consenso pasivo se fue transformando en un creciente estado de protesta social durante muchos años, que buscaba cambiar el rumbo económico. La parte mayoritaria de los distintos movimientos de oposición (sociales, obrero, de desocupados, de derechos humanos, de pequeños productores, universitarios) fue lo que luego del estallido de la gran crisis de 2001 se embolsó el kirchnerismo. Empezando por sus líderes —o si se quiere por sus *intelectuales orgánicos*— y siguiendo por buena parte de las bases de los mismos, logró crearse a diferencia de la experiencia menemista, una identidad política que ha logrado por ahora, perdurar más allá de los avatares económicos y políticos por los que han atravesado sus principales figuras.

BIBLIOGRAFÍA

- AA. VV. (1972). *El peronismo en el poder*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
- Aldao, J. (2020). Las huelgas ferroviarias (1950-1951). Una interna peronista. *Prohistoria. Historia, Políticas de la Historia*, 93-114. <https://doi.org/10.35305/prohistoria.vi29.1194>
- Angélico, Héctor y Forni, Pablo (1995). Nacimiento de una organización sindical en un régimen conservador: El Sindicato de Obreros del Vidrio y Anexos de Avellaneda (1942). *Desarrollo Económico*, 34(136), 579-594. <https://doi.org/10.2307/3467285>
- Doyon, Louise (1977). Conflictos obreros durante el régimen peronista (1946-1955). *Desarrollo Económico*, 17(67), 437-473. <https://doi.org/10.2307/3466641>
- Doyon, Louise (1984). La organización del movimiento sindical peronista 1946-1955. *Desarrollo Económico*, 24(94), 203-234. <https://doi.org/10.2307/3466739>
- Doyon, Louise (2002). La formación del sindicalismo peronista. En Torre, J. (Ed.), *Nueva historia argentina*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
- Engels, Federico (1890). Carta a José Bloch, 21-[22] de setiembre de 1890. *Marxist Internet Archive, Sección en español*. <https://www.marxists.org/espanol/m-e/cartas/e21-9-90.htm>
- Famá, Rubén (2014). *Reseña crítica del derecho colectivo del trabajo argentino*. Trelew: Fundación Patagonia Tercer Milenio.

<https://www.patagonia3mil.com.ar/wp-content/uploads/libros/publicaciones-fama.pdf>

- Germani, Gino (1973). El surgimiento del Peronismo: el rol de los obreros y de los migrantes internos. *Desarrollo Económico*, 13(51), 435-488. <https://doi.org/10.2307/3466131>.
- Ghigliani, Pablo (2018). Sindicalismo y conflictividad laboral en el nuevo escenario. En Pérez, Pablo y López, Emiliano (Ed.), *¿Un nuevo ciclo regresivo en Argentina?: Mundo del trabajo, conflictos laborales y crisis de hegemonía*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. <https://libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/120>
- Graciano, Osvaldo (2007). Los debates y las propuestas políticas del Partido Socialista de Argentina, entre la crisis mundial y el peronismo, 1930-1950. *Revista Complutense De Historia De América*, 33, 241-262. <https://revistas.ucm.es/index.php/RCHA/article/view/RCHA0707110241A/28501>.
- Gramsci, Antonio (1999). *Cuadernos de la cárcel* (Tomo 5). México: Era.
- Gurbanov, Andrés y Rodríguez, Sebastián (2016). Los comunistas frente al peronismo: 1943-1955. *Temas de Historia Argentina y Americana*, 24. <https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/7655>
- Gutiérrez, Florencia (2014). La irrupción del poder obrero en los ingenios azucareros: avances, límites y cuestionamientos. Tucumán, 1944-1949. *Quinto Sol*, 18(2), 1-23. <https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/quintosol/article/view/936/1575>
- Horowitz, Joel (2004). Una vez más los sindicatos y el ascenso al poder de Juan D. Perón. *Desarrollo Económico*, 44(174), 307-311. <https://doi.org/10.2307/3456040>.
- James, Daniel (1981). Racionalización y respuesta de la clase obrera: contexto y limitaciones de la actividad gremial en la Argentina. *Desarrollo Económico*, 21(83), 321-349. <https://doi.org/10.2307/3466352>
- James, Daniel (1987). 17 y 18 de octubre de 1945: el peronismo, la protesta de masas y la clase obrera Argentina. *Desarrollo Económico*, 27(107), 445-461. <https://doi.org/10.2307/3467059>
- James, Daniel (2006). *Resistencia e integración*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Korzeniewicz, Ricardo (1993). Las vísperas del peronismo. Los conflictos laborales entre 1930 y 1943. *Desarrollo Económico*, 33(131), 323-354. <https://doi.org/10.2307/3467085>

- Little, Walter (1979). La organización obrera y el Estado peronista, 1943-1955. *Desarrollo Económico*, 19(75), 331-376. <https://doi.org/10.2307/3466690>
- Luciani, María Paula (2014). La etapa formativa de la Secretaría de Trabajo y Previsión (1943-1946): primeros pasos organizativos y figuras relevantes. *Anuario Del Instituto De Historia Argentina*, 14. https://www.anuarioiha.fahce.unlp.edu.ar/article/view/IHAn14a01/html_14.
- Marticorena, Clara (2020). Negociación colectiva y conflicto laboral en Argentina (2003-2015): Entre la rutinización y la activación de las bases obreras. *Izquierdas*, 49, 2001-2020. http://www.izquierdas.cl/images/pdf/2020/n49/art98_2001_2020.pdf
- Melo, Julián Alberto (2014). Los tiempos del populismo. Devenir de una categoría polisémica. *Colombia Internacional*, 82, 71-98. <https://doi.org/10.7440/colombiaint82.2014.04>
- Michellón, Jorge (1979). Reportaje a Jorge Michellón. *Controversia* (2-3), Suplemento, VIII-XI. <http://americalee.cedinci.org/wp-content/uploads/2016/08/CONTROVERSIA-2-3.pdf>
- Murmis, Miguel y Portantiero, Juan Carlos (1987). *Estudios sobre los orígenes del peronismo*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Argentina Editores.
- Natalucci, Ángel (2015). Corporativismo y política: dilemas del movimiento obrero durante el kirchnerismo. *Población y sociedad*, 22(2), 5-25. <http://www.poblacionysociedad.org.ar/archivos/22/P&S>.
- Perón, Juan (1944). *Discurso de Juan Domingo Perón en la Bolsa de Comercio siendo Secretario de Trabajo y Previsión en 1944*. <https://www.educ.ar/recursos/129173/secretario-de-trabajo-juan-d-peron-en-bolsa-de-comercio/download/inline>
- Perón, Juan (1952). *Conducción política*. Buenos Aires: Ediciones Mundo Peronista. http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/peron_j_d.conduccion_politica_mundo_peronista.pdf.
- Pozzi, Pablo (2011). Afterword: We are all Peronist. En Donda, Victoria, *My name is Victoria*. Nueva York: Other Press.
- Pozzi, Pablo (2020). *¡Usted es comunista!: clase, cultura y política en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: Prometeo Libros.
- Rein, Raanan (2008). Los hombres detrás del Hombre: la segunda línea de liderazgo peronista. *Araucaria*, 10(19). <https://revistascientificas.us.es/index.php/araucaria/article/view/1186>.

- Schiavi, Marcos (2011). Los sindicatos comunistas entre el 17 de octubre y su disolución. El caso textil y metalúrgico. En *IX Jornadas de Sociología*. <https://cdsa.aacademica.org/000-034/241.pdf>.
- Schiavi, Marcos (2013). Movimiento sindical y peronismo (1943-1955): hacia una nueva interpretación. *Trabajos Y Comunicaciones*, 39. <https://www.trabajosycomunicaciones.fahce.unlp.edu.ar/article/view/TyC2013n39a06>
- Torre, Juan Carlos (1989). Interpretando (una vez más) los orígenes del peronismo. *Desarrollo Económico*, 28(112), 525. <https://doi.org/10.2307/3467001>
- Torre, Juan Carlos (1990). *La vieja guardia sindical y Perón*. Buenos Aires: Sudamericana.

COMUNISTAS, SOCIALISTAS Y POPULISTAS. CHILE, 1936-1973¹

Igor Goicovic Donoso

INTRODUCCIÓN

Existe solo un gran consenso en torno al populismo y es que se trata de un fenómeno difícil de definir. Efectivamente, si bien desde comienzos del siglo XX América Latina ha vivido diferentes experiencias populistas, no es menos cierto que su conceptualización continúa siendo compleja.² A comienzos de la década de 1970 Octavio Ianni, uno de los intelectuales que más profundizó en torno a esta materia, sostuvo que, pese a las experiencias históricas disímiles vividas por los países de la región, el populismo irrumpió en la mayoría de ellos como un movimiento de masas que se instaló en el “centro de las rupturas estructurales” que acompañaron a las crisis del sistema capitalista mundial y, por extensión, de las oligarquías latinoamericanas (Ianni, 1973, p. 85). A partir de estas crisis y con las masas constituidas como actores políticos, se produjo la reestructuración del Estado, bajo conducción burguesa. Las nuevas élites dirigentes, apoyadas en diferentes

1 Este trabajo forma parte del proyecto de investigación FONDECYT Regular N° 1212034, La formación del Partido Socialista de Chile. Militancia, conflicto y cultura política, 1932-1953.

2 Marco Palacios incluso llega a calificarlo como concepto “ambiguo” (Palacios, 2011, pp. 14-15).

sectores sociales, en especial obreros y clases medias, llevaron a cabo una profunda reorganización de la economía, enfatizando en el dirigismo estatal y, a partir de ellos, redistribuyeron una parte de la renta expresada como política social. Ello operó, a su vez, como estrategia clientelar que, por una parte, consolidó las adhesiones de las masas a los liderazgos carismáticos y, por la otra, reconfiguró las relaciones de poder (Ianni, 1973, pp. 106-149).³ En ello jugó un rol fundamental el “régimen de pasiones y emociones” que, en la perspectiva de Rosanvallon, activó la movilización populista y arraigó el vínculo de relación con el líder (Rosanvallon, 2020, pp. 53-55).

No obstante, los ritmos históricos de dicho proceso, como señala Osmar González (2007, pp. 87-92), fueron diferentes. En algunos países, como el Perú de Billinghurst (1912-1914) o en el Uruguay del segundo período de Batlle Ordoñez (1911-1915), el proceso partió a comienzos del siglo XX, mientras que, en otros, como el Brasil de Vargas (1930-1945) o el México de Cárdenas (1934-1940), lo hizo en la década de 1930.⁴

Pero el populismo no se reduce solo al tipo de Estado o a las relaciones de poder que se constituyeron en un momento histórico determinado, y tampoco quedó restringido al líder que lo encarnó. También refiere al pueblo, es decir a las masas que le otorgan fuerza política al movimiento. Desde esta perspectiva los movimientos populistas fueron heterogéneos. El pueblo convocado y movilizado por los populismos estaba formado por obreros industriales, campesinos con y sin tierras, maestros, profesionales, intelectuales, funcionarios públicos y una amplia gama de desocupados y subocupados (Entrena, 1996, pp. 101-121). En muchas circunstancias, además, la apelación refiere a la tradición, la cual se construye sobre la base de una identidad inmanente (el pueblo), que se construye históricamente y que, en cuanto tal, es heredera de las luchas de resistencia frente a la conquista, de las luchas de descolonización y de las luchas de independencia. En estos casos la historia de los combates compartidos actúa como recurso programático y como factor agitativo (Adinolfi, 2010).

Todos estos actores pasaron a constituir lo que Dussel (2012, p. 165), parafraseando a Gramsci, denominó como el bloque social de los oprimidos. Los oprimidos, en consecuencia, aquellos que se articulan no solo en la explotación económica, sino que, en todo el amplio campo de la exclusión, la discriminación y la represión, son los llama-

3 Para el análisis de las principales corrientes interpretativas sobre el fenómeno populista ver: Viguera (1993, pp. 49-66) y Aldao y Damin (2013, pp. 149-169).

4 Chantal Mouffe sostiene que la crisis del neoliberalismo contemporáneo abrió un nuevo “momento populista” (Mouffe, 2019, pp. 23-39).

dos a configurar la base social de apoyo del movimiento populista, ya sea para efectos de su movilización electoral o para una demostración de fuerza en el espacio público.

Pese a lo anterior, el populismo no puede ser encasillado en una vertiente ideológica específica. Por el contrario, el signo que adoptaron los movimientos y gobiernos populistas se encontraba fuertemente asociado a la coyuntura política que se vivía a escala regional o local. Ello les permitía girar a izquierda o derecha, en función de las correlaciones de fuerza que se configuraban. En ese mismo sentido, los populismos tendían a reivindicarse como una tercera vía, tanto frente al marxismo como ante el liberalismo (Martínez y Rubio, 2017, pp. 18-20). Así ocurrió con las experiencias populistas lideradas por Getulio Vargas en Brasil o por Juan Domingo Perón en Argentina. En otros movimientos, por el contrario, se enfatizó de manera más clara la orientación revolucionaria o transformadora, como ocurrió con Lázaro Cárdenas y el Partido Nacional Revolucionario (PNR) en México, con el Frente Popular de Chile o con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de Bolivia. La lógica política del populismo, para Laclau, siempre va a ser “imprecisa y fluctuante”, dado que opera en una realidad social que es heterogénea y fluctuante (Laclau, 2016, pp. 150-151). Mirado desde esta perspectiva los problemas teóricos e historiográficos remiten tanto al sujeto, en este caso a la relación pueblo y clase y al proyecto, por ende, a la relación entre populismo y socialismo (Retamozo, 2017, p. 64),

En Chile podemos reconocer la existencia de un nacional-populismo de izquierda, que se formó en el marco de la crisis del régimen oligárquico de la década de 1920 y que maduró como proyecto político con el Frente Popular (FP), en el ciclo 1936-1947, para luego agotarse hacia mediados de la década de 1960.⁵ Esta experiencia nacional-populista ancló tanto en el Partido Socialista de Chile (PSCh), como en el Partido Comunista de Chile (PCCh).

Para el historiador norteamericano Paul Drake, el PSCh desarrolló “patrones populistas”, a lo menos en el ciclo que media entre su fundación en 1933 y hasta las redefiniciones ideológicas y programáticas adoptadas en 1955. En dicho período el PSCh adscribió a tres fenómenos propios de la matriz latinoamericana del populismo: estimuló una movilización de masas, anclada en el paternalismo, el personalismo, el nacionalismo y la promesa de una gratificación inmediata; contribuyó a constituir coaliciones heterogéneas, compuesta fundamentalmente por trabajadores, pero conducida por sectores

5 El concepto de nacional-populismo de izquierda está recogido de Werz (2012, p. 184)

provenientes de las clases medias y acomodadas; e impulsó programas económicos fundados en la necesidad de la industrialización y funcionales a una estrategia redistributiva de la riqueza (Drake, 1992, p. 10). Este diseño se habría agotado, hacia mediados de la década de 1950, en el marco de la crítica a la experiencia frente populista, para ser superado definitivamente en la década de 1960, cuando el PSCh cayó bajo la influencia de la Revolución Cubana. No obstante, a nuestro juicio, su agotamiento resultó mucho más lento, ya que una parte importante del partido, tanto en sus bases como en sus cuadros de dirigencia, permaneció apegado a las prácticas políticas populistas.

El caso del PCCh es bastante más complejo. Si bien este referente, desde su fundación como Partido Obrero Socialista (POS, 1912), se autodefinió como un partido de obreros, cuyo objetivo era la conquista del poder para la construcción del socialismo, no es menos efectivo que, a partir de su incorporación a la institucionalidad política, a mediados de la década de 1930, también adoptó prácticas y discursos propios del modelo populista (Furci, 2008, pp. 53-106 y Álvarez, 2011, pp. 79-104). Entre ellos, la apelación a la construcción de un proyecto de emancipación nacional, que demandaba una amplia alianza de clases, se transformó en un componente fundamental de la identidad política de los comunistas chilenos.

En este artículo sostenemos que, a partir de la formación del FP en 1936, y hasta la caída del gobierno de Salvador Allende en 1973, la izquierda chilena, formada por el PCCh y por el PSCh, adoptó el discurso antioligárquico y antiimperialista del populismo, a la vez que recurría a la movilización social y electoral del pueblo al objeto de alcanzar el poder. En relación con ello, nos proponemos analizar las elaboraciones discursivas y las prácticas políticas de la izquierda populista en Chile.

LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO POPULAR Y LA EMERGENCIA DEL POPULISMO

Hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX la irrupción de la modernidad capitalista, en especial en el sector industrial y minero, y las subsecuentes movilizaciones y protestas obreras dieron origen a los que los intelectuales denominaron la cuestión social.⁶ La extensión y radicalización alcanzada por el movimiento popular y la rigidez con la cual enfrentó el proceso el régimen oligárquico, derivaron en suce-

⁶ La modernización capitalista ha sido analizada por Ortega (2005), mientras que los debates en torno a la cuestión social han sido estudiados por Grez (1995, pp. 9-44).

sivos y cruentos enfrentamientos, muchos de los cuales concluyeron con masivas matanzas obreras.

Fue en los espacios de sociabilidad segmentados por clase en los cuales los trabajadores articularon sus primeros gritos de rebeldía. En la taberna, la camaradería, los vínculos de compadrazgo y la profusa ingesta etílica detonaron los primeros alzamientos contra la autoridad pública. Más tarde, los trabajadores más diestros en el manejo de las herramientas, los más fuertes o resistentes en la faena y aquellos que sabían leer y escribir, comenzaron a adquirir una creciente influencia entre sus pares. Así, las manifestaciones espontáneas comenzaron a ceder terreno frente a la organización y al despliegue colectivo y mancomunado.

Como muchos otros movimientos obreros de la región, los trabajadores chilenos fueron tributarios de las ideas revolucionarias que circulaban en Europa, en especial de las ideas anarquistas, socialistas y del llamado liberalismo plebeyo o jacobino (Grez, 2007, pp. 25-65 y Pinto, 1999, pp. 315-366). Surgieron, entonces, las primeras organizaciones obreras: las sociedades en resistencia de orientación anarquista, que se desplegaron especialmente en torno a los centros urbanos fabriles y las mancomunales obreras, que se organizaron especialmente en el norte de Chile, en torno a las actividades salitreras y portuarias, y en las cuales ejercieron mayor influencia demócratas y socialistas.

En esta etapa formativa, la clase obrera recurrió de manera regular a la huelga como forma principal de lucha. La paralización de las actividades productivas y la denuncia pública (mitin) de las precariedades laborales y materiales de los trabajadores, operaron como los referentes fundamentales de sus luchas (Pizarro, 1986). Pero convocados y congregados masivamente en los espacios públicos los trabajadores y los sectores populares que los acompañaban subvirtieron rápidamente el orden oligárquico. No es extraño, entonces, que la mayoría de sus manifestaciones se vieran acompañadas de saqueos de establecimientos comerciales, enfrentamientos con las fuerzas de orden y destrucción del equipamiento urbano.

Por su parte la élite oligárquica se mostró incapaz de reconocer los problemas materiales y laborales que afectaban a las clases populares. Por el contrario, la demanda y protesta obrera fueron leídas como una amenaza a la propiedad privada y al orden público. Por ello se recurrió, de manera sistemática, a la represión para contener las protestas y el desborde popular. Tanto la policía como las fuerzas armadas, convocadas restablecer el orden oligárquico, dispararon regularmente y de manera artera, contra trabajadores desarmados o mal armados. Se sucedieron entonces las matanzas: Valparaíso (mayo

de 1903), Santiago (octubre de 1905), Antofagasta (febrero de 1906), Iquique (diciembre de 1907), Forrahue (octubre de 1912), Punta Arenas (julio de 1920), San Gregorio (febrero de 1921) y La Coruña (junio de 1925).⁷

Fue precisamente en este contexto de crisis de la oligarquía y de ascenso en las luchas populares, que se formó el POS (1912), el cual daría origen, en enero de 1922, al PCCh (Barnard, 2017, pp. 13-77 y Urtubia, 2017, pp. 7-38). De la misma manera, las antiguas mancomunales y sociedades en resistencia concurren a la III Convención Nacional de la Gran Federación Obrera de Chile (1919), al objeto de transformarla en el referente social y clasista de los trabajadores organizados. La organización, fundada en 1909 en la vieja tradición de las sociedades de socorros mutuos, pasó a denominarse Federación Obrera de Chile (FOCH), y bajo el liderazgo de Luis Emilio Recabarren adoptó un programa revolucionario que se planteaba la abolición del capitalismo y la conquista del poder por los trabajadores (Grez, 2011, pp. 23-170).

Lo anterior pone en evidencia que el movimiento popular chileno se constituyó en base a una doble matriz, social y política. Una base obrera que se articuló en torno al sindicato-federación como expresión de unidad social y una base política formada por el partido de clase. Lo anterior, a su vez, se vio trasuntado en la formulación de un proyecto político de naturaleza revolucionaria que colocó en el centro de la propuesta, la conquista del poder por los trabajadores. De la misma manera, se llevó a cabo el proceso de fortalecimiento de la identidad obrera, a partir de dispositivos simbólicos como la memoria sacrificial, los ámbitos de sociabilidad y la movilización rupturista, que confluyeron y asentaron la centralidad organizativa (partido y sindicato). En consecuencia, durante este período ser proletario, pertenecer al sindicato y al partido obrero se convirtieron en un todo homogéneo que permitía representar social y políticamente la demanda revolucionaria de las clases subalternas.

Con la llegada al gobierno del líder populista Arturo Alessandri Palma en 1920, se produjo el desplazamiento de la oligárquica de la administración del aparato del Estado, y su relevo por una nueva fracción de la clase dirigente formada por la burguesía financiera, comercial e industrial, apoyada por Estados Unidos. Esta administración, comprometida con la contención del enfrentamiento de clase, se propuso implementar medidas de carácter democrático popular,

7 La mayoría de estos episodios cuenta con trabajos monográficos. Para una perspectiva general sobre la represión oligárquica ver el trabajo de Felipe Portales (2011, pp. 323-354 y 2015, pp. 24-34).

como la jornada laboral de ocho horas, el derecho a sindicalización y el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores (Pinto y Valdivia, 2001). En paralelo se agitó un discurso antioligárquico, que favoreció la cooptación de las masas populares organizadas. La coalición (Alianza Liberal), que llevó a Alessandri al gobierno se encontraba compuesta por el Partido Radical (PR) y sectores liberales, con una base popular de apoyo integrada por las capas medias, los artesanos y trabajadores mineros y urbanos.

El gobierno de Alessandri se desarrolló en el contexto de una aguda situación de cesantía desatada a comienzos de la década de 1920, con la primera crisis del salitre. Junto con la desocupación, la crisis salitrera produjo una difusión ampliada del ideario socialista. Efectivamente, el desplazamiento de salitreros cesantes hasta la zona central influyó en la gestación tanto de las primeras formas de organización campesina, como en la multiplicación de las organizaciones sindicales a nivel urbano (Pinto, 2007, pp. 183-232). No obstante, el grueso de la población continuó vinculada a los oficios tradicionales y la proletarización solo representó a una franja reducida de los trabajadores chilenos. En el sector rural, por ejemplo, continuó predominando el empleo precario (peones de temporada) y la prestación de servicios personales, mientras que la legislación social era prácticamente inexistente en este sector (Yáñez, 2008, pp. 115-287).

Los cambios institucionales operados entre 1924 y 1931, modificaron la situación del movimiento obrero. Efectivamente, la legislación social que fue la punta de lanza de la campaña presidencial de Arturo Alessandri en 1920 fue promulgada en 1924, en el marco de una aguda crisis política, precipitada por el denominado "ruido de sables". Este movimiento, protagonizado por la joven oficialidad del ejército, fuertemente influido por el corporativismo fascista de la época, y liderada por Carlos Ibáñez del Campo, se pronunció ruidosamente en las tribunas del Congreso Nacional (golpeando sus sables contra el piso), a objeto de apurar el despacho de las denominadas leyes sociales. Estas normativas, debidamente agrupadas, dieron origen, en 1931, bajo el mandato de Ibáñez, al primer Código del Trabajo del país.

La nueva legislación favoreció, de manera gradual, la institucionalización del conflicto de clases. A ello concurrieron varios factores. Por una parte, el grueso del sindicalismo surgido en el período se acogió a la normativa que regulaba la estructura interna y los propósitos de las organizaciones obreras, con lo cual el sindicalismo clasista e independiente (socialista y anarcosindicalista) se vio cada vez más debilitado. Por otro lado, el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931), estimuló la formación de sindicatos legales (Confederación Republicana de Acción Cívica, CRAC), al objeto de formar una base

social de apoyo para su gobierno. Ello permitió la rápida multiplicación de los sindicatos legales, a la vez que la administración de Ibáñez perseguía con dureza a los sindicatos y dirigentes anarquistas y comunistas. Por último, esta misma administración reivindicó el rol del Estado como árbitro en el conflicto entre capital y trabajo. Esta idea, más allá de su escasa concreción práctica modificó profundamente la percepción que los trabajadores tenían del Estado. Como señalamos previamente el Estado, hasta 1920, había operado abiertamente como gendarme de los intereses de los terratenientes y de la burguesía, pero desde mediados de la década de 1920 esa función fue parcialmente abandonada, para construir un Estado que pretendía velar por los intereses de los trabajadores (Rojas, 1993, pp. 47-142).

Este proceso de institucionalización del conflicto de clases se vio favorecido, también, por la incorporación de las organizaciones políticas de la izquierda a la nueva institucionalidad existente en el país desde 1925 (Constitución Política del Estado). Efectivamente, tras la fase de reflujo que acompañó al campo popular durante la administración de Ibáñez, los partidos populares (el PCCh y el recién creado PSCh, 1933), optaron por una estrategia de utilización de los espacios de representación política (Parlamento, municipios, sindicatos legales, etc.), a efectos de avanzar por etapas a la conquista del poder (Furci, 2008, pp. 53-78 y Drake, 1992, pp. 143-164). Se trataba, en este período, de formar una alianza de clases con los sectores que representaban a la burguesía nacional, para avanzar hacia el desarrollo del capitalismo y junto con ello a la instauración de un régimen democrático burgués para, en un futuro indeterminado, con un proletariado mayoritario y maduro, conquistar el poder. Esta fue la fase fundante de la adscripción de la izquierda chilena al proyecto populista.

Hacia mediados de la década de 1930 la incorporación de la izquierda a la institucionalidad política se vio completada con la formación del FP, que llegó al gobierno en 1938, respaldando la candidatura del dirigente del PR, Pedro Aguirre Cerda. El FP, se formó a partir de una alianza política, que a su vez era expresión de una alianza de clases (burguesía industrial, capas medias y proletariado), que reunió al PR, al PCCh y al PSCh, y que contó con el apoyo de la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH), heredera y sucesora de la FOCH (Milos, 2008). Si bien el FP, como expresión política, se agotó con la presidencia de Pedro Aguirre Cerda (1938-1941), la estrategia aliancista que lo identificó y los contenidos programáticos de la misma se pueden visibilizar, también, en las administraciones de Juan Antonio Ríos (1942-1946) y en la primera fase del gobierno de Gabriel González Videla (1946-1947).

La propuesta programática del FP se puede sintetizar en tres aspectos fundamentales: el fomento de las actividades económicas del país y en especial del sector fabril, la ampliación de las coberturas educacionales, colocando el acento en la formación técnico profesional o industrial, y el despliegue de una política de protección a los trabajadores y de extensión de la sindicalización. Al concluir esta fase (1947), la creación de la Corporación de Fomento (CORFO, 1939), había favorecido ampliamente el proceso de industrialización, a través de los denominados planes de fomento industrial y de producción de energía eléctrica, de la misma manera, la concesión de créditos blandos a la burguesía industrial favoreció la expansión del sector, en especial en la industria de bienes de consumo (Llorca y Barría, 2017, pp. 9-29).

En el ámbito educacional el FP creó nuevos establecimientos educacionales, especialmente para cubrir los requerimientos de la enseñanza preparatoria y favoreció la instalación de liceos industriales en las principales cabeceras departamentales del país. El gremio de los maestros, beneficiado con la apertura de nuevas plazas, pasó a convertirse en uno de los puntales de apoyo tanto del FP como para el PR. Los sindicatos obreros, particularmente los afiliados a la CTCH se convirtieron en activos interlocutores del gobierno, logrando un crecimiento exponencial de la militancia afiliada (Garcés, 2018, pp. 110-145 y Henríquez, 2014, pp. 71-131). No obstante lo anterior, los gremios que accedieron de manera más expeditiva a mejoras sustantivas en sus condiciones laborales y a un incremento de sus derechos sociales y políticos fueron los industriales, las asociaciones profesionales a nivel urbano y los mineros, en especial aquellos que trabajaban en el sector cuprífero, mientras que la sindicalización campesina, una de los temas más recurrentemente agitados y demandados por los trabajadores, fue postergada tras un espurio acuerdo entre el gobierno, la CTCH y la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) (Acevedo, 2017, pp. 99-158 e Illanes, 2019, pp. 247-281).

El ciclo se cerró hacia 1948 con una derrota profunda para el movimiento popular. Las tensiones que desde comienzos de la década de 1930 habían enfrentado a socialistas y comunistas por la conducción del movimiento de trabajadores, se agudizaron durante la década de 1940. A comienzos de 1946, y tras la huelga obrera que dio origen a la matanza de la Plaza Bulnes (Santiago de Chile, 28 de enero de 1946), la CTCH se dividió en dos fracciones, una dirigida por el socialista Bernardo Ibáñez y la otra encabezada por el comunista Bernardo Araya. Más tarde (1947), en pleno escenario de Guerra Fría, el gobierno de Gabriel González Videla posicionó al país en el campo de las democracias occidentales y procedió a expulsar a los comunistas del go-

bierno. La escalada se cerró en 1948 cuando esta administración dictó la Ley de Defensa permanente de la Democracia (3 de septiembre de 1948), que proscribió al PCCh y persiguió sistemáticamente a los sindicatos y a los dirigentes obreros (Casals, 2016, pp. 137-190).

CONTINUIDADES Y RUPTURAS EN LA IZQUIERDA CHILENA

A comienzos de la década de 1950 los cambios derivados del proceso de modernización económico iniciado a fines del siglo XIX ya eran evidentes. Como se mencionó previamente, la CORFO generó las condiciones de infraestructura, equipamiento, asesorías técnicas y apoyo financiero, necesarias para profundizar la industrialización del país (Meller, 1998, pp. 47-60). Como resultado de este proceso, y de la creciente tributación que el Estado les aplicó a las empresas norteamericanas que explotaban el cobre en Chile, se amplió la política pública en materia social. En relación con lo anterior es posible observar un crecimiento sostenido de las coberturas educacionales, especialmente a nivel de enseñanza primaria y secundaria (industrial), y una diversificación de la oferta universitaria. No es extraño, entonces, que las grandes ciudades del país, como Santiago, Valparaíso, Concepción, en las cuales se concentraba la oferta manufacturera y educacional, comenzaran a convocar a crecientes contingentes de migrantes de origen rural. Lo mismo se puede observar respecto de las ciudades intermedias de menos de 50.000 habitantes, que se convirtieron en el escalón inicial para el posterior proceso de desplazamiento hacia las grandes urbes.

Pero las ciudades del país no estaban preparadas para recibir este creciente y masivo proceso migratorio. Los déficits en infraestructura y equipamiento urbano, así como las insuficiencias de la política pública en materia de vivienda, hicieron muy difícil el proceso de asentamiento de los inmigrantes y complejizaron sus estrategias de subsistencia. En las periferias urbanas se fue arraigando la pobreza y junto con ello se fue constituyendo un nuevo actor social: el pobre urbano. Este sujeto social, devenido en actor colectivo, comenzó a protagonizar una serie de ocupaciones ilegales de terrenos (tomos), que ampliaron el campo de acción político de los partidos populares (Garcés, 2002, pp. 337-416 e Hidalgo, 2004, pp. 267-345).

En este contexto las derrotas del movimiento popular del ciclo 1947-1949, fueron gestando nuevos aprendizajes políticos que revalidaron la necesidad del proyecto clasista y revolucionario. Este proceso se inauguró a comienzos de la década de 1950 y tuvo como principales protagonistas a los empleados del sector público (Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, 1943) y privado (Confederación de Empleados Particulares de Chile, CEPCH, 1948), a los

profesores (Federación de Educadores de Chile, FEDECH, 1944), a los estudiantes agrupados en torno a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) y a los trabajadores de la escindida CTCH. Efectivamente, tras una serie de movilizaciones parciales en torno a demandas salariales y de rechazo a la política antiinflacionaria de los gobiernos de la época, se avanzó hacia la formación de una Comisión Nacional de Unidad Sindical, que preparó las condiciones políticas y orgánicas que permitieron la fundación de la Central Única de Trabajadores (CUT), en febrero de 1953. La CUT definió con claridad la necesidad de abolir el régimen capitalista para avanzar hacia la sociedad sin clases, reivindicó la lucha de clases como método de acción política y se asumió como un organismo clasista e independiente (Samaniego, 2016, pp. 27-41).

La CUT, bajo el liderazgo del dirigente de la ANEF Clotario Blest Riffo, jugó, a partir de este momento, un rol clave en el proceso de reanimación del movimiento de masas y en el desarrollo de la lucha social. Expresión de ello fue una creciente tendencia a la sindicalización de la clase trabajadora, la que a fines de la década de 1960 llegaba prácticamente al millón de obreros sindicalizados. De la misma manera se puede observar un desarrollo sostenido de la politización al interior de los trabajadores, proceso que los vinculaba claramente con las organizaciones de la izquierda. Por último, se puede apreciar, el uso sistemático de la huelga general y de la paralización de actividades laborales, tanto para demandar una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores, como para denunciar un atropello, abuso o actitud represiva, tanto de los patrones como del Estado.

Este proceso de rearme ideológico y político de la clase obrera impactó profundamente en el PSCh. Efectivamente, el PSCh, tras la crisis interna que derivó en la fractura de la organización en dos referentes (el Partido Socialista de Chile y el Partido Socialista Popular), producida al calor de los debates críticos y autocríticos sobre la experiencia de la colaboración de clases frente-populista, inició un sostenido proceso de discusión interno que maduró en la propuesta de "Frente de Trabajadores". De acuerdo con esta propuesta, adoptada en 1955, el PSCh debía convertirse en "una fuerte organización popular de carácter revolucionario, que sirva de instrumento de lucha para la toma del poder primero, y el estado revolucionario después" (Jobet, 1971, p. 20). De acuerdo con esta definición le correspondía al PSCh unir a todas las fuerzas, políticas y sociales, dispuestas a poner fin al régimen capitalista. Este nuevo planteamiento cerró la puerta a toda nueva experiencia de colaboración de clases y favoreció la creación del Frente de Acción Popular (FRAP, 1956).

Más tarde (1957, 1959, 1961 y 1964), el PSCh reafirmó esta estrategia política y, en virtud de ello, el FRAP presentó un programa de transformaciones revolucionarias (nacionalización de las riquezas básicas, de la banca y de los grandes complejos industriales, reforma agraria y política internacional independiente), y una candidatura propia (Salvador Allende), a las elecciones presidenciales de 1958 y 1964. Tras la aplastante derrota electoral de la izquierda en las elecciones presidenciales de 1964, y fuertemente tensionado por su ala izquierdista, el PSCh descartó la vía electoral (Congreso General Ordinario de 1965), como método para la conquista del poder. No obstante, lo anterior, también se indicó que los mecanismos electorales continuaban prestando utilidad como herramientas de movilización de masas. Esta postura fue posteriormente ratificada en el XXII Congreso General ordinario del PSCh, realizado en la ciudad de Chillán, entre los días 24 y 26 de noviembre de 1967. En esa oportunidad los socialistas chilenos aprobaron un voto político que en sus aspectos centrales establecía,

El Partido Socialista, como organización marxista-leninista, plantea la toma del poder como objetivo estratégico a cumplir por esta generación, para instaurar un Estado Revolucionario que libere a Chile de la dependencia y del retraso económico y cultural e inicie la construcción del socialismo. La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter represivo y armado del estado de clase. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico y, a su ulterior defensa y fortalecimiento. Solo destruyendo el aparato burocrático y militar del estado burgués, puede consolidarse la revolución socialista. Las formas pacíficas o legales de lucha [...] no conducen por si mismas al poder. El partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción, incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada. Consecuencialmente, las alianzas que el partido establezca solo se justifican en la medida en que contribuyen a la realización de los objetivos estratégicos ya precisados. (PSCh, 1967)

El PCCh vivió esta nueva fase en el desarrollo de la lucha popular en condiciones de clandestinidad. Efectivamente, la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que lo colocó fuera de la ley entre 1948 y 1958, generó un fuerte debate interno entre aquellos, como Luis Reinoso, secretario de organización de la colectividad, que propugnaban la lucha armada contra el régimen de González Videla, y el grueso de la dirección del partido, que apostaba por un repliegue ordenado y por el estímulo a la lucha de masas. Esta postura, que terminó imponiéndose, se consolidó en la conferencia nacional de agosto de 1952, cuando el PCCh definió su política de frente de liberación nacional,

la cual enfatizaba la necesidad de construir alianzas sociales amplias, que estuvieran disponibles para un programa antioligárquico y anti-imperialista, el que, a su vez, debía estar bajo la conducción de la clase obrera (Furci, 2008, pp. 91-96).

No obstante, una de las definiciones más relevantes adoptadas por el PCCh en este período dice relación con la “vía pacífica al socialismo”. Efectivamente, ni los comunistas chilenos ni el movimiento de trabajadores en un sentido más amplio, se había propuesto ni desarrollado experiencias previas de lucha armada. Por el contrario, las experiencias acumuladas a partir de la década de 1930, y en especial aquellas desplegadas durante el FP, habían priorizado los espacios que proveía la institucionalidad y ello, para los comunistas, constituía un camino conocido y efectivo. No es extraño, en consecuencia, que pese a la situación de clandestinidad que los afectaba, el PCCh haya apoyado la candidatura presidencial de Salvador Allende Gossens tanto en 1952 como en 1958 y si bien ambas experiencias desembocaron en sendas derrotas electorales, también pusieron en evidencia el importante apoyo que la izquierda política tenía en el seno del movimiento de masas.

Hacia 1965, el proceso de radicalización experimentado por el movimiento popular presentaba varias vertientes. Se manifestaba a través del ascenso de las luchas obreras, del surgimiento de nuevos actores sociales (pobres urbanos) y de la acelerada puesta en escena del campesinado. Tenía que ver también con la definición de un camino propio por parte de la izquierda chilena, al interior de la cual el PSCh se revelaba como la organización más revolucionaria. También se hacía cada vez más evidente la influencia teórica, política y moral de la Revolución Cubana. Por último, remitía a la existencia de una serie de organizaciones y grupos que aspiraban a transformar el escenario político a través de la formación de una organización revolucionaria que se pusiera a la cabeza del movimiento de masas, en la lucha por la construcción del socialismo (Palieraki, 2014, pp. 8-55).

EL ASCENSO Y RADICALIZACIÓN DE LAS LUCHAS POPULARES

Tal como señalamos previamente, desde comienzos de la década de 1950 se produjo un proceso de reagrupamiento y radicalización de la izquierda social y política. Pero ese punto de inflexión no significó necesariamente una readecuación de sus lineamientos tácticos. Por el contrario, el escenario político electoral continuó siendo el espacio priorizado por estas organizaciones. Pero las discusiones en torno al problema de la conquista del poder provocaron, desde fines de la década de 1950, una serie de escisiones y expulsiones de militantes tanto en el PCCh, como en el PSCh. En este contexto, las pequeñas

organizaciones revolucionarias existentes en Chile y los militantes escindidos o expulsados de los partidos tradicionales, encontraron en la Revolución Cubana una referencia teórica y un punto de apoyo y confluencia para su lucha política (Álvarez, 2015, pp. 55-68 y Salinas, 2013, pp. 215-278).

En 1964 la derrota electoral de la izquierda a manos de la Democracia Cristiana (PDC) y de su candidato a la presidencia de la República, Eduardo Frei Montalva, generó un nuevo y más profundo debate al interior del campo popular. A juicio de los sectores más radicalizados, las estrategias electoralistas habían demostrado, una vez más, sus insuficiencias y debilidades. A partir de este momento se produjo una escisión mucho más profunda entre las denominadas organizaciones reformistas (izquierda tradicional) y la nueva izquierda o izquierda revolucionaria. La brecha que se abrió permitió que los sectores aglutinados en torno al polo revolucionario dieran el paso necesario para formar, lo que ellos denominaron como la vanguardia de la revolución chilena. Ese hito se produjo el 15 de agosto de 1965 con la fundación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR (Palieraki, 2014, pp. 83-138).

En su declaración de principios, elaborada en el mes de septiembre de 1965, el MIR enunciaba los fundamentos teóricos y políticos que guiaban su accionar: se visualizaba como la vanguardia marxista-leninista de la clase obrera y de las capas oprimidas de Chile, a la vez que se concebía como el heredero histórico de las tradiciones revolucionarias chilenas. En esta perspectiva la finalidad del MIR era derrocar el sistema capitalista y reemplazarlo por un gobierno de obreros y campesinos, dirigido por los órganos del poder proletario, fijándose como tarea la construcción del socialismo y la extinción gradual del Estado, hasta llegar a la sociedad sin clases. Para el MIR la burguesía chilena había demostrado su incapacidad para resolver las tareas democrático-burguesas: liberación nacional, reforma agraria y liquidación de los vestigios semif feudales existentes en el país. Esto ponía al descubierto la inexistencia de una burguesía progresista y, por consiguiente, se rechazaba la teoría de la revolución por etapas y la política de colaboración de clases asumida por la izquierda tradicional chilena desde fines de la década de 1930. Más adelante el MIR denunciaba las tácticas políticas utilizadas por la vieja izquierda, en particular la lucha por reformar el sistema capitalista, el electoralismo, el abandono de la acción directa y la vía pacífica y parlamentaria al socialismo. Para el MIR estos lineamientos confundían, defraudaban y desarmaban al proletariado. El MIR plateaba como único camino para derrocar el régimen capitalista: la insurrección popular armada (MIR, 1965).

En el Tercer Congreso del MIR, realizado en la ciudad de Santiago en el mes de diciembre del año 1967, el sector castro-guevarista, liderado por Miguel Enríquez, Bautista Van Schowen, Luciano Cruz y Andrés Pascal, conquistó la mayoría del comité central (10 cargos de 15), los cinco cargos del secretariado nacional y la secretaria general del partido, que quedó a cargo de Miguel Enríquez (Amoros, 2014, pp. 91-95 y Goicovic, 2016, pp. 117-122).

El escenario político en el cual se produjo este evento se encontraba marcado por acontecimientos internacionales y nacionales de gran relevancia. En octubre de 1967 había sido asesinado en Bolivia el comandante Ernesto “Che” Guevara, fenómeno que colocó en discusión la estrategia “foquista” que había predominado al interior de la izquierda revolucionaria hasta ese momento. Mientras que, en Chile, la propuesta de “Revolución en Libertad” del gobierno de la Democracia Cristiana (liderado por Eduardo Frei Montalva, 1964-1970), comenzaba a ser cuestionada tanto por las organizaciones políticas de la izquierda, como por el movimiento popular. Se comenzó a configurar, a partir de este año, un ciclo de ascenso en el desarrollo de las luchas populares. Ciclo que tuvo su punto de partida en el paro general del 23 de noviembre de 1967 (Rodríguez, 2020, pp. 28-47).

Pero no fue solo el MIR el que experimentó este proceso de radicalización. El proceso de radicalización ideológica y política del PSCh se había iniciado a mediados de la década de 1950. Efectivamente, en esta etapa la evaluación de la fracasada experiencia del FP, llevó a los socialistas chilenos a renunciar a las alianzas de tipo policlasista y a superar los programas políticos de naturaleza reformista (Jobet, 1967, pp. 13-47). En 1955, en el marco del XVI Congreso General Ordinario de dicha colectividad (Valparaíso, 29 al 31 de octubre de 1955), se elaboró una dura crítica a la “política de concesiones” que se había desarrollado en la fase frentepopulista. El enfoque crítico que los socialistas desarrollaron respecto de la institucionalidad burguesa se acentuó con las derrotas electorales que afectaron al FRAP, en las elecciones presidenciales de 1958 y 1964. Por otro lado, el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, a través del asalto armado al poder, ofreció a los socialistas un nuevo modelo de acción política, diferente a la estrategia populista que habían transitado desde 1933 (Drake, 1992, pp. 276-281). No es extraño, en consecuencia, que en 1965 el PS se planteara convertir el Frente de Trabajadores en un “Frente de Clase” que avanzara hacia la conquista del poder (Jobet, 1971, p. 111).

Más tarde, en agosto de 1966, la Conferencia Nacional de Organización del PS, sancionó la modificación de los estatutos del partido. De acuerdo a lo establecido en este encuentro el PS pasaba a convertirse en una organización leninista que reivindicaba su condición de

“partido de cuadros para realizar una política de masas” (Jobet, 1971, p. 116). Concordante con este giro radical la política exterior del PS, fundada en el principio del internacionalismo proletario, intensificó sus vínculos con el bloque soviético, en especial con la República Democrática Alemana (RDA), con Cuba y con los movimientos de liberación nacional de Asia y África.⁸

Como señalamos previamente, el punto más alto en el proceso de radicalización ideológica del PS se vivió en el XXII Congreso General Ordinario, celebrado en Chillán entre los días 24 y 26 de noviembre de 1967 (Gómez, 1993, pp. 75-112). En esa oportunidad el PSCh estableció que la violencia revolucionaria era inevitable en toda estrategia de toma del poder (Jobet, 1971, p. 30).

No obstante, la lucha de tendencias al interior del PS se mantuvo en niveles muy altos durante este ciclo. La tendencia conservadora, que preconizaba la conquista de espacios de representación al interior de la institucionalidad democrática, liderada por el secretario general de la organización, Aniceto Rodríguez y representada a nivel de masas en la figura de Salvador Allende, alineaba en su entorno a un amplio abanico de militantes y de organizaciones sociales. Esta tendencia, si bien aceptó los acuerdos emanados de los congresos, continuó desarrollando una política de apertura hacia los sectores progresistas de la burguesía y plenamente comprometida con la institucionalidad democrática. La tradición populista instalada por los fundadores del PSCh en la década de 1930 alcanzó en este sector del partido su expresión más madura. Para Allende y los sectores de minoría en el PSCh, resultaba fundamental alcanzar acuerdos con el centro político a efectos de profundizar los cambios, a la vez que se apelaba a la movilización de las masas para mantener una presión sistemática sobre el Parlamento. Ello, además, descansaba en la percepción ampliamente compartida en la izquierda chilena de la década de 1960, que el liderazgo de Salvador Allende se extendía más allá de las organizaciones históricas de la clase obrera.

En este ciclo, el PCCh también experimentó su propio proceso de radicalización. Si bien el mismo no lo arrastró a la reivindicación de la lucha armada, si lo llevó a una redefinición de su estrategia de poder. La noción de vía pacífica, que había sido adoptada en la década de 1950, fue reemplazada por un nuevo diseño denominado vía no

8 A nivel regional, el PSCh participó de la fundación de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS, 1966) y de la articulación de la Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina (OSPAAAL, 1966). Ambos organismos habían surgido como iniciativa de Cuba y formaban parte de su estrategia general de estímulo a los procesos revolucionarios globales.

armada, que toleraba e incluso acompañaba las manifestaciones más radicales del movimiento de masas (Álvarez, 2011, p. 79). En este contexto las movilizaciones populares radicales, como las ocupaciones de terrenos, las huelgas y ocupaciones de fábricas, las movilizaciones callejeras que involucraban enfrentamientos con las fuerzas policiales, se transformaban en una dimensión de la movilización popular, la cual se veía complementada con una activa participación en todos los escenarios electorales convocados en el país, desde las elecciones de las organizaciones barriales, sindicales y estudiantiles, hasta las elecciones de alcaldes, parlamentarios y presidente de la república.

La instalación del gobierno de la Unidad Popular (UP) en noviembre de 1970 y la ejecución de las primeras medidas de su propuesta programática desataron una activa y violenta reacción en la oposición política y empresarial (Pinto, 2005, pp. 9-33). En las regiones agrícolas afectadas por la política de reforma agraria se intensificó la resistencia de los agricultores frente a los procesos expropiatorios, mientras que en los centros fabriles los patrones declaraban el lock-out para evitar la expropiación y autogestión obrera (Avendaño, 2017, pp. 247-339 y Oszlak, 2016, pp. 59-141). De la misma manera el gobierno norteamericano intentaba asfixiar económicamente la administración de Allende (Harmer, 2013, pp. 39-73 y Riquelme 2014, pp. 11-43). En abril de 1971 se fundó la organización de extrema derecha Frente Nacionalista Patria y Libertad (FNLP), que comenzó a desplegar una sistemática campaña de subversión urbana, para pasar luego al despliegue de acciones terroristas.

No cabe duda, la “vía chilena al socialismo” acentuó y agudizó, inevitablemente, los enfrentamientos sociales y políticos que ya venían despuntando desde mediados de la década de 1950. Tras el fracaso de las experiencias desarrollistas y populistas de las décadas de 1950 y 1960 (Carlos Ibáñez y Eduardo Frei), la UP pretendía resolver la crisis estructural que afectaba al sistema capitalista en Chile acelerando el proceso de transición hacia el socialismo (Nazer, 2021, pp. 181-212). Ello en el marco de un estricto apego a la institucionalidad política existente en el país. No obstante, la política de expropiación de los medios de producción, patrocinada por la UP, que afectó a la burguesía chilena y al capital transnacional, no podía pasar inadvertida. La violenta oposición de la burguesía y de un sector importante de la clase media al proyecto de la UP colocó en el centro de la discusión el problema de la violencia. En relación con este punto, Carlos Altamirano, secretario general del PSCh, en un documento presentado ante el congreso de La Serena señalaba, que la vanguardia revolucionaria debía superar los vicios y defectos derivados de “la convivencia más que pacífica con la democracia burguesa” (Altamirano, 1971, p. 12).

Pero una vez definida la estrategia política para la conquista del poder (el desarrollo de la lucha de masas revolucionaria, contemplando el uso de la violencia política) y establecido el tipo de organización política que se requería para conducir dicho proceso (partido de cuadros revolucionarios), el PS, al igual que otras organizaciones revolucionarias del período (como el MIR, el Movimiento de Acción Popular Unitaria, MAPU, y la Izquierda Cristiana, IC), se volcaron preferentemente a la organización y ampliación del movimiento de masas (Gaudichaud, 2004 y Cancino, 1988). Se trataba de fortalecer el poder popular en la base del movimiento obrero y popular y, para ello, se estimuló la formación de “cordones industriales”, que operaban como estructuras territoriales de poder que articulaban a obreros fabriles y pobres urbanos. De la misma manera, en las zonas rurales los “consejos campesinos” debían constituirse en la base del poder social y político del campo revolucionario. Los comunistas, por su parte, optaron por defender el itinerario de cambios revolucionarios trazado por el gobierno de la UP, pero, en la base, su militancia también se hizo partícipe de las estructuras locales de poder que se estaban constituyendo (Álvarez, 2011, pp. 95-104).

Resultaba evidente que se estaba configurando en Chile una situación revolucionaria, asociada con los mayores niveles de conciencia de clase del proletariado y el pueblo, con el crecimiento de sus formas de organización social y política, con el desarrollo de una conciencia subjetiva de posibilidad de triunfar, con la erosión económica social y política de la burguesía y con la liquidación de la presencia económica del imperialismo. El punto más alto de los enfrentamientos de clase, de este período, se vivió en torno al denominado Paro Patronal de Octubre (1972) que, amparado en la movilización del gremio de los camioneros, logró desplegar, junto con ellos, a un amplio abanico de organizaciones empresariales y de clase media: colegios profesionales (médicos, ingenieros y abogados), medianos y pequeños comerciantes, estudiantes secundarios y universitarios. A través de esta movilización la oposición al gobierno de la UP pretendía generar las condiciones de ingobernabilidad que precipitaran el golpe de Estado en Chile. No obstante, los trabajadores, agrupados en torno a sus organizaciones de base, a los comandos comunales y a los partidos revolucionarios, lograron revertir los efectos de la movilización contrarrevolucionaria. Mantuvieron en marcha el proceso productivo, distribuyeron la producción agraria e industrial, denunciaron las maniobras sediciosas y conspirativas, desalojaron a las bandas de la reacción del espacio público y ejercieron control político y territorial sobre los centros productivos y los barrios obreros. La ofensiva sediciosa de la burguesía fue derrotada y la opción de una salida revolu-

cionaria a la crisis política existente en ese momento se configuraba como una clara alternativa.

No es extraño, en consecuencia, que a partir del mes de marzo de 1973 la oposición redoblara sus esfuerzos desestabilizadores. Se comenzó a configurar a partir de este momento un escenario en el cual se creaban las condiciones de ingobernabilidad que debían llevar a la renuncia del presidente Allende. Se trataba de llevar a cabo un golpe blanco. Así, entre marzo y junio de 1973 se precipitaron una serie de movilizaciones antigubernamentales que acentuaron el clima de enfrentamiento que se había inaugurado en octubre de 1972. Entre estas movilizaciones cabe destacar los movimientos estudiantiles contra el proyecto de Escuela Nacional Unificada (ENU), la huelga de los trabajadores del mineral de cobre de El Teniente, y el paro del transporte público en varias ciudades del país. Esta escalada concluyó el 29 de junio de 1973 cuando el Regimiento Blindado N° 2 localizado en la ciudad de Santiago, se sublevó infructuosamente contra el gobierno tratando de precipitar la renuncia del presidente Allende. A partir de julio de 1973 el gobierno convocó a la DC a constituir un espacio de diálogo que evitara la guerra civil. Un esfuerzo infructuoso ya que los convocados votaron en la Cámara de Diputados, el 22 de agosto de 1973 (junto a la derecha reaccionaria), un acuerdo que declaró la inconstitucionalidad del gobierno del presidente Allende (Winn, 2013, pp. 93-121).

Simultáneamente, las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, invocando la Ley N° 17.798, sobre control de armas y explosivos (dictada por iniciativa del gobierno de la Unidad Popular, en 1972), procedieron a allanar sedes sindicales y de organizaciones revolucionarias, así como los territorios controlados por los cordones industriales, al objeto de disuadir a los trabajadores respecto de cualquier intento de disputarle a los aparatos represivos del Estado el monopolio sobre las armas. Por su parte, los gremios patronales (asociaciones empresariales, colegios profesionales, transportistas y comerciantes), iniciaban a comienzos de agosto una nueva movilización antigubernamental. La presión reaccionaria llegó a su punto más alto el 23 de agosto de 1973 cuando tras una movilización de esposas de oficiales del Ejército, se produjo la renuncia de Carlos Prats González a la comandancia en jefe de dicha institución, siendo reemplazado en el cargo por el general Augusto Pinochet.

La mañana del 11 de septiembre de 1973 se comenzó a construir una nueva historia. El conjunto de las Fuerzas Armadas, más el Cuerpo de Carabineros de Chile, depusieron al gobierno de la Unidad Popular. El presidente de la República, Salvador Allende, uno de los principales líderes populistas del siglo XX, resistió heroicamente la

asonada golpista muriendo en el palacio presidencial. Miles de trabajadores y estudiantes tomaron el control de sus puestos de trabajo y estudio a efectos de resistir el golpe, pero carentes de un apoyo militar efectivo, fueron violentamente desalojados, la mayoría de ellos detenidos y muchos torturados y asesinados (Rettig, 1991). El derrocamiento de Salvador Allende en septiembre de 1973 puso fin a la experiencia revolucionaria chilena, pero junto con ella aplastó la tradición populista inaugurada en la década de 1930. Efectivamente, tanto los sectores revolucionarios que había apostado por la acumulación de fuerza social y política en la base a efectos de provocar la ruptura revolucionaria, como los sectores más conservadores, que reiteraban la necesaria alianza entre los sectores populares y la burguesía, a efectos de introducir reformas, fueron violentamente desalojados del espacio público. La larga experiencia populista de la izquierda chilena llegaba de este modo a su fin.

BIBLIOGRAFÍA

- Acevedo, Nicolás (2017). *Un fantasma recorre al campo: Comunismo y politización campesina en Chile (1935-1948)*. Valparaíso: América en Movimiento.
- Aidinolfi, Giulio (2010). Las estructuras de los populismos: Diferenciación funcional en el populismo latinoamericano. *Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, 25. Madrid.
- Aldao, Joaquín y Damin, Nicolás (2013). Populismos latinoamericanos en el siglo XX Apuntes para la actualización de un debate. *Historia Caribe*, 8(23). Barranquilla.
- Altamirano, Carlos (1971). El partido Socialista y la revolución chilena. *Punto Final. Documentos*, 121. Santiago de Chile.
- Álvarez, Marco (2015). *La constituyente revolucionaria. Historia de la fundación del MIR chileno*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- Álvarez, Rolando (2011). *Arriba los pobres del mundo. Cultura e identidad política del Partido Comunista de Chile entre democracia y dictadura. 1965-1990*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- Amoros, Mario (2014). *Miguel Enríquez: Un nombre en las estrellas. Biografía de un revolucionario*. Santiago de Chile: Ediciones B.
- Avendaño, Octavio (2017). *Los partidos frente a la cuestión agraria en Chile, 1946-1973. Representaciones de intereses, gradualismo y transformación estructural*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- Barnard, Andrew (2017). *El Partido Comunista de Chile 1922-1947*. Santiago de Chile: Ariadna Ediciones.

- Cancino, Hugo (1988). *Chile: La problemática del poder popular en el proceso de la vía chilena al socialismo, 1970-1973*. Copenhagen: Aarhus University Press.
- Casals, Marcelo (2016). *La creación de la amenaza roja. Del surgimiento del anticomunismo en Chile a la campaña del terror de 1964*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- Drake, Paul (1992). *Socialismo y populismo. Chile, 1936-1973*. Valparaíso: Universidad Católica de Valparaíso.
- Dussel, Enrique (2012). Cinco tesis sobre populismo. En Márquez, Martha et al. (Eds.), *El eterno retorno del populismo en América Latina y el Caribe*. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Entrena, Francisco (1996). Los populismos y la formación del Estado-nación en América Latina. *Anuario de Estudios Americanos*, 53(1). Sevilla.
- Furci, Carmelo (2008). *El Partido Comunista de Chile y la vía al socialismo*. Santiago de Chile: Ariadna Ediciones.
- Garcés, Mario (2002). *Tomando su sitio. El movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1970*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- Garcés, Mario (2018). *El movimiento obrero y el Frente Popular (1936-1939)*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- Gaudichaud, Franck (2004). *Poder popular y cordones industriales: Testimonios sobre el movimiento popular urbano, 1970-1973*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- Goicovic, Igor (2016). *Trabajadores al poder. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el proyecto revolucionario en Chile*. Concepción: Ediciones Escaparate.
- Gómez, Juan (1993). *La rebeldía socialista. El Partido Socialista en la década de los sesenta. 1959-1970*. Santiago de Chile: FLACSO.
- González, Osmar (2007). Los orígenes del populismo latinoamericano. Una mirada diferente. *Cuadernos del CENDES*, 24(66). Caracas.
- Grez, Sergio (1995). *La cuestión social en Chile. Ideas y debates precursores (1804-1902)*. Santiago de Chile: DIBAM.
- Grez, Sergio (2007). *Los anarquistas y el movimiento obrero. La alborada de la idea en Chile (1893-1915)*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- Grez, Sergio (2011). *Historia del comunismo en Chile. La era de Recabarren (1912-1924)*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.

- Harmer, Tanya (2013). *El gobierno de Allende y la Guerra Fría interamericana*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales.
- Henríquez, Rodrigo (2014). *En estado sólido. Políticas y politización en la construcción estatal. Chile, 1920-1950*. Santiago de Chile: Ediciones UC.
- Hidalgo, Rodrigo (2004). *La vivienda social en Chile y la construcción de espacio urbano en el Santiago del siglo XX*. Santiago de Chile: DIBAM.
- Ianni, Octavio (1973). Populismo y relaciones de clase. En Germani, Gino; Ianni, Octavio y Di Tella, Torcuato, *Populismo y contradicciones de clase en Latinoamérica*. México: Ediciones Era.
- Illanes, María (2019). *Movimiento en la tierra. Luchas campesinas, resistencia patronal y política social agraria. Chile, 1927-1947*. Santiago de Chile: LOM ediciones.
- Jobet, Julio César (1971). *El Partido Socialista de Chile* (Tomo II). Santiago de Chile: Prensa Latinoamericana.
- Laclau, Ernesto (2016). *La razón populista*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Llorca, Manuel y Diego Barría (2017). Introducción. Historia empresarial de Chile en el siglo XXI. En Llorca, Manuel y Barría, Diego (Eds.), *Empresas y empresarios en la historia de Chile: 1930-2015*. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.
- Martínez, Pedro y Rubio, Pablo (2017). *América Latina actual. Del populismo al giro de izquierdas*. Madrid: Los Libros de la Catarata.
- Meller, Patricio (1998). *Un siglo de economía política chilena (1890-1990)*. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello.
- Milos, Pedro (2008). *Frente Popular en Chile: Su configuración, 1935-1938*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- MIR (1965, septiembre). *Declaración de principios*. Santiago de Chile.
- Mouffe, Chantal (2019). *Por un populismo de izquierda*. México: Siglo XXI Editores.
- Nazer, Ricardo (2021). La crisis del modelo de desarrollo y las reformas estructurales, 1952-1970. En Llorca, Manuel y Millar, Rory (Eds.), *Historia económica de Chile desde la independencia*. Santiago de Chile: RIL Editores-Universidad de Valparaíso.
- Ortega, Luis (2005). *Chile en ruta del capitalismo: Cambio, euforia y depresión (1850-1880)*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.

- Oszlak, Oscar (2016). *La trama oculta del poder. Reforma agraria y comportamiento político de los terratenientes chilenos, 1958-1973*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- Palacios, Marco (2011). *Populistas: El poder de las palabras. Estudios de política*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Palieraki, Eugenia (2014). *¡La revolución ya viene! El MIR chileno en los años sesenta*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- Partido Socialista de Chile (1967). *Voto sobre la posición política nacional adoptado en el XXII Congreso Nacional Ordinario* (Chillán, 24 al 26 de noviembre de 1967).
- Pinto, Julio (1999). Socialismo y salitre: Recabarren, Tarapacá y la formación del Partido Obrero Socialista. *Historia*, 32. Santiago de Chile.
- Pinto, Julio (2005). Hacer la revolución en Chile. En Pinto, Julio (Ed.), *Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- Pinto, Julio (2007). Donde se alberga la revolución. La crisis salitrera y la propagación del socialismo obrero (1920-1923). En *Desgarros y utopías en la pampa salitrera. La consolidación de la identidad obrera en tiempos de la cuestión social (1890-1923)*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- Pinto, Julio y Verónica Valdivia (2001). *¿Revolución proletaria o querida chusma? Socialismo y alessandrismo en la pugna por la politización pampina (1911-1932)*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- Pizarro, Crisóstomo (1986). *La huelga obrera en Chile: 1890-1970*. Santiago de Chile: Ediciones SUR.
- Portales, Felipe (2011). *Los mitos de la democracia chilena. Desde la conquista hasta 1925, Vol. 1*. Santiago de Chile: Editorial Catalonia.
- Portales, Felipe (2015). *Los mitos de la democracia chilena. Desde 1925 a 1938, Vol. 2*. Santiago de Chile: Editorial Catalonia.
- Retamozo, Martín (2017). La teoría política del populismo. Usos y controversias en América Latina en la perspectiva posfundacional. *Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos*, 64. México.
- Rettig, Raúl (Coord.) (1991). *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*. Santiago de Chile: Ministerio del Interior.
- Riquelme, Alfredo (2014). La Guerra Fría en Chile: Los intrincados nexos entre lo nacional y lo global. En Harmer, Tanya y

- Riquelme, Alfredo (Eds.), *Chile y la Guerra Fría global*. Santiago de Chile: RIL Editores/PUCCh.
- Rodríguez, Fernando (2020). *La violencia en Santiago: Represión a los movimientos populares en el Gobierno de Eduardo Frei Montalva (1967-1970)* (Tesis de Licenciatura). Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago de Chile.
- Rojas, Jorge (1993). *La dictadura de Ibáñez y los sindicatos (1927-1931)*. Santiago de Chile: DIBAM.
- Rosanvallon, Pierre (2020). *El siglo del populismo. Historia, teoría y crítica*. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
- Salinas, Sergio (2013). *El tres letras. Historia y contexto del Movimiento de Izquierda Revolucionaria*. Santiago de Chile: RIL Editores.
- Samaniego, Augusto (2016). *Unidad sindical desde la base. La Central Única de Trabajadores de Chile, 1953-1973*. Santiago de Chile: Ariadna Ediciones.
- Urtubia, Ximena (2017). *Hegemonía y cultura política en el Partido Comunista de Chile. La transformación del militante tradicional (1924-1933)*. Santiago de Chile: Ariadna Ediciones.
- Viguera, Aníbal (1993). Populismo y neopopulismo en América Latina. *Revista Mexicana de Sociología*, 55(3). México.
- Werz, Nikolaus (2012). Populismos y democracia en América Latina. En Márquez, Martha et al. (Eds.), *El eterno retorno del populismo en América Latina y el Caribe*. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Winn, Peter (2013). *La revolución chilena*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- Yáñez, Juan (2008). *La intervención social en Chile, 1907-1932*. Santiago de Chile: PEDCH-RIL.

UM PARTIDO ENTRE POPULISMO, POLÍTICAS SOCIAIS E VOTO POPULAR

INTERPRETAÇÕES SOBRE O PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT)

Reinaldo Lindolfo Lohn e Silvia Maria Fávero Arend

NO PRIMEIRO DIA DE 2007, Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse para seu segundo mandato à frente da Presidência da República do Brasil. O evento marcou um momento político importante para as forças de esquerda brasileiras e latino-americanas. Não bastasse ter vencido as eleições presidenciais pela primeira vez em 2002, o Partido dos Trabalhadores (PT) demonstrou que poderia liderar um governo em um ambiente de relativa estabilidade institucional e obter sua continuidade por meios democráticos. Diferentemente do que aconteceu na primeira posse, quando cerca de 150 mil pessoas tomaram Brasília com muitas bandeiras vermelhas para receber o novo governo, a festa para que marcou o início do segundo mandato presidencial foi mais discreta e menos efusiva. Passada a novidade de quatro anos antes, a posse de um presidente com a trajetória pessoal e política de Lula já não gerava tantos impactos.

Mas não se pode dizer que as posses presidenciais de presidentes democraticamente eleitos no Brasil tenham se tornado tão frequentes que deixassem de chamar a atenção. Desde a fundação da cidade de Brasília, em 1960, marco da arquitetura modernista brasileira e expressão do nacionalismo desenvolvimentista que inspirou as políticas governamentais no período imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial, Lula marcava aquela que era apenas a sexta vez em

que um presidente eleito por sufrágio universal tomava posse. Décadas antes, a ditadura militar imposta após o golpe de Estado de 1964 interrompera um processo político relativamente aberto e competitivo iniciado em 1945. No entanto, mesmo na breve experiência democrática que o país viveu até a tomada do poder pelos militares, a esquerda e as forças populares tiveram poucas oportunidades para disputar diretamente o voto popular e apresentar um programa de mudança social. O Partido Comunista Brasileiro (PCB) estivera então legalizado por pouco tempo, quando concorreu às eleições presidenciais e conseguiu eleger um pequeno, mas simbólico e combativo grupo de parlamentares. No entanto, num contexto de inserção do país na geopolítica da Guerra Fria, os comunistas viram-se obrigados a regressar à sua habitual atividade clandestina, sendo banidos da vida política nacional ainda em 1947.

Assim, em um país em que durante a maior parte do século XX as principais forças de esquerda foram perseguidas e banidas do campo político formal, a continuidade de um governo oriundo de lutas populares expressivas não deixou de ser notável. Lula e o PT constituíram-se no centro de uma nova esquerda organizada durante o processo de transição política que envolveu os últimos anos da ditadura e a formação da chamada “Nova República”, ao longo da década de 1980. O partido político teve sucessos eleitorais contínuos desde os primeiros anos de democratização, culminando com sua chegada ao comando do governo brasileiro no início deste século.

A grande imprensa, além de ressaltar a “maturidade” da democracia brasileira, destacou que, em seu primeiro mandato, Lula e o PT reproduziram as relações tradicionais da política brasileira e realizaram um governo, em diversos aspectos, aquém do esperado. Tais assertivas obscureceram as manifestações de apoiadores que tentaram destacar os chamados “avanços sociais” do período. Segundo as narrativas jornalísticas, as taxas de crescimento econômico mostraram um desempenho modesto e a violência urbana ganhou contornos dramáticos.

Além disso, uma expressão tornou-se comum na análise dos colonistas e comentaristas políticos: “Lulismo”. Seu uso relacionou o governo Lula com práticas políticas personalistas, bem como evocou imagens associadas a lideranças fortes e centralizadoras em diferentes países da América Latina. Direcionado ao PT, o termo soava como uma provocação, agravada por críticos de direita que passaram a usar a expressão “lulopetismo”, como se o partido não passasse de um acessório de seu carismático líder. Em sua trajetória até então, o PT rejeitara em diferentes momentos identificar-se com personalidades e movimentos que, embora populares, evocassem um passado de au-

toritarismo e manipulação das massas. A expressão lulismo também se referia a formas de relacionamento entre os políticos e o eleitorado popular que haviam sido chamadas de “populistas” em um passado não tão distante. Militantes e ativistas identificados há anos como “petistas” — termo que buscava enfatizar a importância da organização partidária coletiva e não personalista — passaram a ter que lidar com uma designação que gerava certo desconforto.

Sobre esse tema, vale destacar um episódio ocorrido durante o cerimonial que costumeiramente marca as posses presidenciais no Brasil — quando soldados vestidos como se estivessem no século XIX contrastam com os prédios de concreto e vidro de Brasília. Após prestar juramento de obediência às normas constitucionais em seu segundo mandato, Lula fez seu discurso e, entre as promessas de fazer um governo que buscava “acelerar, crescer e incluir”, dedicou um breve trecho às críticas tanto da direita quanto da esquerda: “o nosso governo nunca foi, nem é ‘populista’. Este governo foi, é e será popular” (Folha On Line, 1 de janeiro de 2007).

Essa breve passagem no discurso de posse de Lula em 2007 inspira a problemática a partir da qual este ensaio foi construído. No presente texto, a intenção não é apresentar respostas definitivas, mas sugerir questionamentos sobre as supostas características “populistas” do PT após sua chegada ao poder e propor uma reflexão que leve em conta a trajetória histórica do processo de construção democrática no Brasil desde o fim da última ditadura militar. Para tanto, considera-se a dinâmica do processo de transição política ocorrido ao longo das décadas de 1970 e 1980, bem como a trajetória do uso político da noção de populismo no Brasil, evitando entrar no campo das generalizações conceituais. Neste texto, exploramos possíveis relações entre a atuação política do PT e de Lula quando chegaram ao poder em 2003, as políticas sociais implementadas na época, com foco na análise do programa Bolsa Família, e o comportamento eleitoral observado entre as classes populares no Brasil, que geralmente são alvo do que se chama de populismo. Um marcador de classe pode ser visto no uso desse termo no Brasil, geralmente referido ao comportamento eleitoral das populações mais pobres do país. Portanto, o significado aqui utilizado para essa noção difere de seu uso recente em alguns países e contextos, em que tem sido usado para designar líderes de movimentos extremistas de direita.

Certamente há distinções importantes entre um governo “popular” e um “populista”, as quais Lula e seu partido gostariam de enfatizar. As forças de esquerda no Brasil têm um longo histórico de críticas e rejeição às práticas ditas populistas. O PT, de certa forma, forjou-se na crítica a movimentos e organizações em seu próprio cam-

po que acusava de adotarem posturas populistas. Assim, era legítimo que seus dirigentes e militantes questionassem o uso e o alcance de termos como “lulismo” e “populismo” para caracterizar o partido no século XXI.

Dias após a posse presidencial de 2007, um importante jornal brasileiro publicou um artigo de um renomado sociólogo dedicado ao estudo das relações de trabalho no Brasil e suas implicações políticas. A partir de uma leitura inspirada em Gramsci, Ricardo Antunes posicionou Lula em uma lista de líderes carismáticos que incluía Perón, Getúlio Vargas, Jânio Quadros, Adhemar de Barros, João Goulart, Leonel Brizola e até Fernando Collor. O autor do artigo argumentou que o lulismo teria dado continuidade a uma trajetória política que, em seu caso, misturou elementos progressistas e conservadores, os últimos ganhando cada vez mais o lugar dos primeiros. Lula teria se afastado de suas origens operárias e o lulismo expressaria nada mais do que um pragmatismo moldado às circunstâncias rotineiras da política brasileira. Embora não tenha usado a expressão “populismo”, esta parece ser uma das possíveis conclusões de sua reflexão, na qual Lula aparece como um político conciliador, dirigindo-se diretamente aos pobres e não mais à esquerda, além de se envolver em alianças e coalizões sem qualquer dimensão progressista (Antunes, 3 de janeiro de 2007).

No entanto, mesmo considerando suas críticas diretas e profundas, o artigo de Antunes deixou ao leitor com uma porta aberta para levar em conta o passado de Lula e de seu partido. Um sentido progressista estivera presente na história do partido, embora, na visão do autor, cada vez mais exaurido e desaparecido em meio ao conservadorismo que teria passado a dominá-lo desde que Lula chegara à Presidência da República. É, portanto, necessário ao menos discutir a suposta transição do PT e de Lula para uma prática política que antes rejeitavam, considerando alguns elementos históricos que envolvem a questão.

A discussão sobre o populismo (ou mesmo o chamado neopopulismo) sugere uma discussão histórica sobre as relações políticas no Brasil anterior à ditadura militar. No final da década de 1960, Octávio Ianni afirmava que o regime ditatorial teria sido fruto do colapso da experiência populista brasileira. O populismo teria sido a forma política dominante em uma sociedade situada na transição da agroexportação para a industrialização em meados do século XX, acomodando o poder político tradicional e mantendo intacto o controle social sobre os trabalhadores. As massas recentemente urbanizadas seriam manipuladas por técnicas de poder político necessárias para manter os compromissos e acomodações do período. Tais condições teriam

escapado à percepção de grande parte da esquerda, que adotou um programa nacionalista e reformista que reunia as classes populares, mas não apontava rupturas com as estruturas dominantes. Ao longo deste percurso, o esgotamento da industrialização por substituição de importações teria imposto aos setores capitalistas a necessidade de reconsiderar alianças e compromissos com a democracia populista. Como resultado, a ditadura militar que resultou do golpe de 1964 teria sido necessária para tais setores dominantes com vistas a aprofundar a internacionalização da economia brasileira, uma imposição das classes dominantes que, assim, se livraram dos líderes carismáticos do passado (Ianni, 1968).

Outro autor que se dedicou ao tema ao longo das décadas de 1960 e 1970 foi Francisco Weffort, ao buscar compreender a dinâmica das classes sociais e a presença política das massas populares no Brasil a partir de 1945. No pós-guerra, a extensão do sufrágio universal colocou diante das classes populares a possibilidade de pressionar o sistema político como um todo. O populismo representaria a emergência das classes populares em processo de urbanização e sua importância no contexto do desenvolvimento industrial no Brasil, incorporadas aos meandros da política (Weffort, 1980, p. 61). No entanto, a ausência de organizações partidárias e sindicais efetivamente autônomas e comprometidas com a mudança social teria alimentado uma lógica de relação direta entre o eleitorado e os políticos, reproduzindo e ampliando o alcance do populismo. A abordagem de Weffort apresentou a vantagem de situar a discussão no âmbito dos conflitos sociais no Brasil, tomando o populismo como uma situação histórica particular. As massas populares teriam podido participar com alguma autonomia no mundo da política, despertando a aversão de setores conservadores e elitistas. No entanto, a prática populista impediria que tais massas agissem como classe, mantendo sua dependência política a líderes carismáticos. O rompimento com o populismo exigiria a autonomia sindical, o pluralismo e a educação política. Essas seriam as bandeiras assumidas pelos grupos que fundaram o PT no final dos anos de 1970. Nessa perspectiva de análise, considerando o contexto de transição entre a ditadura militar e uma democracia bastante incerta, o partido se apresentava como uma mudança em relação à trajetória que a esquerda brasileira havia construído no período anterior a 1964.

À luz de abordagens historiográficas mais recentes, é possível avaliar que as lutas populares anteriores ao golpe de Estado tinham características complexas e não eram simplesmente subordinadas a líderes populistas e oportunistas. Diferentes agrupamentos de esquerda atuaram a partir de um movimento operário formado em grande parte por trabalhadores oriundos do êxodo rural massivo

ocorrido naqueles anos. No início da década de 1960, algumas das lutas sociais empreendidas na época antecipavam demandas por autonomia sindical que mais tarde amadureceriam nas áreas mais urbanizadas do país (Negro, 2004). No interior do Brasil, os conflitos no campo em torno da estrutura da propriedade da terra e das relações de trabalho também passaram a galvanizar a ação dos movimentos e lideranças socialistas e comunistas, com a afirmação da bandeira da reforma agrária como uma das principais frentes de luta do país.

Além disso, um movimento importante ocorreu na base do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), organização criada na década de 1940 em torno de Getúlio Vargas, uma das figuras paradigmáticas comumente listadas entre os chamados populistas brasileiros. Setores da base social varguista nas grandes cidades, principalmente entre as organizações sindicais, aproximaram-se das posições de esquerda. Na ausência de um grande partido de esquerda capaz de receber votos de eleitores progressistas, coube ao partido Vargas ser o estuário das demandas por mudanças sociais no país. Por outro lado, os dirigentes do PTB não abandonaram seus vínculos com setores conservadores, mantendo posições ambíguas. Essa condição se acentuou durante o governo de João Goulart (1961-1964), herdeiro político direto de Vargas, o que para muitos observadores teria levado à sua paralisia e incapacidade para resistir ao golpe.

Nessas condições, apesar de dirigirem-se às massas, políticos populistas como Goulart não seriam capazes de levá-las a superar suas condições históricas. A derrota da esquerda e a rápida imposição da ditadura alimentaram imagens segundo as quais os pobres seriam vítimas passivas de enganadores, inviabilizando sua mobilização contra o golpe direitista. O termo populismo passou a designar o que seria a inconsistência da participação política dos grupos populares, restrita ao sufrágio eleitoral. Tão importante quanto levar em conta as discussões acadêmicas, é preciso, portanto, compreender o uso político do termo populismo no Brasil.

O uso mais frequente desse termo como parte das disputas eleitorais foi muitas vezes associado a formas elitistas de desqualificação da participação política de grupos populares. Mesmo quando evocada a partir de pretensões analíticas, a terminologia que gira em torno da noção de populismo foi muitas vezes utilizada para desacreditar o comportamento político da população mais pobre do Brasil. Os grupos populares seriam vítimas passivas e silenciosas de formas enganosas de campanhas eleitorais, sujeitas ao messianismo e ao conformismo político.

O uso do termo populismo refere-se a interpretações que ganharam importância a partir da década de 1950. Argumentou-se então

que a sociedade brasileira seria incapaz de extrapolar suas contradições, pois não haveria a formação plena de classes sociais dotadas de consciência de seu “papel histórico”. Assim, o Estado foi tomado como uma força dotada de poderes sobre o conjunto de uma sociedade inconsistente, liderando o processo de modernização e industrialização. Para Jorge Ferreira, tal visão colocava os trabalhadores brasileiros como parte de uma sociedade civil “gelatinosa” ou “fraca”, dependente de um Estado todo-poderoso dedicado à manipulação, cooptação e corrupção. Entre os fundamentos da ideia de populismo no Brasil estaria, portanto, a culpabilização do Estado e a vitimização da sociedade (Ferreira, 2001, pp. 62-63).

Cabe destacar que um dos primeiros usos do termo populismo no Brasil deveu-se à oposição liberal-conservadora a Getúlio Vargas, em 1945, quando se tratava de desqualificar o apoio popular ao então ditador. Em torno da expressão populismo, construiu-se historicamente uma imagem do “povo” como uma mistura de “ignorante” ou “alienado”, inclusive no meio acadêmico e entre boa parte da esquerda. Cristalizou-se uma imagem segundo a qual a história do Brasil no século XX poderia ser resumida em uma sucessão de autoritarismos seguidos de momentos em que haveria uma democracia imperfeita liderada por políticos enganadores. Ao povo caberia apenas observar o desfile do poder e dos poderosos, sem qualquer agência social que alterasse seu curso.

Quando Lula chegou ao poder pelo voto popular no início do século XXI, não é surpreendente, portanto, que tanto sua trajetória quanto a de seu partido tenham sido construídas sobre um programa que rejeitasse um passado supostamente populista assim descrito e interpretado. O PT emergiu de bases populares que se afastaram dos herdeiros do varguismo, dos nacionalistas e dos comunistas ao longo dos anos de 1960 e 1970. Segundo Eder Sader, uma nova esquerda popular ganhou dimensão no Brasil durante a ditadura militar. Movimentos de base incorporaram setores autenticamente populares e desenvolveram sua própria cultura política em contato com membros da chamada igreja progressista e movimentos de educação popular, nas demandas por moradia e condições de vida dignas. Também estiveram em ação organizações políticas que, a partir da derrota da luta armada contra o regime autoritário, buscaram construir pontes com os grupos populares. Ao mesmo tempo, houve uma intensa presença pública de movimentos que trouxeram temas como os direitos das mulheres e a defesa das minorias para o primeiro plano da vida política brasileira (Sader, 1988). Nessa base popular, as discussões sobre temas até então pouco explorados no âmbito da esquerda tornaram-se intensas, como questões raciais ou políticas de proteção social para

crianças e adolescentes. Percebeu-se também a necessidade de defender as liberdades individuais e, em particular, os direitos humanos, após um período em que a ditadura montou um aparato repressivo que transformou em política de Estado as perseguições, violações, torturas e mortes tanto de opositores quanto de grupos sociais vulneráveis.

Como frente social e política articulando lutas sociais tão distintas, renovou-se o movimento operário com jovens lideranças oriundas da base de trabalhadores da região mais industrializada do Brasil, em São Paulo. Havia entre seus líderes muitas pessoas que experimentaram diretamente o processo que deslocou centenas de milhares de trabalhadores das áreas rurais mais pobres do país, em especial da região Nordeste, mobilizadas pela intensa industrialização após a Segunda Guerra Mundial. Formavam a base de trabalho das grandes indústrias nacionais e multinacionais produtoras de modernos bens de consumo duráveis, especialmente automóveis, que seduziam os gostos e a atenção das classes médias e das elites. Muitos dos trabalhadores que vivenciaram essa trajetória, a qual alterou aspectos significativos das características socioeconômicas do Brasil, participaram de novas formas de organização nos espaços restritos de luta e expressão crítica abertos em meio ao autoritarismo da ditadura e aos sistemas de controle das fábricas. Seja nas comissões de fábrica, nas oposições sindicais ou nos movimentos de bairro, havia um diálogo constante entre socialistas, comunistas, cristãos e humanistas em geral. O que veio a ser chamado de “novo sindicalismo” ganhou expressão nas grandes greves que surpreenderam o governo e a imprensa a partir de 1978.

Foi por ocasião dessas greves que grande parte do país soube da existência de um trabalhador e sindicalista que, décadas depois, chegou a Brasília para assumir a Presidência da República por dois mandatos, entre 2003 e 2010. Natural de Pernambuco, na região Nordeste, e tendo migrado com a família ainda criança para São Paulo, Luiz Inácio da Silva, mais conhecido como Lula, aos poucos passou a ser visto não apenas como mais um líder operário. Posicionou-se como possível ponto de articulação entre as diferentes frentes da esquerda popular, que atuava na periferia e à margem de um sistema de poder profundamente autoritário. Em torno do novo sindicalismo, do qual Lula foi a expressão mais visível, criaram-se condições que seriam apropriadas pelos coletivos, organizações e frentes que se articularam para formar o PT em 1980. A trajetória histórica do PT esteve, portanto, inicialmente ligada a movimentos sociais de base, o novo sindicalismo, a igreja progressista e a nova esquerda dos anos 1960 e 1970, rejeitando tanto o modelo dos partidos soviéticos quanto o dos trabalhistas e da socialdemocracia (Secco, 2011, pp. 35-43). Desde

o início, houve no PT inúmeras e intensas disputas internas, que muitas vezes geraram dissensões e fracassos eleitorais. A forte base sindical, em tempos de crise, permaneceu como um arranjo importante capaz de manter certa coesão de propósitos e um programa mínimo de reivindicações sociais e políticas.

As características do processo de transição ocorrido no Brasil, marcado pela lenta negociação de uma abertura política que não colocasse em risco os governantes do regime autoritário e não ameaçasse o domínio das forças liberais-conservadoras, significaram a construção de uma democratização a partir de cima, com pequenas mudanças nas estruturas institucionais. O fim da ditadura militar e o processo de democratização ocorreram no contexto de uma virada neoliberal (Villareal, 1983, pp. 429-471). A coalizão conservadora liberal passou a ver na formalização da democracia a possibilidade de abertura da economia, bem como o de desmantelamento de um Estado visto ao mesmo tempo como perdulário e essencialmente corrupto: as reformas neoliberais deveriam ser impostas sob governos com mais legitimidade política do que a ditadura. Por outro lado, os movimentos populares e a oposição mais combativa ao regime lutavam por uma democracia que significasse a real ampliação dos direitos civis, políticos e sociais. Eram perspectivas antagônicas. A ampliação dos direitos significava mais políticas públicas, portanto, mais Estado. Do outro lado estavam os que defendiam o Estado mínimo e as desregulações (Viscardi e Perlatto, 2018). A elaboração da Constituição de 1988 e as eleições presidenciais desde então giraram em torno desse eixo fundamental de disputas.

Nesse processo, o PT se transformou em uma força eleitoral significativa, principalmente a partir do final da década de 1980 e ao longo da década seguinte. É importante destacar que isso ocorreu enquanto, internacionalmente, a esquerda vivia crises que se mostraram, em alguns casos, insuperáveis, após a queda do mundo soviético. Em sua ascensão, o PT conseguiu alinhar-se a uma agenda pública urgente no país daqueles anos, de modo que o combate à extrema pobreza por meio de medidas diretas de distribuição de renda passou a ocupar o centro das atenções. As fortes imagens televisivas de populações submetidas à extrema pobreza, tanto no campo quanto nas grandes cidades, aumentaram a consciência social em torno da necessidade de políticas urgentes para enfrentar o drama social brasileiro. Campanhas populares, principalmente a realizada sob a liderança do sociólogo Herbert de Souza — Betinho —, mobilizaram milhões de pessoas em torno do alívio da pobreza e da fome. Direitistas e conservadores de diversas vertentes tiveram dificuldade em controlar o debate público no Brasil exatamente no momento histórico mais favorável ao seu

avanço na esfera internacional. Certamente, a decepção popular com o breve governo conservador de Fernando Collor e as dificuldades do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, à frente de políticas neoliberais, contribuíram para isso.

O PT assegurou à esquerda uma predominância que esse campo político nunca havia experimentado no país, tornando-se o partido de base social popular mais consistente do Brasil. As chamadas “caravanas da cidadania” de Lula na década de 1990, embora não tenham gerado efeitos eleitorais, trouxeram ao cerne da ação da esquerda brasileira a necessidade de produzir políticas públicas e programas de ação governamentais específicos para os setores mais vulneráveis do país. Isso significou afastar-se das plataformas abrangentes de transformação da sociedade tão caras à esquerda, as chamadas reformas estruturais, incluindo a reforma agrária. Mecanismos testados internacionalmente ou desenvolvidos em municípios geridos pelo partido, como o microcrédito e a transferência de renda básica para famílias pobres, ganharam consistência e se tornaram as bandeiras mais frequentes da ação partidária. Quando o partido chegou ao governo federal, em 2003, o efeito político das medidas de transferência de renda para os trabalhadores mais pobres do país foi significativo. No início do primeiro governo Lula foi lançado o programa “Fome Zero”, posteriormente substituído pela fusão de vários programas isolados de transferência de renda em um único sistema, o qual seria capaz de garantir uma cobertura universal de proteção social. Conhecido como “Bolsa Família”, tornou-se um consistente programa de bem-estar familiar por meio da transferência condicional de renda.

Dentre os programas sociais implementados durante o governo Lula, o Bolsa Família se destacou por buscar intervir nas condições de pobreza de parcela significativa das famílias e por garantir direitos sociais básicos, especialmente educação escolar para crianças e adolescentes e acesso ao sistema de saúde para as gestantes. O trabalho infantojuvenil esteve presente nas famílias brasileiras pobres, urbanas ou rurais, ao longo do século XX. Essa prática ocorreu sob diferentes cenários que, em geral, afastavam crianças e jovens de ambos os sexos da educação escolar. Esse processo contribuiu muito para a reprodução social da pobreza, uma vez que os empregos mais bem pagos, especialmente após a II Guerra Mundial, passaram a exigir um nível de escolaridade mais elevado. Vale destacar que desde o primeiro governo de Getúlio Vargas (1930-1945) a escolarização da população infantil tornou-se obrigatória no Brasil. No entanto, entre o que as legislações federal e estadual diziam e o que acontecia no cotidiano das pessoas havia uma grande lacuna.

Desde cedo, meninos e meninas trabalhavam muitas horas por dia na agricultura e/ou cuidando de animais, nas pequenas e médias propriedades rurais de suas famílias. No mundo urbano, o quadro em relação ao trabalho infantil era mais complexo. Meninos e adolescentes recebiam baixos salários no setor industrial, no comércio e serviços. Esse fato criou dificuldades para que uma parcela significativa de homens pobres exercesse o papel de provedores de suas famílias. Com o objetivo de custear as despesas familiares, geralmente a partir dos 12 anos, mulheres pobres ingressavam no mercado de trabalho, atuando principalmente como empregadas domésticas em residências de pessoas de classe média. Esse cenário adquiriu um contorno ainda mais intenso quando dos processos migratórios ocorridos nas décadas de 1960 e 1970 para as médias e grandes cidades. Crescentemente, nas ruas dos centros urbanos brasileiros, havia um número significativo de crianças e adolescentes trabalhando informalmente ou mendigando (Frontana, 1999). Uma parcela dessa população, principalmente do sexo masculino, ao longo dos anos assumiu alguma atividade no emergente e proibido comércio de entorpecentes. A questão dos chamados “menores”, compreendendo crianças e adolescentes que não frequentavam a escola, não era vista como um problema social até meados da década de 1970 para diversos setores sociais brasileiros, a começar pelas crescentes camadas médias do país.

Os responsáveis pela formulação de políticas sociais para a infância durante a ditadura militar defendiam a transferência das crianças para abrigos públicos ou privados. Recursos públicos foram destinados a instituições que deveriam acolher meninos e meninas, garantindo que recebessem alimentação e roupas, além de oferecer alguma formação escolar. A realidade, porém, mostrava um quadro de carência e descaso. Mesmo assim, essa e outras ações no campo da assistência social, como a distribuição de alimentos básicos, foram de grande importância para a manutenção de uma rede de apoio político ao regime ditatorial, especialmente porque garantiram a eleição de parlamentares que apoiavam e procuravam defender a legitimidade da ditadura. A questão social era tratada como parte de um vasto sistema de assistência e de arranjos políticos em que o Estado autoritário assumia o papel de garantir que os pobres não saíssem de seu controle (Zaluar, 2012, pp. 327-365).

Quando a censura aos meios de comunicação de massa foi flexibilizada no final da ditadura, começaram a surgir graves denúncias de violações de direitos humanos ocorridas nas referidas instituições de abrigo. Ao longo do processo de transição política e construção democrática, essa discussão assumiu cada vez mais a agenda pública de debates (Arend, 2016, pp. 1-9). Esse contexto foi fundamental

para a instituição, em 1990, de uma legislação federal — o Estatuto da Criança e do Adolescente — que buscava garantir os direitos de crianças e adolescentes no país, bem como a formulação e implementação de políticas sociais para a população pobre. Tais proposições eram parcialmente influenciadas pelas demandas de uma nova esquerda brasileira e de seus programas de ação política. Importantes parcelas dos grupos que dialogavam mais intensamente com o cotidiano das classes populares perceberam a necessidade de caminhar no sentido das políticas sociais compensatórias. A transferência de renda diretamente para as famílias passou a ser preconizada, deixando para trás ações de caráter beneficente e/ou filantrópico e aquelas baseadas no acolhimento de crianças e adolescentes em grandes instituições. No período do governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) algumas ações nesse sentido começaram a ser implementadas em nível nacional. No entanto, foi nos dois governos Lula que estes adquiriram grande importância e consistência, contribuindo para dar universalidade à proteção social (Rego e Pinzani, 2013).

O programa social Bolsa Família foi instituído em 2003 durante o primeiro governo Lula a partir da combinação de benefícios anteriormente criados. O programa social tinha como alvo famílias localizadas entre as faixas de pobreza e extrema pobreza que viviam em áreas rurais ou urbanas e com uma renda mensal per capita muito baixa. Cada família passou a receber um valor diferenciado limitado ao número de crianças e adolescentes de zero a dezessete anos, gestantes ou lactantes. Os beneficiários recebiam recursos diretamente do governo federal mensalmente por meio de um banco oficial. As condicionalidades do programa social eram as seguintes: crianças e adolescentes deveriam frequentar a escola; às gestantes cabe a realização de exames pré-natais; e crianças de zero a seis anos teriam seu peso, altura e controle de vacinação verificados pelo sistema de saúde. Tais condicionalidades tinham a função de romper com o ciclo geracional da pobreza, criando possibilidades de inserção no mercado de trabalho urbano ou rural após um período de formação escolar (Pires e Jardim, 2014, pp. 99-112).

Distintos de um tipo de relação em que os políticos assumiam o papel de intermediários com os trabalhadores em troca de votos, os programas sociais assim constituídos seriam capazes de reorientar os mecanismos de assistência e apoio social construídos ao longo do século XX no Brasil. A utilização de sistemas de registros de famílias que envolviam critérios objetivos tendeu a reduzir o nível de personalização da política social. Assegurando a institucionalidade construída ao longo da Nova República e governando dentro dos limites dos quadros políticos então criados, o PT apresentou-se como capaz

de distribuir renda sem acentuar os conflitos sociais. Essa talvez seja uma das maiores críticas ao programa e suas consequências. Ainda há muitas discussões sobre até que ponto a política de valorização do salário mínimo, os mecanismos previdenciários e os programas sociais têm sido efetivamente capazes de desconcentrar a renda e reduzir as desigualdades sociais. Críticos da direita e da esquerda enfatizaram quanto problemática foi a decisão de dar centralidade ao que foi considerado um relacionamento paternalista entre governo e grupos populares. De qualquer forma, o efeito político de tais ações na trajetória do PT e de parte da esquerda brasileira seria considerável.

Assim, ao longo da década de 1990 e nos anos imediatamente anteriores às vitórias eleitorais do início do século XXI, o PT caminhou para mudanças significativas em sua atuação, o que se confirmou quando chegou ao governo. Vale destacar pelo menos três dimensões entre aquelas que estruturaram as ações partidárias naqueles anos. Em primeiro lugar, é preciso destacar que o processo de democratização da sociedade brasileira após a ditadura militar foi institucionalmente pautado pela centralidade dos mecanismos de representação política como principal meio para a construção de uma democracia com limites rígidos (Pitkin, 2004, pp. 335-342). Assim, restava às forças políticas basicamente se organizarem em função das campanhas eleitorais. No caso do PT, subordinar o partido às disputas eleitorais e governar municípios e estados significava, para a maioria de seus dirigentes, abrir-se a alianças e coligações, além de organizar-se para campanhas eleitorais custosas e flexibilizar o programa partidário.

Por outro lado, mas não menos importante, como mencionado acima, o partido passou a assumir definitivamente as bandeiras de combate à pobreza extrema por meio de programas sociais experimentados em nível local. A impossibilidade ou incapacidade de construir um programa abrangente de esquerda não era exclusividade do PT, o que envolvia ainda um difícil percurso nos limites de uma gestão econômica subordinada à chamada austeridade das medidas fiscais e monetárias conservadoras, configuradas na hegemonia neoliberal. A expansão dos direitos sociais em meio ao neoliberalismo tornou-se uma fórmula difícil de resolver. O chamado “tripé macroeconômico” herdado dos anos de 1990 seria preservado com uma política econômica baseada na geração de superávit primário, metas de inflação e câmbio flutuante (Braga e Santos, 2020, pp. 169-186). Além disso, medidas como a reforma da previdência do setor público provocaram rupturas partidárias permanentes.

Por fim, o que mais tarde se revelaria uma condição amarga e contraditória, o PT surgiu no início da década de 1980 como um baluarte ético em meio a um sistema político marcado por desvios e

escândalos em diferentes áreas da gestão do Estado. O que veio a ser chamado de “presidencialismo de coalizão” (Abranches, 1988, pp. 5-38), no qual os presidentes só são fortes e estáveis quando formam vastas maiorias parlamentares em troca de vantagens no acesso ao poder, recursos, empresas estatais e cargos ministeriais, foi uma prática comum no Brasil pós-ditadura. A consolidação de esquemas institucionais pautados pelo protagonismo parlamentar levou os diferentes governos da Nova República a adotar formas de interação com o Congresso Nacional que passaram por disputas e intensas negociações na divisão do orçamento público e na estruturação do próprio Estado. Isso deve ser considerado no contexto de uma situação política em que o PT, apesar de controlar as funções executivas do Estado, ficou longe de deter a maioria no parlamento. A combinação desse tipo de negociação parlamentar com os acordos voltados para disputas eleitorais, o que requeria a formação de fundos milionários de campanha obtidos de grandes empresas, significou o envolvimento do partido em denúncias veiculadas pela imprensa e investigadas no parlamento e no judiciário, que diziam respeito a relações obscuras e práticas consideradas corruptas. Em meados do primeiro mandato de Lula, justamente a dimensão ética da ação do partido foi fortemente afetada, quando líderes petistas e importantes membros do governo foram sucessivamente acusados de desvios e de envolvimento em suspeitas de corrupção. Anos depois, após deixar o governo, o próprio Lula seria acusado e preso em uma ação judicial envolvendo a petroleira Petrobras e empreiteiras. Essa questão ainda suscita dúvidas e discussões sobre as intenções e ações dos promotores públicas e do juiz, que foi declarado parcial pelo STF, tendo o processo judicial sido anulado. Trocas de mensagens em grupos de internet revelaram o comprometimento de integrantes do judiciário e do Ministério Público que pretendiam destruir a imagem pública de Lula e de seu partido.

Após o primeiro grande escândalo que envolveu o partido, entre 2004 e 2005, surgiu um elemento novo e significativo que reestruturou a imagem do PT e assegurou que, mesmo abalado, o partido continuaria forte. A movimentação social ocorrida desde então mostrou que o PT passara por mudanças abrangentes, assumindo características que o distinguiam de sua trajetória inicial e apontavam direções que desafiariam possíveis interpretações. O governo Lula desgastou-se junto à esquerda, dada sua suposta incapacidade ou impossibilidade de conduzir um programa que rompesse frontalmente com o neoliberalismo, bem como sofria ataques da oposição firme de uma direita que explorava as ambiguidades políticas e os escândalos de corrupção que tomaram as primeiras páginas dos jornais. Parecia que o mandato de Lula caminhava para um final melancólico e desmoralizante. A

segunda tomada de posse em 2007 nunca aconteceria se as previsões de diferentes analistas fossem confirmadas. Mas, foi exatamente nesse momento que surgiu a força do “lulismo”, como aponta o cientista social André Singer. Em uma análise publicada pela primeira vez em 2009, Singer apropriou-se do termo que circulava entre os críticos do PT de diferentes espectros ideológicos e apontou para novos significados. Em sua interpretação, “lulismo” é tomado como um termo que se distancia e deixa de ser simplesmente uma variação dos significados atribuídos ao populismo. Como o autor questiona, como o governo do PT poderia ser, ao mesmo tempo, neoliberal, como foi acusado pela esquerda, e populista, ao estilo brasileiro dos anos 1950, como insinuado por conservadores e alguns esquerdistas?

A trajetória de Lula nos anos imediatamente anteriores à sua chegada à Presidência da República, aproximando-se do eleitor mais popular, mas principalmente as medidas que seu governo tomou para aumentar o salário mínimo, ampliar programas sociais e transferir renda, teriam sido fundamentais para um quadro que surpreenderia muitos observadores. Mais do que uma forma específica de exercício do poder ou um tipo de relação direta entre eleitores e políticos, houve uma mudança consistente no comportamento eleitoral de setores expressivos de grupos populares no Brasil em relação ao PT, mas principalmente a Lula. Os dados eleitorais sistematizados por Singer demonstram como, antes de 2006, Lula tinha seu melhor desempenho entre os eleitores das faixas de renda média. Contudo, exatamente nas eleições desse ano teria surgido um eleitorado “lulista”, formado por trabalhadores com renda mensal de até dois salários mínimos, com dificuldades de conseguir empregos formais ou ofícios autônomos, que estavam desvinculados das organizações sindicais e em condição frequente de instabilidade e sazonalidade no mundo do trabalho. Grande parte desses eleitores vive nas áreas mais pobres do país, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, em locais que durante décadas foram pontos de partida de emigrantes para as grandes cidades brasileiras, processo que Lula conhecia pessoalmente. Esse “subproletariado”, marcado pela informalidade e pelas difíceis condições do mundo do trabalho, forma um contingente da classe trabalhadora com a qual a esquerda brasileira historicamente encontra inúmeras dificuldades de diálogo. As sucessivas eleições que aconteceram após a redemocratização do país mostraram um marcado conservadorismo entre esses eleitores (Singer, 2012).

O governo Lula transferiu para o PT um contingente de eleitores a que o partido não estava acostumado. A vulnerabilidade e a precariedade dos direitos, constantemente ameaçados, levariam essa parcela de trabalhadores a rejeitar propostas radicais incertas e inseguras de

ruptura na ordem social. Suas experiências de vida tendiam a mostrar que períodos de crise e instabilidade apenas agravavam sua pobreza. Enquanto uma parcela significativa das classes médias e dos setores mais bem pagos e organizados da classe trabalhadora e dos servidores públicos tendiam a votar no PT nas décadas de 1980 e 1990, buscando uma alternativa mais moderna e ousada para mudar as práticas políticas e culturais no do país, assim como aqueles setores progressistas inspirados por uma ética pós-materialista (Inglehart, 1990), os mais pobres preferiam os políticos de direita. Uma visão de mundo influenciada por hierarquias consolidadas e uma religiosidade popular que tendia a desconfiar de atitudes mais amplas de protesto político circulavam entre os trabalhadores mais pobres e desorganizados.

A sociedade brasileira é muitas vezes mais complexa do que abstratos e rígidos esquemas de análise das classes sociais. Por diversos motivos, como apontado acima, o discurso esquerdista no Brasil tem, ao longo do tempo, encontrado muitas dificuldades para circular entre os mais pobres. A histórica violência política perpetrada no interior do país contra os pobres em episódios marcantes de protesto popular teria contribuído para cimentar um senso comum que acentua a prudência, dificultando a atuação da esquerda. Também vale a pena considerar as formas específicas de relação com a esfera da política construídas pelas classes populares, para as quais o exercício político muitas vezes é visto como algo distante e obscuro. As eleições conformam um tempo próprio, que não deve afetar as relações cotidianas na família e na comunidade. O restrito tempo em que a política atravessa as relações cotidianas apresenta-se cercado de cuidados que impedem que os conflitos ultrapassem o âmbito do voto. Este tem menos o significado de uma escolha individual e abstrata em torno de projetos e ideias e mais uma adesão social a um dos lados que se apresentam na disputa eleitoral, o que demanda uma cuidadosa identificação com o que seria o melhor para os pobres em suas condições efetivas (Palmeira, 1992, pp. 26-30). Assim, a política ainda é percebida como um esquema de interações restrito aos ricos, o que manteria os pobres em condição de inacessibilidade ao poder. Além disso, investigando a vida de trabalhadores pobres de uma área da periferia de São Paulo entre as décadas de 1970 e 1980, Teresa Caldeira descreveu e analisou experiências que apontavam para uma vaga crença na mobilidade social e na possibilidade de melhoria de vida pelo esforço individual e pelo incentivo à família, o que impacta as percepções políticas e as práticas eleitorais de populações muito pobres no Brasil (Caldeira, 1984). As análises sobre a política brasileira nas últimas décadas devem, portanto, considerar o comportamento eleitoral desses trabalhadores, evitando tanto subordiná-los ao que seria a mera reprodução de ideias e

discursos de políticos quanto a recortes ideológicos e programáticos muito rígidos.

Embora em termos de política macroeconômica o governo Lula apresentasse continuidades em relação a seu antecessor, a ampliação de uma base universal de proteção de direitos entre as classes populares reduziu a importância das práticas tradicionais de controle social das elites locais sobre os pobres. Paralelamente, medidas que seriam consideradas, ao mesmo tempo, insuficientes por boa parte da esquerda e imprudentes por setores conservadores, como a expansão do crédito público e dos investimentos estatais, resultaram na manutenção de taxas de inflação baixas, com a estabilidade dos preços dos alimentos fundamentais à dieta da maioria da população, associada a reajustes consistentes do salário mínimo. A austeridade na tomada de medidas econômicas foi acompanhada de investimentos de diversos volumes, públicos e privados, que impactariam na geração de empregos. A forte demanda por bens de consumo populares, alimentos baratos e materiais de construção civil acessíveis para a autoconstrução de casas, entre outros aspectos, impulsionou uma dinâmica econômica subterrânea.

Mecanismos públicos asseguraram uma base de renda mais ou menos estável e certo nível de estabilidade pessoal, especialmente a segurança alimentar e a proteção de crianças e idosos. O governo petista insistiu que suas medidas visavam respeitar uma vaga noção de dignidade nas relações com os pobres, evocando uma mudança em uma trajetória histórica em que tais trabalhadores foram habituados a uma rotina de desrespeito, opressão e discriminação. Lula procurou manter suas relações com uma classe trabalhadora formal e sindicalizada em número marcadamente decrescente, como resultado da reestruturação produtiva e da desindustrialização. Mas, também começou a obter o reconhecimento de um eleitorado ativo formado por trabalhadores que viam a possibilidade de garantir mais anos de escolaridade aos filhos e adquirir bens de consumo apreciados, como geladeiras e máquinas de lavar.

Entre as características do lulismo estariam seu “reformismo fraco” e um exercício político que o aproximaria das relações de poder conservadoras (Singer, 2012). Seu sucesso ocorreu fundamentalmente no âmbito dos setores sociais mais submetidos à precarização do trabalho, disputando seus votos com a direita. Ao realizar tal movimento, tanto Lula quanto o PT, mas principalmente o eleitorado lulista, promoveram um realinhamento de forças políticas no Brasil que se mostrou consistente ao longo das primeiras décadas do século XXI. Obviamente, seus limites se delineiam na difícil possibilidade de realizar mudanças estruturais. Essa trajetória sinuosa que marcou um

dos principais partidos políticos da história brasileira, bem como um expressivo contingente de trabalhadores, não pode ser avaliada a partir de um repertório analítico que não leve em conta as novas práticas políticas e as mudanças ocorridas no mercado de trabalho nas últimas décadas. É preciso considerar também a importância das políticas de proteção social em um país com tantas desigualdades e contradições como o Brasil.

O processo político brasileiro após a ditadura militar, a transição negociada e as perspectivas que nortearam a construção de uma democracia limitada devem ser levadas em conta nas avaliações que visem compreender a trajetória e o comportamento das organizações partidárias de esquerda no Brasil. O PT não escapou dessas contingências, por mais singular que tenha sido sua história desde os anos 1980. O partido tornou-se cada vez mais dependente da figura pessoal de Lula, reconfigurando a forma como era visto e percebido pelas classes populares. Mas, apesar das intenções explícitas ou implícitas em discursos e bandeiras de ordem, não estava ao alcance de uma única força política organizar em torno de si todo um sistema que pudesse reativar práticas anteriores a 1964 ou transformar a sociedade brasileira em uma imagem fixa e definitiva em torno da expressão “populismo”. Essa expressão ou noção, por si só, é insuficiente para dar conta das questões da atualidade brasileira e até mesmo para caracterizar plenamente um partido como o PT sem considerar a trajetória de seu uso político. Em diferentes momentos históricos, o elitismo de diversos grupos políticos, não apenas conservadores, lançou mão da acusação de populismo para desqualificar o voto popular. Contudo, atitudes e lógicas de ação que eventualmente possam ser consideradas populistas não devem obscurecer a percepção de um processo mais amplo de lutas sociais e de construção de uma sociedade de direitos pautada pela democratização gradual das diferentes instâncias de poder por meio da participação popular. O voto popular também garantiria ao PT duas outras posses presidenciais, com Dilma Rousseff. Mas, os limites dos arranjos políticos então construídos ficaram evidentes quando, mesmo em meio a tantas atitudes conciliatórias, a sociedade brasileira foi profundamente afetada pelo avanço da extrema direita a partir de 2014, sob a ameaça concreta de destruição das políticas públicas e sociais construída nos governos do PT.

BIBLIOGRAFIA

- Abranches, Sergio (1988). Presidencialismo de coalizão: O dilema institucional brasileiro. *Dados*, 31(1), 5-38. <http://dados.iesp.uerj.br/edicoes/?vn=31-1>
- Antunes, Ricardo (2007, 3 de janeiro). Fenomenologia do lulismo. *Folha de S. Paulo*, A1.
- Arend, Silvia (2016). Ditadura, imprensa e o “problema do menor”: assistência à infância no Brasil (1980-1985). *Delaware Review of Latin American Studies* 17(2), 1-9. <http://udspace.udel.edu/handle/19716/19845>
- Braga, Ruy e Santos, Fábio L. B. (2020). The political economy of Lulism and its aftermath. *Latin American Perspectives*, 47(1), 169-186. <https://doi.org/10.1177/0094582X19887806>
- Caldeira, Teresa (1984). A política dos outros: o cotidiano dos moradores da periferia e o que pensam do poder e dos poderosos. São Paulo: Brasiliense.
- Ferreira, Jorge (2001). O nome e a coisa: o populismo na política brasileira. In *O populismo e sua história: debate e crítica*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
- Folha On Line (2007, 1 de janeiro). Veja a íntegra do discurso de posse do presidente Lula. *Folha de São Paulo*, <https://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u88185.shtml>
- Frontana, Isabel C. R. (1999). *Crianças e adolescentes nas ruas de São Paulo*. São Paulo: Loyola.
- Ianni, Octavio (1968). *O colapso do populismo no Brasil*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
- Inglehart, Ronald (1990). *Culture Shift in Advanced Industrial Society*. Princeton: Princeton University Press.
- Negro, Antonio (2004). *Linhas de montagem: o industrialismo nacional-desenvolvimentista e a sindicalização dos trabalhadores (1945-1978)*. São Paulo: Boitempo.
- Palmeira, Moacir (1992). Voto: racionalidade ou significado? *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, 20(7), 26-30. http://www.anpocs.com/images/stories/RBCS/20/rbcs20_04.pdf
- Pires, Flávia, e George A. Jardim (2014). Geração bolsa família: escolarização, trabalho infantil e consumo na casa sertaneja (Catingueira/PB). *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, 29(85), 99-112. <https://doi.org/10.1590/S0102-69092014000200007>
- Pitkin, Hanna (2004). Representation and democracy: uneasy alliance. *Scandinavian Political Studies*, 27(3), 335-342. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9477.2004.00109.x>

- Rego, Walquíria, e Alessandro Pinzani (2013). *Vozes do Bolsa Família: autonomia, dinheiro e cidadania*. São Paulo: Unesp.
- Sader, Eder (1988). *Quando novos personagens entraram em cena: experiências, falas e lutas dos trabalhadores da Grande São Paulo (1970-80)*. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
- Secco, Lincoln (2011). *História do PT, 1978-2010*. Cotia: Ateliê Editorial.
- Singer, André (2012). *Os sentidos do lulismo: reforma gradual e pacto conservador*. São Paulo: Cia das Letras.
- Villarreal, René (1983). La contrarrevolución monetarista en el centro y la periferia. *El Trimestre Económico*, 197(50), 429-471. <https://www.jstor.org/stable/23395646>
- Viscardi, Claudia, e Fernando Perlatto (2018). Cidadania no tempo presente. In *O Brasil republicano, 5. O tempo da Nova República (1985-2016)*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
- Weffort, Francisco (1980). *O populismo na política brasileira*. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
- Zaluar, Alba (2012). Juventude Violenta: Processos, Retrocessos e Novos Percursos. *Dados*, 55(2), 327-365. <https://doi.org/10.1590/S0011-52582012000200003>

BOLSONARISMO, O FENÔMENO POPULISTA CONSERVADOR BRASILEIRO

REACIONARISMO E NEOLIBERALISMO

Victor de O. P. Coelho

NOS ÚLTIMOS ANOS, assistimos a um “retorno” do populismo, agora em escala global. O termo “populismo” conheceu uma proliferação de seu uso tanto na arena política como no campo dos estudos acadêmicos. Para um pesquisador da América Latina, antes de tudo chama a atenção o contraste entre o fenômeno atual e aquela “época clássica” do populismo da primeira metade do século XX, em que os países latino-americanos conheceram a incorporação tortuosa das massas trabalhadoras na política em meio ao processo de modernização industrial. Assim, temos antes de tudo um contraste, já que, no contexto atual, o chamado fenômeno populista coincide não apenas com uma grande crise econômica, que explodiu em 2008, mas vem para consolidar uma avaliação negativa sobre o período neoliberal, marcado pela flexibilização do mercado de trabalho e das leis trabalhistas, assim como o processo desigual de inserção de países e trabalhadores no âmbito da globalização.

Nesse momento atual, embora o epíteto de populista também seja dirigido a partidos ou agrupamentos de esquerda, destaca-se o populismo de direita, ou de extrema-direita, que nos últimos anos se fortaleceu em um contexto economicamente regressivo para, a partir dele, direcionar demandas populares para pautas igualmente regressivas,

ao menos no campo da política — o tema mais marcante, na Europa, é o da imigração — e dos costumes — a questão da “guerra cultural”.

Voltando ao cenário latino-americano, nesse ínterim — entre a emergência do modelo neoliberal, impulsionado desde a década de 1980, e a onda populista dos últimos anos —, tivemos uma tendência geral divergente. Aqui, as duas primeiras décadas do século XXI foram marcadas pela emergência de governos de esquerda, tais como os de Lula e de Dilma Rousseff (Brasil), Hugo Chávez e Nicolás Maduro (Venezuela), Néstor e Cristina Kirchner (Argentina), Evo Morales (Bolívia), Rafael Correa (Equador) e José Mujica (Uruguai). Foi esse contexto latino-americano que potencializaria a recepção de *La Razón Populista*, de Ernesto Laclau, publicado em 2005, bem como inspiraria algumas das jovens lideranças do Podemos, partido espanhol oriundo da onda dos indignados que explodiu em 2011.

No âmbito da opinião pública e embates políticos, contudo, o rótulo “populista” tem algo de específico. “Todo desvio do projeto neoliberal é identificado como ‘populismo’ e nada diferenciaria seu uso de um insulto destinado a desacreditar as perspectivas políticas que se propõem a superação das lógicas neoliberais de ordenamento social” (Perlatto, 2016, p. 97). Populismo, enfim, “é o rótulo que as elites políticas atribuem às políticas apoiadas por cidadãos comuns de que elas [isto é, as elites] não gostam”, como disse ninguém menos que Francis Fukuyama, famoso pelo livro sobre o “fim da história” (Tormey, 2019, p. 41). Esse uso do conceito de populismo¹ tem um peso especial na América Latina justamente devido à “tradição populista” do continente. No contexto deste novo milênio, e com todas as suas particularidades, em geral são governos que se caracterizavam ou se caracterizam por fugirem do script neoliberal do “controle dos gastos públicos”, do rigorismo fiscal e da escolha da chamada “desoneração do capital” em desfavor de direitos trabalhistas e/ou políticas sociais. Ou seja, o rótulo pejorativo “populista” se dirigiu mais a esses governos de esquerda que a governos anteriores, como os de Alberto Fujimori (Peru) e Fernando Collor de Mello (Brasil), cujo apelo político populista (especialmente a junção de nacionalismo com a propalada luta pela moralidade pública) servia à agenda neoliberal.

Nesse sentido, com a ascensão política recente de Jair Bolsonaro, eleito presidente do Brasil em 2018, e do que vem sendo chamado de *bolsonarismo*, há uma certa “quebra de tradição”, já que este último vem sendo equiparado à onda populista global de direita ou extrema-direita. Ainda que alguns comentaristas tenham se esforçado para es-

1 Cujos estudos “responderiam a uma colonização ideológica (neoliberal) das ciências sociais” (Perlatto, 2016, p. 97).

tabelecer uma equivalência entre bolsonarismo e lulismo (“populismo de esquerda contra populismo de direita”), especialmente no intuito de alavancar uma “terceira via” (sem Bolsonaro, muito menos Lula, mas com a mesma agenda econômica neoliberal), tornou-se cada vez mais forçada, e mesmo patética, as tentativas de equivaler Bolsonaro/bolsonarismo a Lula, ao “lulismo” e ao Partido dos Trabalhadores. Isto porque os traços autoritários de Bolsonaro (que não deveriam causar nenhuma surpresa), seu permanente ataque às instituições (tanto verbal como material e administrativo, ao esvaziar ou aparelhar alguns órgãos federais²), à imprensa e a jornalistas, ao Supremo Tribunal Federal, ao processo eleitoral (colocando dúvidas sobre a eficácia das urnas eletrônicas e sobre a idoneidade do Tribunal Superior Eleitoral), enfim, acabaram por fazer confirmar um certo consenso em análises acadêmicas sobre o fenômeno populista global dos últimos anos: é à direita de seu amplo espectro, e não à esquerda, que o fenômeno parece representar um perigo ao sistema democrático liberal.

Como muitos autores vêm destacando, o populismo representa um perigo quando radicaliza a polaridade “nós *x* eles” para além da dimensão econômica — isto é, da desigualdade social entre “povo” e “elite” —, estabelecendo tal polaridade sobre uma concepção homogênea do povo. Isso fica evidente não só quando o populismo, à direita, alimenta-se de apelos xenófobos, mas quando pretende estabelecer uma comunicação direta entre líder (que representaria os verdadeiros anseios “do povo”) e “o povo”, para isso atacando o sistema representativo e institucional — a exemplo de Bolsonaro. O sistema representativo e institucional, por sua vez, não pode ser entendido sem sua histórica ligação com a emergência de uma dinâmica pluralista — algo que se choca justamente com concepções unitárias do povo. Cabe apontar, inclusive, que a contradição entre pluralismo e tradicionalismo se exacerbou desde meados do século XX, contexto que foi marcado pela irrupção de um conjunto de movimentos de direitos civis que a atual extrema-direita resume, de forma reacionária, sob o rótulo de “marxismo cultural”.

Não é à toa que, tanto em termos genealógicos como ideológicos, parte da literatura sobre o fenômeno populista atual, sobretudo europeu, se dedica a análises comparativas com o fascismo. Mas não será esse nosso foco aqui. O que procuraremos analisar, a respeito do bolsonarismo e do sucesso eleitoral de Bolsonaro, tem a ver com uma

2 Caso das constantes ações de Bolsonaro para esvaziar o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (CNPCT) e a nomeação de um bolsonarista, negacionista das pautas dos direitos civis e memória da população afro-brasileira, para a direção da Fundação Palmares.

faceta do fenômeno populista atual inclusive no que diz respeito aos movimentos mais à direita e conservadores: é que eles partem de um apelo democrático em meio à crise do sistema representativo.

Tal crise, como já mencionamos, explodiu com as receitas de austeridade propostas como “remédio” para a explosão da crise em 2008, embora, na prática, favorecesse os causadores da crise e penalizasse ainda mais as vítimas, ou seja, a população em geral. Num contexto como esse, o apelo ao “povo” contra a “elite”, fundamento comum de qualquer categorização do populismo, nos permite ver que o populismo pode ser visto como uma força democratizante na medida em que defende a soberania popular, o empoderamento de grupos que não se sentem representados no sistema político (Mudde e Rovira Kaltwasser, 2017, p. 18). É sobre essa tensão entre política institucionalizada e identidade, ou seja, entre sistema representativo e soberania popular que o populismo pode ser entendido não como uma força externa ao sistema representativo democrático e liberal, mas como uma “forma limite do projeto democrático” (Rosanvallon, 2020) ou uma “sombra permanente sobre a democracia representativa moderna” (Müller, 2017). Assim, através da categorização atual sobre o populismo, temos uma via para compreender como uma figura como Bolsonaro conseguiu se tornar presidente de uma das maiores nações do planeta.

Bolsonaro é uma personagem obscura da vida política brasileira. Aposentado do Exército em 1988, depois de ter se envolvido num plano de atentado a bomba na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), em meio a reivindicações salariais, Bolsonaro iniciou uma longa e inútil carreira política, primeiro como vereador no Rio de Janeiro, depois como deputado federal. Sempre defendeu pautas conservadoras e reacionárias, especialmente ligadas à segurança pública, mas tendo sido nada eficiente na aprovação de projetos de lei. Em geral, não defendia projetos de cunho neoliberal, fiel ao desenvolvimentismo autoritário da época da ditadura militar (1964-1985), do qual sempre foi um apologista e continuou sendo, mesmo já como presidente eleito, em 2018. Além disso, já era de conhecimento a ligação de Bolsonaro e seus filhos com integrantes de milícias³ do Rio de Janeiro. Para piorar, Bolsonaro levava consigo, como nome para

3 Organizações criminosas formadas especialmente por ex-policiais, atuando em comunidades urbanas de baixa renda, como conjuntos habitacionais e favelas. Reivindicam atuar para combater o crime do narcotráfico, mas passam a viver da extorsão da população e da exploração clandestina de gás, televisão a cabo, máquinas caça-níqueis, agiotagem, ágio sobre venda de imóveis, etc. Sobre a ligação de Bolsonaro com as milícias, cf. Manso, 2020.

ocupar o Ministério da Economia, um ferrenho defensor de políticas neoliberais, Paulo Guedes, autêntico “Chicago boy”.⁴

O fio condutor de nossas reflexões, assim, baseia-se em duas questões-chave: como uma figura do mais baixo nível (no sentido prático e simbólico) da política brasileira pôde ser eleito presidente do país? De que forma o conceito de populismo pode nos ajudar a compreender o fenômeno? Para tentarmos responder tais questões, dividiremos o trabalho em duas partes.

Primeiramente, destacaremos a crise de legitimidade do sistema político em nível global, a que se liga a ascensão do populismo de extrema-direita. Buscamos apontar a relação com as políticas neoliberais e o substrato de demandas sociais, destacando a irrupção das manifestações populares no Brasil, a partir de 2013. Segundo, buscaremos apontar como, em meio a um cenário complexo, o discurso bolsonarista conseguiu estabelecer uma hegemonia em que tal complexidade é traduzida como uma bipolaridade “nós *x* eles”. Para isso, será importante a teoria do discurso de Ernesto Laclau, que influenciou lideranças do Podemos, na Espanha, na mesma conjuntura em que, no Brasil, o governo do PT passava a enfrentar uma crise e em que o populismo virava a chave para a direita. Buscaremos jogar luz em alguns importantes elementos, dando destaque para o papel da chamada Operação Lava Jato.

Ao final, apontaremos como a agenda neoliberal foi atualizada internamente à pauta populista do bolsonarismo e sugerir que, em seu grau máximo de polarização, se aproximando de um fenômeno neofascista, o bolsonarismo serviu para que pautas por demandas sociais fossem atropeladas pela agenda neoliberal. Essa parte final se baseará em elementos destacados sobretudo na primeira parte, quando adiantamos os elementos da subjetividade neoliberal que emergem simultaneamente ao processo de desregulamentação do mercado de trabalho.

CRISE DE REPRESENTAÇÃO: A ONDA GLOBAL QUE CHEGOU AO BRASIL EM 2013

Uma forma de compreender o fenômeno populista atual é através de uma contradição central entre, de um lado, demandas populares, e de outro um sistema político institucionalizado pouco eficiente ou disposto a atender tais demandas, gerando frustração (cf. Mudde e Rovira Kaltwasser, 2017). Se pensarmos especificamente na ascensão

4 Anteriormente desconhecido dos debates públicos brasileiros Guedes é admirador das reformas neoliberais realizadas no Chile sob comando do ditador Augusto Pinochet e sob a bênção de Milton Friedman, período dentro do qual Guedes esteve no país (Montes, 2018, p. 1).

do populismo de extrema-direita na Europa e EUA, não é à toa que, como apontam várias análises, há uma correlação entre fenômenos tais como o da retração da classe média⁵ (decorrente dos fenômenos da era pós-industrial, neoliberal e de expansão da globalização) e o da ideologia anti-imigração (resposta aos fluxos migratórios que se ligam a uma disputa por postos de trabalho precarizados). No campo político, o desgaste e a revolta dirigida às instituições e aos partidos políticos, representantes desse “sistema”, explodiu após a crise de 2008. Como sabemos, um dos efeitos dramáticos e diretos foi a crise de habitação devido ao estouro da bolha das hipotecas, tendo sido a Espanha um país em que esse drama teve presença marcante.

Entre 2013 e 2014, a demanda por uma outra política também explodiu nas ruas do Brasil. Aqui, também não há como pensar as ruas tomadas de jovens em 2013 desconsiderando uma dupla tensão: (i) a perda de referenciais políticos tradicionais, decorrente da própria transformação no mundo do trabalho, e (ii) a crise de representatividade dos partidos tradicionais devido a sua própria conformação a um modelo único de gestão pública — perceptivelmente pouco eficiente na diminuição de problemas estruturais de uma sociedade tão desigual como a brasileira —, crise essa reforçada por escândalos de corrupção.

Embora alguns analistas brasileiros tenham tendido a ver uma correlação direta entre a irrupção popular de 2013 e a ascensão hegemônica da extrema-direita, tais demandas sociais e formas organizacionais remetiam, na forma e nos princípios, à Primavera Árabe, ao 15M e ao Occupy Wall Street, e continuaram a se manifestar nos anos seguintes. Em 2014, manifestantes escolheram o dia 15 de maio e a sigla “15M” para protestarem, em várias cidades do Brasil, contra a realização da Copa do Mundo, contrastando os gastos financeiros com o evento esportivo com demandas sociais — como salários de professores e remoções de famílias devido às obras viárias (Época, 2014). Cabe observar que o lema “queremos hospitais públicos padrão FIFA” fora lançado em junho de 2013. Em 2015, tivemos os protestos pró-impeachment que, embora já tivessem como alvo o governo do PT e apresentassem uma forte carga anti “comunista”, apresentavam repertório semelhante e demandas sociais difusas, incluindo como saúde e educação. Em 2016, destacaram-se as ocupações estudantis de escolas e universidades públicas em vários estados do país. Em 28 de abril de 2017, ainda tivemos uma greve geral com ampla adesão inclusive de setores não sindicais e, por fim, em 2018, uma grande greve

5 Cf., for example, Guilluy, 2020.

de caminheiros, naquela conjuntura de ano de eleições presidenciais e de grande polarização política.

Ressaltando aqui o caráter de demandas sociais e apelos por justiça social, é pertinente lembrar da grande repercussão da violenta e absurda desocupação da comunidade de Pinheirinho em 2012, em São Paulo — ocupação irregular de terreno onde, desde 2004, habitavam em entre 6 e 9 mil moradores de baixa renda, terreno esse que pertencia, supostamente, a um empresário que atuava no ramo da especulação financeira. No mesmo contexto, cabe lembrar que, mais à esquerda da sociedade civil, também havia duras críticas aos efeitos sociais e ambientais das obras da usina de Belo Monte, em Altamira, estado do Pará (região da Amazônia), obra projetada durante a ditadura e retomada durante o governo de Dilma Rousseff.

Como analisou o autor Rudá Ricci (2018), os movimentos surgidos em junho de 2013 apresentavam algumas características importantes que devem ser ressaltadas, tais como: provisoriidade e descontinuidade; o comunitarismo e auto-organização; a horizontalidade, como auto-organização e rejeição das instâncias formais e institucionalizadas do mundo político e social, tal como ocorreu na Espanha; o próprio anti-institucionalismo e a cultura antissistêmica, fundadas “na desconfiança em relação às grandes estruturas organizativas e regras universais de comportamento que supostamente inibiriam a liberdade individual”. O anti-institucionalismo, relembra o autor, “já se expressava nos anos 1980 por meio dos Novos Movimentos Sociais (NMS) que emergem na Europa Latina e no Brasil, campo de estudos da sociologia europeia e brasileira nos anos 1980 e parte dos 1990”, e cuja ênfase nos “de baixo” será “recuperada nas mobilizações de massa da Europa deste início de século XXI (em especial, na Espanha após as grandes mobilizações de 2011)” (Ricci, 2018, p. 96).

Além dessas quatro características, que representam uma relação entre forma e conteúdo, o autor destaca uma quinta característica, de caráter talvez mais polêmico, o individualismo:

A marca do hiperindividualismo que passa a determinar escolhas fragmenta a sociedade em necessidades e interesses múltiplos, em detrimento de valores universais e até mesmo da noção de direitos. É a demanda instantânea que passa a ser valorizada e a motivar ações grupais ou associativismos em pequena escala. Tal situação engendra, em muitos casos, o advento do “pensamento mágico”, a exigência pessoal que sua vontade deve ser respeitada ou cumprida instantaneamente como determinação legítima. Todas as organizações ou os instrumentos de representação social de amplo espectro passam a ser objeto de profunda desconfiança social. Este é o momento da organização social em forma de mosaico, estilizada em inúmeros interesses semiautônomos que se apresentam com linguagem e

valores específicos em que os aspectos antropológicos (culturais e fundado em histórias grupais) valorizam as pequenas narrativas comunitárias e comuns. (Ricci, 2018, pp. 95-96)

Nossa ênfase é mostrar como essa dimensão do individualismo, tal como descrita pelo autor, traz uma ambiguidade política, se analisarmos alguns aspectos de caráter mais sociológico referentes ao mundo do trabalho no Brasil, em anos recentes, no que diz respeito especialmente à juventude. Tal apontamento pode nos servir de reflexão sobre o porquê da irrupção de pautas ligadas às demandas por mais participação e mais justiça social acabou sendo seguida de uma ascensão política da extrema-direita.

Durante a maior parte dos governos Lula e Dilma Rousseff, a contradição entre as transformações no mundo do trabalho — tendência de precarização — foi amenizada pelo acesso à “cidadania do consumo”, acompanhada de geração de empregos, inclusive de empregos formais enquanto a economia apresentava seta ascendente. Ou seja, no caso do Brasil, a massa de trabalhadores, especialmente os informais, que em 2018 acabariam dirigindo seu voto a Bolsonaro, “não sentia falta do desmonte de um Estado de bem-estar social e não necessariamente perdeu seu emprego por conta da crise, pois provavelmente nunca o teve”, como destacou Rosana Pinheiro-Machado (2021). Pelo contrário, durante os governos do PT, essas pessoas tiveram uma situação de melhoria de vida num horizonte de crescimento econômico. Mas, a posteriori, hoje é possível analisar com mais clareza o *gap* entre, de um lado, essa juventude de baixa renda, com acesso à universidade e ao consumo, e de outro, a despolitização em torno do Partido dos Trabalhadores.

Em primeiro lugar, tal contradição foi alimentada por essa nova conjuntura do mundo do trabalho, já que a flexibilização do trabalho e o neoliberalismo implodiam as pontes constituídas pela ideia de sociedade salarial e de direitos e, com eles, a noção de educação pública e universal (Costa, 2019, pp. 291-292). É significativa, para a análise da conjuntura política, pesquisa empírica realizada por Henrique Bosso da Costa (2019) com um grupo de estudantes-trabalhadores de um setor dinâmico do capitalismo pós-fordista, o de serviços em empresas de tecnologia, *call centers*, comércio, *marketing* eletrônico e segurança da informação. A última fase das entrevistas coincidiu com o período da campanha presidencial de 2014. No geral, os jovens entrevistados demonstravam avaliações político-ideológicas superficiais do contexto político em que estavam; viam seu bem-estar dependente sobretudo de suas iniciativas individuais; o próprio diploma era visto de maneira instrumental, como exigência das empresas e algo burocrático.

É preciso, portanto, destacar o aspecto das aspirações individuais de grupos tais como o dos trabalhadores plataformizados, sua ênfase em seus projetos individuais de vida, sua meta de “trabalhar duro e sonhar mudar de vida e se dar bem”, algo que se liga à ênfase nas posses e na propriedade como coroamento do esforço individual — sendo importante mencionar o papel que vem tendo as igrejas neopentecostais na configuração desse projeto. Assim, em vez de, como costume, analisar o trabalho informal e o desemprego apenas pela categoria negativa como a da falta ou do ressentimento, a autora destaca que o que Bolsonaro faz — tal como o presidente filipino Duterte —,⁶ “é manipular essa lógica e falar pelo aspecto positivo: você é o cara, o problema é todo o resto, deixa de mimimi” (Pinheiro-Machado, 2021).

Em segundo lugar, quando a crise política e econômica se exacerbou em 2015 — com os primeiros dados econômicos mais claros de recuo do Produto Interno Bruto e das atividades econômicas na indústria e no setor de serviços —, a referência de governo contra quem protestar era o governo do PT. Daí que as novas denúncias de corrupção, que (à parte considerações de ordem política e natureza jurídica) já pesavam sobre o partido desde o governo Lula e o “escândalo do mensalão”, em 2005,⁷ ganharam definitivamente o protagonismo político devido às ações judiciais e midiáticas da Operação Lava Jato — um conjunto de investigações realizadas pela Polícia Federal a partir de 2014, operação comandada pelo Ministério Público Federal (MPF) com sede na cidade de Curitiba, visando a apurar um esquema de lavagem de dinheiro e de propinas. Teve como alvo principal lideranças do PT e grandes empresas, tais como a estatal Petrobras e empresa de construção Odebrecht.

Tanto a insatisfação com o sistema político como as demandas por participação, por sua vez, foram reforçadas por um elemento de novo tipo na política de massa: a internet. O individualismo, a lógica da formação afetiva de grupos, a demanda por participação política sem a intermediação das “castas” tradicionais da “velha política” e a internet, juntos, foram a base do Movimento 5 Estrelas italiano e da ascensão do populismo de direita no mundo, incluindo o Brasil (cf. Empoli, 2020).

6 Citamos a pesquisa feita por Rosana Pinheiro-Machado junto com a antropóloga Cristina Marins, uma análise comparativa com outros países do “Sul Global” que conheceram um período de crescimento econômico seguido de ascensão da extrema-direita — quais sejam, Índia e Filipinas.

7 Derivado da denúncia, feita pelo deputado federal Roberto Jefferson, em 2005, de um esquema de compra de votos no Congresso. O próprio termo “mensalão” surgiu de uma entrevista dada pelo deputado, afirmando que haveria um pagamento mensal a deputados para votarem a favor do governo.

Já como presidente do Brasil, Jair Bolsonaro continuou com sua ênfase em atacar a imprensa — com exceção de duas redes televisivas, agraciadas com verbas de publicidade e que passaram a pautar positivamente as notícias — e a transmitir *lives* diárias para “falar diretamente com o povo”. Em especial, continuou alimentando o espectro do “comunismo petista”.

O LUGAR E O PAPEL DO ANTIPETISMO NA ASCENSÃO DO BOLSONARISMO

O antipetismo⁸ foi um elemento importantíssimo que galvanizou os votos em Bolsonaro. Ganhou força durante os anos em que o PT esteve no governo federal (2003-2016), alimentado pela oposição liberal, seja nos partidos políticos, em especial o PSDB,⁹ seja na mídia em geral. Teve como um de seus fundamentos a crítica ao “populismo” das políticas sociais e macroeconômicas do PT. Foram comuns os ataques à retórica populista, ao caráter carismático e “manipulador” de sua principal liderança, Lula. O espectro da “ditadura chavista” tornou-se chave simbólica que se estendia para todo e qualquer governo de esquerda, servindo como arma política, trazendo o espectro do populismo para assombrar as almas de espírito livre e empreendedor.

Embora não seja o objetivo aqui uma análise sobre as políticas econômicas dos governos PT, cabe mencionar que há controvérsias sobre o efetivo caráter “nacional-desenvolvimentista” dos governos do PT — uma ideia que, pró ou contra as políticas econômicas petistas, alimentava o imaginário político, derivado do período 1945-1964 (ou seja, da “República populista”), que envolvia a polaridade entre um projeto liberal (mais alinhado a uma posição subalterna do Brasil na “divisão internacional do trabalho”) e um nacional-desenvolvimentismo. Os governos do PT, efetivamente, implementaram formas de flexibilização trabalhista, abertura à gestão privada de serviços públicos (como na área da saúde), além do papel central do agronegócio como adaptação do país ao fluxo das commodities, com tendência de desindustrialização (cf. Gonçalves, 2013).¹⁰ Contudo, no âmbito da esfera pública, em especial após a crise mundial de 2008, a grande mídia

8 Oposição política ao PT.

9 Partido da Social Democracia Brasileira, fundado em 1988 (ano da promulgação da atual Constituição Federativa do Brasil) e que, apesar do nome, implementou políticas de cunho neoliberal nos anos de presidência de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).

10 Para estudo mais recente, que faz um balanço das contradições econômicas dos governos petistas, e de Dilma em particular, a partir do conceito de semiperiferia, cf. Barbosa, 2022.

alimentou as críticas aos “gastos públicos” e a defesa de políticas de austeridade. O resultado da deposição da presidente Dilma Rousseff, em 2016, por sua vez, foi um retorno radical à agenda neoliberal — disposta na plataforma “Ponte para o Futuro”, defendido pelo partido do vice-presidente Michel Temer, que assumiria então o governo. A agenda neoliberal, ou ultraliberal, se afirmaria simultaneamente à emergência de uma onda populista de extrema-direita: o bolsonarismo, forma ideológica forjada em torno da figura de Jair Messias Bolsonaro.

Sobre o perfil dos eleitores de Bolsonaro, Jairo Nicolau (2020) mostrou que, majoritariamente, pertenciam a camadas de média e alta escolaridade, tendo o autor deixado de fora o dado sobre a renda, pois é um dado pouco confiável, já que muitas pessoas não se sentem à vontade diante da pergunta sobre a renda pessoal ou familiar. De qualquer forma, a porcentagem maior de votos que o candidato do PT, Fernando Haddad, teve na região Nordeste e no estrato social de menor escolaridade nos permite inferir que o padrão de voto em Bolsonaro não foi exatamente de uma classe média decadente. O ponto aqui é que, de certa forma, essa classe média *via-se* como que em um processo de decadência.

Por um lado, a região Nordeste, marcada historicamente pela pobreza, teve significativas melhoras durante as gestões petistas (devido a programas sociais de transferência de renda, obras de infraestrutura e certamente onde as políticas de crédito tiveram maior impacto relativo); por outro lado, justamente o destaque dos índices sociais dos governos PT, seja relacionados ao Nordeste, seja às classes populares do país, estimulou a exploração política de velhos preconceitos sociais e contra os nordestinos, estimulando inclusive atitudes e manifestações racistas, misóginas e homofóbicas — ou seja, contra a “ditadura do politicamente correto”. Tratou-se menos de uma perda efetiva do padrão de vida da classe média tradicional e dos ricos que uma “perda relativa” de status diante do aumento da capacidade de consumo popular — ficando marcante a imagem da aversão aos “pobres andando de avião”, ou entrando massivamente nas universidades públicas.

Por outro lado, o antipetismo, segundo as pesquisas de opinião analisadas por Nicolau, foi manifestado por cerca de 30% dos eleitores, enquanto a porcentagem de pessoas alheias à disputa “petismo x antipetismo” ficava próximo aos 50%. O ponto aqui é, justamente, não analisar a oposição radical ao PT apenas em termos quantitativos: para medir o potencial de uma liderança política, não importa tanto a porcentagem de votos, mas “a capacidade de colocar temas na agenda pública e a capacidade de moldar as políticas públicas”, distinção particularmente relevante “quando pensamos no sucesso e fracasso dos

atores populistas. Afinal, em muitos lugares do mundo, os populistas atraem um número bastante limitado de votos, mas, por outro lado, desempenham um papel notável em termos de definição de agenda e impacto político”, como bem observaram Mudde e Kaltwasser.¹¹ O mesmo raciocínio vale para o papel estratégico das igrejas neopentecostais, correspondentes ao grupo social onde Bolsonaro teve a maior porcentagem de votos e que serviram como substrato ideológico e agência política para o bolsonarismo.¹² Embora representem pouco menos de 30% do eleitorado, tiveram papel estratégico na mobilização política (cf. Alves, 2018).

Neste ponto, nosso objetivo é destacar a cooptação que a extrema-direita conseguiu promover das *demandas pelo novo na política*, que mencionamos no item anterior. Cabe ressaltar que tal demanda pelo novo, além de implicar a eleição massiva de parlamentares do Partido Social Liberal (PSL),¹³ colocou em cena também partidos e agrupamentos que haviam surgido na onda pós-2013 de forma independente de Bolsonaro. São organizações que se colocam como “liberais na economia e conservadores nos costumes”, tais como os o Partido Novo¹⁴ e o Movimento Brasil Livre (MBL).¹⁵ Este último, embora tivesse como carro-chefe o liberalismo, aderiu à onda ultraconservadora, chegando mesmo a promover uma ação contra uma performance artística¹⁶ que,

11 “The ability to put topics on the public agenda (agenda-setting) and the capacity to shape public policies (policy impact)”, distinction particularly relevant “when we think about the success and failure of populist actors. After all, in many places in the world populists attract a fairly limited number of votes, but, nevertheless, they play a notable role in terms of agenda-setting and policy impact” (Mudde e Rovira Kaltwasser, 2017, p. 98)

12 Sobre a “teologia política” bolsonarista, cf. Mata, 2019.

13 Partido fundado em 1994 e até então insignificante, mas pelo qual Bolsonaro se candidatou.

14 Fundando, na verdade, em 2011, mas registrado oficialmente em 2015. A candidatura à presidência de João Amoêdo naufragou diante da disputa Bolsonaro — PT, mas conseguiu eleger uma pequena, mas significativa bancada para o Congresso e o governador de um dos principais colégios eleitorais do país, o estado de Minas Gerais.

15 A sigla MBL, é uma aliteração da sigla do Movimento Passe Livre (MPL), que desencadeou as manifestações de junho de 2013 com a pauta do transporte público. O MBL foi fundado em 2014 e, embora se dissesse a partidário, suas principais e jovens lideranças acabaram se candidatando e se elegendo por partidos tais como o Novo e o Democratas (tradicional partido conservador de centro-direita).

16 Em setembro de 2017, houve uma performance durante um evento no Museu de Arte Moderna, de São Paulo, em que um artista nu se inspirava na obra *Bichos*, da artista Lygia Clark, em que esculturas de alumínio podem ser manipuladas pelo público. Na ocasião, circulou um vídeo de uma criança tocando rapidamente a mão, a canela e os pés do artista, o que foi suficiente para o MBL acusar o MAM de promo-

inevitavelmente, estimula remissões à condenação nazista da “arte degenerada”. Enfim, no Brasil tivemos uma conjunção com o discurso de extrema-direita global que protestava contra a “ditadura do politicamente correto”, a “ideologia de gênero” etc., fazendo fundir a crítica à corrupção enquanto desvio de dinheiro público com a crítica à “corrupção dos valores”.

Uma pesquisa sobre antipetismo e conservadorismo no Facebook analisou discussões em grupos de direita — como do próprio MBL — e percebeu que as pautas morais, em torno de temas sexuais ou relacionados ao espectro da “bandidagem”, são dirigidos à figura dos “esquerdopatas”, que “são os inimigos” que mantêm “a população ignorante e refém de programas sociais que perpetuam políticos corruptos no poder”. O ex-presidente Lula seria “o chefe dessa quadrilha que tem o controle do Judiciário, pois nomeou os ministros do STF, e dos movimentos sociais e sindicatos” (Ribeiro, 2018, pp. 89-90). O antipetismo tornou-se um elemento político tão forte que é correto dizer que, entre 2014 e 2018, tivemos a terceira grande onda anticomunista do Brasil — tendo as outras duas, entre 1935-1937 e 1961-1964 (Motta, 2002), precedido ditaduras.¹⁷

Nesse ponto, é preciso destacar a forte presença militar na sustentação da campanha de Bolsonaro, que se tornaria clara com a efetiva incorporação de militares na administração do governo, a partir de 2019. Tal grupo foi chamado por alguns de “Partido Militar”, supondo uma organização coesa, embora informal, composta por militares da “geração de 1970”, ou seja, que iniciou carreira em plena ditadura. Tendo se tornado generais nos anos 2000, ganharam proeminência com a participação das Forças Armadas do Brasil na Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti e em operações de Garantia da Lei e da Ordem, em território brasileiro. Sua insatisfação com o governo do PT veio com a Comissão Nacional da Verdade (Souza, 2021) — que teve como objetivo central a investigação de crimes cometidos pela ditadura, embora não tenha implicado em punições a seus torturadores e assassinos. Em 2018, o Comandante Geral do Exército, general Eduardo Villas Bôas, deu uma entrevista em que atualizava o anticomunismo típico da Doutrina de Segurança Nacional (vigente

ver “erotização infantil”. No início do mês, o MBL também seria acusado de censura por ter feito campanha contra a exposição “Queermuseu”, que expunha obras que abordavam a diversidade de expressão de gênero. A exposição, feita nas dependências de um banco privado na cidade de Porto Alegre, acabou sendo cancelada devido às polêmicas.

17 Referimo-nos respectivamente ao Estado Novo, iniciado em 1937 sob o comando de Getúlio Vargas, e a ditadura militar iniciada em 1964.

durante a Guerra Fria) para criticar a “ideologia” que, na visão dele, dividia a sociedade e justificava a candidatura Bolsonaro — “ideologia de gênero”, “ideologia ambientalista” etc. (Victor, 2018).

Tal como no passado, acreditamos que o anticomunismo, agora como oposição ao PT e (novamente) à esquerda em geral, teve como função justamente o deslocamento das contradições sociais para uma contradição imaginária (mas mobilizadora) da “nação” contra o “comunismo”. No sentido que já fora categorizado por Ernesto Laclau (1978), tratar-se-ia aqui de um tipo de interpelação popular (isto é, dirigida ao “povo” em geral) na qualidade de um conjunto sintético-antagônico que organiza os elementos em torno de um eixo comum, ao mesmo tempo em que projeta para “fora” os elementos indesejáveis.

O autor, em reflexões posteriores sobre o populismo e também em pareceria com Chantal Mouffe (Laclau, 2018; Laclau e Mouffe, 2015), continuou a desenvolver a teorização sobre essas formas discursivas que têm, como fundamento e resultado, as demandas populares. Estas demandas difusas adquirem força quando estabelecem uma cadeia de equivalência — que não elimina necessariamente suas diferenças relativas — na mesma medida em que, através do discurso, estabelecem um antagonismo — nós (“o povo”) contra eles (“a elite”). Ou seja, o campo do político se forma e se intensifica quando uma cadeia de demandas se articula (ou é articulada pelo discurso) e se fortalece na mesma medida em que se estabelece, também pelo discurso, uma lógica de antagonismo. Para Laclau (2018), essa lógica político-discursiva seria a própria razão populista. Tomamos aqui esse modelo de análise de discurso menos como um modelo do político e mais como modelo heurístico,¹⁸ que nos permite analisar como pautas difusas por justiça social acabaram sendo galvanizadas pela extrema-direita. Cabe ressaltar que o elemento central da teoria do populismo de Laclau, a oposição “povo” x “elite”, é um elemento comum nas análises em geral sobre o populismo, como já ressaltamos, mas o autor teve o mérito de desenvolver a reflexão sobre a dinâmica de constituição discursiva dessa oposição.

Quando escreveu *A razão populista*, a América Latina conhecia uma conjuntura de otimismo da esquerda em torno de governos populares tais como o do PT, no Brasil. Foi nessa conjuntura que duas das principais lideranças do Podemos espanhol (Íñigo Errejón e Juan Carlos Monedero) se inspiraram politicamente política latino-ameri-

18 Não caberá, neste trabalho, expor ou analisar debates importantes e polêmicos em torno da teoria do discurso e do político de Laclau e Mouffe, tais como as críticas a seu caráter ontológico, seu próprio antagonismo diante de perspectivas inclusivas ou a dificuldade de diferenciar o que seria um populismo de direita e um de esquerda.

cana e na teoria laclausiana. Já no Brasil, contudo, a partir de 2013, o cenário passaria a marcar uma crise para o governo petista. As manifestações em massa de 2013 irromperam em um momento em que, como ressaltamos, não havia (ainda) uma crise econômica, pelo contrário, ainda se convivia com índices favoráveis quanto à taxa de emprego e melhoria material das condições de vida. Daí que tanto Rousseff (cf. Mendes, 2013) quanto Lula (Silva, 2013) deram início a uma interpretação segundo a qual a irrupção das demandas seria produto das políticas de emprego, distribuição de renda e acesso às universidades que, por sua vez, teriam alimentando o desejo de mais direitos, mais saúde, mais educação.

Antes de tudo, cabe lembrar aqui os pontos que já destacamos anteriormente: ao longo dos governos do PT, configurou-se uma crescente tensão entre, de um lado, um conjunto de trabalhadores imersos no novo mercado de trabalho, em grande parcela composto por jovens em empregos já precarizados e temporários e, de outro, um governo que se adequava aos parâmetros de “gestão”, propagandeava a “nova classe média” enquanto enfrentava acusações de corrupção. Nesse cenário, seria simplista categorizar os governos PT como “puramente” de esquerda — já que houve uma boa dose de adequação a parâmetros da “gestão” neoliberal — ou como governo do “Partido dos Traidores” — devido ao atendimento de pautas populares como programas de transferência de renda, criação de vagas em universidades, implantação de política de cotas, atenção à agricultura familiar etc. Da mesma forma, seria simplista categorizar os manifestantes de junho de 2013, e mesmo grande parte daqueles presentes nas manifestações de 2015, como de esquerda ou de direita, especialmente no que diz respeito ao horizonte político-partidário tradicional.¹⁹

No entanto, a partir de 2014, houve um crescente antagonismo com relação ao PT e à ideia de esquerda em geral. Além da atualização do anticomunismo na forma de antipetismo, como ressaltamos, cabe por fim destacar o papel fundamental que teve a já mencionada Operação Lava Jato. Os procuradores do MPF envolvidos na operação, bem como o juiz Sergio Moro, responsável pelos julgamentos de primeira instância, acabaram por virar heróis nacionais no “combate à corrupção”. Vazamentos seletivos para a mídia e reportagens especiais, além da repercussão em redes sociais de internet, foram importantes para o efeito político da operação. A parceria entre MPF e mídia foi uma inspiração direta da Operação *Mani Pulite*, ocorrida na Itália, e comentada por Moro (2004) em artigo anos antes.

19 Para uma excelente análise antropológica e política das manifestações, ver Píneiro-Machado, 2019.

Embora muitos críticos, inclusive do meio jurídico, alertassem abusos na condução das operações — abusos que seriam expostos depois a partir do escândalo da “Vaza Jato”,²⁰ especialmente a parceria entre acusação (MPF) e juiz (Moro) —, importa aqui apontar o impacto que a Lava Jato e as ações do juiz corrupto²¹ Moro acabaram tendo no destino político do país. O *lavajatismo* não só estimulou a crise política que levaria ao impeachment de Dilma, como também à polêmica prisão de Lula em 2018,²² quando o ex-presidente liderava as pesquisas eleitorais. Ao estimular a mais intensa polarização “nós x eles”, calcada no lema do “combate à corrupção” (cf. Coelho, 2021a), o lavajatismo foi o predecessor do bolsonarismo enquanto fenômeno eleitoral vitorioso.

A “guerra contra a corrupção” se tornou um “significante vazio”, no sentido da teorização feita por Laclau, e em torno dele (significante “guerra à corrupção”) formaram-se duas cadeias opostas de significantes: uma, de sentido negativo, colocava como equivalentes o PT, o “aparelhamento do Estado”, o “populismo” com sua “ineficiência”, “compra de votos dos pobres com programas sociais” e sua “ditadura do politicamente correto” e “corrupção dos valores”; em sentido positivo, a “liberdade”, o “empreendedorismo”, a “diminuição do Estado”, a “honestidade pelo trabalho livre e sem favores”, a “meritocracia”. Esses polos negativo e positivo, servindo um como espelho negativo do outro, foi colocado como luta do “povo” contra uma “elite política corrupta” (cf. Coelho, 2020 e 2021b).

Se um dos pilares da extrema-direita é a figura do inimigo público, os promotores da Lava Jato e sua parceria com a grande mídia estabeleceram o pilar para o bolsonarismo. Quando este chegou ao poder, com a participação direta de Moro, seja como juiz parcial, seja como ministro da Justiça, a polaridade “amigo x inimigo” deu à polaridade populista “nós x eles” um grau mais extremo de intensidade.

20 Termo pelo qual ficou conhecido, na imprensa brasileira, o vazamento de conversas, realizadas através do aplicativo Telegram, entre Moro e o promotor Deltan Dallagnol e outros integrantes da força-tarefa da Operação Lava Jato. O caso teve destaque a partir da divulgação feita pelo *The Intercept Brasil*. Cf. <https://theintercept.com/series/mensagens-lava-jato/>

21 No sentido de um juiz que corrompeu o sistema de justiça por motivação ideológica e interesse político próprio.

22 Sancionada pelo STF, em clima de populismo jurídico, foi permitida a inconstitucional prisão depois de julgamento em segunda instância — e mesmo que, no processo, fosse constada a ausência de prova direta do envolvimento de Lula com corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: ENTRE NEOFASCISMO E NEOLIBERALISMO

O antipluralismo moralista e a confiança em uma noção não institucionalizada “do povo” ajuda a explicar porque os populistas opõem com tanta frequência o resultado “moralmente correto” de um voto ao resultado empírico de uma eleição, quando este não está a seu favor, observa Jan-Werner Müller (2017, pp. 31-32). Tanto em 2018, após as eleições, como já em 2021, em meio à queda de popularidade de seu governo e projeções eleitorais para 2022, com Lula novamente liderando as pesquisas, Bolsonaro voltou a dizer que a eleição de 2018 havia sido “fraudada” pois, segundo ele, sua vitória real teria se dado no primeiro turno. Já em 2022, Bolsonaro e seus apoiadores passaram a desacreditar as pesquisas que indicavam amplo favoritismo de Lula para a eleição presidencial, além de atacar sistematicamente a idoneidade do próprio processo eleitoral. Para Simon Tormey, o populismo em si não é antidemocrático, mas pode vir a sê-lo, em especial quando líderes populistas autoritários discursam atacando a existência das instituições liberais e os processos democráticos. “O populismo se torna de caráter nativista ou nacionalista quando esse antagonismo se conjuga com uma ideia sobre etnia, religião ou nacionalidade do povo em questão” (Tormey, 2019, p. 198).

Como procuramos destacar, o bolsonarismo é um fenômeno populista de extrema-direita semelhante à onda global de políticos que ascenderam a partir de uma conjuntura de crise da democracia. Esta, por sua vez, liga-se diretamente a transformações na economia (neoliberalismo) que vêm provocando uma profunda alteração do mercado de trabalho, aumento da desigualdade e alteração forçada de expectativas. Ao lidar com novas formas de subjetivação, acabam por atirá-las a expectativas frustradas e o populismo de extrema-direita vem servindo para resolver tais frustrações, imaginariamente, relacionando os males da sociedade ao mal vindo do exterior — a agenda “globalista”²³ — e de seus agentes internos. No Brasil, o bolsonarismo explicitou a agenda autoritária do país, marcada na história recente pela ditadura de 1964-1985 e a tradição anticomunista, atualizada no antipetismo. Também foi decisiva, para a *guerra cultural*, o papel das igrejas neopentecostais e, cabe acrescentar, a xenofobia de eleitores das regiões Sul e Sudeste do país com relação ao povo do Nordeste,

23 Segundo Olavo de Carvalho (2009), a versão brasileira de Steve Banon, guru da extrema-direita internacional, globalismo é “um processo revolucionário”, o “mais vasto e ambicioso de todos”, abrangendo “a mutação radical não só das estruturas de poder, mas da sociedade, da educação, da moral, e até das reações mais íntimas da alma humana”.

atualizada na dinâmica eleitoral Bolsonaro x Haddad/PT que apontamos.

Por fim, cabe destacar como o bolsonarismo, como populismo de extrema-direita, esteve atrelado à subjetivação neoliberal. Na chave das leituras de Rosana Pinheiro-Machado (2021) para o Brasil e de Wendy Brown (2015) numa perspectiva mais ampla, trata-se aqui também da mobilização de elementos que conformam uma subjetividade própria da era neoliberal. A nosso ver, sem a atenção a essa conjunção, não é possível compreender o grau de mobilização política nos últimos anos em torno das redes de direita, o apelo ao conservadorismo completamente articulado à defesa da livre-iniciativa e da liberdade como princípio. O sucesso do bolsonarismo foi justamente o de ter galvanizado a complexidade das demandas e de ter elaborado seu próprio diagnóstico dos problemas nacionais e indicado um caminho, por mais ilusório que fosse — claro, com a ajuda do uso massivo de *fake news* e do antipetismo da mídia tradicional, além do mencionado lavajatismo, mas sem que tenha sido um mero resultado de manipulações e mentiras.

Assim, se houve a mobilização das frustrações e o estímulo ao “ódio como política” — que passou a ser um norte de importantes análises a respeito do contexto brasileiro recente —, não devemos ignorar a dimensão de construção de sentido e de subjetivação relacionado ao ideal do “empreendedorismo” e da “liberdade” — algo para que Foucault já chamara a atenção em seu *O nascimento da biopolítica*. “O brasileiro pode e deve sonhar. Sonhar com uma vida melhor, com melhores condições para usufruir do fruto do seu trabalho pela meritocracia”, enfatizou Bolsonaro em seu discurso de posse, em 1º de janeiro de 2019, no Palácio do Planalto (sede do poder Executivo) (Veja, 2019). Estabelecer uma necessária crítica desses ideais, no sentido de revelar o gap entre promessas e realidade — por exemplo, que a destruição da legislação trabalhista ajuda apenas a precarizar o trabalho dos trabalhadores plataformizados — não deve implicar em recair, mesmo que de forma involuntária, numa pretensão de atacar a “falsa consciência”, ignorando as reais condições de trabalho, expectativas e desejos de uma nova geração de trabalhadores, especialmente quando se leva em consideração a própria precariedade do acesso a bens e serviços públicos por parte de boa parte da população. Mais que nunca é preciso analisar o fenômeno populista à luz de *nossas* pautas democráticas.

BIBLIOGRAFIA

- Alves, José Eustáquio Diniz (2018, 31 de outubro). O voto evangélico garantiu a eleição de Jair Bolsonaro. *Ecodebate*. <https://www.ecodebate.com.br/2018/10/31/o-voto-evangelico-garantiu-a-eleicao-de-jair-bolsonaro-artigo-de-jose-eustaquio-diniz-alves/>
- Barbosa, Glaudionor Gomes (2022). Treze anos de política econômica petista (2003-2015). In Souza, Luiz Eduardo Simões de e Previdelli, Maria de Fátima S. do C. (Orgs.), *História econômica do Brasil contemporâneo* (pp. 415-473). Niterói: Eduff; São Paulo: Hucitec, Coleção Novos Estudos de História Econômica do Brasil, V. 4.
- Brown, Wendy (2015). *Undoing the Demos. Neoliberalism's Stealth Revolution*. New York: Zone Books.
- Carvalho, Olavo de (2009). *A revolução globalista*. <https://olavodecarvalho.org/a-revolucao-globalista/>
- Coelho, Victor de O. P. (2021). O retorno da agenda neoliberal: os ultraliberais e o ataque à Justiça do Trabalho. *Revista de História da UEG*, 9, 1-26. <https://www.revista.ueg.br/index.php/revistahistoria/article/view/10496>
- Coelho, Victor de O. P. (2021a). O estado de exceção, antagonismo político e —combates— à corrupção. *Passagens: Revista Internacional de História Política e Cultura Jurídica*, 13, 469-490. <https://periodicos.uff.br/revistapassagens/article/view/46145>
- Coelho, Victor de O. P. (2021b). Políticas de austeridade em velhas roupas patrióticas: a ideologização na era Bolsonaro. *Outros Tempos*, 18, 139-168. https://outrostempos.uema.br/index.php/outros_tempos_uema/article/view/765.
- Costa, Henrique Bosso da (2019). Estudantes do Prouni na crise do lulismo. *Plural, Revista do Programa de PósGraduação em Sociologia da USP*, 26(1), 289-311.
- Empoli, Giuliano da (2020). *Os engenheiros do caos*. São Paulo: Vestígio.
- Época (2014). *Protestos de grevistas e contra gastos com a Copa marcam 15M*. <https://epoca.oglobo.globo.com/tempo/noticia/2014/05/protestos-de-grevistas-e-contra-gastos-com-copa-marcam-15m.html>
- G1 (2019). *Bolsonaro diz no Dia do Trabalho que o governo tem compromisso com a plena liberdade econômica*. <https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/05/01/bolsonaro-diz-no-dia-do-trabalho-que-governo-tem-compromisso-com-a-plena-liberdade-economica.ghtml>

- Gonçalves, Reinaldo (2013). *Desenvolvimento às avessas: verdade, ma-fé e ilusão no atual modelo brasileiro de desenvolvimento*. Rio de Janeiro: LTC.
- Guilluy, Christophe (2020). *O fim da classe média: a fragmentação das elites e o esgotamento de um modelo que já não constrói sociedades*. Rio de Janeiro: Record.
- Laclau, Ernesto (2018). *A razão populista*. São Paulo: Três Estrelas.
- Laclau, Ernesto e Mouffe, Chantal (2015). *Hegemonia e estratégia socialista. Por uma política democrática radical*. São Paulo: Intermeios / Brasília: CNPq.
- Manso, Bruno Paes (2020). *A república das milícias: dos esquadrões da morte à era Bolsonaro*. São Paulo: Todavia.
- Mata, Sérgio Ricardo da (2020). A teologia política do Governo Bolsonaro. In Klem, Bruna; Pereira, Mateus e Araujo, Valdeci (Orgs.), *Do fake ao fato. Des(atualizando) Bolsonaro*. Jardim da Penha: Editora Milfontes.
- Mendes, Priscilla (2013, 18 de junho). Dilma defende protestos e diz que governo ouviu “vozes pela mudança”. *G1*. <http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/06/dilma-defende-protestos-e-diz-que-governo-ouve-vozes-pela-mudanca.html>
- Motta, Rodrigo Patto Sá (2002). *Em guarda contra o Perigo Vermelho: o anticomunismo no Brasil (1917-1964)*. São Paulo: Perspectiva: FAPESP.
- Mudde, Cas e Rovira Kaltwasser, Cristóbal (2017). *Populism. A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press.
- Nicolau, Jairo (2020). *O Brasil dobro à direita. Uma radiografia da eleição de Bolsonaro em 2018* (Versão digital). Rio de Janeiro: Zahar.
- Perlatto, Fernando (2016). Adeus ao populismo? Reviravoltas de um conceito e de uma política no Brasil do tempo presente. In Perlatto, Fernando e Chaves, Daniel (Orgs.), *Repensar os populismos na América do Sul: debates, tradições e releituras* (pp. 70-94). Macapá: UNIFAP.
- Pinheiro-Machado, Rosana (2019). *Amanhã vai ser maior: o que aconteceu com o Brasil e as possíveis rotas de fuga para a crise atual*. São Paulo: Planeta do Brasil.
- Pinheiro-Machado, Rosana (2021, 22 de junho). O que Lula deu e Bolsonaro abocanhou. *El País Brasil*. <https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-06-21/o-que-lula-deu-e-bolsonaro-abocanhou.html?mid=DM67937&bid=612833664>

- Ribeiro, Márcio Moretto (2018). Antipetismo e conservadorismo no Facebook. In Gallego, Esther Solano (Org.), *O ódio como política: a reinvenção da direita no Brasil* (pp. 85-90). São Paulo: Boitempo.
- Ricci, Rudá G. (2018). Movimentos e mobilizações sociais no Brasil: de 2013 aos dias atuais. *Saúde Debate*, 42(3), número especial, novembro, 90-107. <https://www.scielo.br/j/sdeb/a/yrw7bXmFdLWLDc9zmds8PXy/?lang=pt>
- Silva, Luís Inácio Lula da (2013, 16 de julho). The Message of Brazil's Youth. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2013/07/17/opinion/global/lula-da-silva-the-message-of-brazils-youth.html?searchResultPosition=1>
- Souza, Marcelo Pimentel Jorge de (2021, 17 de julho). Generais arrastam Forças Armadas para a política e governam o país com “partido militar”. *Folha de São Paulo*. <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2021/07/generais-arrastam-forcas-armadas-para-a-politica-e-governam-o-pais-com-partido-militar.shtml>
- Tormey, Simon (2019). *Populismo: uma breve introdução*. São Paulo: Cultrix.
- Veja (2019). *Leia a íntegra dos dois primeiros discursos do presidente Jair Bolsonaro*. <https://veja.abril.com.br/politica/leia-a-integras-dos-dois-primeiros-discursos-do-presidente-jair-bolsonaro/>
- Victor, Fabio (2018). Mal-estar na caserna. *Piauí*, 138, março. <https://piaui.folha.uol.com.br/materia/mal-estar-na-caserna/>

DILEMAS POLÍTICOS DEL GOBIERNO DE LÓPEZ OBRADOR: ENTRE POPULISMO, DEMOCRACIA E IZQUIERDA

Patricia Pensado Leglise

A MANERA DE PRESENTACIÓN

[...] el populismo ha tenido una accidentada vida académica. La diversidad de los movimientos a los que se aplica el término, sumada a la naturaleza camaleónica de un credo abrazado por igual a izquierda a derecha del espectro ideológico, ha provocado dudas acerca de su verosimilitud. [...] El populismo no es el primer concepto discutible al que se enfrenta la ciencia social, ni es una novedad que la propia discusión sobre su campo semántico posea connotaciones políticas; [...] no acabamos de ponernos de acuerdo en la forma en que se manifiesta; [...] la palabra ha terminado por abarcar realidades tan distintas que, tan pronto en los estudios seminales de los 60, ya no estaba claro si había de privar la dimensión ideológica (las ideas del populismo) o la organizativa (sus distintas manifestaciones). (Arias, 2017)

Ahora, hablar de populismo está de moda; el término se oye en debates, redes sociales, academias. Es un vocablo que se usa para ensalzar o para denigrar a personajes políticos sean estos del signo y color que sea.

Sin pretender extenderme en las definiciones del populismo, sus contextos y características que resultan ajenas al objetivo del presente texto, quizá no sobre recordar que la palabra nos remite a los fines del

siglo XIX cuando con populismo se hacía referencia a movimientos sociales en contextos por demás diferentes: Rusia y Estados Unidos que, sin embargo, compartían ciertas características comunes como la tendencia a la cercanía con “el pueblo” así como un discurso contrario al orden establecido.

Varios años después llega a algunos países de América Latina “el sopro populista”, ahí están en la memoria y la historia nombres como los del brasileño Getulio Vargas y el argentino Juan Domingo Perón. A los que le han seguido, cada uno en su contexto específico, los nombres de Hugo Chávez, Néstor y Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa. Lista a la que han sumado a Andrés Manuel López Obrador y, si algo tienen en común estos nombres y su contexto, es precisamente la ambigüedad en el “modo personal de gobernar”, recordando a Cosío Villegas.

Cierto es que hay ciertos fenómenos económicos, políticos, sociales y culturales que han contribuido al “renacimiento” del populismo, entre otros las transformaciones económicas, la agudización de las desigualdades sociales pero también educativas, de género, de etnia, de acceso a servicios públicos, el aumento de la pobreza, las violencias y exclusiones sociales. Sin dejar de lado las insuficiencias, o sesgos según se le mire, de los sistemas democráticos.

En palabras del estudioso francés Rosanvallón:

La especificidad del momento populista actual es que hay una mundialización de la cuestión populista. Se podría sostener que hasta hace unos quince años el populismo tenía dos definiciones. Una definición histórica que lo refería al populismo en la historia latinoamericana [...] correspondía a lo que podríamos llamar situaciones de transición de los países de la región, situaciones de transición del caudillismo a la democracia, de regímenes autoritarios a la democracia. [...] La segunda visión [...] era el populismo como una suerte de resurgimiento de partidos de extrema derecha europea. [...] Hoy en día, la especificidad es que el populismo es universal. (Annunziata, 2021)

Me parece que, como se hace en este trabajo colectivo, reflexionar en relación con el término populismo debe permitirnos más que definiciones puntuales y esquemáticas, explorar lo más objetivamente posible qué condiciones han hecho posible que la especificidad del populismo es que sea ahora, entrado en años el siglo XXI, un hecho universal.

En el caso de Andrés Manuel López Obrador, notas que presento para este volumen coral, estoy convencida de que si hoy, a medio

camino de la administración¹ hubiera que definirle, el concepto que mejor expresa su actuar es el de un político voluntarioso cruzado por claroscuros.

Si bien “recibió” un país con añejos y graves problemas, no solo el aumento de la espiral de violencia, sino el estancamiento económico por más ya de treinta años, el aumento de las desigualdades sociales, el crecimiento de los empleos precarios, del desempleo, un Estado pobre de ingresos pero también de planear caminos, fenómenos que, en conjunto, nos describen a una sociedad estancada en el malestar social.

Destaco de su gestión la atención en los pobres; que sin embargo, ha carecido de las estrategias y políticas necesarias para poder romper, como señalan estudiosos de la cuestión, el círculo de la pobreza. No es solo con apoyos focalizados como los pobres dejarán de reproducir el círculo infernal de esas condiciones. Se necesitan proyectos educativos y productivos y, fundamentalmente atender, entender, que no puede haber desarrollo sin crecimiento económico, sin crecimiento de la producción y de los empleos buenos, formales y bien pagados.

El lema de “por el bien de todos, primero los pobres” remite a encarar desde el Estado (más allá de las entregas monetarias) una grave cuestión social envenenada por décadas de mal crecimiento, pobrezas y ahora la presencia impune de criminales organizados.

Se trata de un gobierno populista o popular; uno que avanza hacia la demolición de estructuras o uno conservador e incapaz de sentar las bases para un desarrollo diferente, hacia la (re)construcción de una economía sustentada por dos grandes ejes: una economía mixta articulada por un programa nacional de inversiones y un Estado social, de derecho y derechos universales, sostenido en una finanza pública flexible y transparente.

En 2018 escribía Ricardo Raphael:

La popularidad de López Obrador puede explicarse en parte porque abraza causas importantes para un gran sector del electorado, que también se ha identificado con su diagnóstico. No menos importante es el hartazgo general ante la corrupción, así como la indolencia de la clase aventajada. Sin embargo, lo limita una visión mesiánica de la política, la irritación frecuente hacia la crítica, la virulencia ocasional de su lenguaje. (Raphael, 2018)

Necesitamos lecturas cuidadosas de nuestro presente, no presurosas, para entender nuestra cotidianidad, nuestro presente que parece continuo, para entender cómo hemos llegado a una situación tan polariza-

1 Cabe mencionar que este texto se escribió en el año de 2021, cuando la administración del presidente López Obrador cumplía tres años en el gobierno, de ahí que no se consideren ciertos eventos y los cambios en los datos estadísticos.

da, confusa y difusa que contamina todos nuestros intercambios que, me parece, no empezaron con el gobierno de López Obrador.

En el Proyecto de Nación, documento que presentó como guía para su administración, Andrés Manuel López Obrador afirmaba en 2018, que se proponía revertir 35 años de crisis y desigualdad. Y postulaba cuatro ejes: 1) política y gobierno; 2) desarrollo social; 3) economía y desarrollo; y 4) educación, ciencia, valores y cultura.

En su opinión, ofrecer soluciones a problemas añejos y enraizados era posible, así que un equipo de trabajo se dedicó a formular propuestas para, se afirmaba, concretar un cambio de rumbo para alcanzar la reconstrucción nacional. “En 2024 queremos vivir en un México justo, democrático, soberano, pacífico y transparente” (Proyecto de Nación, 2018, p. 3).

Si bien es cierto que tanto la calificación como el apoyo al proyecto de López Obrador no han sido unánimes (el abanico incluía desde quienes lo definían como de izquierda, pasando por populista y para otros un reformista), también lo es que entre los años de alejamiento de los gobiernos con la sociedad, entre impunidades y corrupciones, y sin haber mediado mayores intentos políticos por afrontar las crisis sociales que, como marea de fondo, recorrían las venas del cuerpo social, las propuestas de López Obrador parecían convocar a un cambio que solo podía venir de una gran coalición popular, orientada hacia la izquierda, en vista del fracaso y franco retroceso habido tras el primer sexenio de la alternancia (2000-2006).

Ante la pluralidad de opiniones y la falta de claridad del candidato y de su partido para explicar la forma de instrumentalizar las reformas que, decían, aseguraría el crecimiento económico y redistribuiría los frutos de la riqueza, empezaba a resultar complicado visualizar con meridiana claridad el proyecto, lo que no tardó en generar distintas y diversas versiones y explicaciones.

Con todo, entre beneplácitos y escepticismos López Obrador representó, como se dijo, una opción de izquierda “que a grandes rasgos podemos llamar nacionalista y populista, pero singularmente austera” (Gómez, 2021, p. 17). Sin obviar su militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), su discurso representaba una esperanza al incorporar, por ejemplo, temas sociales enarbolando frases como “por el bien de México, primero los pobres”.

HONESTIDAD *VERSUS* CORRUPCIÓN

En principio, el discurso moral contribuyó a legitimarlo ante diversos grupos que se sienten agraviados por los años de corrupciones e impunidades. Desde un inicio López Obrador buscó deslindarse de gobiernos anteriores que promovieron o fueron cómplices de la malver-

sación de los fondos económicos o la falta de procuración de justicia, solo por mencionar un par de ejemplos pero, sobre todo, buscó “poner en su contexto” el comentario del presidente Enrique Peña Nieto quien se había referido a la corrupción como un mal endémico de los mexicanos. Para ello, López Obrador ha afirmado que la corrupción es como ADN de los neoliberales, que nada tiene que ver con el pueblo, al que genéricamente califica de bueno y sabio. Con este discurso ha recurrido al pensamiento binario, reduccionista, para descalificar cualquier tipo de oposición a su discurso.

A la corrupción le opone la honestidad, en su opinión quien no es honesto es corrupto. Y como esta afirmación se han lanzado otras no menos aventuradas: “La honestidad puede ser la tabla de salvación de México”; la corrupción “es la causa principal de la desigualdad y de la tragedia nacional”; “La honestidad es una virtud que forma parte del patrimonio moral del pueblo” (Proyecto de Nación, 2018, pp. 30-31). Frases que no se hacen cargo de la complejidad de los fenómenos que, al trascender la realidad nacional, deben ser contextualizados globalmente por lo que no es factible que valores como la virtud puedan resolver, por sí mismos, los entuertos económicos de la globalización, pero tampoco ser pensados como si de material genético se tratara que, de generación en generación es transmitido.

POPULISMOS DE IZQUIERDA

En este tema López Obrador, como muchos otros, no escapa a las corrientes de izquierda latinoamericana que, en su momento, proponían que el cambio social tenía relación con la reafirmación del proyecto nacional, para lo cual el Estado era el encargado de generar una estrategia de reformas sociales y económicas dirigidas a erradicar la pobreza.

De ahí que, como indica Rolando Cordera, la necesidad “de una política para la redefinición del interés general y el bien común” para recomponer la fractura social (Cordera, 2021c). Por ello no extraña que entre otras banderas su gobierno prometiera: legalidad y erradicación de la corrupción, combate a la pobreza, recuperación de la paz, viabilidad financiera, equidad de género y desarrollo sostenible.

En uno de los primeros textos referidos al liderazgo populista latinoamericano en los años sesenta, Alistair Hennessy lo definía como componente de una clase media descontenta pero pujante que se encuentra alejada de las principales esferas del poder político (Hennessy, 1969, p. 40) capaz de reunir a grupos sociales divergentes, mostrándose como un proyecto político transclasista y constituirse como “una fuerza social unificadora, aglutinante” (Turner, 1971, p. 19) que logra el consenso social y estimula la participación política de grupos socia-

les que han sido excluidos de la política por la cultura dominante y a quienes se refieren como pueblo.

Luis Villoro por su parte, mencionaba que pueblo, aunque era un término vago, se refería a una entidad colectiva con una identidad evidente y características propias, que están en relación con un territorio, y que son iguales en derechos. Para otros intelectuales pueblo es una abstracción que, al paso del tiempo, se ha reducido a ser recurso retórico para afianzar el autoritarismo. En este sentido, me parece interesante el planteamiento de Hernán Gómez Bruera con respecto a que vivimos un cambio cultural cuya expresión tiene que ver con recuperar “parcialmente la dimensión de lo colectivo y lo comunitario. Hoy además de hablar de “ciudadanía”, hemos recuperado una noción de “pueblo” que cayó en desuso y que es importante porque implica pensarnos como un todo con una identidad más cercana a los intereses de las mayorías” (Gómez, 2021, p. 21).

Si fuera posible encontrar un rasgo común entre los populismos del siglo XXI, sin adjetivos, quizá habría coincidencias en el origen en tanto que se hunden en un malestar social contra el liberalismo. En México, como ha señalado José Woldenberg, no se supo socializar las virtudes de la transición democrática, en parte debido a que el fenómeno de la corrupción velozmente ha corroído a las instituciones; los aumentos de las violencias; el insuficiente paso de la economía y las cada vez mayores brechas de desigualdad, fenómenos que han contribuido a “atizar” profundos resentimientos en y entre los grupos sociales.

Varios intelectuales han señalado que en la medida en que se da un proceso de desinstitucionalización de la sociedad, el Estado se margina; en nuestro caso, a pesar de que los gobiernos han destinado importantes recursos para programas sociales, y también que desde el primer gobierno de alternancia política (Vicente Fox) se comenzaron crear los órganos autónomos, el tejido social no ha podido reconstituirse ni se han ofrecido soluciones de largo alcance que contribuyan a modificar las condiciones socio-económicas e ir cerrando brechas de desigualdad y mejorar sosteniblemente los grandes números de la pobreza.

Me parece que, entre otras causas, sin pretender desmenuzarlas, cuyo tema escapa a este trabajo, solo mencionaré algunos aspectos que han contribuido a agudizar la situación: falta de evaluación de los programas sociales, errores en su diseño, incrementar la participación en la toma de decisiones, la corrupción y, como se anotó, un crecimiento económico del todo insatisfactorio. Problemas que, hay que decir, tampoco han encontrado solución en la actual administración, aunque sí es posible admitir que parece haber una preocupación

auténtica por atender a los grupos más desfavorecidos y mejorar sus condiciones materiales.

Como sea, las críticas más severas provienen de posiciones de la izquierda socialdemócrata, como puede ser el caso de Gilberto Guevara Niebla, para quien el gobierno no solo es populista, sino que

destruye el espíritu de comunidad y socava el espacio público compartido que hace posible que la democracia se alimente del diálogo sincero entre los actores políticos; [...] [continúa señalando que] los líderes populistas son demagogos inescrupulosos que hablan con indiferencia con verdades y mentiras, [...] no educan el pensamiento crítico, la inteligencia política, sino que promueven el prejuicio y la desconfianza entre conciudadanos. (Guevara Niebla, 2021a)

La crítica de Guevara Niebla coincide con la de otros intelectuales quienes no diferencian al populismo, de izquierda o derecha, ya que se considera que son iguales en la medida que erosionan la vida democrática, hasta el punto de llegar a un autoritarismo que restringe las libertades ganadas.

Quizá habría que recordar que los primeros gobiernos populistas en América Latina se desarrollaron en medio de proyectos de modernización económica proponiendo un modelo nacionalista de desarrollo, postura que les obligó a reconocer derechos laborales y dignificar al obrero, considerándolo como sujeto que propiciaría el cambio. Experiencias que tuvieron lugar en contextos en donde la democracia no formaba parte de la tradición política y los trabajadores eran oprimidos. Es por ello que no resulta extraño encontrar que, la lectura que hacen esos trabajadores de los gobiernos populistas, sea positiva.

El punto es que, ante el actual debate quiénes descalifican todo populismo, sea del signo que sea,

Han creado un universo político propio, [...] impermeable a las necesidades e ideas de los otros, y al considerarse a sí mismo como autosuficiente, se convierte en un eslabón que conduce al fanatismo, [...] una obsesión cegadora a la que le es imposible valorar la diversidad que da forma al mundo. (Woldenberg, 2021a)

DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO

El Estado ha sido tema fundamental en cualquier proyecto de reforma, cambio o transformación social. Durante la contienda electoral de 2018, se planteó recuperar al Estado de los imperativos del mercado y convertirlo en promotor del desarrollo político, económico y social del país (Proyecto de Nación, 2018, p. 26); sin embargo, no se precisa ninguna estrategia para reformar, en clave social y de derechos, al Es-

tado sino que lo que se observa es un mayor control y centralización del poder; punto en el que, sin duda, hay una gran semejanza con los gobiernos populistas latinoamericanos del pasado.

Esto se debe a que el gobierno mexicano no ha abandonado del todo al modelo corporativo, política que permitió ejercer control sobre los sectores sociales para el proyecto de modernización económica. Pero, también, se ha dejado de lado la transición democrática, no solo por parte del gobierno sino en general por los sectores de izquierda. Entre otras razones es posible decir que tanto el agravamiento económico como la prioridad de los cambios político-electorales, dejaron fuera de foco temas centrales como la desigualdad y la pobreza.

Parafraseando a Rolando Cordera la reforma del Estado debe tener como eje maestro una reforma social, centrarse en la reconstrucción de los tejidos y procesos sociales básicos del propio Estado. Lo que necesariamente implica una redistribución del poder; un reacomodo radical de las relaciones y pesos entre las esferas de la economía y en la asignación de los recursos y la distribución de los ingresos y la riqueza.

GOLPETEO A LA AUTONOMÍA DE LOS ORGANISMOS

Entre los puntos más criticados del gobierno de López Obrador están sus iniciativas para quitar o restar autonomía, según se le quiera ver; a organismos creados en años recientes, este golpeteo ha generado un gran debate debido a que, con todo y los defectos y carencias de las que sean portadores, estos órganos han permitido ventilar la “cosa pública” y abrir espacios. La insistencia de López Obrador se ha interpretado como rechazo a la autonomía bajo el argumento de que puede ocasionar el fraccionamiento del poder y escapar al control del Ejecutivo. En este sentido, solo puede interpretarse tal iniciativa como el afán del presidente de concentrar el “poder del Estado en sus manos”, la cual Woldenberg define como “un hiperpresidencialismo sin contrapesos” (Woldenberg, 2021b).

En opinión de Pedro Salazar, si bien es cierto que estos órganos realizan tareas que formaban parte del quehacer del Poder Ejecutivo, se pensaron para “desmontar el sistema hiperpresidencialista que había caracterizado al México posrevolucionario —y autoritario—” (Salazar, 2021).

Siguiendo los argumentos del mismo Salazar, la creación de los órganos ha respondido a dos momentos políticos; en uno ubica al Banco de México (Banxico), el Instituto Federal Electoral (hoy INE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), los cuales contribuyeron a democratizar y liberalizar en términos políticos al país. Y, en otro

momento, al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) y la transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Fiscalía General de la República (FGR) que los ubica como parte del Pacto por México que “comparten una naturaleza jurídica, pero tienen facultades significativamente diferentes. [...] Algunas son autoridades administrativas con potestades sancionadoras para autoridades, entidades de interés público y particulares”.

Otros son órganos de derechos humanos (CNDH); reguladores y con capacidades sancionadoras (IFT, Cofece); otros gestores de áreas estratégicas (BANXICO); unos más, generadores de información técnica (INEGI, CONEVAL) y otra persecutoria de presuntos actos delictivos (FGR).

En palabras de la jurista Leticia Bonifaz “son producto del agotamiento del modelo de partido hegemónico que dejamos atrás” (Bonifaz, 2021).

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

La cancelación de recursos a organizaciones diversas de la sociedad civil, bajo el argumento cierto pero pesimamente llevado a cabo, sin mediar previamente investigación ninguna que permitiera castigar a quienes se hubieran beneficiado de los recursos públicos, llevó a que la medida fuera acremente criticada. Sergio Aguayo la interpretó como la aversión del presidente frente a la ciudadanía que “se organiza y presenta proyectos a la autoridad y apoya la organización de quienes exigen respeto a sus derechos” (Aguayo, 2021). Otro caso duramente criticado y, como los anteriores, insuficientemente argumentado por el gobierno, fue la desaparición de los 109 fideicomisos que contribuían al financiamiento de proyectos a largo plazo en artes, ciencias, deportes, y derechos humanos y otras áreas.

Si bien puede decirse que parte de los argumentos esgrimidos eran congruentes con la famosa austeridad republicana, los recursos deberían haber sido utilizados en apoyar el vapuleado sistema de salud, cosa que no se hizo.

Lo conveniente, antes de tomar medidas de este tipo, era realizar, como se dijo, un estudio de cada una de las organizaciones y no evitarse el trabajo de auditarlas. Pero, ya tomada la medida, es fundamental para no paralizar actividades, aumentar el Producto Interno Bruto (PIB) anual, porque como ha señalado Carlos Gershenson: “La ciencia es el mejor método que tenemos como humanidad para entender el

mundo y resolver problemas” (Gershenson, 2021). Y al igual que la ciencia, la cultura contribuye a formar personas más críticas, resilientes, solidarios e incluyentes.

REFORMAR EL ESTADO

Desde hace tiempo, Rolando Cordera ha planteado la necesidad de reformar el Estado y tomar un nuevo curso de desarrollo que, en su opinión, tendrá que ser resultado de tareas conjuntas entre los diferentes sectores y actores políticos para “reorientar y reanudar la producción con las fuerzas y las capacidades productivas instaladas” (Cordera, 2021a), en la cual se propongan

nuevas formas de relación que sostengan una economía política con propósitos públicos; [...] la reconstrucción económica y del Estado; la reinención de la economía mixta y la gestación de entendimientos sociales capaces de deliberar y acordar nuevas y seguras ligas de retribución y redistribución a todo lo largo de la cadena productiva y distributiva. (Cordera, 2021b)

Para él los gobiernos deben ser capaces de tender puentes entre las fuerzas vivas de la política económica y llegar a acuerdos consensuados, al igual que otros economistas han insistido en la necesidad de abordar la cuestión fiscal como un compromiso nacional. Propuestas frente a las cuales el gobierno de López Obrador se ha mostrado indolente e indiferente.

De hecho, en el más reciente documento del grupo nuevo curso de desarrollo, grupo de reflexión y análisis que desde 2009 ha venido proponiendo medidas concretas en relación con la situación económica, y del que Cordera es coordinador, se asienta que

el estado de bienestar debe estar articulado por propósitos y compromisos con el desarrollo general de la sociedad, el crecimiento y la expansión de sus fuerzas productivas y por la implantación de nuevas y justicieras formas y métodos redistributivos de los frutos del progreso técnico y del esfuerzo colectivo de la producción social. (Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, 2021)

AUSTERIDAD REPUBLICANA O FRANCISCANA

Una de las medidas gubernamentales para hacerse de recursos y poder financiar apoyos sociales ha sido aplicar la llamada austeridad republicana, la cual tiene como postulado central la eliminación de la corrupción. También planteó la política de no crecimiento de la deuda, misma que ha sido muy criticada, debido a que la falta de liquidez ha detenido inversiones dirigidas a los

sectores productivos y de servicios, situación que se agudizó con la medida decretada de cierre de actividades no esenciales, sin mayores apoyos económicos a las MyPIMES lo que ha contribuido a aumentar los porcentajes de empleos precarios o de plano desempleo. Vale decir que en 2020 se perdieron 647,000 empleos formales y se cerraron más de un millón de empresas (González, 2021). También 3,5 millones de trabajadores han tenido que retirar parte o la totalidad de sus fondos de pensiones por la pérdida de sus trabajos (Bartolomé, 2021).

Con todo y la decisión de no pedir préstamos para que no crezca la deuda, de acuerdo con Galván Ochoa,

La deuda global del gobierno mexicano tiró el ancla en 12 billones 336 millones de pesos a lo largo de los dos primeros meses del año, la Secretaría de Hacienda dice que, aun confirmando el compromiso de no pedir prestado, existen otros factores que hacen que crezca, aun sin contratar préstamos. (Galván, 2021b)

Por otra parte, es cierto que se ha cumplido con el compromiso de aumentar anualmente el salario mínimo, este año, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos estableció un aumento del 16%.

Otro aspecto que ha contribuido a evitar mayores daños económicos han sido las remesas de los mexicanos que han alcanzado 41 mil 832 millones de dólares. “Puede estimarse que alrededor de siete millones de hogares en México reciben remesas, [...] lo que quiere decir que millones de familias reciben un ingreso que fluctúa entre 7 y 14 mil pesos al mes” (Quintana, 2021b).

PROGRAMAS SOCIALES

Desde un inicio el gobierno de López Obrador se pronunció por el desarrollo de una política social que fuera “la guía de orientación general y rectora del quehacer gubernamental” (Proyecto de Nación, 2018, p.424). La Secretaría del Bienestar sería la responsable de organizar los Programas Integrales de Bienestar que se harían cargo de las transferencias gubernamentales para el desarrollo de los programas sociales. En el presente año del total de los egresos un 51,5% va a tareas de desarrollo social (112.143 millones de pesos); si se le desglosa se advierte que la mayor suma corresponde a vivienda y servicios (51.694 millones); a salud, 21.280 millones; protección social, 12.747 millones; protección ambiental, 12.509 millones y a educación 10.341 millones (Márquez, 2021).

Parte importante del presupuesto social corresponde a las pensiones para adultos mayores, las que se han ampliado para atender a to-

das las personas desde los 65 años (en lugar de 68) y se han aumentado con lo cual se estaría llegando a niveles cercanos al costo de una canasta alimentaria (Zamarripa, 2021); también a personas con capacidades diferentes y madres solteras; a niños de estancias infantiles; a “jóvenes construyendo el futuro”, mexicanos de 15 a 29 años que no estudian ni trabajan y se promueve su inserción en alguna actividad productiva.

También están las becas para estudiantes de nivel básico, medio y medio superior, el programa de precios de garantía para productos básicos, el llamado producción para el bienestar y el programa Sembrando Vida (Soto, 2021). El fondo directo a comités de padres y maestros de 51 mil escuelas primarias, becas de licenciatura, de posgrado y a estudiantes pobres (Toledo, 2021). También se cuenta con apoyos para la modificación y la compra de vivienda.

SALUD

A pesar de que la salud es un derecho constitucional, lejos está México de cumplir con ese mandato. Al iniciar el gobierno de López Obrador se planteó que el objetivo principal en términos de salud sería fortalecer el sistema público de salud (SPS). De acuerdo con cifras oficiales, en 2017 carecían de servicios 20,5 millones de personas y en 2020 se redujo a 15 millones; en cambio, han aumentado los problemas de desnutrición, de drogas y alcohol, enfermedades relacionadas con el sobrepeso y problemas cardíacos, entre otros. Sin embargo, a la falta de coordinación en la migración del Seguro Popular al INSABI se sumó la emergencia sanitaria, por lo que se advierten retrocesos en la atención y cobertura de los servicios de salud. Cabe mencionar que en este esquema están incluidas todas las personas que no cuentan con ningún tipo de seguridad social debido a que no cuentan con un trabajo formal.

OTROS TEMAS

Entre los temas relacionados con el desarrollo sustentable y el medio ambiente, en diciembre de 2020 se decretó la reducción gradual de importación de glisofato y de maíz híbrido, hasta cancelarla en diciembre de 2024; asimismo se prohibieron cultivos transgénicos y el uso del *fracking*.

Por último, aunque no al último, se busca fomentar la lectura para lo que el Fondo de Cultura Económica ha impreso y distribuido gratuitamente más de millón y medio de ejemplares.

ALGUNAS CRÍTICAS A LAS ACCIONES

Entre algunas de las críticas hechas a las acciones del gobierno se encuentra el hecho de que las transferencias en efectivo:

pueden replicar, de manera perversa, lógicas neoliberales erosionando las instituciones de apoyo social y responsabilizando enteramente a los individuos por su propio bienestar y de mantenerse a flote en medio de una economía de mercado competitiva. (Bravo, Iber y Beck, 2021)

Otro argumento se basa en decir que las medidas no son suficientes para erradicar la pobreza; al respecto Gilberto Guevara Niebla comenta que “no se puede acabar con la pobreza si no se comienza por producir mayor riqueza. El motor de la productividad nacional y la energía que mueve al estado benefactor o a las democracias socialistas es la educación” (Guevara, 2021b). En su opinión el gobierno debería invertir recursos a aspectos sustantivos de la educación, entre otros aumentar salarios a maestros, abrir nuevas plazas, apoyar la formación continua de los mentores, mejorar la educación indígena, así como renovar la infraestructura de y en las escuelas.

A lo dicho habría que agregar la poca claridad que, para la mayoría de la población, hay en relación con la naturaleza jurídica de la política social, ya que lejos de tener claro que se trata de derechos establecidos en la Constitución pareciera que se trata de graciosas dádivas de los gobiernos en turno que los utilizan con fines electorales y clientelistas.

También se ha criticado, como se apuntó, tanto la falta de elementos técnicos para focalizar a la población de extrema pobreza de suerte que quienes más necesitan la ayuda puedan recibirla realmente como la irregular evaluación de los programas.

Otra falta señalada tiene que ver con la (in)cultura ciudadana para que sea capaz de conocer sus derechos y obligaciones como beneficiario de alguno o de varios de los programas y, más en general, con la necesidad de repensar los programas que sin dejar de tener algunos que estén focalizados se trabaje en estrategias de política económica y social que generen desarrollo, las que en este gobierno tampoco parecen ser una prioridad.

Entre padrones poco claros y transparentes de los programas en marcha la crisis económica que ha seguido a la emergencia sanitaria ha empezado a delinear un rostro social muy dañado: según datos ofrecidos por el órgano encargado de la política social (CONEVAL) entre 2018 y 2020 se pasó de 51,9 millones de mexicanos pobres a 55,7 millones y de 8,7 a 10,8 millones de mexicanos en pobreza extrema (Woldenberg, 2021c).

Como varios estudiosos han apuntado “el mejor programa social para reducir la pobreza es la generación de empleo” (Hernández, 2021).

POLÍTICA DE REFORMAS

La política reformista del gobierno de López Obrador ha buscado ser congruente con su proyecto político, aunque, como ha señalado el ex secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, no ha estado

exento de claro oscuros y contradicciones, que se propuso transitar una ruta de honestidad, de apoyo a los pobres, de rescate del Estado y la nación, de regeneración social y ambiental, recuperando la memoria histórica e invocando los principales valores universales. (Toledo, 2021)

Plantear reformas de los hidrocarburos, con el argumento de cimentar el desarrollo económico en la productividad de PEMEX y la CFE, empresas estatales que habían sido objeto de reformas privatizadoras en sexenios anteriores, significaba además de su rescate económico, que se les considera esenciales para el desarrollo económico, así como también, el de representar un modelo de soberanía nacional, por lo que fortalecerlas ha sido prioritario bajo el argumento de disminuir la dependencia energética.

En el proyecto de reformas a las leyes de hidrocarburos y de la industria eléctrica enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados se otorgan facultades al gobierno para suspender permisos de manera temporal en dicho mercado, si considera que atenta contra la seguridad nacional, la energética o la economía nacional (Galván, 2021a).

Además, establece “que la autoridad puede tomar el control de las instalaciones del permisionario y entregarlas a Pemex o CFE para su operación” (Quintana, 2021a). También, cabe señalar, que hay preocupaciones en relación con el recientemente firmado T-MEC debido a que las modificaciones propuestas podrían ser consideradas violatorias del Tratado.

Por su parte el Consejo Coordinador Empresarial calificó a la reforma de la industria eléctrica como “una expropiación indirecta que resultará en mayores subsidios a la CFE, así como electricidad más cara y contaminante”, generando graves impactos ambientales y económicos (Cortés, 2020). Y si bien el gobierno ha considerado acelerar la transición a fuentes de energía renovables la verdad es que no hay claridad en el tema.

REFORMA LABORAL

En materia laboral se incluyeron modificaciones en relación con la libertad y la democracia sindicales, así como la independencia judicial; también introducir regulaciones al *outsourcing*, “la prohibición de la subcontratación de personal, la regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la activi-

dad económica preponderante de la empresa contratante” (Galván, 2021c).

Asimismo, se ratificó el Convenio 189 de la OIT (Organización Interamericana de Trabajo) sobre los derechos de las y los trabajadores domésticos (Bravo, Iber y Beck, 2021). Reforma de gran trascendencia ya que puede contribuir a reducir la informalidad y precarización del trabajo y fortalecer los ingresos públicos. Ingresos que, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),

El PIB per cápita en México es 64% más bajo que las economías más destacadas de los miembros de la OCDE; la productividad es inferior en 68%; la inequidad es más alta que en la mayoría de los países desarrollados, en la que el 20% de los hogares con menores ingresos representan el 5% del total; y en materia ambiental, más de las $\frac{3}{4}$ partes de la población están expuestas a niveles dañinos y elevados de contaminación. (Cortés, 2021)

SECTOR AGRARIO Y RURAL

Parte de los compromisos de campaña fue el apoyo a este sector el que se ha visto dañado por varios fenómenos entre otros el impulso a la industria agroexportadora, así como el uso intensivo de tecnologías depredadoras de recursos naturales. Por ello se considera que este sector es

uno de los principales motores del crecimiento de la economía, fuente de bienestar para las personas que habitan en los territorios rurales, la base para lograr la seguridad alimentaria de todos los mexicanos y un pilar para el desarrollo sostenible e incluyente que el país requiere. (Proyecto de Nación, 2018, p. 350)

Por otra parte, me parece que reconocer la condición y la cultura indígena es un acierto, no solo permite fortalecer el carácter multicultural del país, también ayuda en el combate a la discriminación en tanto es posible establecer compromisos de respeto a sus formas de organización comunitaria y apoyo a proyectos de desarrollo económico. También conviene mencionar que el diagnóstico para conocer la diversidad del sector agrícola, clasificación del tipo de trabajador (ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, jornaleros) como de la agricultura (familiar sin o con vinculación al mercado, empresarial) es acertada para el mejor diagnóstico. Importante resulta el énfasis al uso adecuado, sostenible y responsable, de los recursos naturales para una agricultura resiliente, el fortalecimiento de las instituciones para la gestión ambiental integral en un contexto global y el cultivo de maíz

y frijol por medio del MIAF milpa ampliada con árboles frutales); parcelas escolares comunitarias y rurales.

En cuanto a ciertos proyectos de infraestructura, han enfrentado no pocas críticas ya que se señala que su afectación no solo impacta un territorio sino a todo un conjunto de comunidades —indígenas y urbanas— sobre todo en el sureste y sur del territorio, que son los casos del corredor transístmico y el tren maya.

POLÍTICA EXTERIOR Y MIGRACIÓN

Entre los problemas migratorios más difíciles destacan tanto las políticas anti inmigrantes de grupos estadounidenses, como el aumento de la presión migratoria centroamericana en la frontera sur, debido a la agudización de los problemas económicos, sociales y de seguridad en la región. Ante lo que se han propuesto no solo la protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes sino impulsar programas de modernización de los cruces y estancias migratorias en el sur del territorio, la elaboración de programas trilaterales (EUA-México-Centroamérica) para promover el desarrollo de regiones rurales y urbanas en Centroamérica; la creación de un corredor económico y comercial en el Istmo de Tehuantepec; el monitoreo a migrantes, incluyendo un perfil criminológico para evitar que sean cooptados por la delincuencia así como impulsar caravanas de traslado seguro.

En materia de seguridad nacional y combate al crimen organizado, se buscan acuerdos con Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas, armas y personas en la frontera.

EL TALÓN DE AQUILES DE LA INSEGURIDAD

Sin duda uno de los mayores desafíos es la inseguridad. El gobierno se ha propuesto recuperar la paz enfrentando las causas de esta y si bien es cierto que mejorar fenómenos estructurales como la desigualdad o la pobreza pueden ayudar a evitar que miles de mexicanos recurran a buscar sustento en las filas del crimen organizado, también lo es que urge atacar “huecos” legales y corrupciones miles. Frente a lo que la respuesta no ha sido la necesaria para hacer frente a un problema de la magnitud de la violencia y criminalidad galopante, así se ha optado por aumentar, en número no necesariamente en capacitación y adiestramiento, a los cuerpos de seguridad y crear un cuerpo, la guardia nacional, que en un principio se dijo tendría mando civil y se ha terminado por dejarla en mandos del Ejército y ahora a formar parte de él. Además, poco o casi nada se ha hecho para mejorar el sistema de procuración de justicia o implementar un programa de prevención social de la violencia y el delito.

Al contrario, se propone ampliar las funciones del Ejército para garantizar ya no solo en cuestiones de seguridad pública haciendo a un lado a las fuerzas policiales locales de los estados, sino también atendiendo obra pública, gestión administrativa. Ahora, con el agregado de promover su participación como dueños de empresas de aerolíneas o turísticas, desacato todavía mayor por el discurso de demeritar la administración civil para justificar la intervención militar.

Ante este panorama queda en deuda las expectativas de proporcionar tanto a las policías locales como a los militares una adecuada preparación sobre las leyes de derechos humanos y las civiles, la historia nacional y universal, las distintas culturas que existen en el país y sus manifestaciones en el arte. Es decir, se trata más que fomentar solo la instrucción dirigida a ser un cuerpo represor, proponer su papel como mediadores de los conflictos sociales. Y no en cambio seguir ensalzando los valores con que se forma al ejército, como son: autoridad unívoca, jerarquización, disciplinamiento, conformidad y xenofobia

DE SALIDA

Tras exponer de manera sucinta los programas y políticas gubernamentales que mayor inconformidad y rechazo han tenido en y entre la opinión pública, me parece conveniente tratar de distinguir, de separar, dos posiciones; por una parte están quienes han manifestado su escepticismo y rechazo desde la candidatura misma de López Obrador, por considerarlo un regreso al autoritarismo bajo la égida de la izquierda. Para otros, en la que incluyo a sectores identificados con la socialdemocracia y la izquierda democrática su crítica ha estado centrada en la falta de sustento de sus propuestas económicas que, en su opinión, son del todo insuficientes para plantearse, como han señalado varios economistas, un nuevo curso de desarrollo. Señalamiento original al que se ha sumado la defensa irrestricta de la autonomía de los órganos constitucionales. También, lo limitado en las propuestas políticas ante la dimensión de los problemas.

Me parece, con todo, que a diferencia de los casos históricos del populismo latinoamericano, no existe por lo menos por parte del presidente, la preocupación por construir un partido fuerte, Morena está lejos de seguir el modelo de partido de masas, corporativizadas o sectorializadas.

Además, varios de los problemas que se han enfrentado no han encontrado eficiente y suficiente explicación, tampoco se han sometido a debate público (sin considerar aquí los ejercicios poco afortunados, en términos democráticos, de las consultas llevadas a cabo para cancelar la obra del aeropuerto internacional o de una planta cervecera en Mexicalí) por lo que, estoy convencida, se requiere convocar al diálogo para

consensuar y resolver colectivamente los problemas, para reconstruir a la nación.

Por otra parte, no es posible gastar bien y lo necesario si el Estado no cuenta con un fisco robusto y transparente. Pensar que solamente con medidas de austeridad, las que por otra parte parecieran empezar ya afectar el funcionamiento del aparato estatal, es fútil; tanto como solo mejorar la recaudación que, hay que decirlo, ha tenido buenos resultados la administración tributaria. “La política social no puede ser la suma de programas paliativos, sino una política de Estado de alcance general y transformación de fondo” (Proyecto de Nación, 2018, p. 425).

Para salir de la dinámica negativa en que México se encuentra, el camino se presenta sinuoso; las implicaciones de la emergencia sanitaria sobre la economía y la trama de las relaciones político-sociales no es menor. Si en verdad se busca una transformación, no importa su número, el eje fundamental debe ser un compromiso claro, expreso y explícito de construir un Estado constitucional de derechos y de derecho. Solo así México podría reiniciar con paso firme una nueva senda de crecimiento económico con justicia social.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguayo, Sergio (2021, 28 de abril). La resistencia. *Reforma*. <https://www.reforma.com/la-resistencia-2021-04-28/op203726>
- Annunziata, Rocío (2021). El populismo como democracia límite. Entrevista a Pierre Rosanvallon. *Andamios*, 18(46). https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632021000200259
- Arias Maldonado, Manuel (2017). Las bases afectivas del populismo. *Revista Internacional de Pensamiento Político, I Época*, 12. <https://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/14959/Las-bases.pdf;jsessionid=FD0D8F407FB828E934F922B04A2E8D0C?sequence=2>
- Báez Castañeda, Diego. *Referencias electrónicas*.
- Bonifaz Alfonso, Leticia (2021, 16 de junio). Vistazo a los órganos autónomos. *El Universal*. <https://www.eluniversal.com.mx/opinion/leticia-bonifaz-alfonzo/vistazo-los-organos-autonomos>
- Bravo Regidor, Carlos; Iber, Patrick y Beck, Humberto (2021, abril). AMLO, inamovible. *Nueva Sociedad, Opinión*. <https://nuso.org/articulo/amlo-inamovible/>
- Cordera Campos, Rolando (2020, 21 de mayo). Rumbo al momento de decidir [en línea]. *El Financiero*. <https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/rumbo-al-momento-de-decidir/>

- Cordera Campos, Rolando (2021a, 17 de enero). Oración y Penumbra. *La Jornada*. <https://www.jornada.com.mx/2021/01/17/opinion/013a1pol>
- Cordera Campos, Rolando (2021b, 18 de febrero). El mundo en peligro. *El Financiero*. <https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/el-mundo-en-peligro/>
- Cordera Campos, Rolando (2021c, 21 de febrero), Preguntitas sin destinatario. *La Jornada*. <https://www.jornada.com.mx/2021/02/21/opinion/013a2pol>
- Cortés, Maricarmen (2020a, 3 de diciembre). Esperada renuncia de Alfonso Romo [en línea]. *Excelsior, Sección Opinión y Blogs*. https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/esperada-renuncia-de-alfonso-romo/129032?utm_source=headtopics&utm_medium=news&utm_campaign=2020-12-03
- Cortés, Maricarmen (2021b, 15 de abril). OCDE: debilidades de México y recomendaciones [en línea]. *Excelsior, Sección Opinión y Blogs*. <https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/ocde-debilidades-de-mexico-y-recomendaciones/132707>
- Galván Ochoa, Enrique (2021a, 30 de marzo). Dinero: No habrá expropiaciones: AMLO [en línea]. *La Jornada Sección Economía*. <https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/30/economia/dinero-no-habra-expropiaciones-amlo-siembran-inquietud-los-cambios-a-la-ley-de-hidrocarburos-el-cannabis-es-tan-adictivo-como-los-opiaceos/>
- Galván Ochoa, Enrique (2021b, 31 de marzo). Dinero: Deuda pública tira ancla en 12 billones al comienzo del año [en línea]. *La Jornada Sección Economía*. <https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/31/economia/dinero-deuda-publica-tira-ancla-en-12-billones-al-comienzo-del-ano-asuntos-pendientes-en-el-congreso-claudia-sheinbaum/>
- Galván Ochoa, Enrique (2021c, 6 de abril). Dinero: Pacto obrero-patronal para un outsourcing... limitado [en línea]. *La Jornada Sección Economía*. <https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/06/economia/dinero-pacto-obrero-patronal-para-un-outsourcing-limitado-don-millonesimo-quiere-ser-diputado-el-reparto-del-actor-alfredo-adame/>
- Gershenson, Carlos (2021, 13 de abril). Ciencia ¿para qué? [en línea]. *Reforma*. https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?_rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/ciencia-para-que-2021-04-13/op202830?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--

- Gómez Bruera, Hernán (2021). *AMLO y la 4T. Una radiografía para escépticos*. México: Océano.
- González, Luis Miguel (2021, 6 de enero). Le importa a AMLO la Secretaría de Economía. *El Economista*. <https://www.economista.com.mx/opinion/Le-importa-a-AMLO-la-Secretaria-de-Economia-20210106-0002.html>
- Grupo Nuevo Curso de Desarrollo (2021). *Renovar políticas para un nuevo curso de desarrollo en México*. http://www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx/docs/GNCD_2021.08_Renovar_%20Políticas.pdf
- Guevara Niebla, Gilberto (2021a, 26 de enero). Credo antipopulista [en línea]. *Crónica, Sección Opinión*. https://www.cronica.com.mx/notas-credo_antipopulista-1175763-2021
- Guevara Niebla, Gilberto (2021b, 11 de abril). El futuro en sombras [en línea]. *Crónica, Sección Opinión*. https://www.cronica.com.mx/notas-el_futuro_en_sombras-1183100-2021
- Guevara Niebla, Gilberto. (2021c, 5 de mayo). Ponernos de pie. *Crónica*. http://ifewww.cronica.com.mx/notas-ponernos_de_pie-1185956-2021
- Hennesy, Alistair (1969). América Latina. En Ionescu, Ghita y Gellner, Ernest (Comps.). *Populismo. Sus significados y características nacionales*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Hernández Licona, Gonzalo (2021, 16 de marzo). COVID-19 empleo y pobreza durante 2020 en México. *Animal Político*. <https://mexicocomovamos.mx/animal-politico/2021/03/covid-19-empleo-y-pobreza-durante-2020-en-mexico/>
- Márquez Ayala, David (2021, 1 de febrero). Reporte económico: Ciudad de México. Presupuesto 2021. *La Jornada*. <https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/01/economia/reporte-economico-ciudad-de-mexico-presupuesto-2021/>
- Proyecto de Nación 2018-2024*. México. <https://contralacorrupcion.mx/trenmaya/assets/plan-nacion.pdf>
- Quintana, Enrique (2021a, 9 de abril). La oportunidad que se nos está yendo. *El Financiero*. <https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/2021/04/19/la-oportunidad-que-se-nos-esta-yendo>
- Quintana, Enrique (2021b, 5 de mayo). Ya somos dependientes de las remesas. *El Financiero*. <https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/2021/05/04/ya-somos-dependientes-de-las-remesas/>

- Raphael, Ricardo (2018, 1 de junio). AMLO: de la polarización a la reconciliación, *El Financiero*. <https://www.elfinanciero.com.mx/culturas/amlo-de-la-polarizacion-a-la-reconciliacion/>
- Salazar Ugalde, Pedro (2021, 1 de marzo). Estos OCA no son gansos. *Nexos*. <https://www.nexos.com.mx/?p=53611>
- Soto, Luis (2021, 6 de junio). Elecciones México 2021: Encuestas de salida, noticias de candidatos y PREP por estados. *El Herald de México*. <https://heraldodemexico.com.mx/elecciones/2021/6/6/elecciones-mexico-2021-encuestas-de-salida-noticias-de-candidatos-prep-por-estados-en-vivo-303724.html>
- Toledo, Víctor Manuel. (2021, 1 de junio). Votar por la decencia, la vida y el planeta. *La Jornada*. <https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/01/politica/votar-por-la-decencia-la-vida-y-el-planeta/>
- Turner, Frederick C. (1971). *La dinámica del nacionalismo mexicano*. México: Editorial Grijalbo.
- Woldenberg, José (2021a, 26 de junio). Vivir encerrado. *El Universal*. <https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/vivir-encerrado>
- Woldenberg, José (2021b, 4 de mayo). ¿Democracia o autoritarismo? *El Universal*. <https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/democracia-o-autoritarismo>
- Woldenberg, José (2021c, 11 de agosto). Así no se puede. *El Universal*. <https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/asi-no-se-puede>
- Zamarripa, Guillermo (2021, 27 de marzo). Programas sociales en las campañas: aumento de pensiones. *Excélsior*. <https://www.dineroenimagen.com/guillermo-zamarripa/programas-sociales-en-las-campanas-aumento-las-pensiones/132201>

EL PROCESO BOLIVARIANO EN VENEZUELA: ¿SOCIALISMO, POPULISMO O NEOLIBERALISMO?

Roberto López Sánchez

INTRODUCCIÓN

Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales en diciembre de 1998 luego de una década de políticas neoliberales en Venezuela. En ese período anterior se habían sucedido dos gobiernos que ejecutaron sendos programas económicos neoliberales; había ocurrido el estallido popular espontáneo de febrero-marzo de 1989, que hizo temblar al sistema político bipartidista vigente desde 1958; se habían presentado dos alzamientos militares de corte nacionalista e izquierdista¹; y un presidente en funciones había sido destituido por el parlamento bajo acusaciones de corrupción².

El llamado “proceso bolivariano” que se abrió en Venezuela con el triunfo electoral de Hugo Chávez en 1998 era la respuesta popular ante la crisis de legitimidad del modelo político de democracia representativa instaurado a partir de 1958 (López Maya, 1994) (Carvallo y López Maya, 1989). El fracaso del modelo productivo de sustitución de importaciones, fundamento de la democracia representativa durante 30 años, se había evidenciado a mediados de la década de los

1 El 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992.

2 Carlos Andrés Pérez fue destituido por el parlamento en mayo de 1993.

ochenta con una profunda crisis económica que se agudizó con la caída de los precios del petróleo en 1986.

El estallido popular espontáneo del 27-28 de febrero de 1989, conocido como el “Caracazo” (Barrios-Ferrer, 1990; Colmenarez, 1989; España, 1989), reveló el gran descontento de la población ante un sistema político-económico que no satisfacía sus necesidades fundamentales, y la brutal respuesta represiva del gobierno, que causó centenares de muertos en los barrios de Caracas y ciudades cercanas, había demostrado que quienes gobernaban no merecían gozar del respaldo popular que por tres décadas había sostenido al modelo político bipartidista gobernante (los partidos Acción Democrática —socialdemócrata—, y COPEI —socialcristiano—).

Ante la ausencia de opciones políticas alternativas, y con una izquierda en crisis, tanto en sus versiones electorales como en los grupos que mantenían la lucha armada, el sistema bipartidista se mantendría en el poder durante una década más. Pero la descomposición del modelo político bipartidista, asociado al capital occidental, continuó su curso y en 1992 se suceden dos alzamientos militares, que fracasan, pero que demostraban que el barco de la democracia representativa continuaba hundándose.

Las rebeliones militares del 92 significaron un profundo quiebre en el bloque de poder dominante desde 1958³. Un sector muy numeroso de oficiales medios de las fuerzas armadas, descontentos por haber sido utilizados por el gobierno como “verdugos” del pueblo durante los sucesos del 27 de febrero del 89, deciden rebelarse enarbolando consignas anti-corrupción y promoviendo un difuso cambio político nacionalista y popular. A pesar de que los militares insurrectos fueron derrotados, el bloque dominante estaba históricamente fragmentado y no pudo recomponerse en los años siguientes.

En esa década anterior a Chávez, el segundo gobierno del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez (1989-1993) había inaugurado el primer plan económico neoliberal ejecutado a plenitud en Venezuela⁴. El paquete de medidas aplicadas al inicio de su gobierno, como la libera-

3 Bloque de poder integrado por los partidos Acción Democrática (AD) y Copei, el alto mando militar, la cúpula empresarial agrupada en Fedecámaras, la jerarquía eclesiástica, los grandes medios de comunicación y la burocracia sindical de la CTV (Confederación de Trabajadores de Venezuela). La conformación de este bloque de poder es considerada por los historiadores a partir del Pacto de Punto Fijo, firmado en octubre de 1958 por los partidos AD, Copei y URD. Los gobiernos entre 1959 y 1999 son denominados gobiernos “puntofijistas”.

4 En 1979 el gobierno socialcristiano de Luis Herrera Campins (1979-1984) aplicó tímidamente algunas medidas neoliberales como la liberación de precios. Pero la fuerte protesta social presentada lo hizo desistir a las pocas semanas.

ción de precios y la eliminación de subsidios (incluyendo el importante subsidio a la gasolina), fueron los detonantes del Caracazo. Pérez terminó siendo destituido en 1993 por el Poder Legislativo, acusado de corrupción. Aunque en la realidad su destitución era una maniobra de la élite gobernante (AD, COPEI y la cúpula empresarial y militar) para contener el gran descontento social y militar, buscando “maquillar” a un sistema cuya legitimidad estaba en entredicho (Revista SIC, 1992; Lander y Uribe, 1995).

El gobierno que sucedió a Pérez fue el del socialcristiano Rafael Caldera (1994-1999), que también accedía al poder por segunda vez. Con la característica que Caldera, siendo fundador de Copei, había roto con dicho partido, y ganado las elecciones con el apoyo de los partidos de izquierda. Pero el gobierno de Caldera, en vez de ser consecuente con su discurso crítico ante el plan neoliberal ejecutado por su predecesor, aplicó también la misma receta económica del Fondo Monetario Internacional⁵.

El rechazo ciudadano ante esta nueva ejecución neoliberal se manifestó entonces de manera electoral, y le permitió a Hugo Chávez presentarse en 1998 como la alternativa nacionalista y popular ante veinte años de fracasos económicos y 40 años de desprestigiado modelo político bipartidista (Ellner, 2009, p. 42).

HUGO CHÁVEZ: DE LA TERCERA VÍA AL SOCIALISMO

El teniente coronel Hugo Chávez había encabezado la rebelión militar “bolivariana”⁶ del 4 de febrero de 1992, y planificado desde la cárcel el levantamiento del 27 de noviembre del mismo año. Luego de recuperar la libertad, decidió fundar un partido legal (Movimiento Quinta República, MVR) e incursionar en el proceso electoral de 1998.

En un crecimiento electoral vertiginoso a lo largo del año 98, Chávez finalmente se impuso ante el candidato unificado de los partidos Acción Democrática y Copei, que se habían turnado en el poder desde 1958. Con una propuesta principal de convocar una asamblea para redactar una nueva constitución, Chávez tenía un programa político-económico muy cercano al Estado de Bienestar en un contexto global neoliberal. Su propuesta electoral anunciaba un respaldo a la

5 El plan económico neoliberal aplicado por Caldera a partir de 1996 fue denominado “Agenda Venezuela”.

6 Autodenominado “movimiento militar bolivariano”, Chávez siempre postuló al pensamiento de Simón Bolívar como el fundamento ideológico de su propuesta programática. De allí su postura anti-imperialista y nacionalista, considerando que Bolívar derrotó y expulsó de Suramérica al Imperio Español, y fue el fundador de lo que hoy son seis naciones del continente (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá).

difusa “Tercera Vía” formulada por el líder británico Tony Blair (Martínez, 2018).

Al llegar al gobierno, Chávez fue catalogado como un líder populista similar a otros a lo largo del siglo XX latinoamericano⁷. Partiendo de que el populismo ha sido considerado como un concepto ambiguo que puede abarcar interpretaciones extremas en el ámbito político y que el estudio de sus expresiones en Latinoamérica parten de distintos enfoques (Rengifo y Medina, 2019, p. 236), consideramos que el gobierno de Hugo Chávez tuvo características similares a los gobiernos populistas de mediados del siglo XX (Stanley, 2000, p. 351), como la presencia de un liderazgo carismático, la imposición de una democracia con tintes autoritarios (en este caso de Chávez con una muy importante participación de militares en cargos relevantes de gobierno), un amplio apoyo popular que se movilizaba de manera constante, y un discurso radical muy atrayente para las grandes masas empobrecidas.

Pero su desempeño al frente del gobierno trascendió rápidamente los marcos del populismo tradicional, acercándose a modelos de “revolución socialista” como Cuba. En un contexto global de derrumbe del Bloque Socialista en Europa Oriental una década antes, de fracaso en Latinoamérica de los intentos de cambio político por medio de la lucha armada (como en El Salvador y Guatemala) y el aplastamiento de los intentos socialistas por “vía pacífica” (Chile), Chávez replanteó, en la culminación del siglo XX e inicios del nuevo siglo XXI, un ideal de “revolución socialista” que empalmaba los principios de soberanía nacional e integración continental formulados en la Guerra de Independencia, con las tradiciones de lucha popular revolucionaria expresadas en el último siglo.

En las últimas décadas, se ha designado como “populistas” en América Latina a gobiernos de distintas tendencias que coinciden en desarrollar procesos de cambio sociopolítico y programas económicos de corte nacionalista, de tipo keynesiano e incluso que se autodenominan como “socialistas”. Ese calificativo de “populista” proviene generalmente de analistas conservadores que cuestionan a los gobiernos que de alguna manera intentan oponerse a los esquemas económicos neoliberales y se alejan de la tradicional subordinación ante el gobierno de los Estados Unidos.

7 El llamado “populismo latinoamericano” se ha identificado con gobiernos y líderes políticos que a lo largo del siglo XX dieron respuesta a la crisis del orden oligárquico surgido luego de la independencia, representando la respuesta de ciertas fracciones de la burguesía industrial, de nuevas fracciones “intermedias” y de amplios sectores de las masas populares a dicha crisis (Vilas, 1988).

La situación general en América Latina a fines del siglo XX, en cuanto a lo económico y lo político, incluía un considerable rechazo ciudadano hacia los ajustes de “shock” neoliberales ejecutados en las dos décadas anteriores, y un descontento popular acumulado ante los resultados nefastos de dichos ajustes, que habían generado todo un retroceso en los derechos laborales conquistados en la posguerra, y una caída significativa de los niveles de ingreso de las clases trabajadoras (Alayón, 2007). Esta realidad obligaba a muchos partidos y líderes progresistas a pronunciarse en contra del neoliberalismo y su principal promotor, el Fondo Monetario Internacional (FMI), y a postular caminos alternativos que incluían postulados keynesianos y hasta socialistas.

El triunfo electoral de Chávez en 1998 contribuyó a revertir ese proceso de caída de los niveles de ingreso de la clase trabajadora, pues todos los planes neoliberales que de alguna forma se estaban ejecutando desde febrero de 1989 comenzaron a frenarse y en algunos casos a revertirse debido a políticas explícitas del nuevo gobierno (Alayón, 2007). Particularmente se detuvieron los procesos de privatización de empresas públicas⁸, incluyendo la llamada “apertura petrolera” propuesta por Pérez e iniciada por Caldera a partir de 1995 (Toussaint, 2009, p. 255; Mateo Tome, 2010).

En el plano económico el proyecto se definió por el anti-neoliberalismo y la superación del rentismo petrolero (Rodríguez, 2010) y su reemplazo por una política de tipo neo desarrollista con fuerte intervención estatal en áreas estratégicas. El ensayo se llevó a cabo en un proceso de lucha polarizada entre el gobierno, la derecha política y el empresariado tradicional (surgido en el período 1958-1998).

En enero de 2005 Chávez definió su revolución como “socialista”, durante su participación en el Foro Social de Porto Alegre (Biardeau, 2015). Teniendo como premisas básicas para ese “socialismo”, la democracia participativa y protagónica del “poder popular” (como oposición a la democracia liberal representativa); la “igualdad y la justicia”; y la unidad “cívico-militar”.

El primer paso transformador dado por el gobierno de Chávez fue la convocatoria de una Asamblea Constituyente, previa realización de un referéndum consultivo el 25 de abril de 1999. La nueva constitución amplió significativamente los derechos sociales, y algunos derechos políticos nuevos como el referéndum revocatorio a mitad de

8 En el gobierno de Caldera se privatizaron la Siderúrgica del Orinoco, la Compañía Nacional de Teléfonos CANTV, la empresa aérea Aeropostal, y se vendieron al sector privado los bancos que habían quebrado y se encontraban bajo control del estado desde la profunda crisis bancaria de 1994.

período para el presidente de la República y demás cargos electivos del poder ejecutivo y legislativo.

El período de Chávez revitalizó la lucha de los trabajadores, modificando las relaciones laborales y las formas de propiedad. En lo atinente a los derechos laborales, la Constitución aprobada en diciembre de 1999 ratificó derechos fundamentales de los trabajadores, ya consagrados en las Constituciones de 1947 y de 1961, como el derecho a sindicalización; la autonomía de los sindicatos frente al patrono y el estado; el derecho a contratación colectiva; el derecho a huelga; el derecho a la seguridad social como servicio público y la obligación del Estado para garantizarlo; el derecho al trabajo; y estableció la inclusión de nuevos derechos como la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo; el reconocimiento del trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social; el derecho de las amas de casa a la seguridad social; la progresividad de los derechos laborales y su carácter irrenunciable; y finalmente destacaba la reducción de la jornada de trabajo diurna de 48 a 44 horas semanales (López Sánchez, 2017a, 34-50).

Los derechos de los trabajadores que fueron consagrados en la Constitución impulsada por Chávez en 1999, que provienen de las visiones más progresistas del Estado de Bienestar⁹, tienen el mérito histórico de haber sido ratificados luego de dos décadas de aplicación de políticas neoliberales a nivel mundial, que llevaban entre sus objetivos principales el aniquilar dichos derechos y “flexibilizar” las relaciones laborales.

La “revolución” de Chávez ratificó y consagró constitucionalmente unos derechos laborales que el capitalismo mundial había dejado de defender desde un cuarto de siglo antes. A partir de allí los trabajadores venezolanos se lanzaron en los años sucesivos a un proceso de profunda reorganización de sus estructuras sindicales, enarbolando propuestas reivindicativas y políticas que se enfrentaban y trascendían la década neoliberal anterior y abrían perspectivas a un rumbo anticapitalista del proceso político venezolano (Chirino, 2005).

La resistencia al paro golpista-patronal que las elites puntofijistas ejecutaron entre diciembre de 2002 y febrero de 2003 tratando de derrocar al gobierno de Chávez, generó la elevación de la lucha obrera

9 En los principales países capitalistas occidentales los derechos laborales no tienen rango constitucional, sino que aparecen en leyes y normativas específicas. Venezuela fue uno de los primeros países, luego de México (Constitución de Querétaro, 1917), en reafirmar constitucionalmente los derechos fundamentales de la clase trabajadora, con la Constitución surgida de la Asamblea Constituyente de 1947.

en todo el país. El fracaso de ese paro fue tomado como una victoria por los sectores de trabajadores bolivarianos que comenzaban a organizarse de manera independiente, al margen de la CTV (que fue una de las organizaciones convocantes de ese paro, junto a Fedecámaras).

A partir de 2003 los trabajadores venezolanos recuperaron las empresas que se encontraban paralizadas y exigieron la nacionalización/renacionalización de industrias en manos del sector privado nacional o extranjero. Al mismo tiempo la lucha obrera comenzó a ensayar formas novedosas de organización de la actividad productiva mediante los consejos de trabajadores y el control obrero, propuestas que encontraron eco en el gobierno bolivariano y terminaron convirtiéndose en políticas de Estado (López, 2017a, 34-50).

El control obrero que surgió como consigna de acción durante el paro patronal de 2002-2003, lanzó las consignas de “fábrica parada, fábrica ocupada” y de “control por los trabajadores de la actividad productiva”, llevando a la ocupación por sus trabajadores de numerosas empresas que habían parado su actividad, como ocurrió en Venepal (Carabobo), Venezolana de Válvulas (Los Teques), Textiles Fénix (Guárico), Perfumes Cristine-Carol (Caracas), y otras (López y Hernández, 2016, pp. 184-214).

A partir de 2004, cuando Chávez ordenó la expropiación de Venepal, el control obrero comenzó a ser considerado como política del estado venezolano. Aunque fue solo en 2009, luego de la renacionalización de Sidor, cuando el control obrero fue incluido como lineamiento principal de gobierno en lo que se conoció como Plan Guayana Socialista (López y Hernández, 2016, pp. 184-214).

El Control Obrero tenía por objetivo lograr el ejercicio pleno de la democracia participativa y protagónica por parte de los trabajadores, dentro y fuera de la fábrica (Adarfio, 2011, pp. 43-56). Esta experiencia de Control Obrero constituyó un experimento en la batalla de los trabajadores por reemplazar el Estado Burgués por un nuevo Estado de transición al socialismo, que no debía repetir los errores fatales de la experiencia soviética (Carcione, 2010, pp. 56-71).

Otra experiencia novedosa de organización de los trabajadores fueron los Delegados de Prevención y los Comités de Seguridad y Salud Laboral (CSSL), cuya promoción estuvo en manos del INPSA-SEL¹⁰, instituto adscrito al Ministerio del Trabajo. Su expansión por todo el país y por diversas empresas e instituciones públicas y privadas los convirtió en una herramienta organizativa casi tan generalizada como los propios sindicatos. Los delegados de prevención han

10 Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, adscrito al Ministerio del Trabajo.

cumplido un papel como defensores de los derechos de los trabajadores sobre todo en las pequeñas empresas, donde no existen sindicatos (López Sánchez, 2017b).

Una de las expresiones más relevantes del programa antineoliberal ejecutado durante el gobierno de Chávez fueron las nacionalizaciones de diferentes empresas a lo largo y ancho del país (Carcione, 2009):

- Febrero de 2007: Nacionalización de los campos petroleros operados en la Faja del Orinoco por empresas transnacionales de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Noruega.
- Mayo de 2007: Nacionalización de la compañía Electricidad de Caracas, creación de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y estatización de las empresas privadas regionales.
- Mayo de 2008: Estatización de la CANTV, comprando las acciones de la empresa estadounidense Verizon.
- Abril de 2008: Renacionalización de la Siderúrgica del Orinoco¹¹ (SIDOR), que era propiedad de la multinacional ítalo-argentina Techint, empresa muy vinculada al gobierno de los Kirchner.
- 2008: Chávez ordena la nacionalización de las principales industrias cementeras del país, que eran propiedad de la mexicana Cemex, de la suiza Holcim y la francesa Lafarge.
- Mayo de 2009: Nacionalización de las empresas briqueteras como MATESSI, y la fábrica de tubos TAVSA.
- 2009: Estatización de 76 empresas medianas que prestaban servicios a la industria petrolera.
- 2009: El presidente Chávez ordena la nacionalización de varias empresas de alimentos como la procesadora de sardinas La Gaviota y Café Fama de América.
- 2009: Nacionalización del Banco de Venezuela, que era propiedad del grupo español Santander.
- 2007-2009: Ocupación de tierras ociosas y estatización de numerosos latifundios en varios estados del país.

Lo más resaltante de este proceso lo constituyó la re-nacionalización de la Siderúrgica del Orinoco, SIDOR, como resultado de una larga lucha de sus trabajadores. SIDOR había sido privatizada en los noventa

11 Había sido privatizada durante el segundo gobierno de Rafael Caldera, en la década de 1990.

y entregada a un consorcio privado argentino¹² (Giacalone, 2003, pp. 53-87). Luego de quince meses de lucha de sus trabajadores, la decisión del presidente Chávez de estatizar la empresa, fue el detonante para que se fortaleciera el “Control Obrero” y se aprobara en 2009 el Plan Guayana Socialista (Pérez Borges y otros, 2009, pp. 23-51).

El Plan Guayana Socialista (PGS) representó el punto culminante de los esfuerzos realizados durante el gobierno de Hugo Chávez en asumir un camino que desmontara las políticas neoliberales de las décadas anteriores y avanzara en la definición de modelos productivos anticapitalistas (Comisión de Sistematización, 2013).

Dicho plan encontró desde un primer momento la resistencia y sabotaje tanto de la burocracia incrustada en las estructuras del estado (empresas básicas y ministerios) como de los sindicatos (Pérez Borges, 2010, pp. 63-97)¹³. Ambos sectores reflejaban de alguna manera los intereses de las grandes multinacionales del hierro y del aluminio que habían sido afectadas por las nacionalizaciones y se proponían recuperar los negocios que la revolución les había arrebatado (Carcione y Poliak, 2010, pp. 57-62).

Finalmente, la enfermedad de Chávez a mediados de 2011 terminó de debilitar las fuerzas que pugnaban por caminos alternativos al viejo recetario neoliberal y en el transcurso del año 2012 el PGS comenzó a ser desmantelado y abandonado por los ministerios y empresas involucradas. En ese desmantelamiento del PGS jugó un papel estelar la FSBT (García Romero, 2011; Rivero, 2010).

En mayo de 2012 se aprobó una nueva Ley del Trabajo¹⁴ (LOTTT), restituyendo los derechos conculcados en la reforma de Caldera del 97¹⁵ e incorporando nuevas reivindicaciones laborales y políticas para la clase trabajadora (López, 2017b). La aprobación de la nueva LOTTT, quedó como un aporte jurídico destacado en la lucha de los trabaja-

12 Sidor fue subastada en diciembre de 1997 y otorgada en concesión al Consorcio Amazonia, donde era mayoría el Grupo Techint de Argentina. Otras empresas participantes en el consorcio: Siderar (Argentina), Tamsa (México), Hylsa (México), Sivensa (Venezuela) y Usiminas (Brasil)

13 La corriente sindical más alineada con la burocracia gubernamental ha sido a todo lo largo del período Chávez-Maduro la denominada FSBT o FBT (Fuerza Socialista Bolivariana de Trabajadores), que reproduce las mismas prácticas de la vieja CTV y del Buró Sindical de Acción Democrática.

14 Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, LOTTT.

15 El punto principal, que había sido elemento central del discurso programático de Chávez durante la campaña electoral de 1998, fue la restitución del cálculo retroactivo para el pago de antigüedades (pago de las prestaciones sociales en base al último salario). Además, se restableció la indemnización doble en caso de despido injustificado.

dores contra el neoliberalismo y contra la explotación capitalista en general, según la definición contemplada en su artículo 25, que dice: “El proceso social de trabajo tiene como objetivo esencial superar las formas de explotación capitalista” (López, 2017a, pp. 34-50).

Otro punto destacado de lo ejecutado por Chávez fue la confrontación al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), proyecto empujado por el gobierno de los Estados Unidos y que terminó siendo derrotado en la IV Cumbre de las Américas en Mar de Plata (noviembre de 2005), con la participación destacada de los presidentes de los países del Mercosur¹⁶, que coincidieron con Chávez para rechazar la propuesta estadounidense y asestar una derrota histórica a los intereses norteamericanos que estaban allí presentes con George Bush y Condoleeza Rice (Karg y Lewitt, 2015).

El período de gobierno de Hugo Chávez contribuyó a una mejora relativa del ingreso de los trabajadores y de sus condiciones de vida, al introducir las misiones sociales, concebidas como “salario social”. Programas de salud en los barrios, construcción de viviendas populares, programas de alimentación escolar, ventas a precios populares de vehículos y electrodomésticos, expansión del sistema universitario público, expansión del sistema de pensiones a las amas de casa y trabajadores no cotizantes, entre otros, permitieron mejorar las condiciones generales de vida de la clase trabajadora. Todo esto a pesar de que los salarios reales, aunque tuvieron períodos de aumento entre 1999-2001 y 2003-2006, en la primera década del chavismo (1999-2010) tuvieron un descenso general del 20% (Mateo Tomé, 2010, pp. 43-57).

Si bien el programa ejecutado por Chávez no fue, estrictamente, un programa socialista ni comunista, su desempeño al frente del Estado implicó un giro de 180 grados con relación a los anteriores gobiernos de Venezuela desde la Independencia.

Chávez rompió radicalmente con la anterior subordinación ante el gobierno de los Estados Unidos y se alejó del llamado Bloque Occidental (USA y la Unión Europea), acercándose a potencias emergentes como China, Rusia, Irán y Turquía. Se enfrentó a la tradicional hegemonía estadounidense en Latinoamérica, cuestionando con fuerza a la Organización de Estados Americanos (OEA), y promoviendo la creación de organismos de integración alternativos como la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y ALBA (Alternativa Bolivariana para los pueblos de América).

Mantuvo un acercamiento permanente con el gobierno comunista de Fidel Castro en Cuba y durante su mandato se produjo en todo el continente latinoamericano un ascenso de las fuerzas de izquierda

16 Néstor Kirchner, Lula da Silva y Tabaré Vázquez.

que se tradujo en los triunfos electorales de Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff¹⁷ (2011-2016) en Brasil, Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en Argentina, Rafael Correa en Ecuador (2007-2017), Evo Morales en Bolivia (2006-2019), Tabaré Vázquez (2005-2010) y Pepe Mujica (2010-2015) en Uruguay, Fernando Lugo¹⁸ en Paraguay (2008-2012), Michelle Bachelet en Chile (2006-2010), Daniel Ortega en Nicaragua (2007-2021), Mauricio Funes en El Salvador (2009-2014), Manuel Zelaya¹⁹ en Honduras (2006-2009) y Ollanta Humala en Perú (2011-2016).

El período de Chávez en la presidencia de Venezuela favoreció la modificación radical de todo el panorama político latinoamericano. El discurso antiimperialista, enfrentado al gobierno de los Estados Unidos y su tradicional influencia en el continente, se fortaleció como nunca antes en la historia, contribuyendo a identificar a Chávez y al chavismo como una fuerza política “comunista”, aunque en sus definiciones y en su programa no lo fueran. En los hechos, la acusación principal hacia Chávez no lo calificaba como “populista”, sino como “comunista”. La influencia del chavismo por toda Latinoamérica resucitó el discurso de la antigua “guerra fría” en boca de los voceros del gobierno de los Estados Unidos y de sus fuerzas aliadas a lo largo y ancho del continente, aunque esta ya hubiese fenecido en 1991 luego del derrumbe de la Unión Soviética.

La campaña levantada por el gobierno de los Estados Unidos contra Chávez y la influencia del chavismo en el continente implicó resucitar en pleno siglo XXI la lucha contra la “expansión comunista” realizada en las décadas de 1960, 70 y 80.

La muerte de Chávez en 2013 y la asunción de Nicolás Maduro (2013-2021) como presidente significaron el abandono casi total de ese programa antineoliberal, y el regreso progresivo de las mismas políticas económicas ejecutadas en la última década del siglo XX. Maduro mantiene el mismo discurso radical de su antecesor, y se presen-

17 Destituida por el Poder Legislativo en su segundo mandato presidencial.

18 Destituido por el Poder Legislativo en 2012.

19 Derrocado por un golpe militar en 2009.

ta como un gobierno genuinamente “obrerista”²⁰ y “socialista”²¹, que cuenta con el respaldo de los sindicatos mayoritarios (López, 2012, pp. 145-181). Sin embargo, ha ejecutado un verdadero cambio de rumbo económico, abriendo las puertas a las políticas neoliberales, en un marco de creciente autoritarismo (Alarcón, 2017; Luna, 2019; Vivas, 2019; Sutherland, 2020).

EL REGRESO AL PASADO NEOLIBERAL Y AUTORITARIO BAJO EL GOBIERNO DE NICOLÁS MADURO

La realidad de la economía venezolana a más de ocho años de gobierno de Nicolás Maduro se ubica como el peor desempeño del mundo y uno de los cinco peores resultados en la historia del capitalismo en los últimos setenta años (Straka, 2019; Bermúdez, 2016; Sutherland, 2018; Vera, 2018). Una contracción de más del 50% del PIB en siete años; cierre del 60% de las fábricas existentes para 1999; un salario mínimo de menos de 3 dólares mensuales y una canasta alimentaria de 300 dólares al mes; una sociedad que recibió un billón de dólares en el boom petrolero entre 2004-2008 y que sin haber pasado por una guerra tiene hoy una economía totalmente destruida (Straka, 2019). Resaltando la ausencia de un plan económico coherente, y la adopción de medidas que se contradicen entre sí y que profundizan cada día el colapso de la economía venezolana (Sutherland, 2018).

El fracaso de los proyectos de desarrollo endógeno debido a la mala gestión estatal de las empresas nacionalizadas se combinó con la caída de los precios del petróleo en la última década, generando una caída de la producción y el incremento de la deuda externa para cubrir la financiación del aparato estatal y las importaciones de manufacturas y alimentos. Estos son los antecedentes del escenario actual de hiperinflación, sobreendeudamiento y caída de la producción petrolera (Vera, 2018). En esta coyuntura, es importante no olvidar que esta crisis ha sido profundizada hasta situaciones de colapso in-

20 Maduro fue activista sindical del Metro de Caracas, empresa en la cual trabajó como chofer de autobuses en la década de los 80. En la disputa escenificada al interior de las fuerzas sindicales chavistas a partir del 2003, se impuso la tendencia FBT, gracias al gran respaldo dado por Chávez a su principal dirigente Nicolás Maduro. La conformación de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) en noviembre de 2011 se realizó bajo control casi total de la FSBT, siendo desplazadas completamente las tendencias más radicales.

21 Maduro hizo una primera militancia en el partido Liga Socialista, organización marxista-leninista que existió desde la década de los 70 hasta su integración en el PSUV cuando este último fue conformado por Chávez en 2007. La Liga Socialista envió a Maduro a Cuba en algún momento de la década de los 80, para formarse políticamente.

ducido por el bloqueo de activos y sanciones económicas y financieras aplicadas por Estados Unidos y sus aliados internacionales en el curso de 2017-2021 (Ayala, 2019).

El proyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO) representa tal vez el más claro ejemplo de propuesta económica neoliberal que entregó a diversas empresas multinacionales la explotación de oro, diamantes, coltán, hierro y otros minerales en un espacio de los Estados Bolívar y Amazonas de 112 mil kilómetros cuadrados, equivalente al 12% del territorio nacional (Lander, 2016). La aprobación del AMO no cumplió la exigencia constitucional de consulta a las comunidades indígenas que habitan en dicho territorio. El proyecto AMO subordina las diferencias que puedan existir entre el Estado venezolano y las empresas contratistas a los tribunales internacionales (CIADI), a pesar de las disposiciones constitucionales expresas que rechazan toda intromisión de tribunales extranjeros en la economía nacional²² (El Estímulo, 2016; Aporrea, 2016). A semejanza de las regiones maquiladoras del neoliberalismo tradicional, el AMO no reconoce la vigencia de los derechos laborales contemplados en la Constitución y en la LOTTT en las zonas objeto de concesiones mineras.

Como lo plantea Edgardo Lander:

El gobierno venezolano está tomando en secreto decisiones de carácter estratégico que podrían estar definiendo el futuro del país por el resto del siglo, sin debate alguno en el seno de la sociedad. Mediante el decreto presidencial del Arco Minero del Orinoco, se decidió la creación de una especie de zona franca minera, bajo control militar, donde se suspenden preventivamente muchos de los derechos constitucionales entre otros, los derechos de los pueblos indígenas. Se ha llegado acuerdos con 130 o 150 empresas, sin que [...] tengamos idea de cuáles son dichas empresas, y cuál es el contenido de dichos contratos. (Lander, 2016)

En materia de política salarial, el desempeño de los salarios durante el período 1999-2021 expresa una curva muy semejante al recorrido presentado en tiempos del puntofijismo (1958-1999)²³, de ascenso en

22 Durante la campaña electoral de 1998, Chávez enfatizó en que esas cláusulas presentes en los contratos de la apertura petrolera (permitir que las diferencias fueran arbitradas en tribunales extranjeros) eran equivalentes a un acto de traición a la patria. Chávez desconoció la concesión realizada por el gobierno de Caldera a la empresa minera canadiense Gold Reserve, y rechazó pagar la indemnización dictada por el CIADI cuando dicha empresa recurrió a dicho tribunal. Maduro, actuando a la inversa, contrató de nuevo con la Gold Reserve y pagó la indemnización que Chávez había desconocido.

23 Con la diferencia que el primer período fue de 40 años aproximadamente y el proceso chavista-madurista apenas ha recorrido un poco más de 20 años.

la primera mitad del período (1999-2007) y de caída en los años siguientes (2008-2021). Con la diferencia de que la caída salarial de los últimos años alcanza niveles no vistos en ninguna de las experiencias neoliberales del continente, pues en comparación con los salarios reales de los años 2006-2007, el descenso alcanza hasta un 96% del mismo para 2020 (Sutherland, 2020).

La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUV, afirma que la caída del salario en el período 2001-2020 alcanza hasta el 99%:

En cuanto al monto en dólares de los sueldos básicos, en enero de 2001 los profesores instructores TC²⁴ ganaban el equivalente a USD 903,43 y los titulares DE un monto de USD 2.659,63 [...]. Hoy todos ganan alrededor del 1% de lo que ganaban entonces. (FAPUV, 2020)

Este abismal derrumbe de los salarios reales en un 99 %, es lo que explica la enorme migración de más de cinco millones de personas que han salido de Venezuela en los últimos 8 años. El retroceso salarial de los trabajadores venezolanos es tan pronunciado que el salario en tiempos de la gran huelga petrolera del año 1936, 5 bolívares de salario diario (equivalente a 1,57 \$ diarios por jornada), implica que hoy en 2021 un trabajador en Venezuela recibe como salario mensual casi el mismo monto²⁵ que un trabajador petrolero ganaba en un día de trabajo hace 84 años (Biardeau, 2020).

El gobierno de Maduro, con el memorando 2792 del ministerio del trabajo de octubre de 2018 (La Izquierda Diario, 2018a), desconoció todas las contrataciones colectivas vigentes en la administración pública y en el sector privado, barriendo en un solo acto las conquistas obreras que se habían logrado durante el período de Hugo Chávez. Como afirma el dirigente sindical clasista Orlando Chirino: “En las relaciones laborales de los últimos 30 años un gobierno no había producido un instrumento jurídico tan reaccionario y antiobrero como el memorándum 2792” (Chirino, 2019).

La política del gobierno ha sido la de “aplanar” las tablas salariales, estableciendo diferencias mínimas entre los salarios iniciales y las escalas más altas de remuneración, violentando el principio constitucional

24 TC: Tiempo Completo. DE: Dedicación Exclusiva. Profesores Instructores: Nivel de ingreso en el escalafón universitario. Profesores Titulares: Máximo escalafón universitario.

25 El salario mínimo en Venezuela estaba al 4 de julio de 2020, en 400.000 Bs. mensuales. Al cambio oficial de 202.000 bolívares por dólar, equivale a 1,98 dólares de ingreso mensual. Para marzo de 2022, el salario mínimo era de 7 bolívares mensuales, equivalente a 1,59 dólares mensuales.

de progresividad en los derechos laborales, desconociendo la antigüedad, la capacitación profesional y técnica, los grados de responsabilidad y la meritocracia de los trabajadores (La Izquierda Diario, 2018a).

En semejanza a los programas neoliberales aplicados por los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera entre 1989 y 1999, podemos comprobar la ejecución de los mismos por el gobierno de Nicolás Maduro:

- Liberación del control de cambio y libre flotación de la moneda con respecto al dólar. Desde 2017 el bolívar se devalúa a ritmo de hiperinflación.
- Libre importación de alimentos y otros productos libres de aranceles. Permisos de importación que se han otorgado a empresarios afines al gobierno.
- Liberación de precios de los alimentos y demás productos de la canasta básica. Cuando se establecen regulaciones de precios a una lista específica de productos, el monto necesario para adquirir dicha lista supera en más de 20 veces al salario mínimo oficial (Aporrea, 2020).
- Pulverización de los salarios reales, que en relación al dólar se han reducido entre un 96% y un 99% en 20 años.
- Mantenimiento del IVA como un impuesto regresivo que pecha a los consumidores.
- Procesos de privatización en ramas principales de industrias como petróleo, hierro, aluminio, oro, diamantes, y en servicios como la distribución de gasolina, que por ley se supone que está reservada al estado. El precio “no regulado” de la gasolina lo determinó el gobierno en 0,50\$ x litro, introduciendo al dólar como moneda de uso oficial en el país (Vázquez Heredia, 2020).
- Flexibilización laboral casi total, con el memorando 2792 que desconoce los derechos laborales consagrados en la propia Constitución y en la LOTTT. (Ministerio del Trabajo, 2018).
- Limitaciones de las políticas sociales denominadas “misiones”, las cuales tienen mayor efectividad en la capital Caracas, y son casi inexistentes en el resto de ciudades y pueblos (Transparencia, 2020). A las misiones sociales se ha incorporado en los últimos años la entrega del CLAP²⁶ y de bonos a quienes poseen

26 Caja de alimentos que provee el gobierno a trabajadores y familias a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción.

el “carnet de la patria” (Aula Abierta, 2018), entrega que es de forma aleatoria e irregular²⁷.

Al mismo tiempo, el gobierno de Maduro ha desarrollado un importante perfil autoritario, manifestado en:

- El gobierno ha suspendido la vigencia de la Constitución Nacional mediante la llamada “Ley Antibloqueo”²⁸ (LAB), aprobada por la anticonstitucional Asamblea Constituyente (2017-2020), la cual le permite al presidente de la República flexibilizar y suspender regulaciones y normativas legales y constitucionales “para adelantar una reorganización y reestructuración de los entes públicos y empresas del Estado, incluyendo la modificación del régimen empresarial, modelo de negocios y la participación accionaria del Estado en las empresas mixtas y públicas, en el contexto de una política de apertura de la economía al capital nacional e internacional (Márquez, 2021).
- La LAB también faculta al presidente para negociar los activos y pasivos de la República a fin de generar ingresos, lo cual, dicho sin eufemismo, es una autorización abierta para liquidar los activos de la República a través de un proceso de privatización y de renegociación de los pasivos financieros. Todo ello, sin estar sometido a los controles legales y constitucionales (Márquez, 2021).
- La LAB establece mecanismos excepcionales de contratación, un régimen de confidencialidad para todas las decisiones económicas del ejecutivo, y somete las controversias con inversionistas extranjeros a tribunales foráneos, todo lo cual viola disposiciones expresas de la Constitución, anula todas las funciones contraloras de la Asamblea Nacional y termina aboliendo el Estado de Derecho en Venezuela (Márquez, 2021).
- La Ley de Regionalización (decreto-ley de 2014) y la Ley de Zonas Económicas Especiales (proyecto de 2021) apuntan a una reorganización del territorio de la República al margen de la división territorial consagrada en la Constitución, con las ca-

27 En ciudades principales de la provincia los CLAP llegan una o dos veces por año. Los bonos que se reparten a través del carnet de la patria no tienen regularidad en su entrega ni tienen montos fijos. No aportan ningún tipo de estabilidad a las familias trabajadoras. Generalmente su monto oscila entre uno y dos (1-2) dólares. Un poseedor del carnet puede pasar varios meses sin recibir un bono.

28 La justificación para aprobar esta ley han sido las sanciones económicas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela.

racterísticas de las “zonas de maquila” y enclaves extractivistas propios del capitalismo salvaje neoliberal, cuyas características son la supresión de impuestos, y la ausencia de regulaciones laborales y ambientales.

- La Ley “contra el odio” que ha servido para encarcelar a decenas de activistas opositores por el solo hecho de realizar críticas a las acciones del gobierno (La Izquierda Diario, 2018b) (Crónica Uno, 2020; Provea, 2021).
- La suspensión indefinida de todas las elecciones sindicales y gremiales, el desconocimiento de las federaciones mayoritarias de trabajadores, y la utilización de pequeñas organizaciones sindicales afines al gobierno para simular una inexistente “democracia obrera”.

CONSIDERACIONES FINALES

Más allá de los importantes errores cometidos en la política económica de su gestión, el gobierno de Chávez realizó intentos significativos por trascender el neoliberalismo y fomentar una economía productiva sobre bases de independencia económica y participación popular. Durante la primera década del siglo XXI, en Venezuela se escenificaron políticas de gobierno que pretendían dejar atrás el rentismo petrolero y avanzar a una economía socialista.

Tras la muerte de Chávez en 2013, el neoliberalismo y el autoritarismo ha regresado bajo el gobierno de Nicolás Maduro, que presume ser todo lo contrario. La economista Pascualina Curcio (2020), destacada defensora del gobierno de Nicolás Maduro, reconoce cómo se ha modificado regresivamente la distribución del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2014 y 2017²⁹. Usando un ejemplo didáctico, Curcio explica que en 2014 “la torta de la economía venezolana”, repartida en 16 trozos, se distribuyó en 7 trozos para la burguesía, 7 para los asalariados y 2 para el estado (Curcio, 2020). En 2017, con una torta un tercio más pequeña que la de 2014 (la economía se redujo, según el BCV, 34% entre 2014 y 2017), a la burguesía le tocaron 10 trozos, a los asalariados 5 y al estado 1 trozo. En términos de precios y salarios, entre 2014 y 2017 los precios aumentaron 10.013% y los salarios apenas 6.436% (Curcio, 2020). La misma Curcio reconoce que esa regresión distributiva del PIB se ha acentuado aun más entre 2017 y 2020.

29 Llega hasta 2017 por ser el último año en que el Banco Central de Venezuela (BCV) ha publicado estadísticas.

Algunas consecuencias de estas políticas neoliberales las expuso recientemente la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución (PCDC, 2020):

El reciente estudio de Caritas, “Nutrición infantil y seguridad alimentaria” de abril 2020 (Caritas, 2020) detectó que la desnutrición grave de los niños menores de cinco años creció, en apenas 6 meses, en un 5,78 %, al pasar de 11,5% en noviembre de 2019 a 17,3% en abril de 2020. Otro hallazgo importante de esa investigación es que en ese mismo período disminuyó en casi un tercio, el número de hogares con acceso a los alimentos subsidiados por el Estado a través de las “cajas CLAP” de 73% a 41 %, mientras su inseguridad alimentaria creció en los últimos seis meses de 32,2% a 40% del cual el 21% sufre de inseguridad alimentaria grave. Al comparar estas cifras con las plasmadas en el informe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA), elaborado con la autorización del gobierno de Nicolás Maduro antes de que se decretara la cuarentena (2019), se observa que hay una fuerte aceleración de la desnutrición vinculada con el incremento de la pobreza y la precarización social masiva. Estas son señales inequívocas que comienzan a develar el rostro pavoroso de una hambruna en progreso.

El autodenominado carácter antiimperialista del gobierno de Maduro³⁰, que enfrenta la intromisión del gobierno de los Estados Unidos y de sus aliados de la Unión Europea en los asuntos internos de Venezuela, injerencia que busca explícitamente la salida de Maduro del poder y la asunción de un liderazgo político dócil a los intereses de las grandes potencias occidentales, ha ejecutado de manera simultánea un plan neoliberal de privatizaciones, flexibilización laboral y represión política contra el pueblo que lucha.

En la realidad de los hechos, Nicolás Maduro sí puede considerarse como un gobierno con similitudes a los regímenes populistas del siglo XX latinoamericano, por el predominio de un discurso demagógico sumamente radical que no concuerda para nada con una ejecución autoritaria y neoliberal, de espaldas al pueblo y a los intereses del desarrollo nacional.

Una realidad compleja y contradictoria, que demuestra cómo los intereses del gran capital multinacional no tienen fronteras ideológicas, y que el programa económico neoliberal puede ser ejecutado por gobiernos que se declaran formalmente enemigos de ese mismo neoliberalismo.

30 Antiimperialista con relación a occidente. Al mismo tiempo el gobierno de Maduro se ha alineado con el Bloque “Oriental” conformado principalmente por China y Rusia, que en términos económicos no está distanciado de la filosofía neoliberal y por el contrario algunos analistas como Hernández Parra (2020) señalan a China como el nuevo modelo que inspira al Fondo Monetario Internacional.

BIBLIOGRAFÍA

- Adarfio, A. (2011). El Control Obrero en el Nuevo Modelo Productivo. *Revista Comuna*, 3, 43-56. Caracas: Centro Internacional Miranda.
- Alarcón Puentes, J. (2017, 30 de octubre). *Maduro y su “socialismo” neoliberal*.
www.aporrea.org/actualidad/a254516.html
- Alayón, R. (2007). *La rebelión latinoamericana a la globalización neoliberal*. Caracas: Instituto de Altos Estudios “Pedro Gual”.
- Aporrea (2016, 08 de agosto). *Venezuela indemnizará a Gold Reserve por \$759 millones y conformará empresa mixta tras acuerdo del Arco Minero*. www.aporrea.org/economia/n295027.html
- Aporrea (2020, 27 de abril). *Conozca el precio en dólares que impuso el gobierno a 27 productos regulados*. www.aporrea.org/economia/n354661.html
- Aula Abierta (2018, 31 de agosto). *Carnet de la Patria: Discriminación para el control político*. <http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2018/08/31/carne-de-la-patria-discriminacion-para-el-control-politico/>
- Ayala, Mario (2019). Estructura y coyuntura en la crisis venezolana. *Cuadernos de Coyuntura*, 4, 21-30. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Sociales. <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/CuadernosConyuntura/issue/view/1980>
- Barrios-Ferrer, G. (1990). Los sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989: una aproximación histórico-política. *Argos, Revista de la División de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar*, 11. Caracas.
- Bermúdez, Ángel (2016). Cómo Venezuela pasó de la bonanza petrolera a la emergencia económica. *BBC Mundo*. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160219_venezuela_bonanza_petroleo_crisis_economica_ab
- Biardeau, Javier (2020, 14 de junio). *Estructura de repetición del rentismo y conciencia sumisa-enajenada*. www.aporrea.org/ideologia/a291706.html.
- Biardeau, Javier. (2015, 22 de junio). *Hugo Chávez y la Declaración del “Socialismo” en el Foro Social de Porto Alegre*. www.aporrea.org/internacionales/a209620.html
- Carcione, C. (2009). Lo que fue privatizado, nacionalícese. *Revista Comuna*, 1, 13-19. Caracas: Centro Internacional Miranda.

- Carcione, Carlos (2010). *Experiencias de Democracia Obrera en la Venezuela Bolivariana*. *Revista Comuna*, 2, 56-71. Caracas: Centro Internacional Miranda.
- Carcione, Carlos y Poliak, Martín (2010). El Plan Guayana Socialista en la encrucijada. *Revista Comuna*, 3, 57-62. Caracas: Centro Internacional Miranda.
- Caritas Venezuela (2020, abril). *Nutrición infantil y seguridad alimentaria*. <http://caritasvenezuela.org/wp-content/uploads/2020/06/Caritas-Informe-de-Desnutricion-Abril-2020.pdf>
- Carvalho, Gastón y López Maya, Margarita (1989). *Crisis en el sistema político venezolano*. *Cuadernos del Cendes*, 10, 47-53. Caracas: Centro Internacional Miranda.
- Chirino, Orlando (2005). *Orlando Chirino responde*. Caracas: Equipo Editorial Aporrea.org.
- Chirino, Orlando (2019, 21 de mayo). *El memorándum 2792 es una reforma laboral antiobrera y reaccionaria*. <http://deslinde2011.blogspot.com/2019/05/orlando-chirino-el-memorandum-2792-es.html>
- Colmenarez, Elio (1989). *La insurrección de febrero*. Caracas: Ediciones La Chispa.
- Comisión de Sistematización Plan Guayana Socialista (2013). *Sistematización del Balance del Plan Guayana Socialista*. En www.aporrea.org. www.aporrea.org/trabajadores/a175676.html.
- Crónica Uno (2020, 7 de febrero). *Luego de 8 días presos, fueron liberados los tres sindicalistas de Sucre*. <https://cronica.uno/luego-de-8-dias-presos-fueron-liberados-los-tres-sindicalistas-de-sucre/>
- Curcio, Pascualina (2020, 27 de julio). *La economía: números imposibles de manipular y no para insultar*. *Diario Últimas Noticias*. <https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/opinion/abrebrecha-la-economia-numeros-imposibles-de-manipular-y-no-para-insultar/>
- El Estímulo (2016, 9 de agosto). *Venezuela indemnizará a Gold Reserve con \$769 millones por expropiación*. *Redacción El Estímulo*. <https://elestimulo.com/venezuela-indemnizara-a-gold-reserve-con-769-millones-por-toma-de-activos/>
- Ellner, Steve (2009). *Las reformas neoliberales y la crisis política venezolana, 1989-1999: antecedentes de la llegada de Hugo Chávez al poder*. En *Diez años de revolución en Venezuela: Historia, balance y perspectivas (1999-2009)*. Buenos Aires: Editorial Maipue.

- España, Luis Pedro (1989). *Un estallido social no esperado*. Revista SIC, 513, 118-119, abril. Caracas: Centro Gumilla.
- FAPUV (2020, 10 de junio). *Significado y alcance de la recuperación del salario y la seguridad social de los profesores universitarios de Venezuela*. Caracas: Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela. <https://infopapuv.com/2020/06/10/significado-y-alcance-de-la-recuperacion-del-salario-y-la-seguridad-social-de-los-profesores-universitarios-de-venezuela/>
- García Romero, Antonio (2011, 20 de junio). La contrarrevolución obrera: FBT. *www.aporrea.org*. [www.aporrea.org](http://www.aporrea.org/endogeno/a125298.html). www.aporrea.org/endogeno/a125298.html
- Giacalone, Rita (2003). Privatización del acero e internacionalización de empresas en Argentina, México y Venezuela. *Iberoamericana. Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies*, XXXIII, 2, 53-87. <https://www.iberoamericana.se/articles/abstract/10.16993/ibero.380/>
- Hernández Parra, P. (2020, 16 de noviembre). El Gran Reinicio. *www.aporrea.org*. [www.aporrea.org](https://m.aporrea.org/ideologia/a297305.html). <https://m.aporrea.org/ideologia/a297305.html>
- Karg, J. M. y Lewit, A. (2015). *Del No al ALCA a Unasur. Diez años después de Mar del Plata*. Revista Idelcoop, 217, noviembre. <https://www.idelcoop.org.ar/sites/www.idelcoop.org.ar/files/revista/articulos/pdf/revista-217-web-resenas-01.pdf>
- La Izquierda Diario (2018a, 28 de noviembre). Trabajadores marcharon en Caracas contra el plan de ajuste de Maduro y los empresarios. *La Izquierda Diario*. <http://www.laizquierdadiario.com/ve/Trabajadores-marcharon-en-Caracas-contr-a-el-plan-de-ajuste-de-Maduro-y-los-empresarios>
- La Izquierda Diario (2018b, 29 de noviembre). Detienen al dirigente sindical Rubén González regresando de la marcha convocada por la Intersectorial de Trabajadores. *La Izquierda Diario*. <http://www.laizquierdadiario.com/ve/Detienen-al-dirigente-sindical-Ruben-Gonzalez-regresando-de-la-marcha-convocada-por-la>
- Lander, Edgardo (2016, 16 de agosto). *Comentarios sobre el acuerdo con la Gold Reserve*. <https://www.aporrea.org/contraloria/a232524.html>
- Lander, Edgardo y Uribe, Gabriela (1995). Acción Social, Efectividad Simbólica y Nuevos Ambitos de lo Político. En Lander, Edgardo, *Neoliberalismo, Sociedad Civil y Democracia. Ensayos Sobre América Latina y Venezuela*. Caracas: Universidad Central de Venezuela. <http://biblioteca.clacso.edu.ar/Venezuela/faces-ucv/20120815120406/lander.pdf>

- López Maya, Margarita (1994). Venezuela: El impacto de sus reformas políticas durante el lapso crítico de 1989-1993. *Cuadernos del Cendes*, 26, mayo-agosto, 27-54. Caracas: Universidad Central de Venezuela.
- López Sánchez, Roberto (2012). El movimiento de trabajadores en la Venezuela bolivariana. Configuración de tendencias. *Revista Espacio Abierto*, 21(1), enero-marzo, 145-181. Maracaibo: Universidad del Zulia. <http://produccioncientificaluz.org/index.php/espacio/article/view/1680>
- López Sánchez, Roberto (2017a). El movimiento de trabajadores durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2012). *Revista Notas Históricas y Geográficas*, 19, septiembre-diciembre, 34-50. Chile: Departamento Disciplinario de Historia de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. <http://revistanhyg.cl/articulos/category/num-19-sep-dic-2017/>
- López Sánchez, Roberto (2017b). *El movimiento de trabajadores en Venezuela durante la revolución bolivariana: 1999-2012*. Caracas: Fundación Editorial El Perro y La Rana, Colección Alfredo Maneiro. <http://www.elperroylarana.gob.ve/authors/roberto-López-Sánchez/>
- López Sánchez, Roberto y Carmen Alicia Hernández (2016). Control obrero y consejos de trabajadores, nuevas formas de gestión productiva. *Revista Opción*, 32(80), agosto, 184-214. Maracaibo: Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia. <http://www.redalyc.org/pdf/310/31047691009.pdf>.
- Luna, Marcos (2019, 11 de octubre). El paquetazo de Moreno nos distrae del paquetazo de Maduro. *Aporrea*. www.aporrea.org/economia/a283224.html
- Márquez Marín, Gustavo (2021, 30 de julio). El gobierno de Maduro construye un régimen autoritario neoliberal periférico y extractivista ampliado. *Aporrea*. www.aporrea.org/economia/a304634.html
- Martínez, Ibsen (2018, 20 de agosto). Chávez, Maduro y la Tercera Vía. *El País*. https://elpais.com/internacional/2018/08/20/america/1534802084_511115.html.
- Mateo Tomé, Juan Pablo (2010). La evolución de los salarios en Venezuela. *Boletín Económico de Información Comercial Española*, 2994, 1 al 15 de agosto, 43-57. https://www.researchgate.net/publication/45713345_La_evolucion_de_los_salarios_en_Venezuela_una_decada_de_contrastes
- Ministerio del Trabajo (2018). *Memorando-circular n° 2792. Lineamientos para ser implementados en las negociaciones*

colectivas de trabajo en el marco del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. https://www.laizquierdadiario.com/ve/IMG/pdf/lineamiento_para_las_negociaciones_colectivas-2.pdf

- PCDC (2020, 02 de julio). Acuerdo pre-electoral para atender la emergencia social. *Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución.* <https://www.aporrea.org/actualidad/a292368.html>
- Pérez Borges, Stalin (2010). Hacia un nuevo modelo sindical. *Revista Comuna*, 3, 63-97. Caracas: Centro Internacional Miranda.
- Pérez Borges, Stalin y otros (2009). La nacionalización de Sidor. *Revista Comuna*, 1, 23-51. Caracas: Centro Internacional Miranda.
- Provea (2021, 08 de agosto). Provea reclamó libertad para trabajadores petroleros presos. *El Nacional.* <https://www.elnacional.com/venezuela/provea-reclamo-libertad-para-los-trabajadores-petroleros-presos/>
- Rengifo, S. P. y Medina, J. J. (2019). El populismo en América Latina: debate en torno a una vaguedad conceptual. *R. Tecnol. Soc. Curitiba*, 15(36), 235-253, abr./jun. https://www.researchgate.net/publication/333472439_El_populismo_en_America_Latina_debate_en_torno_a_una_vaguedad_conceptual
- Rivero, Alcides (2010, 19 de noviembre). La coherencia de la FBT en Guayana. *Aporrea.* www.aporrea.org/trabajadores/a112509.html
- Rodríguez Rojas, Pedro (2010). Venezuela: del neoliberalismo al socialismo del siglo XXI. *Revista Política y Cultura*, 34, enero. México. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-77422010000200009
- SIC (1992). La salida de Carlos Andrés (editorial). *Revista SIC*, 546, julio, 250-251. Caracas: Centro Gumilla.
- Stanley, Miriam (2000). El populismo en América Latina. *Anuario del Departamento de Ciencias de la Comunicación*, 5. Rosario: Escuela de Comunicación Social Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales Universidad Nacional de Rosario / ArcaSur Editorial. <https://docer.com.ar/doc/xvec85v>
- Straka, Tomás (2019). 20 años de chavismo: El quiebre del “estado mágico”. *Revista Nueva Sociedad*, 280, marzo-abril. <https://nuso.org/articulo/20-anos-de-chavismo-el-quiebre-del-estado-magico/>.
- Sutherland, Manuel (2018). ¿Nicolás Maduro tiene un plan? “Socialismo”, hiperinflación y regresión social. *Nueva Sociedad*, agosto. <https://www.nuso.org/articulo/nicolas-maduro-tiene-un-plan/>

- Sutherland, Manuel (2020, 02 de mayo). Venezuela: Salario Cero. *Aporrea*. www.aporrea.org/economia/a290026.html
- Toussaint, Eric (2009). Latinoamérica: en pro de una integración regional y una desvinculación parcial del mercado capitalista mundial. En *Respuestas del Sur a la crisis económica mundial*. Caracas: Centro Internacional Miranda.
- Transparencia Venezuela (2020, 4 de abril). *Clap llega a su cuarto aniversario marcado por la corrupción y la improvisación*. <https://transparencia.org.ve/clap-llega-a-su-cuarto-aniversario-marcado-por-la-corrupcion-y-la-improvisacion/>
- Vásquez Heredia, Omar (2020, 01 de junio). Maduro anunció privatización y liberalización de facto del mercado interno de gasolina. *Aporrea*. www.aporrea.org/energia/a291164.html
- Vera, Leonardo (2018). ¿Cómo explicar la catástrofe económica venezolana? *Revista Nueva Sociedad*, 274, marzo-abril. <https://nuso.org/articulo/como-explicar-la-catastrofe-economica-venezolana/>
- Vilas, Carlos (1988). El populismo latinoamericano: un enfoque estructural. *Desarrollo Económico*, 28(111). <http://www.educ.ar>
- Vivas Santana, Javier (2019, 05 de junio). *Maduro aplica disimulado y tardío plan de ajuste neoliberal y apuran venta de Pdvs a chinos y rusos*. www.aporrea.org/actualidad/a279339.html

CRISIS DE LA DEMOCRACIA DE MERCADO Y LAS RESPUESTAS POPULISTAS: EL CASO DE EVO MORALES DE BOLIVIA

John Brown

LOS MOVIMIENTOS POPULISTAS surgen como respuestas a las crisis de representación por las cuales las élites son incapaces y se niegan a responder a las quejas de las personas (Arditi, 2005, p. 56). El populismo puede entonces ser entendido como una característica habitual de la política que representa un desafío subversivo al *statu quo* y como un punto de partida para la reconstrucción de un nuevo orden cuando el anterior ha perdido legitimidad (Laclau, 2005, p. 177). En efecto, el populismo puede entenderse como parte de un proceso de transformación social, un movimiento protector de la sociedad en respuesta a la expansión excesiva del libre mercado (Polanyi, 2000).

Cuando los intereses de los sectores más ricos de la sociedad se organizan en política, mientras que las cuestiones relativas a las clases populares son descartadas, la democracia pierde legitimidad. Cuando las diferencias entre los partidos de izquierda y derecha se estrechan, la indiferencia popular y la desconfianza hacia los partidos y las instituciones aumentan (Mair, 2013). La desconfianza en el sistema político junto con la abstinencia de participación abre espacio a los movimientos de oposición (Schmitter, 2019, p. 152). A medida que los partidos / políticos se separan de sus bases sociales tradicionales y que la desigualdad y la precariedad socioeconómica se afianzan, la democracia es vista por los sectores marginados como una fachada para

proteger los privilegios de las élites. Apelando a un sentido de peligro personal y a un sentido colectivo de exclusión política, los populistas pueden considerar que la clase política ha fracasado, y que seguirá fracasando, hasta que efectivamente los ciudadanos prescindan de cualquier perspectiva realista de una vida mejor (Dunn, 2019, p. 56).

Tal descomposición de la legitimidad del modelo democrático imperante ocurrió en varios estados latinoamericanos al final del milenio. Los candidatos “outsiders” antisistema surgieron cuando los partidos laborista y de centroizquierda estaban a la vanguardia de las políticas neoliberales, una configuración hallada en Bolivia, Ecuador y Venezuela (Roberts, 2015). La adopción de políticas neoliberales por parte de los partidos de centroizquierda hizo que los sistemas de partidos convergieran en torno a variantes de la ortodoxia económica, desalineando programáticamente la competencia partidista y canalizando la oposición social hacia formas extra-sistémicas de protesta social y electoral, abriendo así un espacio político para los “outsiders” en el flanco izquierdo de los partidos dominantes.

Los partidos tradicionales “fueron percibidos como instrumentos de las élites locales y extranjeras que implementaron políticas neoliberales y, por ende, aumentaron la desigualdad social” (De la Torre, 2016, p. 64). A medida que la satisfacción con una democracia excluyente (política y económicamente) se desplomaba, surgieron olas de movilización antineoliberal. Las protestas representaron la lucha por la reincorporación a través de la cual los sectores excluidos de la sociedad esperaban (re)conectarse con las instituciones estatales para obtener acceso a los derechos que el estado no les proporcionaba (Rossi y Silva, 2018). Los líderes populistas diagnosticaron las preocupaciones de varios grupos cómo una falta de ciudadanía democrática que la democracia basada en el neoliberalismo les negó (Silva, 2009), grupos como las mujeres, los afrolatinos, los grupos indígenas, los grupos populares urbanos y rurales, los trabajadores informales y los campesinos sin tierra, entre otros. La naturaleza populista de los “outsiders” de América Latina se basa en el desafío a las élites político-económicas cuyo estatus interno se basa en la exclusión de otros sectores de la comunidad nacional (Roberts, 2019). El populismo en los Andes debe entenderse entonces como la respuesta a una *crisis de muy poca democracia* (Brown, 2020, 2022) con bloques populares y líderes populistas que desafían el statu quo de la inclusión de un bloque de élite minoritario y la exclusión política y socioeconómica de la mayoría.

Como era de esperar, dichos contrincantes populistas provocaron una intensa resistencia contra aquellos sectores de la sociedad que habían liderado y se habían beneficiado del modelo de mercado. Los gobiernos de izquierda no solo se enfrentaban a los bloques de

oposición que exigían una ortodoxia a favor del libre mercado y una protección de la distribución del poder político/económico preexistente, sino que también se enfrentaban a la presión de los sectores populares organizados a través de movimientos sociales / sindicatos / organizaciones vecinales para una mayor participación y mejores condiciones de vida.

Es al entender la naturaleza de estas diversas y cambiantes luchas de poder que uno puede comprender los avances y limitaciones de los procesos de reforma. Además, el hecho de analizar el desempeño populista a través de una lente de poder relativa ayuda a arrojar una luz sobre las realidades del populismo que existe en la actualidad, un populismo en el que los procesos pueden conllevar simultáneamente características democratizadoras y desdemocratizadoras.

Los académicos de tradición liberal describen cómo líderes populistas como Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa amenazaron la democracia al desafiar las normas liberales. Por ejemplo, Weyland (2013) describe las formas en las que estos líderes erosionaron los controles y equilibrios institucionales y marginaron a la oposición a través del “legalismo discriminatorio”. Levitsky y Loxton (2013) describen estos casos como “autoritarios competitivos” en los que las instituciones democráticas existen y se utilizan como las principales rutas hacia el poder, pero los funcionarios luego abusan de los poderes estatales para sesgar la competencia electoral a su favor a tal punto que la capacidad de competencia de la oposición se ve seriamente comprometida. Se dice que los líderes, en dichos casos, dependen de la “retórica populista” para erigir su hegemonía política, haciendo caso omiso a las normas democráticas al aumentar el poder del ejecutivo.

Mientras que los académicos liberales condenan la naturaleza “híper-presidencial” de los casos de izquierda “radical”, los “outsiders” antisistema en los Andes enfatizaron que las arraigadas élites político-económicas bloquearon los programas de cambio y, por lo tanto, abogaron por un presidente fuerte que se basara en “apelaciones plebiscitarias de apoyo popular” para “contrarrestar la tendencia hacia el statu quo” (Munck, 2015, p. 374). Las respuestas populistas iliberales a la democracia de mercado excluyente y dominada por la élite evocan la noción de Slater (2013) de que las democracias se moverán entre las formas oligárquicas y las formas populistas dominantes a medida que surjan intensos conflictos entre los actores partidistas que desplieguen perspectivas competitivas de responsabilidad democrática. Los populistas pedirán una inclusión más sustancial o una rendición de cuentas vertical, mientras que los opositores defenderán la democracia por las restricciones contra la concentración excesiva de

poder irresponsable en el ejecutivo, es decir, la rendición de cuentas horizontal. Tales visiones opuestas son muestras de los potenciales democratizadores y los peligros del populismo. Si bien muchos teóricos condenan al populismo como una amenaza para la democracia liberal, Berman señala que “aunque es cierto que la democracia sin las restricciones del liberalismo puede deslizarse hacia un mayoritarismo excesivo o un populismo opresivo, el liberalismo sin las restricciones de la democracia puede degenerar fácilmente en oligarquía” (Berman, 2017, p. 30). Es útil, por lo tanto, evaluar el impacto de los populistas en la calidad democrática no solo en términos de respeto a las normas liberales, sino también en términos de su éxito o fracaso, de profundizar y extender la calidad democrática al promover la participación y la inclusión sustancial de antiguos grupos excluidos. El resto de este capítulo examina el surgimiento, desarrollo y legado potencial del proceso encabezado por Evo Morales en Bolivia.

LA ERA PRECEDENTE: LA DEMOCRACIA DE MERCADO Y LA RESISTENCIA POPULAR

El Fondo Monetario Internacional (FMI) diseñó una Nueva Política Económica la cual fue implementada bajo decreto por el presidente boliviano Paz Estenssoro (1985-89). Se adoptaron la devaluación monetaria, la libre flotación cambiaria y la liberalización de las tasas de interés. El gasto del sector público disminuyó y se restringieron los préstamos estatales y los subsidios al sector minero y al sector agrícola tradicional. La “imposición de la Nueva Política Económica por ‘tratamiento de choque’ causó una profunda exclusión política y económica de los sectores populares, amenazando profundamente su subsistencia y dejándolos sin defensas dentro de las instituciones políticas establecidas” (Silva, 2009, p. 109).

Gonzalo Sánchez de Lozada se convirtió en presidente (1993-1997) y adoptó nuevas reformas neoliberales que deterioraron la calidad de la ciudadanía política y socioeconómica de los sectores populares. Una campaña de privatización hizo que la mayoría de las acciones de las empresas públicas de energía, telecomunicaciones y transporte se transfirieran a corporaciones multinacionales (Trujillo y Spronk, 2018, p. 135). Los resultados de esta privatización fueron la pérdida masiva de empleos, la subcontratación de la mano de obra no sindicalizada, la atomización de los trabajadores a medida que las fábricas fueron reemplazadas por talleres más pequeños y la informalización. Un cambio en la política agrícola fue testigo de cómo las empresas transnacionales y las grandes empresas agrícolas nacionales

con sede en los departamentos de *media luna*¹ lideraron una campaña de inserción en la economía global. Los campesinos perdieron tierras, créditos y mercados para sus cultivos, fomentando una urbanización de la mano de obra rural. Las reducciones o eliminaciones de los subsidios a los alimentos básicos, los servicios públicos, el combustible y el transporte empeoraron la exclusión económica de franjas sociales cuyos niveles de pobreza se mantuvieron por encima del 50 por ciento en las zonas urbanas y del 77 por ciento en las zonas rurales.

La creación de políticas fue dominada por los intereses de capital, guiada por agencias supranacionales, y las decisiones se tomaron de manera tecnocrática e irresponsable. El uso excesivo de decretos presidenciales, el escaso debate legislativo y la falta de consideración por los intereses, demandas y prioridades de los grupos sociales subordinados se convirtieron en la norma.

Durante las presidencias de Hugo Banzer (1997-02), de Lozada (2002-03) y Carlos Mesa (2003-05) estallaron olas de protestas cuando estos adoptaron reformas económicamente excluyentes sin incluir al sector popular en la toma de decisiones. Durante la Guerra del Agua de Cochabamba, una serie de protestas masivas contra el proyecto de privatización del agua en la ciudad, los movimientos de protesta popular comenzaron a forjar vínculos con los partidos políticos, especialmente con el partido Movimiento al Socialismo (MAS) encabezado por Evo Morales. El MAS era un partido de movimiento en el sentido de que se involucraba en políticas electorales y competía por la presidencia, a la vez que se dedicaba a las luchas extraparlamentarias y a la negociación en aras de una agenda programática.

El MAS utilizó el contexto de la Guerra del Agua para adoptar una estrategia “plural popular” (Albro, 2005) de creación de coaliciones, en la que “las cuestiones indígenas se convirtieron en el marco de una articulación política exitosa” (Anria, 2013, p. 27). Morales, a través del MAS, desempeñó un papel clave en la coordinación de múltiples grupos (organizaciones campesinas, cocaleros, sindicatos urbanos y organizaciones vecinales) al enmarcar las quejas específicas de algunos grupos u organizaciones como problemas que surgieron debido a la democracia de mercado de Bolivia.

Luego de la elección de De Lozada en 2002, bajo la dirección del FMI, el gobierno implementó políticas de estabilización económica que incluyeron aumentos en los impuestos sobre la renta y una moratoria en los aumentos salariales del sector público. En octubre de

1 El término “media luna” se refiere a la forma de medialuna que tienen las fronteras de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, donde se encuentran los sectores más conservadores de la oposición de élite política y económica.

2003, los residentes de la ciudad de El Alto organizaron enormes manifestaciones cuando se dieron a conocer los planes de De Lozada de otorgar concesiones a las transnacionales para canalizar el gas natural de Bolivia a través de puertos chilenos para exportarlo a los EE. UU. Los “términos de la concesión al capital extranjero, presentados como un regalo, convirtieron el asunto en un símbolo de exclusión del sector popular de la sociedad de mercado” (Silva, 2009, pp. 134-135) y las olas de protesta que involucraron a El Alto, y que luego se extendieron por todo el país, se dieron a conocer como la Guerra del Gas de 2003.

El gobierno ordenó al ejército disolver las marchas, lo que resultó en el asesinato de un gran número de civiles por parte de las tropas militares. La represión militar produjo el efecto contrario. Protestas masivas estallaron en todo el país pidiendo la renuncia del presidente, con mineros y manifestantes de Oruro y Potosí, cultivadores de coca del Chapare y campesinos del altiplano convergiendo en La Paz. Surgieron demandas pidiendo la destitución del presidente y su modelo neoliberal, así como la nacionalización del gas. Con un estimado de 500,000 protestantes en las calles, de Lozada huyó del país para exiliarse en los EE. UU. quedando en el cargo el vicepresidente Carlos Mesa.

Si bien, al principio, Mesa trató de apaciguar a los sectores populares movilizados, las crecientes presiones de las élites económicas y la alianza de las transnacionales, el FMI y la embajada de los EE. UU. en apoyo a las élites nacionales, hicieron que terminara abandonando cualquier pretensión de respaldar las demandas populares (Gustafson, 2020, p. 113; Webber, 2010, p. 54). Las organizaciones populares a nivel local, regional y nacional coordinaron protestas, movilizando a cientos de miles de manifestantes, hasta eficazmente paralizar las ciudades de La Paz y El Alto, con lo que Mesa se vio obligado a renunciar.

Durante la presidencia de Mesa, “Bolivia se caracterizó por una polarización política cada vez más profunda con respecto a los ejes de clase, raza y región” (Webber, 2010, p. 52). Surgieron dos bloques sociales. En primer lugar, un bloque indígena de izquierda constituido predominantemente por fuerzas campesinas y obreros urbanos indígenas. El segundo bloque que se consolidó entre octubre de 2003 y junio de 2005 “fue un bloque burgués-oriental liderado por las burguesías regionales de los departamentos ricos en hidrocarburos que conforman” la media luna” (Webber, 2010).

La convergencia en torno a las políticas de ajuste estructural de todos los partidos mayoritarios (incluidos los supuestos partidos de izquierda) y el rompimiento de las promesas de campaña de los funcionarios electos hizo que la ira y las aspiraciones del sector popular se canalizaran hacia formas extra sistémicas de protesta social y

electoral. El MAS llenó el vacío creado por el declive de los partidos tradicionales asociados al neoliberalismo. Morales y el MAS ganaron fácilmente las elecciones del 2005 en la primera vuelta, preparando el escenario para nuevas luchas entre los bloques sociales rivales en torno a las nociones contrapuestas de democracia.

LA CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA POST-NEOLIBERAL Y EL PROCESO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE (2006-2009)

Tras el colapso del sistema de partidos tradicionales y la deslegitimación del modelo de democracia de mercado, junto con las olas de protestas anti-neoliberales coordinadas por poderosas organizaciones populares, Morales fue elegido presidente con el alcance ideológico y el respaldo popular para promover una democracia post-neoliberal alternativa. Sin embargo, un bloque de la oposición se aferró a la protección del statu quo y a la democracia del mercado. En la esfera política, a pesar de haber ganado las elecciones presidenciales y de tener una mayoría simple en la Cámara de Diputados, el MAS no tenía control ni sobre el senado ni sobre el poder judicial conservador.

Además, los políticos del bloque de la oposición ganaron el control de la mayoría de los gobiernos departamentales, incluyendo las regiones claves de poder económico (las finanzas, la agroindustria y los hidrocarburos). También dominaban las fuentes ideológicas de poder (los medios de comunicación, las iglesias) y ejercían control sobre las turbas fascistas (una forma de poder militar) involucradas en la represión violenta de los partidarios del gobierno.

En junio del 2006, el gobierno presentó el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007 que exigía una profundización y ampliación de la democracia. El plan ofrecía una visión alternativa a la democracia de mercado y exigía el buen vivir, una visión indígena basada en formas comunitarias de convivencia. El plan destacaba que el Estado debía intervenir como “promotor y protagonista del desarrollo nacional”, por lo que el Estado debía tomar medidas para transformar la sociedad y la economía, pero solo si “todos los pueblos y las culturas estaban presentes en las decisiones económicas y políticas del Estado”.

El plan se basó en el desarrollo de dos sectores de la economía. El primer sector englobaba las actividades generadoras de excedentes como los hidrocarburos, la electricidad, la minería y los recursos naturales, y el segundo estaba integrado por sectores generadores de empleo e ingresos como el turismo, la agricultura, la manufactura, el transporte y los servicios. El plan requería que los ingresos generados a través de un mayor control estatal sobre los sectores generadores de excedentes fueran redirigidos hacia la transformación de los sectores generadores de empleo/ingresos a través del gasto estatal y de la re-

distribución, impulsando la demanda interna y respaldando la igualdad social. La nacionalización de los sectores de productos básicos también se utilizaría para desarrollar la industrialización de materias primas (Arze, 2015).

En mayo del 2006, Morales declaró que el sector de hidrocarburos de Bolivia sería nacionalizado para permitir que el estado aumentara el precio y las rentas de sus exportaciones de gas natural. Mediante el decreto 28701, “el gobierno de Morales recuperó el derecho del Estado a comercializar sus hidrocarburos y aumentó los precios que percibía por la venta de su gas natural” (Kaup, 2010, p. 129). Como se analiza detalladamente a continuación, si bien la “nacionalización” fue en realidad moderada, estos cambios representaron una transformación fundamental en el papel del Estado en el sector de hidrocarburos e incrementaron la capacidad fiscal del gobierno.

Los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) de profundizar las voces del sector popular en la toma de decisiones y ampliar la calidad democrática a través de un mayor control estatal sobre la economía, las políticas sociales redistributivas, también dio indicios de una reforma en la propiedad de tierra que constituyó un desafío directo a los intereses de las élites. En respuesta al PND, las élites de la media luna entablaron una lucha extrainstitucional (a menudo violenta) y legal (a través del apoyo judicial) por la autonomía regional con el respaldo de los medios de comunicación aliados en un intento por evitar los cambios propuestos al estado de derechos de propiedad privada, reforma agraria y redistribución de los ingresos estatales.

Mientras el bloque opositor presionaba al MAS desde la derecha, poderosas organizaciones populares hacían lo propio desde abajo para avanzar en el proceso. Es crucial resaltar que el MAS tenía tanto una coalición social central como un bloque más autónomo de organizaciones del movimiento comprometido en una alianza estratégica. El núcleo estaba compuesto por un “círculo interno” que incluía a los cocaleros y a las Seis Federaciones del Trópico, a la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIQB-BS), y a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). El segundo bloque estratégico incluía al principal sindicato de trabajadores, la Central Obrera Boliviana (COB), los sindicatos del sector público, trabajadores del sector informal urbano organizados en asociaciones de vecinos denominadas Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) —especialmente la de El Alto—, los sindicatos de mineros del sector informal llamados “cooperativistas”, y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas de Qullasuyu (CONAMAQ).

En el forcejeo entre el bloque de oposición y las demandas populares, con el gobierno situado en el medio, el MAS dependía en gran medida de la movilización defensiva de la base popular para evitar el éxito de las tácticas de desestabilización de la élite. El gobierno de Morales que había sido elegido en un mandato anti-neoliberal con un respaldo popular a gran escala y con poderosos movimientos que presionaban al gobierno desde abajo, enfrentaba a un bloque de oposición recalcitrante decidido a bloquear la agenda post-neoliberal, lo que sirvió de justificación al gobierno de Morales para torcer las normas liberales según fuera necesario con miras a debilitar/superar la oposición.

Por ejemplo, para combatir el sesgo conservador en el poder judicial, el MAS presionó a algunos jueces en ejercicio, incluido el presidente de la Corte Suprema, al presentar cargos penales contra ellos. Según Sánchez-Sibony (2021), el gobierno del MAS denunció públicamente al poder judicial, alegando corrupción, y movilizó a sus partidarios para que exigieran la renuncia de los miembros del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema. También hubo frecuentes enfrentamientos con los medios de comunicación tradicionales que estaban vinculados a las familias terratenientes de la élite de la media luna, a quienes Morales calificó como el principal enemigo del proyecto post-neoliberal.

Sin embargo, este comportamiento antiliberal retuvo el apoyo popular, ya que se consideraba parte de la lucha contra un bloque de oposición pro-neoliberal que intentaba frenar los intentos del MAS de adherirse a las promesas electorales de avanzar hacia un modelo post-neoliberal de democracia que profundizara y ampliara la calidad de ciudadanía para los grupos excluidos durante mucho tiempo. Frente a un enemigo común, se desarrolló una relación de tipo aliado entre el partido y la base. En efecto, durante esta primera etapa del proceso post-neoliberal, a través del Pacto de Unidad², CONALCAM³, el proceso de Asamblea Constituyente, la promulgación de una nueva Constitución y el nombramiento de líderes de movimientos/organizaciones en cargos ministeriales, la calidad democrática para los sectores que

2 El Pacto de Unidad fue una coalición de movimientos populares con el fin de, primero que nada, luchar por la formación de una Asamblea Constituyente, y luego de haber iniciado ese proceso, articular y promover los intereses campesinos e indígenas en la asamblea (Zuazo, 2010, p. 129).

3 En respuesta a las tácticas desestabilizadoras del bloque opositor, y a partir del Pacto de Unidad, Morales organizó a sus partidarios, pertenecientes tanto a las esferas más altas como las más bajas, en la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM).

habían sido excluidos en la anterior era de democracia de mercado se profundizó y amplió.

En enero del 2009, los votantes aprobaron una nueva Constitución con el 61,4 por ciento de los votos a favor y 38,6 en contra. La Constitución delinea varios mecanismos que buscan profundizar y ampliar la democracia. Adhiriéndose a las exigencias del Pacto de Unidad, la Constitución redefinió la nación como “plurinacional y comunitaria”. La democracia de Bolivia se describe en el artículo 1.1 como “participativa, representativa y comunitaria”. Además de la democracia representativa liberal estándar, los mecanismos de democracia directa y participativa incluyen la ejecución de referéndum, la revocación de servidores públicos por previa consulta y las iniciativas legislativas de los ciudadanos. Asimismo, los miembros del poder judicial, después de la preselección por el legislativo, deben ser elegidos por el pueblo. La sociedad civil organizada debe participar en el diseño de las políticas públicas y ejercer el control social en todos los niveles del Estado. En términos de ampliación de la democracia, la Constitución de 2009 apoya los derechos económicos, sociales y culturales de los grupos desfavorecidos, proclamando el *buen vivir* como objetivo principal. Para lograr dicho objetivo, la Constitución exige la distribución del excedente de la extracción de recursos no renovables a todos los ciudadanos. A pesar de que se forjaron relaciones de tipo aliado entre el MAS y las organizaciones populares, el período 2009-14 sería testigo del surgimiento de tensiones entre partidos y bases. Para comprender por qué, es necesario describir la naturaleza de las relaciones entre el gobierno y las transnacionales después del 2010 y cómo estas dieron forma a la autonomía estatal.

TENSIONES EN EL PROCESO POST-NEOLIBERAL (2009-2014)

Antes de la reelección de Morales en el 2009, “la política boliviana se caracterizaba por una fuerte polarización entre la oposición de derecha y el gobierno y sus aliados de izquierda” (Ellner, 2013, p. 17). Sin embargo, con la promulgación de la nueva constitución y la retirada de los antiguos secesionistas hacia los canales institucionales de oposición, el MAS ya no era capaz de reunir la base contra un enemigo común (Fontana, 2013). De hecho, después de la derrota de la campaña secesionista, las tensiones entre el partido y la base aumentaron.

Para cumplir con las promesas de impulsar la ciudadanía social, Morales dependía de los ingresos provenientes de los recursos naturales del país. Sin embargo, había heredado industrias extractivas con dependencia de trayectoria que infundían a las Transnacionales altos niveles de poder estructural (Kaup, 2010). La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el sector de hidro-

carburos en general habían recibido muy poca inversión desde finales de la década de los noventa. Además, la industria gasífera estaba dominada por Petrobras y Repsol, los cuales tenían contratos a largo plazo que les daban acceso a las reservas de hidrocarburos legalmente garantizados por medio de acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales (Kaup, 2013).

En ese marco en el que Morales fue electo, bajo la promesa de eliminar los peores excesos de la exclusión económica, la economía boliviana estaba subdesarrollada y dependía de las exportaciones de materias primas, la empresa estatal de extracción carecía de fondos suficientes y estaba obsoleta, y las empresas extractivas transnacionales estaban arraigadas de forma contractual e infraestructural en la economía y tenían la capacidad extractiva y el capital para invertir en nuevas exploraciones, Morales no podía impulsar la nacionalización total (Kaup, 2010, p. 135). Sin embargo, se incrementaron los impuestos y las regalías a las empresas transnacionales, lo que incrementó los ingresos estatales provenientes de las exportaciones de gas de US\$ 673 millones en el 2005 a más de US\$ 5 mil millones en el 2013. La YPFB extendió su rol, tanto operativo como auditor, al mismo tiempo que tuvo una mayor voz en la decisión del destino de las inversiones (Paz y Ramírez-Cendero, 2021, pp. 138, 144). A pesar de estos avances, el estado solo buscaba recuperar el control de los activos previamente capitalizados, y que las empresas en control de tales activos obtuvieran un pequeño porcentaje del gas de Bolivia (Kaup, 2010). Por consiguiente, la mayor parte de la cadena de valor de los hidrocarburos no fue nacionalizada.

El gasto público, respaldado por un auge de las materias primas y el aumento de los impuestos y las regalías sobre las exportaciones de hidrocarburos, aumentó en un 500 por ciento entre el 2006 y el 2013 (Arteaga, 2015). Hubo importantes inversiones en las áreas de la educación y la salud. Remesas como el Bono Juancito Pinto, cuyo objetivo era incentivar la asistencia escolar, benefició a 1,8 millones de niños. Toda la población tenía derecho a la Renta Dignidad, una pensión por vejez, y al Bono Juana Azurduy destinado a reducir las tasas de mortalidad materno-infantil y la desnutrición infantil crónica. Desde 1999 hasta el año 2011, el ingreso promedio aumentó un 45 por ciento y un 182 por ciento entre las zonas rurales (Arteaga, 2015). El salario mínimo real aumentó un 87,7 por ciento entre 2005 y 2014 (Johnson y Lefebvre, 2014). La desigualdad disminuyó, y los ingresos de los sectores más pobres de la población crecieron mucho más rápido desde el 2006 que el de los hogares con mayores ingresos. Entre el 2005 y el 2011, la pobreza se redujo de 59,6 a 45 por ciento,

y la pobreza extrema se redujo de 36,7 a 20,9 por ciento (Johnson y Lefebvre, 2014).

A pesar del evidente cambio hacia un modelo post-neoliberal de desarrollo y democracia y de que Morales y el MAS presentaron su proyecto como una alternativa radical al neoliberalismo que implicaba la diversificación de la economía lejos del desarrollo primario basado en la exportación y acompañado de la nacionalización de los recursos naturales de Bolivia, ninguno de estos objetivos se alcanzaría plenamente. Bolivia se volvió más dependiente que antes de las exportaciones primarias, y los productos primarios aumentaron de 89 por ciento del valor total de exportación en el 2005 al 95 por ciento en 2012 (CEPAL, 2013, p. 111). Los hidrocarburos como porcentaje del valor total de las exportaciones aumentaron de 35 por ciento antes de la primera elección de Morales a 51 por ciento en el período 2011-14 (Arze, 2016). Además, PETROBRAS y REPSOL, dos empresas transnacionales, mantuvieron el control de más del 75 por ciento de la producción de gas natural.

Tal compromiso, por un lado, permitía que Morales gobernara y, por el otro, restringía el espacio para una agenda más radical. A pesar del apoyo del sector popular al proyecto de democratización sustantiva radical, la moderación del proyecto frente al poder estructural de la oposición económica desencadenó una recalibración de las relaciones entre partidos y bases.

Los líderes de las organizaciones pertenecientes al núcleo original del MAS tenían más acceso a los ministerios que las organizaciones no centrales que apoyaban estratégicamente y se aliaban con el MAS. Las opciones de candidatos del MAS para ocupar puestos representativos en la legislatura provenientes de las organizaciones centrales eran aceptadas con mayor frecuencia, y sus voces tenían más peso en los espacios participativos como CONALCAM. Para las organizaciones estratégicas, sin embargo, el proyecto post-neoliberal contenía elementos regresivos de intromisión desde arriba. Aquellas organizaciones que intentaron desafiar el plan de desarrollo del MAS, ya sea porque lo consideraban demasiado moderado y cedía demasiado terreno a las élites económicas nacionales y transnacionales, o porque dependía de una continua invasión de las tierras indígenas, se enfrentaron a un entorno cada vez más hostil. Los líderes del MAS buscaron debilitar a las organizaciones contestatarias usando la estrategia de *divide y vencerás*. También trataron de asegurar un entorno de paz gubernamental incorporando líderes militantes a la estructura del partido. Los líderes de las organizaciones cooptadas debían mostrar lealtad política si deseaban recibir una parte de los fondos públi-

cos necesarios para responder a las demandas de su base (Tapia, 2011; Lazar, 2008).

Junto con la cooptación, el MAS fomentó el paralelismo, es decir, la creación de organizaciones paralelas a las organizaciones contestatarias existentes. Se identificaron y financiaron facciones de líderes de organizaciones populares que apoyaban al MAS y se abstendían de participar en movilizaciones contestatarias contra las políticas del MAS, mientras que las facciones más críticas fueron marginadas. Cuando surgían enfrentamientos entre los aliados centrales, el gobierno los definía como “tensiones creativas”, pero cuando las movilizaciones de los grupos estratégicos desafiaban directamente el modelo de desarrollo subyacente y las relaciones entre el gobierno y las empresas, se las calificaba de “contrarrevolucionarias” (Trujillo y Spronk, 2018). El resultado fue una base dividida cuyo poder colectivo se vio disminuido, mientras que los movimientos sociales, las comunidades indígenas y los antiguos aliados se volvieron contra ellos mismos. Estos procesos de cooptación, división y paralelismo se evidenciaron, entre otros aspectos, con los casos de CONAMAQ, CIDOB, las organizaciones populares urbanas como la FEJUVE y la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) (Brown, 2020a; Schilling-Vacaflor, 2017; Morales, 2013).

EL REFERÉNDUM DE REELECCIÓN, LAS ELECCIONES IMPUGNADAS, EL GOLPE DE ESTADO Y LA NUEVA ERA LIDERADA POR EL MAS (2014-2021)

En las elecciones presidenciales del 2014, Morales obtuvo el 61 por ciento de los votos. En la inauguración de su tercer mandato, Morales delineó un plan de desarrollo de 10 años, la Agenda Patriótica 2025. La Agenda esbozaba planes para continuar utilizando la extracción para financiar el desarrollo. Como indicó el vicepresidente García-Linera en agosto del 2016, “vamos a utilizar el extractivismo durante al menos dos décadas más” para desarrollar y proteger a la sociedad. Además, sin “otro fuerte liderazgo nacional entre bastidores, la lógica del partido MAS sostenía que un cuarto mandato presidencial de Morales era fundamental para cumplir esta misión” (Achtenberg, 2016, pp. 374-375). Morales pretendía realizar un referéndum para modificar la Constitución con miras a permitir una tercera reelección. Se formó la coalición del “No” en torno a los políticos tradicionales de derecha. Asimismo, “ex-MASistas y representantes de los sectores populares de izquierda alienados que buscaban rehabilitar lo que percibían como un ‘proceso de cambio’ estancado, se constituyeron como el bloque del ‘No popular’” rechazando el proceso de referéndum (Achtenberg, 2016).

El referéndum fue derrotado por un estrecho margen de 51,3 por ciento, impidiendo así la posibilidad de reelección de Morales. Sin embargo, el MAS solicitó al Tribunal Constitucional la revocación de los límites a las autoridades electas que buscan la reelección, argumentando que violan los derechos humanos. El Tribunal Constitucional dictaminó que todos los funcionarios electos podían postularse para un cargo indefinidamente. El uso iliberal del poder presidencial para inmiscuirse en los asuntos judiciales junto con la decisión de la corte de permitir la reelección movió a la acción a la oposición política dividida, al tiempo que deslegitimaba aun más a Morales ante los ojos de algunos antiguos aliados.

La derrota del referéndum reavivó la disputa sobre el significado de democracia con protestas de la oposición centradas en la defensa de normas liberales, tales como la alternancia de líderes, el pluralismo y el estado de derecho. Como afirma Mayorga (2020, p. 6), el MAS respondió a tales críticas a sus credenciales democráticas centrándose en los componentes participativos y sustantivos de la democracia, destacando que existe una equivalencia entre democracia y justicia.

En el período previo a las elecciones del 2019, luego del voto “no” en el referéndum del 2016 y la decisión judicial de permitir la candidatura de Morales, el bloque de oposición promovió la narrativa de que un MAS autoritario e iliberal haría cualquier cosa para mantenerse en el poder. Según las primeras encuestas, el principal rival de Morales era el expresidente Carlos Mesa. Para evitar una segunda vuelta se requería ganar una mayoría simple o más del 40 por ciento de los votos más un margen de victoria del 10 por ciento sobre el rival más cercano. Con casi el 84 por ciento de los votos contados, y con Morales a la cabeza con un 45,3 por ciento frente al 38,2 de Mesa, el sistema no oficial de conteo en línea (*trep*) detuvo la transmisión en vivo del conteo rápido de papeletas. Al día siguiente, luego de la solicitud de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la reanudación del *trep*, se presentaron los resultados actualizados que reflejaban el 95 por ciento de las actas. El margen de victoria de Morales superó por poco el 10 por ciento requerido para evitar una segunda vuelta. La OEA manifestó de inmediato su “profunda preocupación” por el “cambio de tendencia”, creando la impresión de que se había producido un fraude. Sin embargo, un informe realizado por los investigadores del Laboratorio de Ciencias y Datos Electorales del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) sugiere que “la victoria de Morales puede explicarse por su apoyo electoral antes de que se detuviera el conteo preliminar de votos [...]. Encontramos que el resultado final puede explicarse por un patrón en el conteo de votos previo al corte del *trep*. Por lo tanto, no podemos encontrar evidencia cuantitativa

de una tendencia irregular como afirma la OEA” (Williams y Curiel, 2020).

Tras el anuncio de la Corte Electoral de los resultados a favor de Morales, con la OEA arrojando dudas sobre su legitimidad y con los medios del bloque opositor avivando la creencia de que se había producido un fraude, estallaron protestas a gran escala en las zonas urbanas. Si bien al principio los manifestantes eran votantes de clase media enojados por el supuesto fraude, existía también la creencia entre las diversas clases sociales de que el gobierno usaría su autoridad de manera iliberal para permanecer en el poder. Los antiguos grupos aliados que se habían enfrentado a las tentativas de cooptación de los grupos indígenas de tierras bajas, los cultivadores de coca en los Yungas que sentían que Morales favorecía a los cocaleros de la organización central en el Chapare, los mineros cooperativos en Potosí, CONAMAQ y los sindicatos de trabajadores de fábricas en Cochabamba, entre otros, inicialmente rechazaron los resultados electorales y, luego, exigieron la renuncia de Morales (Schneider, 2019).

Mientras continuaban las protestas de la clase media y algunas antiguas organizaciones populares estratégicamente aliadas, fueron los elementos conservadores de la extrema derecha del bloque de la oposición los que eventualmente capturaron el momento. Desde abril del 2019, Luis Camacho había tomado el control del Comité Cívico de Santa Cruz y se había opuesto vehementemente a la reelección de Morales. Camacho entró en contacto con el presidente del Comité Cívico de Potosí (Comico) encabezado por Marco Pumari. Comico, representando los intereses de la sociedad civil urbana de la ciudad, se había estado movilizandando contra el gobierno de Morales desde el 2016, exigiendo que el estado central le diera al departamento un mayor porcentaje de los ingresos obtenidos de la extracción de litio en la región. Los poderosos mineros de Potosí rechazaron abiertamente a Morales. Esto fue crucial porque los mineros tenían una gran influencia en la poderosa Central Obrera Boliviana (COB). Juan Carlos Huarachi, Secretario Ejecutivo de la COB, hizo un llamado a Morales para “reflexionar” sobre su postura. La posición de Morales se vio muy debilitada con el retiro del apoyo de la COB.

Con Camacho y los grupos racistas aliados incitando a la violencia y protestando continuamente en todo el país, Camacho exhortó a la policía para que “se pusiera del lado de la gente”. Lo que siguió a continuación fueron motines policiales en Cochabamba, Santa Cruz y Sucre, mientras que, en La Paz, la policía se unió a los manifestantes. El general Williams Kaliman “sugirió” que Morales se hiciera a un lado. Con la pérdida del poder militar, con los poderes ideológicos (los líderes eclesiásticos, la OEA y los medios de comunicación tradiciona-

les y sociales) alineados en su contra, con el rechazo del apoyo de los gremios empresariales, con el resurgimiento de la oposición política y con una base popular dividida y reacia a participar en una movilización masiva de defensa, Morales y los representantes del MAS fueron obligados a dejar sus cargos.

Luego de la destitución de Morales, Jeanine Añez, segunda vicepresidente del Senado (y también exrepresentadora de televisión y crítica de larga data de Morales proveniente de la media luna), fue declarada, con biblia en mano, presidenta interina. Luego de su nombramiento, recibió el respaldo inmediato de importantes organizaciones empresariales que manifestaron su apoyo al “retorno a la democracia” (Wolff, 2020). El papel constitucional del gobierno interino era convocar nuevas elecciones. Sin embargo, reconoció al líder derechista Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, acosó a los líderes del MAS e intimidó a sus simpatizantes, detuvo arbitrariamente a los detractores declarados del gobierno golpista, cerró los medios de comunicación críticos y arrestó a los periodistas, llamó “animales” a los miembros del MAS y desplegó las fuerzas armadas para reprimir las protestas indígenas antigolpistas en Sacaba y Senkata matando al menos veintidós personas e hiriendo a cientos de manifestantes (IHRC; Achtenberg, 2020).

Con el gobierno interino posponiendo las elecciones, las agrupaciones indígenas y campesinas del Pacto de Unidad comenzaron a organizar sus bases, primero para exigir nuevas elecciones y luego para votar por la fórmula presidencial y vicepresidencial del MAS de Luis Arce y David Choquehuanca. La COB, cuyo líder Juan Carlos Huarachí había sugerido que Morales se hiciera a un lado para pacificar el país, se disculpó por no haber defendido al presidente y le dio un ultimátum al gobierno interino: nuevas elecciones o “convulsión social”. Si bien había habido tensiones entre el MAS y los sectores de su base constituyente durante el período 2018-19, así como tensiones dentro de las organizaciones populares, las acciones del gobierno interino proporcionaron un enemigo común que sirvió de estímulo para reunificar a las organizaciones divididas.

Cuando finalmente se llevaron a cabo las elecciones en octubre de 2020, la fórmula del MAS de Arce y Choquehuanca obtuvo más del 55 por ciento de los votos, Carlos Mesa ganó el 28,5 y Fernando Camacho solo el 14. En las primeras elecciones, sin Morales y sin los poderes estatales que los críticos habían largamente acusado de abusar para garantizar su estada en el poder, el partido derrotó fácilmente a los candidatos de la oposición. Además, los candidatos del MAS ganaron más participación de votos a nivel nacional que la que logró Morales en las elecciones de 2019, al ganar en 6 de los 9 departamentos. El

MAS también obtuvo la mayoría en ambas cámaras de la legislatura, aunque no consiguió la mayoría de dos tercios como fue el caso en las elecciones de 2014. Los resultados disiparon cualquier noción de que el MAS era simplemente un partido cuyo éxito dependía de Morales. De hecho, mostró que si bien la candidatura de Morales podía haber sido inaceptable para algunos votantes, el MAS y el modelo post-neoliberal que defendía mantuvieron su legitimidad. Sin embargo, es importante destacar que parte del éxito del MAS en el 2020 se basó en su condición de único partido capaz de competir a nivel nacional y derrotar a los partidos de oposición racistas y pro-neoliberales. Las tensiones entre el MAS y las organizaciones constituyentes que habían estado latentes bajo las presidencias de Morales, aunque se habían dejado de lado para enfrentar a un enemigo común, no habían desaparecido. Por ejemplo, las elecciones locales de marzo de 2021 fueron testigos de nuevas tensiones entre el MAS y los nuevos partidos populares que recibieron el respaldo de antiguas organizaciones estratégicamente aliadas. Los nuevos partidos y sus bases exigieron que el MAS pusiera fin a sus esfuerzos por controlar la movilización popular contestataria a través de prácticas cooptivas y del apoyo a organizaciones paralelas.

POPULISMO Y DEMOCRACIA, LAS ENSEÑANZAS DE BOLIVIA

El surgimiento del “outsider” populista Evo Morales al frente del MAS fue el resultado directo de una crisis de representación de los sectores populares. Un modelo de democracia de mercado excluyente que antepuso los intereses de las élites caucásicas en la política, marginando las voces populares indígenas de las formulaciones políticas. El aumento de la exclusión socioeconómica desencadenó un movimiento defensivo polanyiano por parte de la sociedad. Un sinnúmero de grupos como los coccaleros, los trabajadores urbanos, los grupos indígenas de tierras bajas y los grupos de mujeres, entre otros, enfrentaron una doble exclusión política y socioeconómica bajo el modelo de democracia de mercado permeado de neoliberalismo. Aunque cada grupo tenía demandas específicas, Morales supo englobar con éxito sus problemas bajo una bandera común de antineoliberalismo y exhortó a las organizaciones a unirse en la protesta social y electoral contra la democracia de mercado. El mecanismo de marco populista de Morales y las tácticas duales de protesta callejera/electoral desafiaron directamente el statu quo exigiendo la reconstrucción del orden social mediante el cual el estado actuaría como garante del bienestar social (con la sociedad ahora ampliada para incorporar a los sectores populares en lugar de solo una élite caucásica). Así surgieron dos bloques sociales distintos: un bloque popular que respaldaba el proyecto

de Morales y un bloque liderado por una élite vinculada con el capital estadounidense que se había beneficiado durante la era neoliberal.

El populismo entendido como un movimiento defensivo desafiante del statu quo excluyente y deslegitimado propiciaría la oposición. Como se destaca en el proceso boliviano, los procesos de democratización implicarían inherentemente tensiones y rechazo por parte de aquellos que habían disfrutado durante mucho tiempo de un estatus dominante. A medida que estas luchas avanzaban, crecía la probabilidad de que se produjeran episodios de democratización y desdemocratización (simultáneas); las normas liberales podían torcerse para desviar a la oposición hacia un proyecto basado en promesas de profundizar la participación y de ampliar los derechos sustantivos de ciudadanía a los sectores anteriormente excluidos. De hecho, hay “muchas razones para asumir que los ejecutivos electos que aspiraban a ampliar la inclusión democrática sustantiva podrían chocar con las élites que preferían las restricciones de la democracia sobre el poder absoluto más que su promesa de empoderar a la mayoría” (Slater, 2013, pp. 732-733). En efecto, como señala Cameron (2021, p. 786), “sin negar los efectos potencialmente nocivos del populismo en la democracia, el enfoque está parcialmente fuera de lugar porque los modos oligárquicos de gobierno y la movilización populista son co-integrantes [...]. El populismo es una reacción típica a los modos oligárquicos de gobierno y una característica endémica de la política democrática en sociedades desiguales”.

Comprender estas luchas de poder, entre los populistas antineoliberales elegidos para reaccionar contra la dominación oligárquica de la democracia y las élites que pretendían defender su dominación sobre el sistema político, requiere que los teóricos vayan más allá de una limitada evaluación institucionalista de los proyectos dirigidos por populistas. El único enfoque de análisis no debería ser solo el “populista iliberal” o el “autoritario competitivo”, sino también en cómo los “outsiders” antineoliberales interactúan con la oposición oligárquica. Como lo demuestra el caso boliviano, para comprender las acciones de los gobiernos antineoliberales recién elegidos, incluyendo la disposición de participar en conductas antiliberales, y para comprender el apoyo o el rechazo del sector popular a las acciones gubernamentales, es esencial ver el proceso post-neoliberal a través de un lente histórico que encapsule la era de la democracia de mercado. Al entender quiénes fueron incorporados y quiénes fueron excluidos bajo la democracia de mercado (inclusión política y socioeconómica de la clase media y de las élites, exclusión de los sectores populares e indígenas), así como el anterior dominio de fuentes ideológicas, económicas, militares y políticas de poder por parte de un bloque selecto

de élite, podremos comprender mejor por qué los gobiernos pueden torcer las normas liberales y por qué conservan el respaldo popular para hacerlo. Es decir, “medir” el impacto de los proyectos populistas dirigidos por “outsiders” en calidad democrática solo puede tener sentido si analizamos el statu quo anterior que desencadenó la respuesta populista en primer lugar.

Además de resaltar las tensiones potenciales entre la democracia liberal y la radical-sustantiva, el caso boliviano pone de manifiesto cómo los proyectos populistas que unifican a múltiples grupos bajo un mecanismo de marco común (por ejemplo, la democracia antineoliberal) pueden generar tensiones internas en el bloque popular, o el *pueblo*. Si bien un marco amplio es esencial para obtener el respaldo electoral (y de la calle) de múltiples grupos, especialmente cuando el populista es un candidato “outsider” que carece de una estructura de partido institucionalizada, con el tiempo las demandas de grupos específicos pueden convertirse en una fuente de tensión en la base del partido. Asimismo, dado que el proyecto populista desafiante del statu quo debe funcionar dentro de los límites establecidos por las mismas élites cuyos intereses se cuestionan, es inevitable que un proyecto populista no cumpla con todas las promesas preelectorales para todos los grupos. Por ejemplo, cuando el proyecto liderado por Morales enfrentó los límites establecidos por la dependencia preestablecida a la exportación de materias primas, el MAS chocó con los sectores del bloque popular, lo que generó problemas de cooptación y paralelismo. Por lo tanto, comprender completamente los impactos de los procesos liderados por populistas en calidad democrática implica, en primer lugar, ampliar nuestra conceptualización de democracia de una limitada perspectiva liberal a una que incorpore criterios liberales, participativos y sustantivos, y en segundo lugar, es necesario evaluar la naturaleza y evolución de las relaciones partido-base.

Finalmente, si bien los proyectos populistas pueden ser modas pasajeras, breves momentos de ira, que pronto se disipan, cuando el populista “outsider” no logra cumplir sus promesas una vez en el cargo, este no es necesariamente el caso. El proyecto post-neoliberal en Bolivia demostró que se puede lograr un modelo más sustantivo de democracia y ciudadanía cuando un “outsider” populista gana las elecciones. A pesar de todas las fricciones y la moderación del proyecto frente a los poderes del bloque opositor, el modelo post-neoliberal de democracia esbozado en la Constitución conserva altos niveles de legitimidad. Durante el periodo de enfrentamiento contra el gobierno golpista (2019-20) se reestablecieron los espacios de participación, tales como el Pacto de Unidad el cual reunió a los líderes de las principales organizaciones populares para guiar al MAS desde abajo, y el

candidato del MAS ganó fácilmente las elecciones presidenciales con un mandato de profundizar y avanzar en el proyecto post-neoliberal. Existe un bloque popular organizado altamente politizado e influyente que ha visto tanto las posibilidades como los peligros de un populista progresista en el poder. El momento populista de Bolivia ha alterado el statu quo de manera irrevocable y un regreso generalizado a la democracia de mercado excluyente está, hoy en día, fuera de discusión.

BIBLIOGRAFÍA

- Achtenberg, Emily (2016). Evo's Bolivia at a political crossroads: Taking stock of Bolivia's changing political environment after Evo Morales' 2016 Referendum Defeat. *NACLA Report on the Americas*, 48(4).
- Achtenberg, Emily (2020). MAS party under threat as Bolivia moves towards new elections (without Evo). *NACLA Rebel Currents* <https://nacla.org/blog/2020/01/10/mas-party-under-threat-bolivia-new-elections-without-evo>
- Albro, Robert (2005). The water is ours, ¡Carajo!: Deep citizenship in Bolivia's Water War. En Nash, June (Comp.), *Social Movements: An Anthropological Reader*. Oxford: Basil Blackwell.
- Anria, Santiago (2013). Social movements, party organization, and populism: Insights from the Bolivian MAS. *Latin American Politics and Society*, 55(3).
- Arce Catacora, Luis (2015). *Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano*. La Paz: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
- Arditi, Benjamín (2005). Populism as an internal periphery of democratic politics. En Panizza, Francisco (Comp.), *Populism and the Mirror of Democracy*. London / New York: Verso.
- Arteaga, Walter (2015). Building citizenship in the context of the debate on the post-2015 agenda in Bolivia. *Community Development Journal*, 50(4).
- Arze, Carlos (2016). *Una década de gobierno. ¿Construyente el Vivir Bien o un capitalismo salvaje* (La Paz: CEDLA).
- Berman, Sheri (2017). The pipe dream of undemocratic liberalism. *Journal of Democracy*, 28(3).
- Brown, J. (2020a). Party-base linkages and contestatory mobilization in Bolivia's El Alto: Subduing the Ciudad Rebelde. *Latin American Perspectives*, 47(4).
- Brown, John (2020). Neoliberalization, de-democratization, and populist responses in Western Europe, the US, and Latin America. *Critical Sociology*, 46(7-8).

- Brown, John (2022). *Deepening democracy in post-neoliberal Bolivia and Venezuela: Advances and setbacks*. Abingdon / New York: Routledge.
- Cameron, Maxwell (2021). The return of oligarchy? Threats to representative democracy in Latin America. *Third World Quarterly*, 42(4).
- Castañeda, Jorge (2006). Latin America's left turn. *Foreign Affairs*, 65(3).
- CEPAL (2013). *Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean*. Santiago de Chile: United Nations.
- De la Torre, Carlos (2016). Left-wing populism: Inclusion and authoritarianism in Venezuela, Bolivia, and Ecuador. *Brown Journal of World Affairs*, 23.
- Dunn, John (2019). The challenge of populism: Why populist politics spreads in the world. *Populism*, 2(1).
- Ellner, Steve (2013). Latin America's radical left in Power: Complexities and challenges in the twenty-first century. *Latin American Perspectives*, 40(3).
- Fontana, Lorenza Belinda (2013). On the perils and potentialities of revolution: Conflict and collective action in contemporary Bolivia. *Latin American Perspectives*, 40(3).
- Gustafson, Bret (2020). *Bolivia in the Age of Gas*. Durham, NC: Duke University Press.
- IHRC y University Network for Human Rights (2019). *They shot us like animals: Black November and Bolivia's interim government*. <https://www.humanrightsnetwork.org/bolivia>.
- Johnson, Jake y Lefebvre, Stephan (2014). Bolivia's Economy under Evo in 10 graphs. *CEPR*. <https://cepr.net/bolivias-economy-under-evo-in-10-graphs/>
- Kaup, Brent (2010). A neoliberal nationalization? The constraints on natural-gas-led development in Bolivia. *Latin American Perspectives*, 37(3).
- Kaup, Brent (2013). Transnational class formation and spatialities of power: The case of elite competition in Bolivia. *Global Networks*, 13(1).
- Laclau, Ernesto (2005). *On populist reason*. London/New York: Verso.
- Lazar, Sian (2008). *El Alto, Rebel City: Self and citizenship in Andean Bolivia*. Durham/London: Duke University Press.
- Mair, Peter (2013). *Ruling the void: The hollowing of Western Democracy*. New York: Verso.

- Mayorga, Fernando (2020). El MAS-IPSP ante un nuevo contexto político: De “partido de gobierno” a “instrumento político” de las organizaciones populares. En Souverein, Jan y Rodríguez, José Luis Exeni (Comps.), *Nuevo mapa de actores en Bolivia*. La Paz: FES.
- Morales, Waltraud (2013). The TIPNIS crisis and the meaning of Bolivian democracy under Evo Morales. *The Latin Americanist*, 57(1).
- Munck, Gerardo (2015). Building democracy... which democracy? Ideology and models of democracy in post-transition Latin America. *Government and Opposition*, 50(3).
- Paz, María y Ramírez-Cendrero, Juan M. (2021). Extractivism and resource nationalism in Bolivia: Foreign direct investment policy and development under Evo Morales. En Ellner, Steve (Comp.), *Latin American Extractivism: Dependency, Resource Nationalism, and Resistance in Broad Perspective*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
- Polanyi, Karl (1944). *The great transformation: The political and economic origins of our time*. New York: Farrar and Rinehart.
- Roberts, Kenneth (2015). *Changing course: Party systems in Latin America's neoliberal era*. New York: Cambridge University Press.
- Roberts, Kenneth (2019). Bipolar disorders: Varieties of capitalism and populist outflanking on the left and right. *Polity*, 54(4).
- Rossi, Federico y Silva, Eduardo (2018). Introduction: reshaping the political arena. En Silva, Eduardo y Rossi, Federico (Comps.), *Reshaping the Political Arena in Latin America: From Resisting Neoliberalism to the Second Incorporation*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Sánchez-Sibony, Omar (2021). Competitive authoritarianism in Morales's Bolivia: Skewing arenas of competition. *Latin American Politics and Society*, 63(1).
- Schilling-Vacaflor, Almut (2017). If the company belongs to you, wow can you be against it? Limiting participation and taming dissent in neo-extractivist Bolivia. *The Journal of Peasant Studies*, 44(3).
- Schmitter, Philippe (2019). “Real-existing” democracy and its discontents: Sources, conditions, causes, symptoms, and prospects. *Chinese Political Science Review*, 4(2).
- Schneider, Alejandro (2019). Algunos elementos para comprender el golpe de estado en Bolivia. *CEDLA Blog*. <https://cedla.org/cedla-en-los-medios/47243/>.

- Silva, Eduardo (2009). *Challenging neoliberalism in Latin America*. New York: Cambridge University Press.
- Slater, Dan (2013). Democratic careening. *World Politics*, 65(4).
- Tapia, Luis (2011). *El Estado de derecho como tiranía*. La Paz: CIDES-UMSA.
- Trujillo, Jorge y Spronk, Susan (2018). Socialism without workers? Trade unions and the new left in Bolivia and Ecuador. En Silva, Eduardo y Rossi, Federico (Comps.), *Reshaping the Political Arena in Latin America: From Resisting Neoliberalism to the Second Incorporation*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Webber, Jeffrey (2010). Carlos Mesa, Evo Morales, and a divided Bolivia (2003-2005). *Latin American Perspectives*, 37(3).
- Weyland, Kurt (2013). Latin America's authoritarian drift: The threat from the populist left. *Journal of Democracy*, 24(3).
- Williams, Jack y Curiel, John (2020). Analysis of the 2019 Bolivia election. CEPR. <https://cepr.net/report/analysis-of-the-2019-bolivia-election/>
- Wolff, Jonas (2019). The political economy of Bolivia's post-neoliberalism: Policies, elites and the MAS government, *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, 108.
- Wolff, Jonas (2020). Las élites económicas en la Bolivia contemporánea. En Souverein, Jan y Rodríguez, José Luis Exeni (Comps.), *Nuevo mapa de actores en Bolivia*. La Paz: FES.
- Zuazo, Moira (2010). ¿Los movimientos sociales en el poder? *Nueva Sociedad*, 227.

LA REVOLUCIÓN CIUDADANA EN EL ECUADOR DE 2007-2017: MÁS ALLÁ DEL POPULISMO

Pablo Dávalos

INTRODUCCIÓN

En el debate sobre el populismo, el filósofo argentino Ernesto Laclau logró una especie de desplazamiento epistemológico clave cuando adscribió el populismo a las formas de construir *lo* político dentro de una lógica de articulaciones en una dinámica de equivalencias y heterogeneidades (Laclau, 2005). Por ello, para Laclau el “populismo es, simplemente, un modo de construir lo político”, y *lo* político siempre es populista (Laclau, 2005, p. 11). De esta manera, Laclau desarma esa especie de consenso que adscribía contenidos negativos y que siempre veía al populismo como una amenaza a la democracia liberal y, por otra parte, amplía el campo de posibles teóricos para el debate sobre el populismo.

El giro epistemológico de Laclau se sustenta en las debilidades teóricas que tiene el concepto de populismo en sí mismo para generar una definición canónica. La resistencia a otorgar un sustento epistemológico fuerte a esta noción del populismo se debe a una posición de principio con respecto a la teorización de la democracia liberal que se asume a sí misma desde posiciones ontológicas y esenciales, es decir universales y teleológicas, y con un sujeto político fundamentado, asimismo, esencialmente. Es por ello que, desde esta visión, se considera al populismo como un síndrome de la democracia liberal

(Wiles, 1969), o como una patología de sociedades en pleno desarrollo económico y modernización política que impediría ese desarrollo y ese crecimiento económico (Edwards, 2019).

La emergencia del líder carismático que opone el pueblo a las oligarquías y polariza al sistema político en un maquiñismo que retoma la noción amigo/enemigo de Carl Schmitt, puede de alguna manera describir al populismo pero, en realidad, no lo explica epistemológicamente (Tushnet, 2019). La aporía del liberalismo que impide esa conceptualización es que sin la construcción del “pueblo” no hay populismo, pero tampoco hay democracia (Laclau, 2005, p. 213).

Precisamente por ello, Laclau propone cambiar de estrategia y no preguntarse qué es el populismo (porque aún no existe una respuesta epistemológicamente convincente sobre su definición), sino: “¿a qué realidad social y política se refiere el populismo? [...] ¿De qué realidad o situación social es *expresión* el populismo?” (Laclau, 2005, p. 31, cursivas en el original).

De esta manera, y como lo expresa Peruzzotti, Laclau “le dio la vuelta al debate sobre el populismo” (Peruzzotti, 2019, p. 33). El populismo, en consecuencia, ya no sería una supuesta patología de la democracia liberal sino más bien otra forma de construir la política en términos de *lo* político; quizá sea por ello que el texto de Laclau formó parte de la doxa de algunos partidos de izquierda como Podemos en España, o el neoperonismo en Argentina (De la Torre, 2019).

En esa *terra incognita* como lo define Ardití al populismo (Arditi, 2004), lo importante es comprender sus condiciones de posibilidad y sus condiciones de existencia. Es decir, el marco ontológico, político e histórico que lo hace posible, porque, en definitiva, el populismo acompaña a la democracia liberal como una sombra (Canovan, 1999). No obstante, si el populismo es la sombra de la democracia liberal, como lo expresa Canovan, entonces ¿por qué la democracia liberal se resiste a reconocerse en su propia sombra? ¿Qué contornos numinosos se advierten en esa sombra que la democracia liberal opta por encubrirla o negarla?

Si el populismo es esa especie de sombra numinosa de la democracia liberal, es porque muestra contornos que le pertenecen y que solo se expresan en el populismo. No está equivocado De la Torre, cuando señala que los populistas “politizan las exclusiones, señalan el mal funcionamiento de las democracias y exigen mejoras formas de representación y participación democrática” (De la Torre, 2019, p. 24).

En la política asumida de forma racional no hay enemigos sino antagonistas. La dimensión de antagonismo, escribe Chantal Mouffe, es “inherente a las relaciones humanas, antagonismo que puede adoptar muchas formas y surgir en distintos tipos de relaciones sociales”

(Mouffe, 2007, p. 15). Sin embargo, el antagonismo es “exterior a la sociedad” y establece los límites que impedirían a la sociedad constituirse plenamente porque parten y se definen desde la heterogeneidad de lo social (Laclau y Mouffe, 2006, p. 169), por ello el carácter incompleto y abierto de lo social en la que ninguna articulación puede suturar el campo de lo social y, por tanto, la noción de pueblo no se agota por ningún contenido óptico ni articulación de clase (Sánchez Díaz, 2016).

De acuerdo a Laclau, la *plebs* (particularidad) asume y reclama ser el universal legítimo de la totalidad social. Deviene en *populus*, a través de una cadena de equivalencias y en un campo de contingencias de lo político. De esta forma, como *populus* se sitúa en ese ámbito de lo político que Oliver Marchat considera como irreductible a todo intento de domesticación política (Marchat, 2007). Es en ese territorio de lo político en el que Laclau sitúa al populismo: “¿Significa esto que lo político se ha convertido en sinónimo de populismo?”. Sí, responde Laclau, “en el sentido en el cual concebimos esta última noción” (Laclau, 2005, p. 195). Si el populismo se inscribe en lo político, entonces hay una convergencia directa con el pensamiento post-fundacional.

El pensamiento post-fundacional parte de la diferencia entre ser y ente que había establecido Heidegger. El ser es lo universal vacío que actúa como momento constituyente de lo político. El ente es lo particular concreto que llena ese vacío, a través de una entificación del ser y una permanente y contingente actualización óptica del ser.

Por tanto, la crítica epistemológica del pensamiento post-fundacional a todo principio o esencia que permita hacer inteligible la política por fuera de la sociedad, por ejemplo, el universalismo liberal del sujeto racional moderno o la totalidad dialéctica del marxismo y la articulación del conflicto social en lucha de clases, se produce desde esta diferencia ontológica; esto quiere decir que aquellos fundamentos trascendentales que explican la política pierden la posibilidad de constituir y cerrar la sociedad dentro de esos principios o esencias de lo social, de esta forma, se genera una distancia con el determinismo económico, el conductismo, el positivismo, el sociologismo, entre otros, por una comprensión más contingente de la política (Marchat, 2007).

Por ejemplo, la visión más positiva del liberalismo consideraría a la democracia liberal sujeta a un paradigma universalista que, en realidad, deviene en un discurso del orden. Solo así puede entenderse aquello que Edwards denomina la “buena política económica” (Edwards, 2019, p. 77). La “buena política económica” es aquella que proviene del *mainstream* neoliberal y que, finalmente, coincide con

el Consenso de Washington de John Williamson (Williamson, 2004). Esto es precisamente la entificación del ser que reclama el post-fundacionalismo. Es presentar lo particular como lo universal. Es, en términos de Laclau y Mouffe, pura hegemonía, es decir, la relación por la cual “una cierta particularidad pasa a ser el nombre de una universalidad que le es enteramente inconmensurable” (Laclau, 2008, p. 15).

Entonces, y en la ruta abierta por Laclau, se trata de comprender la realidad social y política de la cual es expresión el populismo; es decir, se trata de intuir las condiciones de posibilidad y de existencia del fenómeno populista, desde una distancia prudente de toda esencialidad y positividad proveniente del discurso liberal, porque es la única manera teórica por evitar la redundancia en la conceptualización del populismo.

Si Laclau tiene razón y el populismo es “simplemente un modo de construir lo político”, y si *lo* político expresa tanto la diferencia ontológica entre el ser y el ente, cuanto el proceso por el cual el ser se actualiza y manifiesta en el ente, entonces hay que preguntarse por el exceso de lo político y de lo cual es expresión, precisamente, el populismo.

En efecto, no se puede explicar al populismo sin explicar, determinar y construir el concepto de “pueblo” (*populus*). Pero si se construye ese concepto se legitima al populismo y la democracia aparece solo como una forma de ese concepto. Laclau tiene razón, sin el *populus* es impensable el populismo, pero también la democracia. Surge ahí la aporía entre forma y contenido de la política de las sociedades modernas.

La forma política moderna de los sistemas políticos, supuestamente racionales y plurales, no puede absorber a su propio contenido político, y la emergencia, apelación y conformación del populismo da cuenta de esa aporía; es la confesión que el contenido excede a su forma, y que no existe manera ni de remitirlo, ni de disciplinarlo, ni tampoco de suprimirlo, porque no hay dialéctica posible. Al apostar por el abismo ontológico, es imposible cerrar la noción de populismo y, en consecuencia, emerge la aporía de definirlo y habría que optar por extender la categoría de populismo a todo comportamiento del sistema político.

¿Por qué existe esa asimetría fundamental entre forma y contenido en las democracias modernas? ¿Qué indicios muestra esa aporía? Si el populismo es la expresión de una realidad social ¿cuál es esta? Puede proponerse la hipótesis que el populismo es la expresión de la cesura radical en las sociedades modernas entre la economía, la política y el derecho (además de otras cesuras como aquellas que provienen de los

afectos y las emociones, o de las visiones lúdicas y estéticas, o eróticas, en fin).

Así, puede existir una democracia política, pero nunca una democracia económica. Se puede votar por el presidente de la República o el Congreso, pero nunca por el jefe de la oficina o de la fábrica. El derecho puede garantizar la ley y el orden pero no la redistribución de la riqueza. Los afectos y las emociones pueden estar presentes en la campaña política pero no en el ejercicio del gobierno. Lo lúdico se suprime en función de la competitividad y productividad. El sujeto moderno puede ser racional pero no erótico. No habría libido en *lo* político.

El liberalismo descontamina la economía de todos sus rasgos humanos y sociales. Limpia de toda contradicción a la economía y la política, y el derecho. Las separa y las comprende como formas puras y racionales. Cuando estas supuestas formas puras y racionales evidencian la contaminación de lo humano, entonces la teoría liberal procede a cerrar aun más el campo de sus prescripciones.

El populismo, en realidad, sería el intento de las sociedades por superar esas cesuras radicales de la modernidad y del liberalismo y provocar una sutura entre política y economía, entre derecho y política. Es, como lo diría Canovan, el rostro de redención de la democracia (Canovan, 1999). El populismo, de esta forma, sería algo más que una “lógica política” como la asume Laclau (Laclau, 2005, p. 150), el populismo sería un síntoma, un indicador de lo que falla en la propia estructura que se ve amenazada por arrebatos “patológicos” (Žižek, 2006, p. 556). La supuesta patología del liberalismo y que se expresa en esa aparente sutura en el populismo, es, en realidad, la expresión de la cosificación, como el proceso que separa a los seres humanos de sus propias condiciones de existencia y posibilidad en tanto humanos (Lukács, 1985).

Al excluir de su análisis teórico a la reificación, el análisis de Laclau, que había logrado dar al populismo una dignidad que le había sido negada en el análisis liberal, no podría dar cuenta de esas cesuras radicales del capitalismo. La cruda realidad del capitalismo, en su “danza solipsista” que “persigue su objetivo de rentabilidad en una bendita indiferencia respecto a cómo su movimiento afectará a la sociedad” (Žižek, 2006, p. 566), no empata con las nociones teóricas sobre el populismo. Los problemas inherentes a los procesos de acumulación de capital y sus formas políticas de dominación se le escapan como arena entre los dedos.

LA DEFINICIÓN TEMPORAL DEL ANÁLISIS: EL AGOTAMIENTO DEL CICLO NEOLIBERAL DE 1982-2005 Y EL ASCENSO DEL “POPULISMO”

Los teóricos sobre el populismo coinciden en señalar al ciclo político de 2007-2017 bajo la Presidencia en el Ecuador de Rafael Correa, como un ciclo populista (Edwards, 2019; De la Torre, 2013; Mazzolini, 2021). Este proceso político se identifica también como “Revolución Ciudadana” (Dávalos 2014; Muñoz Jaramillo *et al.*, 2014).

Edwards califica al proceso de 2007-2017 como populismo sin “dominancia fiscal”, por la dolarización de la economía que impide procesos inflacionarios y limita el margen de maniobra de la política económica (Edwards, 2019, p. 89). Carlos De la Torre lo denomina “Tecnopopulismo” (De la Torre, 2013). La mayoría de los autores coinciden en inscribirlo dentro de las corrientes del populismo de izquierda conjuntamente con Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Daniel Ortega en Nicaragua y Néstor Kirchner en Argentina (De la Torre, 2013).

Ahora bien, si la tesis de Laclau es explicar el populismo a partir de las condiciones sociales, históricas y políticas que lo hacen posible, puede afirmarse que este ciclo político de la revolución ciudadana corresponde al agotamiento de un ciclo político más largo que empezó en el año 1982 a partir de la crisis de la deuda externa de América Latina y que, en el Ecuador, se expresa por la presencia permanente de las políticas de ajuste y reforma estructural condicionadas por el FMI y el Banco Mundial desde el año 1983 hasta el año 2005 en el que se produce la caída del expresidente Lucio Gutiérrez y que produjeron la mayor crisis económica en la historia reciente del Ecuador en los años 1999-2000 que provocó la dolarización de la economía (Páez, 2004).

En efecto, durante 1982-2005, el Ecuador estuvo sometido a las prescripciones del Consenso de Washington en sucesivos acuerdos con el FMI (Dávalos, 2011). Si bien es cierto que dentro del ciclo neoliberal de la economía y la política existieron gobiernos populistas, como aquel de Abdalá Bucaram que solo duró medio año en su mandato (1997), también es cierto que fueron modalidades en el sistema político que no alteraron el ciclo neoliberal de más largo plazo. En cambio, el nuevo ciclo político que se inicia en el año 2007 y que termina en el año 2017, corresponde a una ruptura y crítica radical al neoliberalismo, al FMI, al Banco Mundial y a las políticas del Consenso de Washington (Dávalos, 2014).

Se puede establecer una primera hipótesis y es que el ciclo político de la revolución ciudadana que empieza en el año 2007 se produce por el agotamiento del ciclo político del neoliberalismo. ¿Qué razones produjeron ese agotamiento? Una de las principales razones fue la

crisis de 1999-2000. Esta crisis se produjo por la desregulación del sistema bancario y financiero que empezó en el año 1994 y bajo el gobierno de Sixto Durán Ballén (1994-1998).

La desregulación del sistema bancario provocó una distorsión en los circuitos ahorro-inversión del país y produjo las condiciones de posibilidad para una burbuja financiera especulativa. Esa burbuja estalla en el año 1999, previa a la decisión del sistema político, adoptada en el año 1998, de trasladar la responsabilidad de asumir pasivos bancarios con dineros públicos de las reservas monetarias internacionales. Esa ley creó, además, la Agencia de Garantía de Depósitos, como la institución que respaldaba los pasivos privados con fondos públicos (Cantos Molina, 2020).

En esa coyuntura, el sistema político giró hacia los bancos privados para crear una cobertura de protección ante la crisis y ante los reclamos ciudadanos. Una auditoría posterior del proceso demostraría que los bancos privados crearon sistemas Ponzi para los créditos y, además de la piramidación, crearon el expediente de créditos con condiciones ventajosas para los accionistas de los bancos en una dinámica que fue conocida como “créditos vinculados” (Páez, 2004).

EL TRIUNFO ELECTORAL DE RAFAEL CORREA Y EL INICIO DEL NUEVO CICLO POLÍTICO

El nuevo gobierno encabezado por su vicepresidente, Alfredo Palacio, decide ser más prudente en materia de política económica y suspende los acuerdos con el FMI. Quien toma la decisión de suspender esos acuerdos con el FMI es su entonces ministro de economía, Rafael Correa. La población aplaude esa decisión y decide respaldarla políticamente. De hecho, a fines del año siguiente, 2006, Rafael Correa será electo presidente del Ecuador con un movimiento político creado en esa coyuntura y solo como registro electoral para inscribir su candidatura (Tibocha y Jaramillo Jassir, 2008). En su campaña electoral, Rafael Correa retoma los temas antipolíticos de Lucio Gutiérrez y suscribe la consigna “¡Que se vayan todos!” de forma tan radical que decide no presentar candidatos al Parlamento y, si gana, convocar inmediatamente a una Asamblea Constituyente. Esto convence a los electores de apoyarlo políticamente y da cuenta del desgaste sufrido por el sistema político producto de la crisis financiera y monetaria de 1999-2000.

En efecto, en el año 2007, en el mismo día de su posesión, el segundo decreto ejecutivo que suscribe Rafael Correa es la convocatoria a una Asamblea Constituyente con plenos poderes. Apenas a diez años de la promulgación de la Constitución de 1998, el Ecuador comienza a reescribir un nuevo texto Constitucional esta vez alejado de todas

las prescripciones del neoliberalismo y del Estado de derecho (Paz y Miño Cepeda, Dávalos y De la Torre Muñoz, 2007).

El proceso de movilización social hacia la Asamblea Constituyente se sustenta en la crítica radical al neoliberalismo, al FMI, al Banco Mundial y a las recomendaciones del Consenso de Washington y a la necesidad de recuperar al país de la corrupción de los partidos políticos tradicionales a los que se los denomina como “partidocracia”. La consigna de “salir de la larga noche neoliberal”, que Rafael Correa retoma del Foro Social Mundial de Porto Alegre, moviliza a la sociedad y se expresa en un amplio apoyo a los candidatos de la revolución ciudadana.

En esos momentos, hay un despliegue de universos simbólicos que apelan al pueblo para movilizarlo, pero aún es temprano para calificarlo como populismo. Esos universos simbólicos se corresponden con el sentimiento antipolítico de la sociedad que necesita una catarsis con respecto a la crisis de 1999-2000. En virtud que el partido de gobierno de Rafael Correa, Alianza País, está aún por constituirse, la convocatoria a la Asamblea Constituyente y el proceso electoral que le es correlativo sirven para crear ex nihilo a ese movimiento político que, hasta ese entonces, había sido solamente un registro electoral para inscribir la candidatura de Rafael Correa y había aglutinado a un variopinto arcoíris de organizaciones sociales y políticas que, en su mayoría, se reclamaban de izquierda y ciudadanas (Dávalos, 2014).

El proceso de la Asamblea Constituyente de 2007-2008 en el Ecuador, no solo que cambió de manera trascendente las reglas de juego constitucionales y posibilitó salir del Estado de Derecho hacia el Estado constitucional de derechos y justicia, sino que también sirvió para crear al partido de gobierno, Alianza País. Con un enorme capital político, el naciente gobierno tiene un amplio margen de maniobra y utiliza las elecciones que avalaron la convocatoria y conformación para la Asamblea Constituyente para estructurar y definir al partido de gobierno. Esa Constitución deberá recoger esa necesidad de refundación radical del sistema político y sus instituciones pero, al mismo tiempo, deberá otorgarle al nuevo poder las palancas que le permitan asegurar sus propias condiciones de dominación política.

Pero la Asamblea Constituyente no solo que funcionó como un proceso político para crear al partido de gobierno, sino que también fue un proceso de catarsis social que liquidó las posibilidades electorales de la oposición política y la redujo a actuar en los márgenes del sistema político.

Los temas más caros a la sociedad que tenían que ver con la catarsis contra los banqueros privados y las elites del poder que la sociedad los identificaba como culpables directos de la crisis de 1999-2000, se

convirtieron en temas de tratamiento constitucional y de debate público. El Consenso de Washington se demoniza en la opinión pública. Todo lo que tiene que ver con el neoliberalismo adquiere el sombrío tono del recuerdo de los días más duros de la crisis de 1999-2000. El FMI y el Banco Mundial, finalmente, son expulsados del país (La Voz de América, 2007). Rafael Correa se convierte en uno de los críticos más radicales e implacables contra estas instituciones financieras internacionales.

La Constitución aprobada en el año 2008, además, crea un marco jurídico que haría imposible el ajuste económico en los términos del Consenso de Washington. Norma la regla fiscal que establece una relación de igualdad contable entre los ingresos permanentes y los gastos permanentes del Estado, de tal manera que el gasto corriente se separa del cálculo del déficit fiscal. En el Ecuador el gasto corriente no tiene relación alguna con el déficit fiscal por prescripción constitucional (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008).

El contexto global también le es favorable al nuevo gobierno. Tiene a su alrededor una serie de gobiernos que suscriben, apoyan y respaldan sus propuestas de redistribución y de soberanía y que conforman un entorno regional crítico con el Consenso de Washington. El precio de los commodities, de otra parte, experimenta un gran crecimiento, en especial como resultado de la crisis de las *subprime* del año 2007, y que hace que los commodities se conviertan en refugios del valor. Los ingresos por exportaciones de petróleo son importantes y el nuevo gobierno los utiliza para multiplicar la inversión pública.

La oposición, en ese contexto, tiene un margen de maniobra reducida. Tanto la oposición de derecha cuanto aquella de izquierda son irrelevantes. Es evidente, además, que el gobierno de la revolución ciudadana sintoniza perfectamente con la población, y no se trata solamente de una constatación empírica sino más bien de un fenómeno político más complejo y que revela un ejercicio tecnocrático puntual y expedito, que comprende mediciones permanentes del ánimo social, de tal manera que todas las declaraciones, acciones y políticas públicas no se toman sin que hayan sido previamente avaladas por esas encuestas, estudios de opinión e investigación política. En otras palabras, la política, en tiempos de la revolución ciudadana, se tecnificó.

LA MAQUINARIA POLÍTICA DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA

El populismo fue, en realidad, una fachada de un modelo de dominación política, altamente efectivo en el uso de las herramientas y tecnologías de la comunicación política moderna. Con amplios recursos a su haber, el gobierno de Rafael Correa lo primero que hizo desde su acceso al poder, es construir una arquitectura institucional para el

manejo tecnocrático de la política nacional en un ejercicio sin precedentes para el sistema político ecuatoriano; la revolución ciudadana elaboró un tablero de mando con indicadores permanentes del estado de ánimo de la población, de tal manera que el recurso al populismo fue calculado de forma extrema y rigurosa.

Cuando los *impasses* con la oposición social y política no podían resolverse con recursos populistas, el gobierno no dudaba en crear las condiciones para los plebiscitos. En pocos meses, esa forma de comprender y hacer la política, le convirtieron en la maquinaria política más efectiva en toda la historia de la democracia moderna del Ecuador. En el periodo 2007-2017 ganó diez elecciones de forma consecutiva (Ortiz, 2018, p. 555), y su hegemonía dentro del sistema político fue abrumadora. Nunca antes, en el Ecuador, una organización política se había construido desde la eficiencia tecnocrática del poder.

Así, era imposible ganar las elecciones en contra del partido de gobierno. Uno de sus críticos de la derecha, César Montúfar, calificó a la revolución ciudadana como un “régimen autoritario electoral” (Montúfar, 2016, p. 85). El expresidente Osvaldo Hurtado (1982-1984), y quien empezó con los programas de ajuste neoliberal en el Ecuador, calificó a la revolución ciudadana como una dictadura autocrática que concentró el poder en contra de los derechos básicos (Hurtado, 2012). Todos los partidos políticos y toda la clase política se vieron sorprendidos y rebasados por una forma de comprender y hacer la política hasta ese entonces inédita. Sin embargo, los métodos para “concentrar el poder” fueron todos ellos liberales y democráticos. Lo único que hizo Rafael Correa y Alianza País fue utilizarlos bajo los criterios de la eficiencia política y la racionalidad tecnocrática.

Amén de su capacidad de visualización de la política en todas sus facetas desde la institucionalidad creada específicamente al efecto, el partido de gobierno de Rafael Correa construyó un aparato mediático impresionante que empezó a rivalizar y a desplazar a los grandes medios de comunicación. Durante todo el periodo 2007-2017, Rafael Correa convirtió a los medios de comunicación masivos y pertenecientes a las elites económicas y afines a los partidos políticos tradicionales, en sus verdaderos interlocutores políticos. Les otorgó un sustrato político y los convirtió en sujetos políticos reales.

Era la primera vez en la historia reciente del Ecuador en donde un gobierno orillaba a los márgenes del sistema político a los partidos y movimientos políticos de oposición, mientras situaba en el centro de la disputa política a los tradicionales medios masivos de comunicación.

Esa estrategia política fue confundida como un atentado a los derechos de la libertad de expresión. Nunca se la consideró como una es-

trategia política con un objetivo preciso. Esa confusión fue muy funcional a la construcción hegemónica de Alianza País, porque creaba una aporía política para los medios tradicionales de comunicación: no podían reclamarse como sujetos políticos porque ello les enajenaba su deontología, pero tampoco podían actuar como los relevos de los partidos políticos que habían sido marginados en esta nueva coyuntura, sin perder sus credenciales éticas.

Asimismo, las políticas públicas fueron puestas dentro de esta estrategia política de construcción hegemónica. Ninguna política pública se tomaba sin que previamente pase el filtro de esa matriz de dominación política. La inversión pública era un correlato que reforzaba la hegemonía del partido de gobierno. La impresionante red de carreteras y autopistas que se construyeron durante este ciclo político, así como las hidroeléctricas, y toda la infraestructura pública de hospitales, universidades, entre otros, reforzaban el imaginario social de un gobierno que invertía directamente en el pueblo y que tenía que bregar contra medios de comunicación y en contra de la “partidocracia” para hacerlo.

Se trató, en consecuencia, de un proceso político que rebasa a todo marco de interpretación que pueda definirse desde el populismo. El ciclo político que empezó en el año 2007 fue algo mucho más complejo, más vasto, más profundo que un ciclo populista, al menos en sus términos tradicionales. El sistema político del Ecuador no había visto la construcción de una maquinaria tan eficiente y expedita al momento de hacer la política, como lo fue el movimiento Alianza País.

LAS CLASES MEDIAS: LAS BASES POLÍTICAS DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA

Es dentro de esa matriz de construcción de la hegemonía, que el partido de gobierno de Rafael Correa creó su base social, pero a diferencia del proceso de Venezuela o Bolivia que tienen en sectores populares sus principales ejes de referencia, en el caso del Ecuador, la base social del partido de gobierno no fueron los sectores populares sino la clase media.

Se creó una clase media desde la redistribución del excedente de los commodities y directamente desde el Estado. Se trató de un proceso que le permitía al partido de gobierno cosechar lealtades a su proyecto político, porque la estabilidad laboral de estos sectores medios dependía de la estabilidad del gobierno. No se necesitaba que se conviertan en militantes a fortiori sino en crear una lógica en la cual el destino personal de los funcionarios públicos se vinculaba directamente al destino del partido de gobierno.

Por ello, los salarios de los funcionarios del sector público crecieron de forma más rápida que aquellos del sector privado, mientras que, al mismo tiempo, su estabilidad se fragilizaba. Un pequeño desliz político y estaban fuera. Se utilizó el recurso de la meritocracia para adscribir al partido de gobierno a técnicos, expertos y convertirlos en cuadros políticos potentes.

En esos años la expansión de la clase media fue importante y la pobreza se redujo a tales niveles que incluso Sebastián Edwards, partidario de la “buena economía” del *mainstream* neoliberal, reconoce que en este ciclo de 2007-2017 la desigualdad, medida en índice de Gini, se redujo de 53,4 en 2006 a 44,7 en 2017, “un logro significativo que no ha sido igualado por ningún país latinoamericano en los tiempos modernos” (Edwards, 2019, p. 94).

EL CONFLICTO POLÍTICO COMO RECURSO DE CONSTRUCCIÓN HEGEMÓNICA

Sin embargo, algo que caracterizó este ciclo político 2007-2017 no fue en absoluto el populismo, que en realidad era solamente una herramienta más en su repertorio, sino la tensión política permanente. Fue un periodo en el cual al mismo tiempo que se medía en el tablero de mando los indicadores y variables de la política, también se creaba un ambiente de tensión y confrontación permanente.

Se trataba de la creación del miedo como heurística del poder. Pero, a diferencia de otros procesos políticos en los cuales el miedo era ejercido directamente sobre la población, esta vez la utilización estratégica del miedo se convirtió en un recurso de movilización social y cohesión política. Se trataba de crear un miedo sobre la pérdida de todo lo que se había conquistado hasta ese momento y de la amenaza permanente de la “partidocracia” por recuperar su poder y echar abajo todas las conquistas alcanzadas.

Se trataba de crear miedo a un futuro sin Alianza País y sin Rafael Correa. Quizá la mejor metáfora de este recurso sea la frase que Rafael Correa retomó de Ignacio de Loyola, y que siempre la aplicaba en momentos de tensión política: “en una fortaleza asediada, cualquier disidencia es traición” (Representaciones diplomáticas de Cuba en el exterior, 2016).

Pero ese ambiente de tensión, de inseguridad y de conflicto directo con los enemigos, se construía semana a semana en las alocuciones que Rafael Correa copiaría de su homólogo Hugo Chávez de Venezuela. Pero Chávez se dirigía a los sectores populares y los politizaba. Correa se dirigía a los militantes de su propio partido y los disciplinaba. Nunca admitía la más mínima disidencia dentro de su movimiento. La tensión política, que en algunos momentos replicó la lógica amigo/

enemigo de Carl Schmitt, permitió la construcción de un partido disciplinado, leal y siempre presto. Era una maquinaria que se engrasaba todos los días. Era el epítome del partido leninista (Dávalos, 2014).

Por ello, las categorías de populismo, o aquellas de la hegemonía, pueden alumbrar una parte de este proceso pero dejan en penumbras todo lo demás. El concepto de populismo quizá pueda describir algunas de las formas tradicionales de construcción de la política, pero impide comprender lo más importante: la construcción tecnocrática del poder. Carlos de la Torre identificó de alguna manera ese proceso (De la Torre, 2013), aunque no pudo discernir la complejidad de lo que significó esta dinámica en la construcción de la hegemonía política, quizá por su adscripción teórica a sus propios supuestos de base.

Ahora bien, un proceso de esa magnitud necesita de recursos fiscales importantes. Al no asumir una posición beligerante en materia tributaria con los grupos económicos que podían utilizar su enorme poder económico como un obstáculo en la construcción de su hegemonía política y generar ruido, esos recursos solamente podían provenir de la renta extractiva. Pero esa renta extractiva dependía de la volatilidad de los mercados internacionales y de la ampliación de su frontera. Por eso, pudo apreciarse un giro de tuerca en el extractivismo durante el periodo 2007-2017.

EL EXTRACTIVISMO Y EL FIN DEL CICLO POLÍTICO

Si algo caracteriza a este periodo 2007-2017 es también su apuesta radical por el extractivismo y que se resume en una frase del expresidente Rafael Correa: “No podemos ser mendigos sentados en un saco de oro” (Dávalos, 2013, p. 213). El saco de oro eran los recursos minerales que, de otra parte, están en territorios indígenas. No obstante, al apostar por el extractivismo, el proceso de la revolución ciudadana entraba en conflicto directo con las organizaciones indígenas del Ecuador, porque suponían una disputa directa por sus territorios. Para obtener las rentas necesarias del extractivismo, el régimen de la revolución ciudadana tenía que entrar de lleno en una dinámica de violencia y desposesión en contra de los pueblos indígenas, sobre todo de la amazonía.

En efecto, el ciclo político 2007-2017 se caracterizó por una dura confrontación con las organizaciones indígenas. La defensa de sus territorios y, en especial, el agua, se convirtió en el eje de confrontación entre el gobierno y los pueblos indígenas. Se trató de una disputa que empezó en el año 2007 cuando el gobierno ordenó que el ejército entre a pacificar a la población amazónica de la comunidad de Dayuma, en la provincia de Orellana, que había amenazado con cerrar el oleoducto de petróleo si no se atendían sus pedidos. El enorme despliegue

de fuerza desde el Estado en contra de una humilde comunidad indígena presagiaba un mensaje de músculo político en contra de los pueblos indígenas que quisieran oponerse a las derivas extractivas. Era el mensaje de un gobierno que no estaba dispuesto a ceder en su deriva extractiva.

Para las organizaciones indígenas, se trataba de una continuidad de su resistencia contra el neoliberalismo. Por ello, el discurso anti-neoliberal y en contra del Consenso de Washington no tenía ningún efecto sobre las organizaciones indígenas. Para ellas, el gobierno de Rafael Correa era la continuación del neoliberalismo por otros medios.

El gobierno de la Revolución Ciudadana procedió a neutralizar políticamente a los movimientos indígenas y su capacidad de movilización a través de su aislamiento del resto de la sociedad, al tiempo que desconectó a estas organizaciones de sus redes internacionales.

De esta manera, se reducía la capacidad política de los movimientos indígenas al mismo tiempo que eran objeto de intervención directa desde el Estado a través de programas específicos de asistencialismo social. Muchos de esos programas fueron dirigidos por el entonces vicepresidente Lenin Moreno. A nivel internacional se veía a un gobierno progresista que utilizaba la renta extractiva para realizar obra social en beneficio directo de los más pobres, y no se entendía cómo era posible que esos sectores se opondan al gobierno. Para muchos, se trataba de ingenuidad política que le hacía el juego a la derecha.

Sin embargo, el extractivismo produjo una fractura irremisible entre el proyecto de la revolución ciudadana y el movimiento indígena. Para los indígenas, todo lo que provenía de Alianza País y de Rafael Correa, era sospechoso. Nunca pudieron superar esa suspicacia, sobre todo años después, cuando se trató de hacer una alianza electoral para impedir el retorno de la derecha en las elecciones del año 2021. Para las organizaciones indígenas que ahora soportaban una deriva de desposesión más agresiva que aquella del periodo neoliberal, la revolución ciudadana era la continuidad de ese mismo neoliberalismo. Fueron estas resistencias las que poco a poco debilitaron a esta maquinaria política.

CONCLUSIONES

Del análisis realizado se pueden inferir varios procesos:

1. En el periodo 2007-2017, nunca hubo la construcción de un “*populus*” desde la revolución ciudadana. Su base social fueron las clases medias, no fueron los sectores populares. De ahí sus debilidades políticas. Los sectores medios fueron los primeros

en abandonar este proyecto político cuando consideraron que ya no los representaba. Los sectores populares fueron beneficiarios indirectos, vía efecto derrame, pero no formaban parte del sustrato político real de la revolución ciudadana, por tanto, puede indicarse que uno de los requisitos básicos de toda propuesta populista en este caso no pudo cumplirse;

2. nunca hubo un maniqueísmo entre pueblo y oligarquías, sino más bien entre ciudadanos y la “partidocracia”, es decir, el sistema político anterior al arribo al poder de la revolución ciudadana, por tanto, tampoco se cumple el otro requisito básico para calificarlo como populismo;
3. la construcción de la hegemonía política nunca fue un proceso contingente y nunca universalizó contenidos particulares, sino que siempre se mantuvo dentro de una tensión dialéctica en la cual la universalización no era de contenidos contingentes específicos, sino de un ethos, aquel de la revolución de los ciudadanos que moralizan la política pública y en el cual cualquier disidencia pueda derivar en traición;
4. nunca hubo un desorden en las finanzas públicas, sino todo lo contrario, la revolución ciudadana creó un orden y una estructura para las finanzas públicas que hasta ese entonces no había existido; es decir, en vez de un excesivo gasto público lo que hubo fue un uso estratégico del gasto público;
5. la redistribución de la renta fue para crear un sistema de lealtades políticas y se focalizó básicamente en las clases medias; los sectores populares se beneficiaron de esta redistribución por el efecto derrame de esta política (*spillover*);
6. quizá lo más importante es que la “estrategia populista” nunca fue improvisada ni espontánea, sino más bien todo lo contrario, fue sometida a un análisis riguroso y a una medición exacta que siempre se validaba en función de indicadores precisos que nacían de la comunicación política y las modernas técnicas de encuestas, muestreos e investigaciones. La revolución ciudadana construyó una impresionante arquitectura institucional para respaldar, consolidar y sustentarse en esta forma técnica de hacer la política;
7. la revolución ciudadana nunca afectó de ninguna manera a los grupos económicos de poder ni a sus intereses estratégicos; cuando tuvo que recurrir a nuevos recursos fiscales para financiar su proyecto político nunca utilizó la política fiscal, un impuesto al patrimonio de los grandes grupos económicos por

- ejemplo, o una mejor determinación fiscal de sus ingresos y su fiscalidad, sino que optó por ampliar y profundizar el extractivismo al riesgo de confrontar a las organizaciones indígenas que defendían, con legítimo derecho además, sus territorios;
8. el conflicto político durante el ciclo político 2007-2017 nunca se inscribió en las coordenadas del antagonismo, sino dentro de una trama estratégica en la cual la lógica amigo/enemigo superaba el antagonismo y se inscribía directamente en la neutralización de la oposición a través de la violencia directa del Estado; sin embargo, esa violencia nunca se utilizó en contra del poder económico sino directamente contra el movimiento indígena. Los líderes indígenas fueron acusados de terrorismo y fueron perseguidos de forma implacable. No había posibilidad de ningún antagonismo con relación al movimiento indígena porque la revolución ciudadana nunca los reconoció como interlocutores o interpelantes, aplicó contra ellos todas las leyes del *lawfare* que tenía a su disposición;
 9. ¿puede la noción de populismo ayudar a comprender esa eficiente maquinaria política que alguna vez fue Alianza País? ¿El liderazgo carismático de Rafael Correa es argumento suficiente para calificar a este proceso como populista? Las respuestas son negativas. En el periodo 2007-2017 nunca hubo populismo al menos en los términos tradicionales de esta categoría. Quizá algunas de sus formas fenoménicas hayan apelado a esta noción para tratar de explicarlo, pero, definitivamente, aquello que sucedió fue un proceso de más vasto calado y profundidad. Se trató de la primera organización política en el país, que modernizó la dominación política y la inscribió dentro de los mecanismos e instrumentos estratégicos y racionales de la comunicación política. Nunca antes un gobierno había tecnificado la política a esos extremos. La misma construcción del liderazgo de Rafael Correa fue un asunto técnico y medido con extrema rigurosidad. La revolución ciudadana redujo al mínimo posible las contingencias de la política y las sometió a una trama de cálculo, previsión y oportunidad. Todos los demás partidos políticos aparecieron chapuceros y artesanales ante una maquinaria perfectamente engrasada y altamente eficiente. Esta maquinaria, nunca perdió una elección hasta antes del año 2017 cuando sufre una traición desde dentro;
 10. ¿la revolución ciudadana es un proceso de izquierda? La respuesta es que nunca fue un proceso de izquierda. De hecho, se asumen a sí mismos como “progresistas”. Su principal lí-

der, Rafael Correa, siempre se caracterizó por sus posiciones conservadoras y ultramontanas. Su movimiento político estuvo siempre en contra del movimiento feminista, en contra del movimiento obrero, en contra del movimiento indígena, en contra del movimiento juvenil y estudiantil. Quiso cooptarlos y convertirlos en engranajes de su maquinaria, y procedió a dividirlos, perseguirlos y destruirlos cuando resistieron esa cooptación.

Quizá una de las categorías más pertinentes para comprender el proceso de construcción hegemónica de Rafael Correa y de su movimiento Alianza País, durante el periodo 2007-2017 sea aquella de simulacro y simulación de Jean Baudrillard. Su adscripción a la izquierda y su definición como “progresismo” y “socialismo del Siglo XXI”, fueron un simulacro. Su apelación al populismo fue también otro simulacro. La misma construcción del liderazgo carismático fue elaborada desde esa maquinaria electoral y política. Sin esa maquinaria ese liderazgo se evaporaba, como efectivamente sucedió a partir del año 2017 y en las elecciones subsecuentes a la traición que sufrieron ese mismo año. Desde su crisis de 2017 no han podido ganar otra elección. Necesitan del Estado para hacerlo. La revolución ciudadana fue el nombre para la maquinaria política más eficiente que se haya generado en el sistema político del Ecuador en toda su historia republicana.

BIBLIOGRAFÍA

- Arditi, Benjamín (2004). El populismo como espectro de la democracia: una respuesta a Canovan. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM)*, 191, mayo-agosto, 86-99.
- Asamblea Nacional del Ecuador (2008). *Constitución 2008*. Quito: Asamblea Nacional.
- Attali, Jacques (2019). *Karl Marx o el espíritu del mundo*. México: FCE.
- Ávila Santamaría, Ramiro (2011). *El neoconstitucionalismo transformador. El estado y el derecho en la Constitución de 2008*. Quito: Abya Yala/UASB.
- Bretón, Víctor (2005). *Capital social y etnodesarrollo en los Andes*. Quito: CAAP.
- Canovan, Margaret (1999). Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy. *Political Studies*, 47(1), 2-16.
- Cantos Molina, Alejandra (2020). *AGD de la estafa a la impunidad*. Quito: El Conejo.

- Dávalos, Pablo (2013). "No podemos ser mendigos sentados en un saco de oro". Las falacias del discurso extractivista. En AA. VV., *El Correísmo al desnudo* (pp. 190-215). Quito: Montecristi Vive.
- Dávalos, Pablo (2014). *Alianza PAIS o la reinención del poder. Siete ensayos sobre el posneoliberalismo en el Ecuador*. Bogotá: Desde Abajo.
- Dávalos, Pablo (2011). *La Democracia Disciplinaria. El proyecto posneoliberal para América Latina*. Bogotá: Desde Abajo.
- De la Torre, Carlos (2019). Global populism Histories, trajectories, problems, and challenges. En *Routledge Handbook of Global Populism* (pp. 1-28). London/New York: Routledge.
- De la Torre, Carlos (2013). In the Name of the People: Democratization, Popular Organizations, and Populism in Venezuela, Bolivia, and Ecuador. *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, 95, October, 27-48. CEDLA.
- De la Torre, Carlos (2008). Protesta y democracia en Ecuador: la caída de Lucio Gutiérrez. En AA. VV., *Luchas contrahegemónicas y cambios políticos recientes de América Latina* (pp. 197-227). Buenos Aires: CLACSO.
- De la Torre, Carlos (2013). Technocratic Populism in Ecuador. *Journal of Democracy* 24(3), julio, 33-46.
- De la Torre, Carlos (2007). The Resurgence of Radical Populism in Latin America. *Constellations* 14(3), 384-397. <https://doi.org/10.1111/J.1467-8675.2007.00453.X>
- Edwards, Sebastian (2019). On Latin American Populism, and its Echoes around the World. *Journal of Economic Perspectives*, 33(4), Fall, 76-99.
- Hurtado, Osvaldo (2012). *Dictaduras del Siglo XXI*. Quito: Paraíso Editores.
- IMF (2020). *IMF Country Report No. 20/286. Report, International Monetary Fund*. Washington: IMF.
- La Voz de América (2021, 26 de abril). *Ecuador expulsa a representante del Banco Mundial*. <https://www.vozdeamerica.com/a/article-2007-04-27-voa4/28024.html>
- Laclau, Ernesto y Chantal Mouffe (2006). *Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia*. Argentina: FCE.
- Laclau, Ernesto (2008). *Debates y combates. Por un nuevo horizonte de la política*. Buenos Aires: FCE.
- Laclau, Ernesto (2005). *La razón populista*. México: FCE.

- Lukács, Georg (1985). *Historia y conciencia de clase*. Barcelona: Orbis.
- Marchat, Oliver (2007). Post-Foundational Political Thought Political Difference. En Lefort, Badiou y Laclau, Ernesto (Comps.), *Taking on the Political*. Edinburg: Edinburgh University Press.
- Mazzolini, Samuelle (2021). Rafael Correa and the Citizen's revolution in Ecuador. A case of Left-Wing Non Hegemonic Populism. En Ostiguy, Pierre; Panizza, Francisco y Moffitt, Benjamin (Comps.), *Populism in global perspective. A Performative and Discursive Approach*. New York: Routledge.
- Montúfar, César (2016). *¿Vivimos en democracia? Análisis conceptual del régimen político de la revolución ciudadana*. Quito: UASB-Corporación Editora Nacional.
- Mouffe, Chantal (2007). *En torno a lo político*. Buenos Aires: FCE.
- Muñoz Jaramillo, Francisco (Ed.); García Álvarez, Santiago; Carrión Sánchez, Diego; Gachet, Francisco y Unda, Mario (2014). *Balance crítico del gobierno de Rafael Correa*. Quito: Universidad Central del Ecuador.
- Ortiz, Richard (2018). Los problemas estructurales de la Constitución ecuatoriana de 2008 y el hiperpresidencialismo autoritario. *Estudios Constitucionales*, 16(2), 527-566. Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca.
- Páez, Pedro (2004). Liberalización financiera, crisis y destrucción de la moneda nacional en Ecuador. *Cuestiones Económicas*, 20(1), 5-71. Banco Central del Ecuador.
- Paz y Miño Cepeda, Juan; Dávalos, Pablo y De la Torre Muñoz, Carlos (2007). *Asamblea Constituyente y Economía. Constituciones en Ecuador*. Quito: Abya Yala.
- Peruzzotti, Enrique (2019). Laclau's theory of populism: a critical review. En De la Torre, Carlos (Ed.), *Routledge Handbook of Global Populism* (pp. 33-43). London/New York: Routledge.
- Representaciones diplomáticas de Cuba en el exterior (2016, 29 de noviembre). *Discurso de Rafael Correa Delgado, presidente de Ecuador*. <http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/discurso-de-rafael-correa-delgado-presidente-de-ecuador>
- Rodrik, Dani (2018). Is Populism Necessarily Bad Economics? *AEA Papers and Proceedings*, 108(1), 196-199.
- Sánchez Díaz, Arturo (2016). *Hegemonía y antagonismo: Análisis crítico de la teoría política de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe* (Tesis de Maestría). UNAM, México.

- SRI (2017). *Grupos económicos. Servicio de Rentas Internas*. <https://www.sri.gob.ec/grupos-economicos1>
- Tibocha, Ana María y Jaramillo Jassir, Mauricio (2008). La Revolución Democrática de Rafael Correa. *Análisis Político*, 64, septiembre-diciembre, 22-39.
- Tushnet, Mark (2019). Varieties of populism. *German Law Journal*, 20(3), 382-389.
- Wiles, Peter (1969). A syndrome, not a doctrine: Some elementary theses on Populism. En Ionescu, Ghita y Gellner, Ernest (Eds.), *Populism. Its Meaning and National Characteristics* (pp. 163-179). Londres: Macmillan.
- Williamson, John (2004, 13 de enero). *The Washington Consensus as Policy Prescription for Development*. Institute for International Economics. <https://www.piie.com/publications/papers/williamson0204.pdf>
- Žižek, Slavoj (2006). Against the Populist Temptation. *Critical Inquiry*, 32(3), Spring, 551-574.

EL POPULISMO DE DERECHA Y EL “LIBERALISMO DEL MIEDO” EN AMÉRICA LATINA

Barry Cannon

INTRODUCCIÓN

El populismo es un concepto resbaladizo, sobre todo debido a su uso como término general para proyectos políticos muy distintos, extinguiendo muchas de sus diferencias. En el pasado, he argumentado (Cannon, 2018) que debemos ver el populismo como una tradición analítica académica en lugar de un hecho empírico, enfatizando en cambio la dicotomía izquierda/derecha como la herramienta conceptual esencial para ayudar a ordenar, comprender y explicar los fenómenos políticos. En este capítulo desarrollo más este trabajo, utilizando la concepción de Bobbio (1997) de la dicotomía izquierda/derecha como una diada conformada por el consenso histórico y la ruptura centrada en la (des)igualdad. Como argumentan Noël y Thérien (2008), surgieron consensos entre la izquierda y la derecha sobre el desarrollo estatal y los regímenes de bienestar en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, y más recientemente, discuto aquí sobre el “neoliberalismo progresista” (Fraser, 2017) en el período posterior a la Guerra Fría. Estos consensos globales entre la izquierda y la derecha se pueden más o menos mapear sobre la experiencia latinoamericana como respectivamente la fase de “estado desarrollista” o “populista” clásica de la posguerra y la fase más reciente de gobiernos

de “marea rosa” orientados a la izquierda. Ambos han sido cuestionados por administraciones de derecha vistas en la literatura dominante como “neopopulismo” respectivamente en la década de 1990 (Weyland, 1996, 2003; Roberts, 1995), asociadas con figuras como Menem en Argentina, Collor en Brasil y, más notablemente, Fujimori en Perú, y un populismo de derecha radical más reciente, asociado principalmente con Jair Bolsonaro en Brasil. En ambas literaturas hay un fuerte énfasis en la autonomía de lo político de la ideología, permitiendo que el concepto “viaje” temporal y espacialmente. En este capítulo, sin embargo, reviso estos dos casos de populismo de derecha en América Latina consecutivamente, utilizando un enfoque más contextualmente sensible a estos fenómenos, que está mejor equipado para apreciar sus distinciones, al mismo tiempo que enfatiza lo que comparten. Tal enfoque debe incluir, como recomienda Munck en la introducción de este volumen, las problemáticas del “desarrollo, la democracia y la transformación social”. Tomado desde esta perspectiva, si bien cada régimen populista de derecha en la región está conformado por las distintas circunstancias temporales y espaciales en las que emerge, lo que comparten es el objetivo histórico central de la derecha de mantener y profundizar la jerarquía social no solo a nivel de clase, sino también de género, etnia y sexualidad. Adicionalmente, argumento que el principal vehículo ideológico y programático para esto en el período contemporáneo es el neoliberalismo. En otras palabras, la acción política no puede divorciarse de la ideología, como afirma gran parte de la literatura dominante sobre el populismo contemporáneo. Desde tal punto de vista, concluyo, lo que estos dos casos de populismo apuntan es una “crisis de hegemonía liberal” más amplia (El Ojelli y Fraser, 2020) con el liberalismo cada vez más dividido en tres ramas estratégicas discretas, lo que apunta a un largo período de disenso en el corto a mediano plazo.

LA DERECHA EN TEORÍA

La mayoría de los analistas aceptan el ya clásico enfoque de Norberto Bobbio (1996) sobre la dicotomía derecha/izquierda, que coloca a la (des)igualdad como su rasgo definitorio central y constante. A lo largo de la historia política moderna, argumenta Bobbio (1996, p. 58), el tema constante que diferencia a la izquierda de la derecha ha sido “la distinción entre un principio horizontal o igualitario de la sociedad y una percepción vertical o desigual de la sociedad”. La izquierda, por tanto, cree que los seres humanos son más iguales que desiguales, que la desigualdad es social, y por tanto puede y debe ser erradicada a través de la acción humana. La derecha cree lo contrario: que la desigualdad es natural, de hecho beneficiosa, y por lo tanto no puede ni debe

ser erradicada. Esto no quiere decir que la izquierda desee erradicar todas las desigualdades, ni que la derecha desee preservar todas las desigualdades. Como señalan Noël y Thérien (2008, p. 18), la derecha tiene una larga tradición liberal a favor de la igualdad legal, si no la igualdad real de los resultados socioeconómicos. Sin embargo, en términos generales se puede argumentar, junto con Bobbio (1996, p. 65), que “la [izquierda] es más igualitaria y la [derecha] más desigual”. Desde esta perspectiva, el significado central de la distinción izquierda/derecha puede concebirse como “que uno apoye o se oponga al cambio social en una dirección igualitaria” (Ronald Inglehart citado en Noël y Thérien, 2008, p. 10), donde la igualdad significa en última instancia “una rotación en la sede del poder” para todos (Robin, 2018, p. 9). Las opciones políticas de izquierda o derecha, entonces, tienen resultados implícitos y explícitos que favorecen a algunas clases sobre otras, cruzadas con desigualdades relacionadas con el género, la raza y la sexualidad.

Bobbio (1996, p. 10), además, conceptualiza la dicotomía izquierda/derecha como una díada que emerge del conflicto y la polarización, una “distinción que cubre todo el universo político” antitética (Bobbio, 1996). Izquierda y derecha, sin embargo, “no son conceptos absolutos, sino históricamente relativos”, es decir, pueden cambiar con el tiempo y el espacio (Bobbio, 1996, p. 46). Los movimientos en la izquierda —de ser identificada con el liberalismo, a la democracia y más tarde al socialismo, por ejemplo— causan consiguientes cambios y movimientos dentro de la derecha, y viceversa. Con el transcurso de la historia se establecen diferentes consensos (el sufragio universal, por ejemplo, o el arreglo keynesiano posterior a la Segunda Guerra Mundial), que, sin embargo, generan nuevos clivajes (Noël y Thérien, 2008, p. 10). La derecha desde esta perspectiva puede ser vista como “contrarrevolucionaria”, que reacciona constantemente contra la izquierda y que toma prestado ideas y conceptos de ella (Robin, 2018, pp. 29-30). Sin embargo, la igualdad o, más exactamente, las desigualdades siguen siendo el tema central en torno al cual giran estos consensos y divisiones.

No obstante, el posicionamiento de izquierda y derecha en torno a la (des)igualdad no es una elección ociosa. Detrás de ella hay actitudes arraigadas desde hace mucho tiempo y profundamente hacia la jerarquía social. Para la mente conservadora, como nos recuerda Robin (2018, p. 24), “la jerarquía es orden”, y el desorden es el vuelco de la jerarquía y por tanto la justificación de ella. El “conservadurismo”, entonces, insiste Robin (2018, p. 7), “es el ánimo contra la agencia de las clases subordinadas”. La distinción izquierda/derecha, por lo tanto, no solo significa una mayor igualdad o desigualdad en todas o

algunas de las áreas identificadas, sino un derrocamiento o refuerzo de las jerarquías tradicionales, especialmente dentro de lo que Robin (2018) llama la “vida privada del poder”, que apuntalan y se benefician de tales desigualdades. La derecha, por lo tanto, busca mantener las distinciones entre élites y masas, mientras que la izquierda busca reducirlas. Esto no quiere decir que la derecha no “acepta la entrada de las masas en el escenario político” (Robin, 2018, p. 30); el conservadurismo no es más que adaptable al cambio. Pero el principal objetivo de la derecha es garantizar que dicho cambio pueda utilizarse para respaldar el concepto y la práctica de jerarquía. Un medio para lograr esto es a través de esta “vida privada de poder” que está permitiendo a las masas “ubicarse simbólicamente en la clase dominante o contar con oportunidades reales para convertirse en falsos aristócratas en la familia, la fábrica y el campo” (Robin, 2018).

Además, por la derecha aquí no me refiero solo a la derecha “política”, es decir, los partidos y las instituciones arraigadas en la democracia institucional. Más bien, junto con Robin (2018, pp. 28-29), “trato a la derecha como una unidad, como un cuerpo coherente de teoría y práctica que trasciende las divisiones tan a menudo enfatizadas por académicos y expertos”. La derecha, entonces, va más allá de lo político para abarcar lo que Michael Mann (1986) identifica como las cuatro arenas o redes de poder que han apuntalado consistentemente a la mayoría de los gobiernos organizados desde que comenzaron los registros históricos, a saber, el poder ideológico, económico, militar y político (IEMP), todos estos cruzados con factores transnacionales (ver Cannon, 2016 y Cannon, 2019). Este enfoque, si bien no descuida lo político, brinda una visión más amplia de la ecología social que asegura la persistencia y reproducción de las ideas de derecha en la vida social, incluida la política. En este sentido, “la derecha” no es solo un conjunto de partidos políticos, sino que puede abordarse desde una especie de punto de vista metapolítico gramsciano. Esto incluye no solo las tácticas de “guerra de maniobra” destinadas a capturar la institucionalidad estatal mediante, por ejemplo, políticas electorales o golpes militares, sino también estrategias de “guerra de posición” en el ámbito de la cultura, destinadas a capturar “corazones y mentes” para construir un “sentido común” derechista. La “guerra de posición” de la derecha es entonces, como observa Karl Ekeman (2018) de la nueva derecha francesa posterior a 1968, “una lucha cultural dirigida a cambiar las percepciones, los afectos y las visiones del mundo, a fin de naturalizar una política desde la derecha”, es decir un tipo de *Kulturkampf* que se ha convertido cada vez más en el sello distintivo de la política de derecha y, en particular, de la política radical o de extrema derecha en el período contemporáneo (Rydgren, 2018, p. 26).

Dicho esto, desde la década del ochenta, el neoliberalismo se ha convertido en el marco ideológico dominante mediante el cual se ha mantenido la jerarquía social, en gran parte debido a su papel en el aumento y la perpetuación de la desigualdad socioeconómica (Harvey 2005; Stiglitz 2012; Piketty, 2014). Se puede argumentar, entonces, que ideológicamente hablando (aunque no necesariamente en términos de identificación partidaria), quienes apoyan y promueven activamente el neoliberalismo están en la derecha del espectro político, mientras que quienes se les oponen, o al menos los cuestionan, están en la izquierda. Sin embargo, desde su despliegue inicial, el neoliberalismo se ha dividido en lo que Nancy Fraser (2017) ha denominado formas “progresistas”, “reaccionarias” y, incluso, “híper-reaccionarias”. La primera variedad, la dominante, persigue una forma meritocrática de neoliberalismo, que reconoce las desigualdades de, al menos, género, sexualidad y etnicidad, con desigualdades de clase renombradas como “desventaja” o simplemente pobreza. Esto ha permitido un consenso centrista de izquierda/derecha en torno a lo que Sandel (2020, p. 13) ha denominado la “tiranía del mérito”, según la cual mediante la búsqueda de procesos selectivos de “igualdad de oportunidades”, los “ganadores” de la sociedad pueden creer que “ganaron su éxito a través de su propio talento y trabajo duro” (Sandel, 2020), y no a través de su posicionamiento superior en una sociedad jerárquica. Las dos últimas formas, por otro lado, enfatizan una importante posición ideológica conservadora social con un empuje anti-igualitario extremo particularmente en temas de reconocimiento. Esto, sin embargo, es según Brown (2019, p. 15) el resultado lógico de los tres objetivos centrales del neoliberalismo: criticar y dismantelar la sociedad; atacando “la democracia entendida como soberanía popular y poder político compartido”; y ampliar la esfera personal protegida a expensas del público.

EL POPULISMO Y LA DERECHA (LATINOAMERICANA)

La derecha contemporánea, entonces, puede conceptualizarse como un proyecto de clase, dirigido por una élite, a nivel nacional, regional y transnacional, con el neoliberalismo en su núcleo ideológico (Canon, 2019). En este sentido, el centro de la política, tanto de centro-derecha como de centro-izquierda, en su adopción del neoliberalismo, se ha movido más hacia la derecha, haciendo que las sociedades estén orientadas hacia la derecha en su *ethos* social general —el centro “extremo”, como el teórico político y activista británico/paquiistaní Tariq Ali (2015) lo ha etiquetado—. Sin embargo, una visión tan amplia de la derecha está algo en desacuerdo con las concepciones dominantes del populismo, que actualmente pueden situarse entre lo que Munck

ha identificado aquí como el “populismo como estrategia política” y las perspectivas postestructuralistas. La literatura dominante sobre el tema tiende a contraponer negativamente el populismo con la democracia (liberal), cuando de hecho, como Munck señala correctamente aquí, la relación entre los dos es mucho más compleja y matizada. Parte del problema es una visión estrecha de lo que constituye lo político como algo principalmente nacional y electoral, cuando en realidad debe ubicarse en lo nacional y transnacional, incluir una gama más amplia de actores más allá de lo estrictamente político partidista y ubicarse en luchas de más amplio alcance sobre cuestiones claves que, como Munck identifica aquí, como desarrollo, democracia y transformación social. La mayoría de los trabajos sobre populismo refuta esta postura ontológica de mayor alcance a favor del punto de vista neoclásico previamente identificado de la separación de la política de todas las demás esferas sociales. De hecho, etiquetar un fenómeno político como populista podría verse como parte de una discusión contemporánea más amplia, históricamente situada, sobre las desigualdades y el papel de la democracia liberal o la poliarquía en su perpetuación (Cannon, 2018, p. 480).

El populismo en América Latina suele ser asociado por los analistas con la izquierda, ya sea el llamado populismo “clásico” de principios y mediados del siglo XX, como Juan Domingo Perón en Argentina, o ejemplos más recientes durante la “marea rosa”. período de gobiernos de izquierda, como Hugo Chávez en Venezuela (Mudde y Rovira Kaltwasser, 2013). Desde esta perspectiva, América Latina es vista como menos propensa al surgimiento de fenómenos populistas de derecha. Sin embargo, aunque en general es cierto, los analistas de la región han identificado al menos dos períodos de populismo de derecha. El primero, denominado período “neopopulista” o “neoliberal populista”, se puede identificar a fines de la década de 1980 y en la década de 1990, e incluye figuras como Carlos Salinas de Gortari de México (1988-1994), Carlos Menem en Argentina (1989-1999), Fernando Collor de Mello en Brasil (1990-1992) y Alberto Fujimori en Perú (1990-2000), entre otros (Weyland, 1996; Weyland, 2003; Vilas, 2004; Conniff, 2020). La segunda fase, más reciente, del populismo radical de derecha (PRD) en la región está asociada principalmente con el presidente Jair Bolsonaro de Brasil, elegido en octubre de 2018, así como con líderes de derecha como la presidenta “interina”, Jeanine Añez en Bolivia (2019-2020), el político opositor José Antonio Kast en Chile y la tres veces candidata presidencial Keiko Fujimori, hija del presidente Alberto Fujimori en Perú, entre otros.

Las siguientes dos secciones examinarán cada uno de estas variantes de populismo de derecha, examinando su caracterización en la

literatura. Lo que encontramos es que el populismo radical de derecha de Bolsonaro busca recuperar parte del impulso de la era inicial de reforma neoliberal iniciada por los neopopulistas, pero difiere en su rechazo radical de los principios neoliberales progresistas en torno al reconocimiento, que los neopopulistas aceptaron tentativamente como parte de un consenso transnacional izquierda/derecha emergente más amplio sobre estos temas.

NEOPOPULISMO (NEOLIBERAL), 1989-2001

El contexto y las causas inmediatas del populismo, tanto para Weyland (1996; 2003) como para Roberts (1995, p. 113), los dos analistas más influyentes del neopopulismo, son estructurales, en tanto los procesos de modernización que tuvieron lugar previamente, durante las dictaduras de los 60 y los 70 (Weyland, 1996, p. 7), pero también en el período democrático posautoritario inmediato, condujo a un “colapso del estado desarrollista” (Roberts, 1995, p. 90), allanando el camino para el neoliberalismo (Roberts, 1995), y de hecho haciendo su aceptación inevitable (Weyland, 1996, p. 9). El resultado es un contexto político en el que “es probable que prospere el liderazgo populista” (Roberts, 1995, p. 90), en la forma de los presidentes mencionados anteriormente, Fujimori, Menem, Collor, etc. Posteriormente, ambos analistas ven el populismo como una estrategia política, involucrando a líderes personalistas, los llamados “outsiders” que organizan una masa ostensiblemente desorganizada de sectores en su mayoría pobres o “subalternos” (Roberts, 1995, p. 88), de una manera “directa, sin mediación, no institucionalizada” (Weyland, 2003, p. 1097). Este proyecto populista está “desvinculado de un programa socioeconómico” (Weyland, 2003), teniendo en cambio “una ideología amorfa o ecléctica, caracterizada por un discurso que exalta a los sectores subalternos o es antielitista y/o antisistema” (Roberts, 1995, p. 88). Sin embargo, se mantiene un vínculo con las estrategias desarrollistas anteriores, ya que estos populistas utilizan “métodos clientelistas o redistributivos generalizados para crear una base material para el apoyo del sector popular” (Roberts, 1995), motivados enteramente, sin embargo, por “la insaciable búsqueda de poder del líder” (Weyland, 2003, p. 1102 ver también Roberts, 1995, p. 89).

Si bien esta caracterización se puede aplicar a cualquier experiencia populista en cualquier lugar, lo que coloca al “neo” en el “neopopulismo” es su carácter neoliberal. Según Roberts (1995, p. 113), los procesos de modernización señalados anteriormente y la crisis del Estado “desarrollista” no solo proporcionaron un contexto político para el populismo sino también para el neoliberalismo (Roberts, 1995, p. 113) porque, “En última instancia, los dos fenómenos se refuerzan

mutuamente” (Roberts, 1995), teniendo algunas “afinidades inesperadas” (Weyland, 1996; véase también Roberts, 1995, p. 112). Estos son, según Weyland (1996, p. 16), el uso de llamados especiales a los sectores informales; distanciamiento de la sociedad civil organizada asociada al anterior régimen “desarrollista”; tildar de enemigos a los partidos vinculados a ella; gobernar de manera autocrática, utilizando al estado “como el agente decisivo para efectuar el cambio” (Weyland, 1996); y, distribuir cualquier beneficio disponible de manera focalizada a los más pobres en lugar de a las clases medias y trabajadoras más establecidas. Bajo el “neopopulismo”, el núcleo del mensaje anti-elitista era el rechazo del estado anterior, “populista”, “desarrollista”, como anticuado e ineficiente, con la reestructuración neoliberal aclamada como la única manera de modernizar la economía y terminar con la crisis. Sin embargo, las similitudes entre el neopopulismo y el neoliberalismo son fortuitas y contingentes más que causales u orgánicas, ya que “el populismo debe desvincularse de cualquier fase o modelo específico de desarrollo socioeconómico” (Roberts, 1995, p. 112).

Sin embargo, estos regímenes, como la mayoría de la región en ese momento, comenzando con el Chile de Pinochet, fueron radicales en su neoliberalismo (Rodríguez, 2021), aunque entre estos dos analistas hay conclusiones contradictorias sobre su impacto. Para Weyland (2003), por ejemplo, el acoplamiento “inesperado” del populismo con el neoliberalismo ha sido positivo ya que los neopopulistas “promovieron una democratización social significativa” (Weyland, 2003, p. 1103), brindando reconocimiento y beneficios materiales a los pobres, persiguiendo “alguna rotación de élite en las instituciones gubernamentales y estatales” (Weyland, 2003, p. 1103), especialmente de las mujeres (Weyland, 2003, p. 1104), y extendiendo una “voz política significativa” a estos sectores a través del uso extendido de las encuestas de opinión, que él saluda como la “forma científica de medir ‘la voluntad de la gente’” (Weyland, 2003, p. 1105). En consecuencia, concluye que los neopopulistas mostraron “un mayor cumplimiento de las normas políticas de la democracia” que los populistas clásicos (Weyland, 2003, p. 1106). Weyland insiste en que el neopopulismo ha tenido impactos beneficiosos sobre la pobreza y la desigualdad y, por lo tanto, es la “mejor apuesta para los líderes neopopulistas” (Weyland, 2003, p. 1110) y para la consolidación y calidad de la democracia en la región (Weyland, 2003, p. 1112). Weyland entonces se hace eco de la esperanza del pos-Consenso de Washington de la década de 1990 que buscaba compatibilizar las reformas económicas neoliberales con “la agenda social e institucional de la región” (Munck, 2003a, p. 500). Roberts (1995), por otro lado, es más cauto en sus conclusiones sobre el impacto del neopopulismo en la región, argumentando que desafía

tanto a la izquierda al demostrar que la derecha puede atraer “una amplia base de apoyo político” (Roberts, 1995, p. 115) entre los sectores populares y a los neoliberales al revivir tanto el populismo como la autocracia, los cuales dicen rechazar. Esto, advierte (Roberts, 1995), dificultaría aun más el desarrollo de la institucionalidad necesaria, particularmente dentro de la sociedad civil, necesaria para consolidar la democracia en la región en ese momento.

Hubo dos contextos importantes en América Latina que, según los críticos, están subdesarrollados en este relato: el papel del régimen “desarrollista estatal” del populismo “clásico” en la democratización de América Latina y el inicio de la llamada “transición” a la democracia (Lynch, 2017; Vilas, 2004; Quijano, 1998). Primero, el “desarrollismo estatal” bajo el “populismo clásico” vio a muchos estados latinoamericanos lograr una forma de “modernidad periférica” (Munck, 2013b, p. 10), que vio “un fuerte compromiso con el desarrollo de un estado nacional robusto” (Munck, 2013b, p. 75). El populismo clásico, como señalan Lynch (2017), Vilas (2004) y Quijano (1998), derrocó a los regímenes económicamente dependientes y oligárquicos, implantando en su lugar un régimen socioeconómico popular nacional que extendió la autonomía económica y política nacional y regional, a medida que profundizó y amplió los derechos de ciudadanía de muchos de los que antes se les negaban. La teoría “neopopulista” subestima estos logros democráticos y el objetivo del neoliberalismo de revertirlos y derrocarlos (Lynch, 2017, p. 94). Además, la teoría “neopopulista” fue reduccionista al abstraer una faceta del populismo latinoamericano histórico —en este caso, el liderazgo— y convertirla en la suma de sus características. Tal enfoque es contrario a la complejidad de los regímenes políticos que, como insiste Vilas (2004, pp. 147-148), “es mucho más que un conjunto de elementos específicos susceptibles de combinaciones contingentes. Es una estructura de poder orientada hacia objetivos definidos basados en intereses”. Más bien, la abstracción de la política desde, como afirma Weyland (2003, p. 1097), “políticas socioeconómicas específicas o bases de clase de apoyo [...], [o] un contexto socioeconómico específico” (Weyland, 2003, p. 1097), es una posición ontológica que refleja, como Vilas (2004, p. 139) señala astutamente, “la separación de política y economía propia de la teoría neoclásica”. Esta narrativa parcial permite la elisión de factores causales políticos y económicos clave que permitieron que estos regímenes emergieran en primer lugar.

En segundo lugar, gran parte de América Latina estaba pasando por un proceso de democratización de las dictaduras militares anteriores que dominaron la región durante la década de 1970. La narrativa dominante que caracteriza esta época fue propuesta por la escuela

de teoría de la democratización de la “transitología”, entendiendo esto como un proceso, liderado por cálculos de costo-beneficio por parte de las élites que buscan implantar una versión institucional y procedimental estrecha de la democracia en la región (Cannon y Hume, 2012, p. 1041). La teoría fue criticada por ser inherentemente teleológica en este supuesto, lo que llevó a una extensión conceptual en sus intentos de explicar por qué tal forma de democracia no surgió y se consolidó como se esperaba (Cannon y Hume, 2012). Como explica Lynch (2017, p. 94), estos supuestos teóricos y expectativas chocaron frontalmente con los impactos del modelo neoliberal impuesto a la par de la llamada “transición” a la democracia en la región. En lugar de democracias pluralistas basadas en la negociación de élites, el modelo neoliberal produjo una “expropiación masiva de derechos [de los ciudadanos] y bienes públicos en favor de minorías que supuestamente iniciarían o reiniciarían el crecimiento económico” (Lynch, 2017), así como una transferencia del poder político de “los sindicatos, las organizaciones populares, los partidos y el Estado a [...] las grandes empresas, los tecnócratas neoliberales y los organismos de seguridad” (Lynch, 2017). Calificar a estos regímenes de (neo)populistas, de manera peyorativa, ayudó a evitar “el análisis de la crisis en la democracia de las élites en la región [...] [así como] ayudó a borrar el populismo histórico de la memoria colectiva” (Lynch, 2017, p. 100). Además, al menos en el caso de Fujimori, las violaciones masivas de los derechos humanos, las masacres y los programas de esterilización forzada, que afectaron en gran medida a sectores populares y, en el segundo caso, a mujeres pobres, en su mayoría indígenas, arrojan serias dudas sobre las afirmaciones optimistas de Weyland de socialdemocratización para mujeres, etnias y pobres bajo Fujimori (2003, p. 1112). Esta elisión subraya, como afirma Burt (2006, p. 44), el fracaso de la teoría del neopopulismo para “abordar adecuadamente las dimensiones coercitivas del poder”. Es interesante notar además que a pesar de tales violaciones a los derechos humanos, Fujimori recibió un fuerte apoyo financiero y diplomático de los EE. UU., las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) y las agencias de desarrollo (Schady, 2000; González de Olarte, 1993; Mc Clintock 2000; Roberts y Peceny, 1997).

Desde estas perspectivas, el análisis “neopopulista” minimiza o ignora la naturaleza fundamental de derecha de estos proyectos políticos y su papel en la extinción de los logros democráticos alcanzados bajo los proyectos populistas históricos anteriores en la región y el papel esencial del neoliberalismo en el logro de ese objetivo. En lugar de proporcionar un análisis “científico”, oscurecen las ambiciones sociales jerárquicas restauracionistas en el corazón del proyecto neoliberal. En esto, señalan la incompatibilidad fundamental entre los objetivos

gemelos de la reestructuración neoliberal y el reconocimiento de las minorías en el corazón del llamado pos-Consenso de Washington. El núcleo de la teoría sobre el neopopulismo, y de los neopopulistas en general, era el rechazo del “desarrollismo”, la versión latinoamericana del consenso keynesiano izquierda/derecha, que ahora se asoció casi exclusivamente con una izquierda redundante y cada vez más irrelevante.

EL “TRUMP DE LOS TRÓPICOS”: POPULISMO DE DERECHA RADICAL (PDR) EN AMÉRICA LATINA

Cuando Jair Bolsonaro se convirtió en presidente de Brasil el 1 de enero de 2019, el populismo como marco analítico se había globalizado. Ahora, el populismo contemporáneo ya no se veía como un fenómeno mayoritariamente latinoamericano o incluso del mundo en desarrollo, sino que pasó a referirse en gran medida a los partidos y líderes de la derecha radical que habían comenzado a ingresar a las instituciones democráticas en toda Europa, especialmente después de los ataques contra los EEUU del 11 de septiembre de 2001, y más aun tras la crisis financiera de 2008 y la llamada “crisis” de refugiados de 2015 en Europa (Mudde 2019). Su momento más emblemático, sin embargo, se produjo en los EEUU con la elección de Donald J. Trump a la presidencia en 2016. El marco ideacional dominante, más asociado al trabajo de Cas Mudde y Cristóbal Rovira Kaltwasser, se basa en gran medida en el enfoque de autonomía política promovido por Weyland y Roberts en América Latina, pero también en el postestructuralismo de Ernesto Laclau. Así, mientras el surgimiento del marco analítico populista se perfeccionó en América Latina, el populismo de derecha latinoamericano, cuya figura más dominante es Jair Bolsonaro, es visto desde la perspectiva global del surgimiento de la derecha radical (populista).

Mudde (2019) identifica las causas del populismo de derecha radical como una mezcla de ansiedades económicas y culturales, la primera en torno a la desindustrialización, la desigualdad y el estancamiento económico, la segunda en torno a la inmigración, el crimen y la familia, ambas vinculadas a la desconfianza popular hacia la dinámica de la globalización. Según Mudde (2019) tiene cuatro características principales: nativismo, autoritarismo, familiarismo y populismo. En la práctica, esto significa que es racista, vertical y autoritario en su enfoque de los problemas sociales, como la drogadicción, el crimen o la ruptura familiar, y hostil a la migración y los inmigrantes, el feminismo y las feministas, así como a los grupos LGBT+ (Mudde, 2019, p. 151). Su populismo está en la separación de la sociedad en “dos grupos homogéneos y antagónicos, el pueblo puro y la élite corrupta” y la

política se considera idealmente “una expresión de la *volonté générale* (voluntad general) del pueblo” (Mudde, 2019, pp. 7-8).

La mayoría de los comentarios de la corriente principal analítica sobre Bolsonaro avanzan en esa caracterización, enfatizando los peligros para la institucionalidad democrática liberal y, a través de los ataques a las minorías, para el pluralismo. Finchelstein (2019, p. 102), por ejemplo, cree que Bolsonaro “claramente se encuentra en la frontera entre la dictadura fascista y la forma democrática del populismo”. A Weyland le preocupa que Bolsonaro gradualmente “vacíe la democracia”, como cree que sucedió en Venezuela bajo Chávez (Fanning y Cabrera, 2018). Para Francis Fukuyama, Bolsonaro, como otros líderes populistas del mundo, es “una amenaza para la democracia” (citado en Goldstein, 2019, p. 253). A Yascha Mounk (2018) le preocupa que la elección de Bolsonaro ponga “a la democracia más grande de América Latina [...] en peligro mortal”. Tales preocupaciones colocan estos comentarios en la escuela de pensamiento de la “muerte de la democracia” que se puso de moda a raíz de la elección de Donald J. Trump a la presidencia de los EEUU, así como, por ejemplo, *Cómo mueren las democracias*, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt (2018), así como ejemplos de la periodista e historiadora ganadora del Premio Pulitzer, Anne Applebaum (2020) y la exsecretaria de Estado del presidente Bill Clinton, Madeleine Albright (2018). En tales análisis, el teatro de la crisis democrática se puede encontrar directamente dentro de la institucionalidad política existente, la principal preocupación es la disminución percibida de las libertades (negativas) asociadas con la democracia liberal, y la crisis se considera global que ahora, sin embargo, se vuelve más apremiante porque está afectando al llamado “núcleo” del mundo democrático, incluido los Estados Unidos. Los análisis son en gran medida descriptivos más que analíticos, y hay pocos intentos de identificar las razones por las que surgen estas fallas institucionales. Levitsky y Ziblatt (2018), por ejemplo, reconocen el papel de la desigualdad hasta cierto punto, pero ese papel no se amplía ni se cuestiona. Tampoco se examina críticamente la institucionalidad democrática existente como fuente de tal inestabilidad, particularmente con respecto a su papel en la creación de las condiciones para que tal desigualdad crezca en primer lugar. Más bien, estos aspectos se minimizan a favor de un marco analítico centrado en el agente, con la causa y la solución de la crisis cayendo únicamente dentro del ámbito de los actores políticos, con los ciudadanos (es decir, la “sociedad civil”) jugando un papel importante pero mayormente de apoyo. De manera similar a los enfoques dominantes sobre el neopopulismo mencionados anteriormente, el marco analítico dominante de la ciencia política para el PRD es esencialmente conservador y neoliberal, ya que sugiere

“una versión de la democracia completamente ligada al concepto de libertad, en detrimento del otro valor sustantivo de la democracia: igualdad” (Giannone, 2010, p. 74).

Lo que se pasa por alto y, de hecho, oscurece en este análisis centrado en el agente con respecto a Bolsonaro es la naturaleza esencialmente derechista y conservadora de su programa, que en cambio se reformula como simplemente “antiliberal” o “iliberal”. Este proyecto ya fue iniciado por Michel Temer, el exvicepresidente de la presidenta Dilma Rousseff del Partido de Trabajadores (PT), al asumir la presidencia en agosto de 2016 tras el cuestionado juicio político a Rousseff. Al asumir el cargo, Temer anunció de inmediato las políticas neoliberales estándares, como la privatización de activos estatales por venta forzosa, que posiblemente incluyera partes de Petrobras, el gigante petrolero estatal y áreas de la industria de defensa (Adghirni, 2016), una ley laboral de amplio alcance eliminando muchos derechos históricos de los trabajadores (Goldstein, 2019), así como recortes en el gasto público en programas sociales y una mayor autonomía para el Banco Central (Leahy y Pearson, 2016). También introdujo una nueva ley para establecer límites constitucionales al gasto durante los próximos veinte años (Robinson, 2016), institucionalizando así la austeridad para el futuro previsible, eliminando la asignación mínima para educación y salud, reduciendo el acceso de los pobres a estos bienes sociales, y haciendo mucho más difícil aumentar el gasto social para cualquier futuro gobierno, sobre todo uno de izquierdas. Además, Temer fue constantemente criticado por una actitud negativa hacia el género y otros derechos culturales. Esto fue empaquetado en una narrativa anti-izquierdista con el socialismo y el “comunismo” culpados por todos los males de Brasil (Goldstein, 2019).

Bolsonaro, al asumir la presidencia, retomó y radicalizó aun más la agenda de Temer (Duarte Rangel, 2018). Económicamente, Bolsonaro pretendía profundizar aun más el neoliberalismo como lo demuestra la elección de Paulo Guedes, exprofesor de la Escuela de Chicago y acólito de Milton Friedman (1912-2006) como ministro de Economía, dándole vía libre para elegir a su equipo (Latin American Herald Tribune, 2019). Los mercados se mostraron cautelosamente optimistas ante la noticia, con el economista jefe de UBS (y ex vicegobernador del Banco Central de Brasil) Tony Volpon, quien aventuró que, si Guedes “puede hacer las reformas correctamente, Brasil podría estar listo para otro ciclo virtuoso” (Leahy y Schipani, 2018). Guedes pretendía profundizar las privatizaciones con promesas de privatizar o liquidar 100 empresas estatales (Fonseca, Mano y Baum, 2019), incluidas Electrobras, el gigante eléctrico estatal, y muchos aeropuertos y puertos marítimos (Conley, 2019). Del mismo

modo, Bolsonaro ha mostrado su animosidad antiestatal al cerrar el Ministerio de Trabajo (y, por lo tanto, socavar la regulación estatal de las condiciones laborales), instalar un congelamiento federal de contrataciones en el empleo estatal y prometer reducir el empleo estatal en un 30% (Lopes y Faiola, 2019). Además, Guedes logró aprobar una reforma de pensiones de amplio alcance que afecta a 76 millones de trabajadores del sector público y privado, que “finalizará progresivamente la jubilación por tiempo de cotización, aumentará la edad mínima de jubilación y reducirá el monto promedio de los beneficios en todos los ámbitos [...] [perjudicando] los pobres y la clase media sin traer un alivio efectivo y de largo plazo al sistema” (Silva, 2019). Guedes también busca reducir los impuestos para los ricos, con el objetivo de reducir a la mitad la recaudación de impuestos en términos del PIB del 36% al 20% (Conley, 2019). Si bien no todas estas medidas se han logrado hasta el momento, ni las que lo han sido en la escala de tiempo deseada ni al nivel liberalizador deseado (Harris, 2021), sus orientaciones anti-igualitarias son bastante claras y, por lo tanto, radicalmente derechistas. Sin embargo, en efecto, no son más radicales que los impuestos por los neopopulistas de la década de 1990.

Lo que es particularmente novedoso en el contexto actual es la agenda culturalmente conservadora de Bolsonaro, que ha recibido más atención mediática y académica. Sin embargo, es importante notar su ánimo anti-igualador particularmente cuando se ubica dentro del contexto colonialista de largo alcance de América Latina, que nos alerta sobre continuidades en lugar de rupturas con ese pasado (Stumpf González *et al.*, 2020). Por ejemplo, Bolsonaro abrazó la “guerra contra las drogas” liderada por Estados Unidos, adoptando políticas de “mano dura” contra las drogas y el crimen, flexibilizando las leyes sobre posesión de armas y la protección legal de los ciudadanos contra las políticas de disparar a matar por parte de las fuerzas de seguridad. El resultado ha sido un aumento vertiginoso de la posesión de armas, incluidas armas de alto calibre (Phillips, 2021) y una cultura de impunidad para el asesinato policial de sospechosos en áreas pobres, con la mayoría de las víctimas negras o morenas (Milhorance, 2021). Hay un rechazo pronunciado a las medidas previamente instituidas encaminadas a reducir las desigualdades de clase, género o raza, relacionándolas directamente con el “comunismo” (Berron, 2018). Las políticas de acción afirmativa para mejorar las perspectivas de igualdad de afrobrasileños, grupos indígenas (Rios, 2021), mujeres (Rangel *et al.*, 2021, p. 166) y LGBT+ (Corrales, 2017) han tenido relativo éxito en Brasil, especialmente bajo los gobiernos del PT de Lula da Silva y Dilma Rousseff. Bolsonaro, por su parte, ha apuntado “a

deslegalizar y deslegitimar” esta agenda (Rios, 2021, p. 35), sobre todo mediante el “vaciamiento de carteras, órganos y consejos enfocados en el tema de los derechos civiles” (Rios, 2021). Rangel *et al.* (2021, p. 168) señalan que la llegada de Bolsonaro al poder se convirtió en una “coyuntura crítica que inició una serie de regresiones en los derechos sociales, criminalización del activismo de izquierda y aumento de la violencia policial [...] con discursos de odio [...] legitimados, dirigidos a grupos sociales históricamente marginados (mujeres, afrobrasileños, LGBTQI+, clase trabajadora, comunidades rurales y poblaciones indígenas)”. Tales acciones, argumenta Feltran (2020, p. 101), en la economía, en la seguridad y en contra de los derechos de las minorías, surgieron y están totalmente respaldadas por una poderosa alianza militar y evangélica, “gobernada por la élite conservadora y neoliberal” y constituyendo alrededor del “30 por ciento del electorado”, además de tener una influencia creciente en el Congreso (Hinz *et al.*, 2020). Si bien es una minoría, Feltran (2020, p. 101) advierte que no deja de ser una “suficiente para entregar una mayoría política absoluta”. De hecho, Webber (2020, p. 10) señala que los evangélicos “entregaron 11 millones de votos a Bolsonaro [en las elecciones de octubre de 2018], más que la diferencia que lo separa de [el candidato del PT Fernando] Haddad”. Estos movimientos son, por lo tanto, un repudio radical de las tendencias neoliberales progresistas del modelo pos-Consenso de Washington promulgado por la mayoría de las principales agencias multilaterales e IFI, en gran parte dominadas por los EE. UU. y “Occidente”, desde la década de 1990.

Lo que falta entonces en las lecturas de tipo institucionalista populista de Bolsonaro es la naturaleza central conservadora y de derecha de su proyecto. Como Heller (2020, p. 592) señala con precisión, el “populismo de Bolsonaro se ha caracterizado no solo por la regresión democrática (ataques a las libertades civiles, organizaciones de la sociedad civil e instituciones independientes) sino también por esfuerzos concertados de reducción”. Por “reducción” se refiere a “políticas y programas diseñados para excluir específicamente a grupos designados del reconocimiento y acceso a los bienes públicos” (Heller, 2020), como parte de “un proyecto relativamente bien definido de hacer retroceder la expansión de los derechos sociales y reafirmando los jerarquías social-culturales tradicionales” (Heller, 2020, p. 592). Heller (2020) reafirma la inextricabilidad de lo cultural y lo económico, y se podría agregar lo político a esa mezcla (Heller, 2020, p. 602), y también llama nuestra atención sobre la “superposición de campos políticos nacionales y globales” (Heller, 2020, p. 604). Enfatiza que desde los años ochenta, “instituciones de gobernanza internacional, un nuevo ecosistema global de derechos humanos, una esfera pública

global en expansión y las redes de defensa transnacionales han universalizado la legitimidad de los derechos humanos y han brindado a los grupos nacionales importantes puntos de influencia global para promover sus reclamos” (Heller, 2020). Heller pasa por alto aquí, sin embargo, que algunas de estas mismas “instituciones de gobernanza global”, como el FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC), no solo han brindado cobertura a grupos nacionales de élite para implementar políticas neoliberales, sino que también han insistido en ellas. Por lo tanto, el populismo de derecha en América Latina, ni tampoco en las democracias occidentales maduras, no puede entenderse adecuadamente sin hacer referencia a las interacciones entre lo cultural, lo económico y lo político, ni lo global con lo regional, nacional y local. En el contexto actual, el consenso global dominante de izquierda-derecha gira en torno a lo que Fraser llama “neoliberalismo progresista”, un neoliberalismo ligero mezclado con mecanismos legales y meritocráticos para compensar las desigualdades sexuales, de género, étnicas y, en cierta medida, de clase, exacerbadas por el neoliberalismo. El populismo de derecha, como el de Bolsonaro, puede verse como la reacción de la derecha contra este consenso, que busca destruirlo y así liberar al capitalismo, en toda su gloria jerárquica, de estas cadenas legales y éticas. En esto, está celebrando en lugar de contradecir la misión ideológica central de la derecha.

CONCLUSIÓN

En este capítulo he tratado de argumentar lo siguiente con respecto al populismo de derecha en América Latina. Primero, la derecha debe ser vista como parte de una diada izquierda/derecha con (des)igualdad en su centro. Esto se ve afectado por momentos periódicos de consenso y disenso en torno a la (des)igualdad, dependiendo del equilibrio de poder entre las fuerzas sociales en momentos específicos. En segundo lugar, mientras estos períodos de consenso/disenso varían en términos de resultados, lo que es constante es el objetivo central de la derecha de mantener y, donde sea posible, extender la jerarquía social en las áreas de clase, género, raza y sexualidad. En tercer lugar, al revisar dos instancias de populismo de derecha en América Latina, el llamado “neopopulismo” de la década de 1990 y el populismo de derecha radical contemporáneo de Jair Bolsonaro en Brasil, encuentro que el análisis dominante enfatiza y abstrae deliberadamente lo político de las otras áreas de análisis de la ideología y la economía, así como lo local desde lo global. Esto sirve para oscurecer el objetivo esencial de estos gobiernos de mantener y extender la jerarquía social. En un examen minucioso, el neopopulismo y el populismo ra-

dical de derecha *bolsonarista* comparten una preferencia política por una reforma neoliberal rápida, profunda y despiadada. Bolsonaro, sin embargo, rechaza y repudia violentamente el consenso transnacional de un neoliberalismo progresista que cosifica tanto el reconocimiento como el neoliberalismo, que los neopopulistas aceptaron cuando estaba en su infancia, y que de hecho fue perfeccionado por la izquierda. He argumentado aquí que, al hacerlo, Bolsonaro y otros populistas radicales de derecha están de hecho volviendo a la naturaleza central de la derecha y su lealtad histórica al mantenimiento y extensión de la jerarquía social.

Un problema central en los enfoques dominantes del fenómeno del populismo es considerar las actitudes y las posiciones temáticas asociadas con él como patológicas, es decir, problemáticas o incluso extremas. El-Ojeili y Taylor (2020) rechazan esta posición, ya que puede, como he venido señalando, oscurecer factores explicativos coyunturales y geoestratégicos más amplios, que afectan profundamente las problemáticas del desarrollo, la democracia y la transformación social, como se destaca en este volumen. Entonces, argumentan, tal posición sirve a los intereses dominantes y al statu quo, al tiempo que bloquea el pensamiento utópico, es decir, “construcciones imaginativas de otras mejores formas de ser” (El-Ojeili y Taylor, 2020, p. 1152). Señalan que calificar un fenómeno político como “extremo” indica que está “fuera de las actitudes predominantes, violando estándares o convenciones comunes” (El-Ojeili y Taylor, 2020, p. 1143). Argumentan que esta postura tiene tres problemas: es ahistórica, ya que no logra apreciar cómo tales estándares o convenciones pueden cambiar con el tiempo; respalda una perspectiva mayoritaria, independientemente del contenido moral o político de esa perspectiva; y asume un “acceso sin problemas y medición de valores normativos intermedios” (El-Ojeili y Taylor, 2020, p. 1144). Además, correlaciona liberalismo con moderación, cuando en realidad, siguiendo a Losurdo (2014), el liberalismo es “una maraña de libertad y opresión, de emancipación y des-emancipación” (El-Ojeili y Taylor, 2020, p. 1144) y no puede reducirse a un término tan impreciso. En cambio, el populismo (entre otros fenómenos políticos supuestamente patológicos) debe ser visto como síntoma y resultado de una “crisis de liderazgo intelectual y moral liberal” global (El-Ojeili y Taylor, 2020, p. 1150) dentro de un fragmentado “liberalismo poshegemónico” (El-Ojeili y Taylor, 2020) que, sin embargo, está unido por una “sospecha compartida de la política popular, el pueblo o las masas” (El-Ojeili y Taylor, 2020, p. 1151).

Argumentan que el liberalismo contemporáneo (El-Ojeili y Taylor, 2020, p. 1151) está dividido en tres fragmentos, sin que ninguno alcance la hegemonía: un neoliberalismo “punitivo”, como se ve en

el giro austero de los gobiernos tras la Gran Crisis Financiera (GFC), que es violenta y literalmente injustificado, y que “busca reforzar las relaciones de poder existentes en direcciones autoritarias” (El-Ojeili y Taylor, 2020); un nekeynesianismo que se encuentra entre los intelectuales liberales y en algunas de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI), que es “un proyecto civilizatorio de élite que busca urgentemente una forma de salvar al capitalismo de sí mismo” (El-Ojeili y Taylor, 2020); y el “liberalismo del miedo”, emitiendo “advertencias distópicas urgentes”, una de las cuales es sobre el populismo, levantando “el espectro de amenazas aterradoras para cualquier cosa que desafíe al capitalismo global” (El-Ojeili y Taylor, 2020). Los enfoques analíticos del populismo de derecha en América Latina examinados aquí, sostengo, pertenecen a la última categoría de “liberalismo del miedo”. El populismo, independientemente de su contenido, siempre se considera en última instancia negativamente como una distopía viva que “nosotros” debemos detener a toda costa. En lugar de tal enfoque, El-Ojeili y Taylor (2020, p. 1152) nos instan a reconsiderar los fenómenos desde una perspectiva más abierta, que nos permita encontrar en ellos “tropos utópicos”, que El-Ojeili (2019, p. 1161) argumenta que podría “arrojar una luz diferente incluso sobre las ideologías contemporáneas más inmediatamente desagradables”.

BIBLIOGRAFÍA

- Adghirni, Samy (2016, 25 de octubre). After Oil Industry Shift, Brazil Seeks to Open Up Defense. *Bloomberg Markets*. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-25/brazil-seeks-to-open-defense-industry-to-foreign-participation>
- Albright, Madeleine (2018). *Fascism: A Warning*. New York: Harper.
- Ali, Tariq (2015). *The Extreme Centre: A Second Warning*. London: Verso.
- Applebaum, Anne (2020). *Twilight of Democracy: The Failure of Politics and the Parting of Friends*. London: Penguin Random House UK.
- Berrón, Gonzalo (2018). Odio, frustración, y valores reaccionarios: Jair Bolsonaro y la regresión política en Brasil. *Nueva Sociedad*, octubre. <https://nuso.org/articulo/odio-frustracion-y-valores-reaccionarios/>
- Bobbio, Norberto (1996). *Left and Right: the Significance of a Political Distinction*. Chicago: University of Chicago Press.
- Brown, Wendy (2019). *In the Ruins of Neoliberalism: The Rise of Anti-Democratic Politics in the West*. New York: Columbia University Press.

- Burt, JoMarie (2006). Quien habla es terrorista: The Political Use of Fear in Fujimori's Peru. *Latin American Research Review*, 41(3), 32-62.
- Cannon, Barry y Hume, Mo (2013). Central America, civil society and the pink tide: democratization or de-democratization? *Democratization*, 19(6), 1039-1064. <https://doi.org/10.1080/13510347.2011.619775>
- Cannon, Barry (2016). *The Right in Latin America: Elite Power, Hegemony and the Struggle for the State*. London: Routledge.
- Cannon, Barry (2018). Must we talk about populism? Interrogating populism's conceptual utility in a context of crisis. *New Political Science*, 40(3), 477-496. <https://doi.org/10.1080/07393148.2018.1487187>
- Cannon, Barry (2019). Characterization, Strategies, and Objectives of the Latin American Right. En Vanden, Harry y Prevost, Gary (Comps.), *Oxford Encyclopedia of Latin American Politics*. Oxford/New York: Oxford University Press.
- Conley, Julia (2019, 4 de enero). Bolsonaro unveils mass privatization plan for Brazil while slashing taxes for rich and wages for poor. *Common Dreams*. <https://www.commondreams.org/news/2019/01/04/bolsonaro-unveils-mass-privatization-plan-brazil-while-slashing-taxes-rich-and-wages>
- Conniff, Michael L. (2020). A historiography of populism and neopopulism in Latin America. *History Compass*, 18(e1262), 1-11. <https://doi.org/10.1111/hic3.12621>
- Corrales, Javier (2017). Understanding the Uneven Spread of LGBT Rights in Latin America and the Caribbean, 1999-2013. *Journal of Research in Gender Studies*, 7(1), 52-82. <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/jogenst7&div=6&id=&page=>
- Ekeman, Karl (2018). On Gramscianism of the Right. *Critique and Praxis*, 13(13). <http://blogs.law.columbia.edu/praxis1313/karl-ekeman-on-gramscianism-of-the-right/>
- El-Ojeili, Chamsy (2019). Reflecting on Post-Fascism: Utopia and Fear. *Critical Sociology*, 45(7-8), 1149-1166.
- El-Ojelli, Chamsy y Taylor, Dylan (2020). The Extremism Industry: A Political Logic of Post-Hegemonic Liberalism. *Critical Sociology*, 46(7-8), 1141-1155.
- Fanning, Rhonda y Cabrera, Kristen (2018). Why A Hollowing Out of Democracy Could Happen if Brazil Elects Jair Bolsonaro. *Texas Standard*. <https://www.texasstandard.org/stories/why-a->

[hollowing-out-of-democracy-could-happen-if-brazil-elects-jair-bolsonaro/](#)

- Feltran, Gabriel (2020). Centripetal force: a totalitarian movement in contemporary Brazil. *Soundings*, 75(16), septiembre, 95-110.
- Finchelstein, Federico (2019). *A Brief History of Fascist Lies*. Oakland: University of California Press.
- Fonseca, Pedro; Mano, Ana y Baum, Bernadette (2019, 8 de enero). Brazil plans to privatize or liquidate 100 state-run companies. *Reuters*. <https://www.reuters.com/article/us-brazil-infrastructure/brazil-plans-to-privatize-or-liquidate-100-state-run-companies-idUSKCN1P2197>
- Fraser, Nancy (2017). From progressive neoliberalism to Trump — and beyond. *American Affairs Journal*, 1(4). <https://americanaffairsjournal.org/2017/11/progressive-neoliberalism-trump-beyond/>
- Giannone, Diego (2010). Political and ideological aspects in the measurement of democracy: the Freedom House case. *Democratization*, 17(1), 68-97. <https://doi.org/10.1080/13510340903453716>
- Goldstein, Ariel Alejandro (2019). The New Far-Right in Brazil and the Construction of a Right-Wing. *Order Latin American Perspectives*, 46(227), 245-262. <https://doi.org/10.1177/0094582X19846900>
- Gonzalez de Olarte, Efrain (1993). Economic Stabilization and Structural Adjustment under Fujimori. *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, 35(2), 51-80.
- Harris, Bryan (2021, 25 de mayo). Brazilian leaders dash hopes for sweeping tax reform. *Financial Times*. <https://www.ft.com/content/3a53dfdb-86a8-47ff-846f-88475ac114a1>
- Harvey, David (2005). *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Heller, Patrick (2020). The age of reaction: Retrenchment populism in India and Brazil. *International Sociology*, 35(6), 590-609.
- Hinz, Kristina; Vinuto, Juliana y Coutinho, Aline Beatriz (2020). Por Dios y por las armas: el ascenso neopentecostal y securitario en Brasil (2003-2019). *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, 126, 185-213. <https://doi.org/10.24241/rcai.2020.126.3.185>
- Latin American Herald Tribune (2019, 9 de enero). *Brazil's Bolsonaro leaves economy to free-market crusader*. <http://laht.com/article.asp?ArticleId=2472752&CategoryId=14090>

- Leahy, Joe y Pearson, Samantha (2016, 13 de julio). Brazil to formally enshrine central bank's autonomy. *Financial Times*. <https://www.ft.com/content/ff464df6-4895-11e6-ab7c-840b4062e27c>
- Leahy, Joe y Schipani, Andres (2018, 24 de octubre). Opponents fear “wrecking ball” Bolsonaro poses threat to Brazilian democracy. *Financial Times*. <https://www.ft.com/content/a1ce1194-d6a6-11e8-ab8e-6be0dcf18713>
- Levitsky, Steve y Ziblatt, Daniel (2018). *How Democracies Die: What History Reveals About Our Future*. London: Penguin Random House.
- Lopes, Marina y Faiola, Anthony (2019, 5 de enero). What the first days of Bolsonaro's presidency say about the direction he will take Brazil. *The Washington Post*. https://www.washingtonpost.com/world/the-americas/what-the-first-days-of-bolsonaros-presidency-say-about-the-direction-hell-take-brazil/2019/01/04/89d59e72-0ed7-11e9-8f0c-6f878a26288a_story.html
- Losurdo, Domenico (2014). *Liberalism: A Counter History*, translated by Gregory Elliot. London/New York: Verso.
- Lynch, Nicolás (2017). *Populismo: ¿dictadura o democracia?* Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos/Fondo Editorial.
- Mc Clintock, Cynthia (2000). *The United States and Peru in the 1990s: Cooperation with a Critical Caveat on Democratic Standards*. https://www2.gwu.edu/~clai/docs/McClintock_Cynthia_06-00.pdf
- Mann, Michael (1986). *A History of Power from the Beginning to AD 1760*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Milhorance, Flávia (2021, 18 de abril). Police killing hundreds in Rio de Janeiro despite court ban on favela raids. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/global-development/2021/apr/18/police-kill-hundreds-rio-de-janeiro-favela-raids-court-ban>
- Mounk, Yascha (2018, 29 de octubre). Lessons from Brazil: A disturbing election shows that we can't count on the lessons of history—or multiculturalism—to save democracy. *Slate*. <https://slate.com/news-and-politics/2018/10/bolsonaro-brazil-election-lessons.html>
- Mudde, Cas (2019). *The Far Right Today*. Cambridge: Polity.
- Mudde, Cas y Rovira Kaltwasser, Cristóbal (2013). Exclusionary vs. Inclusionary Populism: Comparing Contemporary Europe and Latin America. *Government and Opposition*, 48, 147-174. <https://doi.org/10.1017/gov.2012.11>

- Munck, Ronaldo (2003a). Neoliberalism, necessitarianism and alternatives in Latin America: there is no alternative (TINA)? *Third World Quarterly*, 24(3), 495-511.
- Munck, Ronaldo (2003b). *Rethinking Latin America: Development, Hegemony and Social Transformation*. New York: Palgrave Macmillan.
- Nöel, Alain y Thérien, Jean-Phillipe (2008). *Left and Right in Global Politic*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Phillips, Tom (2021, 15 de febrero). Anger as Bolsonaro moves to make guns easier to access: A threat to democracy. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/2021/feb/15/jair-bolsonaro-brazil-guns-easier-to-acquire>
- Piketty, Thomas (2014). *Capital in the Twenty-First Century*. Cambridge, MA/London: Harvard University Press.
- Quijano, Aníbal (1998). Populismo y fujimorismo. En Burbano de Laro, Felipe (Comp.), *El fantasma del populismo. Aproximación a un tema [siempre] actual*. Caracas: ILDIS-FLACSO-Nueva Sociedad.
- Rangel, Patricia (2018). Guinada conservadora em políticas de gênero na América Latina: reflexões iniciais. *Cadernos Adenauer*, XIX(1), 211-227. <http://www.kas.de/wf/doc/25933-1442-5-30.pdf>
- Rangel, Patricia; Vinhaes Dultra, Eneida y Mc Coy, David (2021). De-democratization in Brazil and the New Puzzle of Women's Political Representation en Bianchi, Bernardo; Chaloub, Jorge; Rangel, Patricia y Wolf, Frieder Otto (Comps.), *Democracy and Brazil: Collapse and Regression*. New York/Albington: Routledge.
- Rios, Flávia (2021). Cycles of Democracy and the Racial Issue in Brazil (1978-2019). En Bianchi, Bernardo; Chaloub, Jorge; Rangel, Patricia y Wolf, Frieder Otto (Comps.), *Democracy and Brazil: Collapse and Regression*. New York/Albington: Routledge.
- Roberts, Kenneth (1995). Neoliberalism and the transformation of populism in Latin America: The Peruvian case. *World Politics*, 48(1), 82-116.
- Roberts, Kenneth y Peceny, Mark (1997). Human rights and United States policy towards Peru. En Cameron, Maxwell A. y Mauceri, Philip (Comps.), *The Peruvian Labyrinth: Polity, Society, Economy*. University Park: The Pennsylvania State University Press.
- Robinson, Andy (2016, 27 de julio). Brazil for Sale: How a Legal Coup Set the Stage for Privatization. *The Nation*. <https://www>

thenation.com/article/archive/brazil-for-sale-how-a-legal-coup-set-the-stage-for-privatization/

- Robin, Corey (2018). *The Reactionary Mind: Conservatism from Edmund Burke to Donald Trump* (2° ed.). New York: Oxford University Press.
- Rodríguez, Juan Pablo (2021). The politics of neoliberalism in Latin America: dynamics of resilience and contestation, *Sociology Compass*, 15. [e12854.https://doi-org.jproxy.nuim.ie/10.1111/soc4.12854](https://doi-org.jproxy.nuim.ie/10.1111/soc4.12854).
- Rydgren, Jens (2018). The Radical Right: An Introduction en Rydgren, Jens (Comp.), *The Oxford Handbook of the Radical Right*. New York: Oxford University Press.
- Sandel, Michael J. (2020). *The Tyranny of Merit: What's become of the Common Good*. London: Allen Lane.
- Schady, Norbert R. (2000). The Political Economy of Expenditures by the Peruvian Social Fund (FONCODES), 1991-95. *The American Political Science Review*, 94(2), 289-304. https://www-jstor-org.jproxy.nuim.ie/stable/2586013?seq=1#metadata_info_tab_contents
- Silva, Nara Roberta (2019, 18 de diciembre). Bolsonaro's New Chapter of Neoliberalism in Brazil. *Jacobin*. <https://jacobinmag.com/2019/12/jair-bolsonaro-brazil-neoliberalism-guedes-carvalho>
- Stiglitz, Joseph (2012). *The Price of Inequality: How today's Divided Societies Endanger Our Future*. New York: W.W. Norton & Co.
- Stumpf González, Rodrigo; Baquero, Marcello y Mello Grohmann, Luis Gustavo (2020). ¿Nueva derecha o vino viejo en odres nuevos? La trayectoria conservadora en Brasil en el último siglo. *Política y Sociedad*, 57(3), 647-670.
- Vilas, Carlos M. (2004). ¿Populismos reciclados o neoliberalismo a secas? El mito del neopopulismo latinoamericano. *Revista de Sociología Política*, 22, 135-151.
- Webber, Jeffrey R. (2020). A Great Little Man: The Shadow of Jair Bolsonaro. *Historical Materialism*, 28(1), 3-49.
- Weyland, Kurt (1996). Neopopulism and Neoliberalism in Latin America: Unexpected Affinities. *Studies in Comparative International Development*, 31(3), 3-31.
- Weyland, Kurt (2003). Latin American Neopopulism. *Third World Quarterly*, 24(6), 1095-1115. <https://doi.org/10.1080/0143659031001630080>

ORTEGA Y EL FANTASMA DE LUIS BONAPARTE

William I. Robinson

EN *EL 18 BRUMARIO DE LUIS BONAPARTE*, Carlos Marx describe el retorno napoleónico al poder por medio del golpe de Estado francés de 1851 como “tragedia la primera vez, y farsa la segunda”. Sería difícil encontrar una caracterización más adecuada para describir la saga de la conversión del presidente nicaragüense Daniel Ortega, de un revolucionario socialista a un pequeño dictador represivo y corrupto —en casi el mismo lapso del tiempo y en términos semejantes— entre la caída del primer Napoleón Bonaparte y el golpe que llevó al poder a su sobrino Luis.

Una parte importante de la izquierda internacional, sin embargo, ha tragado sin cuestionamiento el discurso legitimador del régimen de Ortega, con algunos argumentado que, a partir de su retorno al poder en 2007, Ortega ha retomado la Revolución Sandinista de los años ochenta, y que por tanto está bajo el asedio de Estados Unidos. Se trata de una reacción reflexiva “anti-imperialista” de parte de estos sectores de la izquierda, quienes confunden la apariencia con la esencia y la retórica con la realidad al mismo tiempo que hacen caso omiso de las evidencias o de un análisis izquierdista acerca del verdadero contenido programático, o de las relaciones clasistas, del gobierno de Ortega.

El régimen encara un mayor deterioro de su legitimidad a raíz de los comicios empañados de noviembre de 2021, la continua represión

de sus oponentes desde entonces, una economía en deterioro, y el incremento en los niveles de pobreza y del desempleo. He estado escribiendo desde hace tiempo sobre esta degeneración del Sandinismo y el descenso del Nicaragua a una dictadura. En este artículo, pretendo actualizar y profundizar el análisis histórico y político.

LA METAMORFOSIS DEL SANDINISMO AL ORTEGUISMO

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) encabezó la insurrección de masa que derrocó a la dictadura Somocista en 1979, abriendo paso a una revolución popular y de orientación socialista que ganó el apoyo de las izquierdas alrededor del mundo. Una década de incesante agresión contrarrevolucionaria organizada por Estados Unidos condujo a la derrota electoral de los Sandinistas en 1990. La derrota electoral sumergió al partido sandinista en una aguda crisis interna relativa a sus programas, orientación ideológica y estrategia en medio de desertiones en masa y la centralización del poder por la facción Orteguista en tanto el Sandinismo se iba mutando en el Orteguismo.

Como se sabe, en la actual época del capitalismo globalizado, los mercados financieros internacionales imponen mayores límites sobre las posibilidades transformativas en cualquier país mientras constriñe y distorsiona los procesos políticos nacionales a favor del capital y sus agentes políticos. No obstante, la izquierda mundial aún no ha llegado a saldar cuentas ni a aportar fundamentos claros teóricos acerca de los procesos en los cuales los antiguos líderes revolucionarios de las luchas nacionales por la liberación en países como Nicaragua, Angola, Mozambique, y Vietnam no perdieron tiempo en abandonar sus ideologías revolucionarias, acogerse al capitalismo, sumarse a las filas de la burguesía, desmovilizar a las bases de masa politizadas, y saquear descaradamente el Estado.

En el caso de Nicaragua, esta metamorfosis no se produjo de la noche a la mañana. La lucha al interior del partido Sandinista se desarrolló al tambor de las luchas de clase hasta sangrientas que se extendieron por las calles a raíz del regreso al poder de la antigua oligarquía en 1990 y en adelante. Mientras las bases Sandinistas montaban una resistencia sostenida al neoliberalismo impuesto por la restauración del orden capitalista, surgió una nueva elite Sandinista entre aquellos que se apropiaron de considerables propiedades durante el cambio de régimen en 1990, en lo que se conoce en Nicaragua como “la piñata”.

En efecto, estos Sandinistas de algo rango privatizaron a título personal lo que eran los bienes del Estado al igual que los recursos del partido Sandinista que eran el patrimonio colectivo de la Revolución. Los Sandinistas del alto rango que forman parte del “círculo de

hierro” alrededor de Ortega comenzaron a hacer grandes inversiones en el turismo, la agroindustria, la finanza, el comercio exterior, y la subcontratación para las maquiladoras, desarrollando una afinidad de intereses de clase con la burguesía tradicional. Sucesivos gobiernos desplegaron el ejército y la policía —ahora despojados de su original orientación política revolucionaria— para defender las antiguas y las nuevas clases poseedoras de cara a las protestas populares.

La crisis al interior del partido Sandinista se fue convirtiendo durante los 1990 en una lucha por el liderazgo. Los estatutos del partido establecieron: las deliberaciones colectivas para la toma de las decisiones partidarias, las elecciones internas para todos los cargos del partido, las primarias internas para elegir a los candidatos para las elecciones nacionales, y que los congresos del partido constituyeran la máxima autoridad del FSLN. La camarilla Orteguista logró captar definitivamente el aparato partidario a raíz del congreso de 1998 y puso fin al esfuerzo por renovar y democratizar el partido, convirtiendo los estatutos en papel mojado y haciendo desaparecer la vida partidaria. Desde ese momento y en adelante, el FSLN dejó de funcionar como un partido izquierdista. Ortega disolvió el mecanismo del liderazgo colegiado ejercido a través de una Dirección Nacional, primero de nueve y luego de quince miembros, y lo reemplazó con un régimen autocrático en tanto el FSLN se convirtió en una maquinaria electoral para sus aspiraciones presidenciales.

Inmediatamente después del congreso de 1998, Ortega negoció un pacto con el ultra-derechista Partido Liberal Constitucionalista y su líder corrupto, Arnoldo Alemán —quien había ganado las elecciones presidenciales de 1996— para repartir el botín del Estado. A raíz del pacto y no obstante su retórica, el FSLN se dispuso a contener las movilizaciones de masa en contra de las privatizaciones y los programas de ajuste estructural impuestos por el FMI y el Banco Mundial. En los años previos a las elecciones de 2006, Ortega renovó el pacto con Alemán, suspendió las elecciones primarias internas al FSLN, convocó apresuradamente un conclave del partido para anunciar que el sería el candidato Sandinista, y expulsó a los disidentes que aún quedaron, tachándolos de “traidores”. Desde entonces, los conclaves del partido han servido para formalizar cosméticamente las decisiones tomadas por Ortega y los cortesanos que ahora le rodeaban.

Ortega también hizo pactos con los ex-Somocistas, con los antiguos miembros de la contrarrevolución armada (conocido como los “contras”), con la jerarquía conservadora de la Iglesia Católica (para lograr el respaldo de la Iglesia el FSLN prometió imponer una prohibición total al aborto aun cuando la vida de la madre estuviera en riesgo, y luego cumplió con la promesa), y con las sectas evangélicas. En

una apariencia con el titular de la Iglesia Católica, el Cardenal Miguel Obando y Brazo —a quien anteriormente había proclamado como el “Capellán Somocista” por su apoyo a la dictadura Somocista— Ortega hizo una “confesión” pública por “los pecados” que cometieron los Sandinistas durante la revolución de los ochenta.

Al trazar su estrategia electoral para las elecciones del 2006, el FSLN aseguró a la clase capitalista nicaragüense, organizada en el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que defendería los intereses capitalistas siempre y cuando la burguesía no cuestionara el monopolio del poder político Sandinista. Su programa económico, plasmado en un documento de política redactado en coordinación con el COSEP, estipuló la subordinación de los pequeños productores al sector privado, “el respeto a todas formas de propiedad”, el libre comercio, la atracción de inversiones corporativas extranjeras, y la expansión de la agro-industria.

No fue hasta las protestas en masa de 2018 que la burguesía rompió con Ortega, cuando se hizo evidente que el régimen había perdido su legitimidad y su capacidad de gobernar y defender los intereses capitalistas. Y no fue hasta la represión pre-electoral en 2021 que la burguesía fue sometida a la represión que el régimen mantuvo reservada anteriormente para los sectores populares de la oposición.

Ya para las alturas de su triunfo electoral de 2006, Ortega y su círculo íntimo habían consolidado su control absoluto sobre el partido, el cual había sido vaciado de cualquier contenido socialista. Mientras tanto, la pareja gobernante —la esposa de Ortega, Rosario Murillo, quien también es vicepresidente— está en camino de convertirse en una dinastía familiar. Los ocho hijos Ortega-Murillo fungen como asesores a la presidencia, controlan el imperio reservado de por lo menos 22 corporaciones, que van desde canales de televisión, radioemisoras, y sitios de internet, empresas de petróleo y gas, hoteles y turismo, bienes y raíces, finanza y fondos de inversión, y aduana y comercio de exportación-importación. Los circuitos de la acumulación de capital en el país ahora dependen de una combinación de concesiones favorables otorgadas por el Estado y de la dependencia personal de la dictadura.

Al tomar posesión en 2007, Ortega abrió las puertas para la clase capitalista transnacional. Su estrategia del desarrollo capitalista se basó en atraer a las inversiones corporativas transnacionales en los abundantes recursos naturales del país con exoneraciones totales de impuestos durante un periodo de 10 años, la desregulación, la libertad para repatriar ganancias sin restricción alguna, y garantizar una fuerza laboral disciplinada acompañada de un control corporativista del partido sobre los sindicatos y las organizaciones

populares junto con fuertes dosis de represión a cualquier movilización autónoma de los trabajadores. Se trata de un modelo del control muy parecido al del Partido Revolucionario Institucional de México durante las décadas que el PRI estuvo en el poder en ese país. De esta manera, Nicaragua ofreció condiciones ideales para la acumulación transnacional de capital, incluyendo los salarios más bajos en toda América Latina salvo a Cuba y las tasas impositivas más bajas en Centroamérica, por lo que llegaron grandes inversiones extranjeras en las zonas francas, la agroindustria, el turismo, la minería, y la explotación forestal.

En los primeros años del gobierno de Ortega y con el pacto con el COSEP asegurado, los Sandinistas se empeñaron en construir una alianza populista multclasista bajo la firme hegemonía del capital y de las elites estatales Sandinistas. El ex-comandante guerrillero y aliado cercano a Ortega, Tomás Borge, explicó que las nuevas políticas de conciliación de clase fueron “realistas porque trabajar para los pobres sin luchar contra los ricos es ahora posible”.

En un principio el modelo produjo una mejoría en las condiciones materiales, con inversiones en la infraestructura y en los programas sociales asistenciales distribuidos por redes clientelistas. Los programas sociales representaron importantes avances para las clases populares, pero no alteraron el modelo neoliberal esencial puesto en marcha por los tres gobiernos derechistas que precedieron el regreso de Ortega al poder. Estas inversiones fueron financiadas por la masiva entrada de inversiones extranjeras, los altos precios de los *commodities*, y sobre todo por unos U\$5 mil millones en concepto de subsidios venezolanos como parte de la alianza ALBA.

Pero la ola de expansión capitalista no pudo sostenerse frente a la caída en los precios de los *commodities* y el agotamiento de los fondos venezolanos. La tasa de crecimiento comenzó a contraerse a partir de 2015 para luego desplomarse a raíz del levantamiento en masa de 2018. Los índices de pobreza se bajaron entre 2007 y 2014 para luego comenzaron a subir, llegando al 45 por ciento de la población en 2019, esfumando los avances logrados en los años anteriores. La Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas estima una tasa de crecimiento del 1,8 por ciento en 2022 —tasa insuficiente para lograr una recuperación después del derrumbe económico desde 2018, no obstante la recuperación de la crisis económica del Covid—. La “Unidad de Inteligencia Económica” de la Revista *The Economist* pronostica el estancamiento continuo entre ahora y 2025 (la revista elogió el gobierno nicaragüense por sus políticas neoliberales de austeridad).

FIN DE UNA ILUSIÓN

En el cuadro más grande, las dificultades en Nicaragua se arraigan en las contradicciones del desarrollo capitalista en el país, en el marco de la globalización capitalista que han entrañado una vasta expansión de la minería, el agro-negocio, el turismo, el extractivismo energético, la explotación forestal, y los megaproyectos de infraestructura a lo largo de Latinoamérica para satisfacer el voraz apetito de la economía global y las arcas de las corporaciones transnacionales. Ya para mediados de la década anterior, se agrietó el proyecto contradictorio del FSLN de promover la inversión social, por un lado, y por el otro, de promover la acumulación de capital transnacional sin restricciones mediante las concesiones, las exoneraciones impositivas, la represión de las protestas de los obreros y los campesinos, y la supresión de la disidencia política.

A medida que aumentaron las dificultades económicas y las tasas de crecimiento siguieran disminuyendo a partir de mediados de los 2010, el gobierno negoció acuerdos con las agencias financieras internacionales para profundizar las medidas neoliberales de austeridad, entre ellas, la suspensión de los subsidios a los servicios públicos y la privatización de la infraestructura. Una de estas medidas —un recorte en las prestaciones de pensión y un incremento en las contribuciones a las pensiones por parte de los trabajadores y los empleadores— fue el detonante para las protestas del abril de 2018.

En el periodo previo a las elecciones generales del 7 de noviembre del año pasado, Ortega llevó a cabo una oleada de represión, arrestando y deteniendo sin juicio a decenas de opositores, entre ellos, candidatos presidenciales, dirigentes estudiantiles y laborales, periodistas, y ambientalistas, obligando a varios centenares a huir al exilio, donde se sumaron a unos 100,000 mil que salieron al exilio desde 2018.

Pero la represión ha continuado desde los comicios en lo que parece ser una estrategia de purgar a la sociedad civil de cualquier grupo cívico que expresa una independencia del partido gobernante o de los aparatos del Estado. Hasta la fecha el gobierno ha cancelado la personería jurídica y ha forzado el cierre de más de 1.400 organizaciones de la sociedad civil, desde universidades y grupos estudiantiles, artísticos, y religiosos, hasta colectivos feministas, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, y asociaciones profesionales de medicina, educación, ciencia, y cultura, entre otras. Las primeras víctimas de esta cacería de brujas fueron los oponentes políticos del régimen, pero luego la campaña de represión convirtió en blanco a todos y cada uno de las organizaciones y las asociaciones de la sociedad civil no controladas directamente por el partido gobernante. La mayoría de los que fueron detenidos en el periodo previo a los comicios y

desde entonces ha sido acusada de “traición a la patria” y sentenciada a largas penas de prisión luego de juicios a puerta cerrada, durante los cuales no se les permitía a los presos políticos tener acceso a sus abogados, ni tampoco el régimen permitió la presencia de los periodistas.

A lo largo de 2021 el gobierno decretó una serie de leyes draconianas de “seguridad nacional” que suspendieron habeas corpus y que otorgaron al gobierno amplios poderes para detener y enjuiciar a cualquier persona que bajo ningún caso critica el gobierno. Las leyes definen la “traición” en términos tan generales que incluye, por ejemplo, “menospreciar la independencia, la soberanía y la autodeterminación de la nación”, “perjudicar los intereses supremos de la nación”, o cuestionar “la integridad nacional”. Las leyes también criminalizan una amplia gama de comunicaciones en línea, castigando con largas penas de prisión a cualquier persona que “publica” o que “divulga” informaciones que el gobierno declara “falsa”, “tergiversada”, o “falsedades ideológicas” que “podrían generar la ansiedad, la angustia, o el temor”.

La represión se dirigió con particular determinación contra los antiguos compañeros en armas de Ortega, entre ellos los comandantes legendarios Dora María Téllez y Hugo Torres. Ambos participaron en el asalto al Palacio Nacional en 1978 que obligó a la dictadura Somocista a liberar 60 reos políticos, mientras Torres también participó en la audaz incursión navideña de 1974 que obligó a Somoza a liberar a Daniel Ortega de la cárcel. Torres murió en febrero de 2022, después de languidecer en la cárcel durante 8 meses sin juicio y sin acceso a la atención médica. En estos momentos (finales de octubre de 2022), la vida de Téllez pende de un hilo. Ella inició una huelga de hambre en septiembre de 2022, luego de pasar 14 meses en confinamiento solitario, sin alimentación adecuada, sin poder reunirse con sus abogados y sin acceso a material de escritura y lectura o a atención médica.

CONTRA LA CORRIENTE DE LA MAREA ROSADA

La llamada Marea Rosada, en referencia al giro hacia la izquierda en América Latina durante las últimas dos décadas, ha tenido sus altibajos en tanto los gobiernos izquierdistas en su mayor parte se han acomodado al orden capitalista global en la región. Sin embargo, a pesar de su retórica socialista, el régimen Orteguista no debe considerarse como parte de esta Marea, dada la ausencia de cualquier orientación izquierdista por su parte, no obstante su retórica. A diferencia de Bolivia, por ejemplo, donde el Movimiento Hacia el Socialismo nacionalizó los hidrocarburos, el litio, y otros recursos, y aumentó fuertemente los impuestos sobre las ganancias corporativas, el gobierno de Ortega no ha nacionalizado ningunos de los recursos del país.

Al contrario, bajo Ortega no se ha registrado ningún cambio en las relaciones de propiedad y de clase. La banca, la agricultura, la industria, el comercio exterior están todos controlados por los conglomerados capitalistas locales y transnacionales; el 96 por ciento de la propiedad del país esta en manos del sector privado. Mientras el difunto líder venezolano Hugo Chávez lideró el ataque contra el plan del entonces presidente norteamericano George Bush para el Área del Libre Comercio de las Américas (ALCA), obligando a Washington a finalmente abandonar el esfuerzo en 2005, el gobierno entrante de Ortega dio la bienvenida al Tratado Centroamericano de Libre Comercio (CAFTA, por sus siglas en inglés) en 2006 justo en momentos en que los movimientos sociales de base a lo largo del Istmo Centroamericano estuvieron alzados en contra del pacto.

La industria maquiladora explotadora ha experimentado una fuerte expansión bajo el gobierno de Ortega. Mas de 100,000 trabajadores, la mayoría de ellos mujeres jóvenes, laboran en las Zonas Libres, donde confeccionan ropa para las compañías asiáticas y norteamericanas junto con sus subcontratistas nicaragüenses. Las empresas transnacionales preferían a Nicaragua más que a los países vecinos debido a los salarios extremadamente bajos, el estricto control laboral, y la estabilidad política relativa hasta 2018. Los obreros ganan un promedio de \$157 mensuales —los salarios más bajos en la industria maquiladora en Centroamérica— lo que representa apenas el 33 por ciento de la canasta básica hogareña. En 2016, la policía anti-motines violentamente reprimió una huelga organizada para exigir aumentos salariales, mejores condiciones de trabajo, y el derecho a organizar sindicatos independientes.

Una nueva fiebre de oro asola a Nicaragua, emblemática de la hegemonía del capital transnacional en el país. El gobierno ha puesto a la disposición de las compañías mineras transnacionales el 60 por ciento del territorio nacional, las cuales han descendido al país para explotar las abundantes reservas de oro, ahora el principal rubro de exportación. Durante la última década estos conglomerados transnacionales mineras desde Canadá, Estados Unidos, Brasil, el Reinado Unido, Japón, México, y Francia, entre otros países, han exportado \$4,12 mil millones de dólares en minerales, pero gracias a las exoneraciones impositivas otorgadas por el régimen, solamente \$130 millones de esta bonanza —un tres por ciento de todos los recibos mineros— llegaron a las arcas públicas. Mientras tanto, el gobierno ha desplegado a la policía y a grupos paramilitares para reprimir los trabajadores de la minería y los activistas comunitarios quienes han protestado los bajos salarios, las prácticas mineras perjudiciales para el medio ambiente, y los regalos corporativos.

Washington nunca se sintió cómodo con el regreso de Ortega al poder y ahora quisiera ver su salida del gobierno, pero no a costa de poner en riesgo los intereses capitalistas, de dejar un vacío de poder, o de desestabilizar la política norteamericana en la región. La condena diplomática de Ortega a la intervención norteamericana alrededor del mundo le ha ganado la ira de los gobernantes estadounidenses a la vez que ha confundido a los “anti-imperialistas”, quienes consideran que esta postura expresada es suficiente para brindar su apoyo al gobierno de Ortega.

Estos defensores del régimen de Ortega aducen que Nicaragua tambalea bajo las sanciones económicas norteamericanas y que Washington esta emprendiendo una guerra contrarrevolucionaria dirigida a un “cambio de régimen” en contra del país centroamericano. Sin embargo, no hay sanciones comerciales contra Nicaragua. Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua y el intercambio bilateral rebasó en 2021 los U\$6 mil millones de dólares. Nicaragua sigue siendo un miembro del CAFTA, lo que le otorga al país el acceso preferencial al mercado norteamericano. Washington no ha bloqueado el flujo de créditos internacionales a Managua. Solo entre 2017 y 2021, Nicaragua recibió unos U\$3 mil millones en créditos los institutos financieros internacionales tales como el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Los Orteguistas apuntan a los varios millones de dólares que la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) ha proporcionado a los grupos cívicos de la oposición, canalizados a través de la Fundación Nacional para la Democracia (NED), como “prueba” de que Washington esta empeñado en derrocar al régimen. Lo que omiten de mencionar es que la NED proporciona fondos a más de 100 países alrededor del mundo, la gran mayoría de ellos estrechos aliados de Estados Unidos, y que la USAID también otorgó varios centenares de millones de dólares directamente al gobierno de Ortega entre 2007 y 2017.

Nicaragua no enfrenta agresiones militares o paramilitares, en agudo contraste con los otros dos países —Cuba y Venezuela— que el ex-Asesor de Seguridad Nacional estadounidense, John Bolton, notoriamente calificó como la “Troika de Tiranía” en América Latina. Estos dos otros países han enfrentado ataques paramilitares y bloqueos totales con consecuencias devastadoras. De hecho, hasta el levantamiento popular en masa en 2018 y su represión violenta, Washington elogió a Ortega por su estrecha cooperación con el Comando Sur —responsable para todas las operaciones del Pentágono en América Latina—, con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, y con las

políticas migratorias norteamericanas, ya que el régimen impedía el tránsito por Nicaragua de los migrantes dirigiéndose al norte. Desde 2018, los responsables políticos norteamericanos han intentado efectuar un “aterrizaje suave” que facilitaría la salida de Ortega del poder, siempre y cuando su salida no perjudicara la estabilidad capitalista y la hegemonía elitista en el país.

Mas allá de la dura condena diplomática por parte de los funcionarios norteamericanos, Nicaragua ha enfrentado sanciones selectivas aplicadas a las cuentas bancarias privadas y las propiedades que mantienen en Estados Unidos a varias decenas de Orteguistas del alto nivel.

Washington aprobó dos leyes, la “Ley Nica” de 2017 y la “Ley RENACER” de 2021. Ambas leyes establecen sanciones selectivas aplicadas a los individuos del “círculo de hierro” del régimen encontrados culpables de graves violaciones de los derechos humanos y de la corrupción (además, estas sanciones selectivas a individuos no se dirigen específicamente a Nicaragua y se aplican por igual a El Salvador, Honduras, y Guatemala). Uno podría condenar a Washington, como lo hago yo, por arrogarse unilateralmente el derecho de imponer sanciones contra particulares o países extranjeros, no obstante, tendríamos que preguntar, ¿porque supuestos revolucionarios socialistas tienen millones de dólares y bienes personales escondidos en Estados Unidos?

LA PROFUNDIZACIÓN DE LA CRISIS POLÍTICA-ECONÓMICA

El régimen tuvo la esperanza de que su triunfo en las elecciones de noviembre de 2021 renovara el deterioro de su legitimidad, pero la integridad del proceso mismo fue cuestionada por la oleada de represión en contra de sus opositores durante los seis meses previo al voto (represión que ha seguido en curso hasta la fecha). Además de la represión interna, el gobierno bloqueó la entrada al país de los observadores extranjeros independientes y ejerció un control absoluto sobre el Consejo Supremo Electoral. El gobierno declaró que Ortega triunfó con el 75 por ciento de los votos y que el 65 por ciento de la población elegible emitió su voto. Pero informes independientes reportaron una tasa de abstención de aproximadamente el 80 por ciento e irregularidades generalizadas en el proceso.

Algunos de la izquierda internacional condenan las sanciones selectivas contra los miembros del círculo íntimo de Ortega, pero la izquierda internacional, hay que recordar, en 1978 y 1979 se movilizó ampliamente (sin éxito) para exigir que Washington aplicara sanciones en contra de la dictadura Somocista y que bloqueara el financiamiento internacional debido a las violaciones sistemáticas de los

derechos humanos. La izquierda mundial también exigió sanciones en contra del régimen de apartheid en Sudáfrica, buscó bloquear el financiamiento para la dictadura de Pinochet, y en la actualidad exige “boicot, desinversión, sanciones” en contra de Israel.

Que conste que yo mismo no apoyo sanciones comerciales contra Nicaragua ni tampoco reconozco que Estados Unidos tenga el derecho de imponer unilateralmente sanciones en contra de otros países. El punto es poner en relieve la hipocresía y el doble rasero, no solo por parte de Washington, el cual no impone sanciones contra los gobiernos aliados que son graves violadores de los derechos humanos, tales como los regímenes saudita, egipcio, israelita, entre muchos otros, pero también por parte de los izquierdistas que defienden a Ortega.

Esta hipocresía se hizo evidente con referencia a la Organización de Estados Americanos (OEA). El noviembre de 2021 la OEA aprobó una resolución declarando que las elecciones nicaragüenses carecían de “legitimidad democrática”. En respuesta, el gobierno nicaragüense tomó el paso inusitado de anular su membresía en la organización. Si bien es totalmente correcto que la OEA históricamente ha fungido como instrumento de la política norteamericana hacia América Latina, la acusación de los orteguistas de que la organización violó la soberanía de Nicaragua suena hueco —y no solo porque el principio consagrado en el derecho internacional de la no intervención en los asuntos internos de las naciones no cobija a la violación sistemática de los derechos humanos—.

De hecho, a raíz de la audaz toma del Palacio Nacional de Somoza en agosto de 1978 por parte de la guerrilla sandinista, los dirigentes del FSLN y sus partidarios alrededor del mundo se apelaron a los gobiernos amigos en América Latina a exigir que la OEA aplicara sanciones contra Somoza. Acto seguido, el FSLN hizo un fuerte cabildeo al interior de la organización —a través de la mediación de Panamá y México y otros gobiernos amigos— a favor de una resolución, aprobada apenas semanas antes del derrocamiento definitivo de Somoza el 19 de julio de 1979, que declarara al gobierno somocista ilegítimo y llamó por su reemplazamiento con un “gobierno democrático”.

La clase capitalista y sus agentes políticos estaban tan perturbados como Ortega por el levantamiento popular de 2018 y trataron de acoplar el descontento en masa a su propia agenda de recuperar el poder político directo y de asegurar que no se vería amenazado su propio control sobre la economía. A raíz de ese levantamiento, la derecha tradicional depositó sus esperanzas en ganar las elecciones de 2021, pero esas esperanzas se vieron frustradas por la represión preelectoral de Ortega. Los partidos de la derecha tradicional en Nicaragua se encuentran ahora en un estado de desorganización política. Hasta la

fecha, los sectores empresariales siguen divididos, unos buscando una estrategia opositora viable y otros buscando un acercamiento a través de renovadas negociaciones tras bastidores con Ortega. La masa de nicaragüenses más allá de la base segura de los Ortegaístas en un 20 por ciento de la población, no ha mostrado ningún entusiasmo por los partidos tradicionales y los empresarios que dominan la oposición y no tienen representación política propia.

El Ortegaísmo se ha arrogado para sí mismo los símbolos históricos de la Revolución Sandinista, incluyendo las canciones revolucionarias de los legendarios músicos Carlos Enrique y Luis Enrique Mejía Godoy, ambos ex-militantes del FSLN que fueron enviados al exilio juntos con miles más, incluyendo una mayor parte de la militancia histórica del partido. El régimen ha monopolizado y desfigurado a tal extremo un discurso “izquierdista”, que no existen en estos momentos en Nicaragua una alternativa izquierdista de mayor importancia. Los sectores populares no tienen proyecto propio que pueden avanzar como alternativa viable al régimen y a la oligarquía tradicional. La tragedia en Nicaragua es que la burguesía y la oligarquía derechista tradicional lograron establecer una hegemonía sobre la oposición anti-orteguista gracias a la brutal supresión por parte del régimen de los movimientos de los trabajadores, campesinos, mujeres, ambientalistas, y estudiantes.

POPULISMO E IZQUIERDA EN AMÉRICA LATINA

Mariana Mastrángelo y Pablo Pozzi

¿SON LOS MOVIMIENTOS populistas de América Latina complementarios o enemigos de los partidos tradicionales de izquierda? ¿O, más bien, son un nuevo tipo de izquierda, más autóctona, original y anclada en las realidades del subcontinente, frente a aquellas ideologías surgidas en la Europa del siglo XIX? Estas preguntas suponen, por un lado, una perspectiva ahistórica que implica, no solo una cierta uniformidad en estos movimientos, sino también, que existen similitudes entre aquellos movimientos que surgieron en las décadas de 1930 y 1940, y aquellos progresistas, posteriores al 2000, gobiernos que fueron denominados “la Marea Rosa”. Por otro lado, existe un problema en la definición del término “izquierda”. ¿Nos referimos a las muchas variedades de grupos marxistas o incluimos anarquistas, nacionalistas de izquierda y movimientos como los Sacerdotes del Tercer Mundo? Además, los mismos movimientos, calificados por los académicos como “populistas”, no se considerarían así. Aquí denominaremos “Izquierda” a todos aquellos movimientos políticos que cuestionan el capitalismo como sistema social y económico y consideraremos “populistas” a aquellos movimientos que tiendan a considerarse como un vehículo del pueblo y sus aspiraciones, lo que implica un sesgo progresista en sus políticas, y un desafío para las élites establecidas. Como tal, desde una perspectiva latinoamericana-

na, personas como el brasileño Jair Bolsonaro no serían considerados “populistas”, mientras que el cubano Fidel Castro sería ubicado dentro del campo de la “izquierda”.

Estos temas se vuelven aun más complejos si consideramos que muchos de los movimientos populistas iniciales, en las décadas de 1930 y 1940, se unieron a conservadores, moderados e izquierdistas. Al mismo tiempo, organizaciones como los Partidos Comunistas consideraban a los nuevos movimientos como versiones autóctonas del fascismo europeo, mientras que los populistas tendían a ver a las izquierdas tradicionales como competidores, extrañas y ajenas a las realidades latinoamericanas. Más de medio siglo después, la Marea Rosa incluía a gran parte de la izquierda organizada, que consideraba las reformas de Hugo Chávez en Venezuela, o de Evo Morales en Bolivia, como el camino hacia una revolución popular.

Este capítulo plantea que las circunstancias nacionales e históricas tienden a definir la relación entre los diversos movimientos populistas y la izquierda. Al mismo tiempo, el populismo, como movimiento político, permanece lo suficientemente indefinido como para que se pueda considerar que significa diferentes cosas para diferentes personas y, por lo tanto, contrasta con la tendencia de la izquierda hacia construcciones y discusiones ideológicas taxativas.

Fuera de América Latina, se cree que los movimientos tradicionalmente asociados con el populismo, como el Narodniki ruso, el Poujadisme francés o el Partido Popular o del Pueblo (*People's Party*) estadounidense, por lo general se considera que tienen vínculos con perspectivas conservadoras, se remontan a una mítica nación representada en formas “tradicionales”, valores y una “idílica” sociedad campesina/agricultora. En cambio, el populismo latinoamericano tiende a ser visto como un movimiento popular, multclasista y de reforma progresista, que compite con la izquierda tradicional por la lealtad de los trabajadores, empleados y campesinos. Al mismo tiempo, la izquierda latinoamericana, en la década de 1930, incluía importantes partidos comunistas y socialistas, además de los restos de un otrora poderoso movimiento anarquista (en naciones como Uruguay siguió siendo una fuerza considerable), y grupos más pequeños de intelectuales de izquierda.

Aunque los diferentes movimientos y líderes nunca usaron el término en sí, los académicos inicialmente tomaron prestado el término populismo del Partido Popular de los Estados Unidos a fines del siglo XIX que apelaba a una versión genérica de “el pueblo”. En realidad, lo que los académicos y sus oponentes llamaron populismo, sus protagonistas lo denominaron “movimientos nacionales”, como una forma de describir los desarrollos políticos de principios del siglo XX en Amé-

rica Latina. La época dorada del populismo latinoamericano suele citarse entre las décadas de 1930 y 1960, y se identifica con líderes tan destacados como: Lázaro Cárdenas en México (1934-1940); Juan Perón en Argentina (1946-1955); Getulio Vargas en Brasil (1930-1954); Luis Muñoz Marín en Puerto Rico (1948-1964); José Velasco Ibarra en Ecuador (1952-1956); y Víctor Raúl Haya de la Torre en Perú, y Jorge Eliécer Gaitán en Colombia (aunque estos dos últimos no llegaran a la Presidencia). Este período populista inicial llegó a su fin a mediados de la década de 1950, a través de una combinación de dictaduras represivas orientadas al mercado y gobiernos desarrollistas. Si bien nunca desapareció como movimiento de masas (y en países como Argentina reapareció con una fuerza inusual a fines de la década de 1960), se redujo a una fracción de su atractivo inicial. Sin embargo, a fines del siglo XX, América Latina fue testigo inesperadamente de una nueva ronda de gobiernos progresistas (usualmente denominada “Marea Rosa”), con una expansión de las posibilidades de participación política popular. Muchos han considerado a estos gobiernos como una continuidad modernizada de los movimientos de las décadas de 1930 y 1940 y, por lo tanto, los han calificado de “populistas”, especialmente debido a su apelación al “pueblo” y su énfasis en el Estado como vehículo para las demandas populares.

La primera ola de populismo latinoamericano comenzó en los inicios de la Gran Depresión en 1929. En varios países, los políticos, que se centraron en el pueblo, y una serie de reformas inspirados en diferentes aspectos del estado de bienestar, fueron elegidos para el cargo. Al mismo tiempo, estos nuevos líderes políticos dieron voz a un discurso antiimperialista, que pretendía representar los intereses nacionales, frente a los de potencias como Gran Bretaña y Estados Unidos.

La segunda ola populista comenzó en los últimos años del siglo XX y continuó hasta el siglo XXI. Al igual que en la primera ola, estos gobiernos apostaron por el antiimperialismo y el reforzamiento de la participación del Estado en los asuntos sociales y económicos. Este “estatismo” se presentó como un nuevo tipo de socialismo basado, no en la clase, sino en “el pueblo”, pero respetuoso de lo que se denominó “capitalismo nacional” y la libertad de mercado. Fue Hugo Chávez en Venezuela y el Partido do Trabalhadores (Partido de los Trabajadores) de Brasil quienes acuñaron el término Socialismo del Siglo XXI, mientras que Evo Morales introdujo reformas para establecer un estado plurinacional, anclado en las tradiciones de los pueblos indígenas de Bolivia.

LA PRIMERA OLA: EL POPULISMO Y SU COMPETENCIA CON LA IZQUIERDA

Como se indicó anteriormente, el populismo surgió en América Latina en el período comprendido entre la crisis de 1929 y el final de la Segunda Guerra Mundial. Si bien se piensa que el populismo europeo y estadounidense es el resultado de la desestructuración de las sociedades tradicionales durante la Segunda Revolución Industrial (Hofstadter, 1960), la versión latinoamericana surgió de un período de crecimiento de las clases trabajadoras, la urbanización y el surgimiento de pequeñas empresas que, a su vez, fue el resultado de un período de industrialización a través del proceso de sustitución de importaciones posterior a la Gran Depresión. Para América Latina, las décadas entre 1929 y 1950 fueron un período de mayor conflictividad social y crisis política, de ascenso de las clases media y trabajadora, y de crecimiento de la izquierda marxista, específicamente de los diversos Partidos Comunistas. Esta fue la época de la República Socialista de Marmaduke Grove de 1932 en Chile; el levantamiento de Farabundo Martí de 1932 en El Salvador; Tenentismo y la Columna Prestes en 1924 en Brasil; la revolución boliviana de 1952; y el crecimiento de sindicatos dirigidos por comunistas en Argentina, México y Uruguay.

Al mismo tiempo, la Crisis de 1929 tuvo un gran impacto en la sociedad y la economía de América Latina, ya que redujo las exportaciones agrícolas a naciones industrializadas como Gran Bretaña. El resultado fue generar cambios con efectos de largo alcance. Por un lado, las importaciones industriales debieron ser sustituidas por productos locales de menor calidad debido a la reducción de las divisas disponibles para adquirir importaciones. La caída de las exportaciones agrícolas, que aumentaron los agricultores locales, provocó el desempleo rural y la migración hacia las ciudades en busca de trabajo. Uno de los resultados de esta migración fue el crecimiento de los sindicatos industriales y de los Partidos Comunistas. Los comunistas dirigían grandes sindicatos industriales que organizaban principalmente a los “nuevos” trabajadores migrantes. El surgimiento de los sindicatos “Rojos”, el aumento del número de huelgas “salvajes” (o sea ilegales) y el peligro de la convulsión social fue algo que marcó la cosmovisión de líderes populistas, como Vargas y Perón. Como escribió Perón en 1950:

Les hablé un poco en comunismo [sic]. ¿Por qué? Porque si hubiera hablado en cualquier otro idioma, me hubieran tirado naranjas [...]. Porque eran hombres con cuarenta años de marxismo y con líderes comunistas [...]. Querían ir a donde les parecía conveniente [...]. Ellos creían en la lucha de clases [...]. La gente que me seguía no quería ir a donde yo iba;

querían seguir su propio camino. No les dije adónde ir; Empecé a caminar delante de ellos en la dirección que querían ir. Eventualmente, mientras viajábamos juntos, comencé a dar vuelta y los llevaba a donde yo quería ir. (Perón, 1950, p. 290)

Así lo ratificó el peruano Víctor Haya de la Torre:

Mil veces hemos repetido esta afirmación: el aprismo no es comunismo. Y no es comunismo, no porque nosotros lo digamos. Nuestra declaración se basa en Marx. El Partido Aprista Peruano ha tomado muy en serio, desde sus inicios, la sincera invocación de José Carlos Mariátegui, quien alguna vez perteneció al APRA: “Peruanicemos el Perú”. Es decir, debemos nacionalizarlo en un sentido integral. (Haya de la Torre, 1932, p. 217)

Tal vez por lo señalado por Perón, y dejado claro por Haya de la Torre, muchos de los líderes populistas latinoamericanos de las décadas de 1930 y 1940 se apropiaron de buena parte de las demandas, del lenguaje y de la simbología de la izquierda tradicional, al mismo tiempo que la combatían. Solían permitir una serie de reformas, de arriba hacia abajo, que habían sido demandas fundamentales para el desarrollo de la izquierda en la década de 1930. Sin embargo, junto con estos programas de reforma, cada líder elaboró una respuesta diferente, y muchos desencadenaron una ola represiva hacia la izquierda.

La propia izquierda, excepto en México y Chile, tildó a los diferentes movimientos populistas de una versión latinoamericana del fascismo. Esto combinó la conveniencia política de tildar a un competidor con señalar que líderes populistas como Perón o Vargas admitían su admiración por Mussolini. Al mismo tiempo, la izquierda (especialmente los diversos Partidos Comunistas) pisó un terreno más sólido, al señalar la naturaleza represiva de muchos de estos gobiernos, sumado el hecho de que modelaron sus reformas en líneas corporativistas y su énfasis en una alianza entre la burguesía nacional, la clase media baja y la dirección del movimiento obrero.

A pesar de la represión a la disidencia, especialmente la de la izquierda, la mayoría de los líderes populistas fueron pragmáticos, enfrentando a las alas de izquierda y derecha de su movimiento. Como diría Perón: “Tengo una mano derecha porque tengo una izquierda” (James, 2010). Las políticas de muchos líderes tendían a ser pendulares, siempre apoyando a una facción contra la otra, para mantener el liderazgo del movimiento.

Así, Perón reforzó la “Sección Especial” de la Policía Federal, cuya tarea era la “lucha contra el comunismo”, y persiguió a los miembros del Partido Comunista Argentino (PCA) dentro del movimiento obrero (Kabat, 2017; Cutillo, 2018). Varios años antes que Perón, Getulio

Vargas aprobó la “Ley Monstruosa” y desató una violenta persecución de los comunistas brasileños (Levine, 1970, p. 68) como se describe magistralmente en la trilogía de Jorge Amado, *Los subterráneos de la libertad* (*Os Subterrâneos da Liberdade*, 1954). La combinación de apoyo de los trabajadores, las reformas sociales y el discurso progresista generó una mística que tendió a oscurecer los aspectos más desagradables de los nuevos movimientos políticos y sus líderes.

A diferencia de Argentina y Brasil, la llegada al poder de Lázaro Cárdenas en México, en 1934, implicó un nivel de cooperación entre la izquierda y la dirigencia populista. Cárdenas dio refugio a León Trotsky; permitió al marxista Vicente Lombardo Toledano convertirse en secretario general de la Federación Mexicana del Trabajo (CTM), que luego se unió a la Federación Mundial del Trabajo (FSM), dirigida por comunistas; y estableció una reforma educativa de amplio alcance, denominada “Educación Socialista”. El gobierno de Cárdenas representó un cambio de paradigma dentro del populismo mexicano, que incluyó reformas sustantivas en el partido gobernante (que se convertiría en el Partido Revolucionario Institucional [PRI] en 1946). A diferencia de otros líderes populistas, incluidos los presidentes mexicanos anteriores, Cárdenas permitió la disidencia y la organización de movimientos sociales independientes para contener el poder de las confederaciones de trabajadores y campesinos. En ese contexto, la Internacional Comunista recomendó que el Partido Comunista Mexicano (CPM) colabore activamente en la política cardenista. Esta creía que una activa intervención comunista en lo social y político podía abrir el camino a la toma del poder. Un antiguo miembro del partido, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas Francisco J. Múgica fue uno de los ideólogos del gobierno de Cárdenas (González, 1979; Hernández Chávez, 1979; Ribera Carbó, 2019). Independientemente de las inclinaciones políticas del populismo, el caudal de la izquierda latinoamericana estaba en declive en la década de 1950, ya que la vida de un trabajador promedio había mejorado significativamente en la década y media anterior. Por ejemplo, la sindicalización masiva y el pleno empleo significaron que los trabajadores obtuvieron estabilidad laboral y aumentos en los salarios reales. Aunque los diversos partidos comunistas seguían siendo importantes en toda América Latina, habían perdido gran parte de su ímpetu revolucionario y el apoyo de la clase trabajadora. Muchos avanzaron hacia una convivencia tensa con los diferentes movimientos populistas, especialmente cuando la década de 1960 marcó el comienzo de dictaduras militares orientadas al mercado en toda América Latina. En la década de 1940, la izquierda había considerado al populismo como una versión local del fascismo. En la década de 1960, muchos izquierdistas pensaron que el hecho de

que el populismo fracasara en lidiar con la alianza entre los militares y la gran burguesía radicalizaría a las bases hacia la izquierda. Como tal, la mayoría de los izquierdistas comenzaron una reinterpretación del populismo, para ser considerado ahora como un movimiento progresista con potencial revolucionario.

LA SEGUNDA OLA: POPULISMO Y SOCIALISMO DEL SIGLO XXI

Los denominados movimientos populistas, tras la desintegración de la URSS y el surgimiento de políticas económicas y sociales neoliberales, son bastante distintos de las manifestaciones anteriores. Aunque mantuvieron una confianza en los líderes carismáticos y un énfasis en las políticas redistributivas administradas por el Estado, hubo diferencias importantes. El principal se centró en la aceptación de las políticas económicas neoliberales en general, manteniendo un discurso progresista. De hecho, vale la pena considerar si estos nuevos movimientos eran efectivamente populistas o más bien un nuevo tipo de izquierda. Además, no pueden verse como un fenómeno uniforme. Por ejemplo, Hugo Chávez de Venezuela se ha llamado a sí mismo socialista, mientras que Cristina Fernández de Kirchner de Argentina a menudo ha negado cualquier vínculo con la izquierda.

Una diferencia crucial es que, en el primer período, la izquierda marxista había estado presente en toda América Latina y era un desafío potencial para los nuevos movimientos populistas. En el siglo XXI, la izquierda era una mera sombra de sí misma. Las diversas dictaduras latinoamericanas de las décadas de 1960 y 1970 aniquilaron a la mayor parte de las organizaciones de izquierda, incluidos grupos marxistas, cristianos y nacionalistas. Miles de activistas fueron asesinados, encarcelados, se exiliaron o simplemente desaparecieron. Al mismo tiempo, la caída del “socialismo real” había llevado a una crisis general de la izquierda, incluidos aquellos sectores que habían sido críticos con el estalinismo. En 1975, la afiliación al Partido Comunista Argentino (PCA) representaba alrededor del uno por ciento de la población; quince años más tarde este había perdido el 90% de sus miembros y se había fragmentado en varios grupos. Para 2019, muchos militantes dentro de la izquierda argentina, incluidos los exguerrilleros, los remanentes del PCA, varias escisiones trotskistas y el Partido Comunista Revolucionario (PCR) maoísta se habían unido a la coalición gobernante kirchnerista. El Partido Comunista Mexicano, aunque no muy grande, había sido una presencia organizada y combativa en los movimientos obreros, estudiantiles y campesinos, especialmente de 1930 a 1950. Sometido a una mayor represión después de la Masacre de Tlatelolco de 1968, inició un proceso de fusión con otros movimientos progresistas después de 1981, hasta desaparecer

en uno de los nuevos movimientos populistas, el Cardenista Partido de la Revolución Democrática (PRD)¹. En otros países, como Chile, Bolivia o Venezuela, muchos de la izquierda marxista, incluidos exguerrilleros de las décadas de 1960 y 1970, se sumaron a varias nuevas alternativas progresistas que, apenas tres décadas antes, habrían considerado “reformistas”. Otros fundaron nuevas organizaciones de izquierda que intentaron estar en consonancia con los tiempos, aprendiendo de los fracasos anteriores. Quizás los más emblemáticos de estos cambios han sido Brasil y Argentina.

En Brasil, en 1980, el *Partido do Trabalhadores* (PT) fue organizado por los trabajadores del área industrial ABC de Sao Paulo, cuyo líder principal era Luiz Inácio Lula da Silva. El PT comenzó como un nuevo modelo para la izquierda posterior a la URSS, y luego evolucionó hacia lo que puede considerarse como un nuevo tipo de movimiento de izquierda populista. Desde sus inicios se organizó de abajo hacia arriba, respetando la formación de tendencias dentro del partido, y desarrollando una vida política viva y muy democrática. Eso hizo posible que un amplio sector de la comunidad progresista participara en el PT. Rápidamente se unieron varios grupos trotskistas, así como políticos socialdemócratas, activistas de izquierda cristiana y exguerrilleros, como Dilma Rousseff y José Genoino. Al mismo tiempo, el PT logró proponer y promulgar una serie de medidas innovadoras como el “presupuesto participativo” (*orçamento participativo*) iniciado en la ciudad de Porto Alegre en 1989. Tomando una página de las tradiciones medievales y de los municipios de Nueva Inglaterra en el siglo XIX, el presupuesto participativo era un modelo de “democracia directa” donde los miembros de la comunidad decidían las políticas legislativas y el presupuesto para el gobierno local. En el año 1993 había tensiones entre los pragmáticos (por ser más políticos) y aquellos que querían retener los principios socialistas. Ese año, la resolución de la octava Reunión Nacional del Partido reafirmó el carácter revolucionario y socialista del PT y condenó la conspiración de las elites por querer subvertir la democracia. El partido abogaba por defender la idea de una “radical reforma agraria y la suspensión de la deuda externa”, como así también concluía que “el capitalismo y la propiedad privada no pueden ser el futuro de la humanidad”. Hasta ese momento, el PT era considerado como parte de la nueva izquierda y de ninguna

1 El PRD o Partido de la Revolución Democrática fue fundado en 1989 como una alianza entre seis partidos tradicionales de izquierda y una escisión del PRI denominada Corriente Democrática. Su líder es Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del presidente Lázaro Cárdenas. Aunque es miembro de la Internacional Socialista, muchas de sus políticas se remontan a las de la presidencia de Cárdenas.

manera populista. Sin embargo, después de la derrota de Lula en la campaña presidencial de 1994, el sector pragmático comenzó a tomar la delantera. El proceso fue paulatino, lleno de contradicciones y de tensión intrapartidista. En 1997, la resolución de la Reunión Nacional redefinió la versión del socialismo del PT como una “revolución democrática”, enfatizando una visión política, en lugar de económica y de clase, del socialismo que apuntaba a hacer que el estado fuera “más transparente y socialmente responsable”. En otras palabras, había abandonado la perspectiva anticapitalista de sus orígenes a cambio de una visión donde se prefería la reforma a la revolución. Un año después, en 1998, la tercera plataforma de la campaña presidencial de Lula eliminó toda mención a propuestas socialistas, e incluso la mención a una transición a una sociedad socialista (Weaver, 2018).

Esto también empezó a cambiar la organización interna del PT y, desde la década de 1990, pasó de ser un partido militante, con la prioridad de organizar ramas, a un partido organizado en torno a las elecciones, con campañas profesionalizadas, financiamiento privado, consultores políticos y una mayor confianza en el carisma de Lula. En cierto sentido, esto implicó una transición desde la nueva izquierda hacia el populismo, aunque en su nueva versión del siglo XXI. La tendencia a moderar su plataforma para ganar votos en las clases media y alta se aceleró, y en 2002, con un gran empresario como candidato a la vicepresidencia, Lula finalmente fue elegido después de hacer importantes concesiones al sector privado (Mendes Loureiro y Saad Filho, 2019). En ese momento, los compromisos y alianzas que había hecho el PT dejarían una huella definitiva en sus políticas públicas, reformas y programas de gobierno. Como escribió Steve Ellner, “algunas de estas políticas iban en contra de las posiciones de izquierda defendidas por los mismos líderes antes de llegar al poder. La dinámica que dio paso a políticas pragmáticas y populistas tiene implicaciones importantes [...]” (Ellner, 2019, p. 11).

En el otro extremo del espectro político de la Marea Rosa, y más cerca de las acciones de un líder populista tradicional, Néstor Kirchner propuso un nuevo movimiento político en 2003, llamado “transversalidad”, lo que significaba que personas de diferentes orientaciones políticas eran bienvenidas a participar. En los cargos de gobierno fueron designados exguerrilleros, comunistas y trotskistas, así como derechistas de Guardia de Hierro, el menemismo y caudillos peronistas tradicionales. Los críticos de izquierda recordaron que Perón siempre había dicho que “se sube al caballo por la izquierda y se baja por la derecha” (en realidad, la frase pertenecía al intelectual peronista Arturo Jauretche); es decir que en Argentina se ganan elecciones presentándose como un candidato izquierdista y para luego gobernar

como conservador. Estos críticos insistían que no había cambios sustantivos entre las políticas socioeconómicas de Menem y las de los Kirchner. Estos últimos insistieron con frecuencia en que no eran izquierdistas, sino reformadores nacionalistas, y que, para poder gobernar efectivamente, uno tenía que ceder en algunos principios mientras hacía los cambios necesarios. Los viejos peronistas afirmaron que este enfoque tenía poco en común con las políticas de Perón; la izquierda trotskista insistía en que las reformas eran insuficientes, mientras que la oposición liberal consideraba el estilo de gobierno de los Kirchner como una forma de autoritarismo. Todas las críticas tienen elementos de verdad. Pero lo que es más importante, y en esto hay acuerdo entre los diversos críticos, es que, a diferencia de Chávez, el PT de sus primeras épocas o José Mujica y el Frente Amplio de Uruguay, los Kirchner no pueden ser considerados de ninguna manera como de izquierda. Y, sin embargo, han promulgado nuevas leyes progresistas. Y muchos ex izquierdistas se han unido a su gobierno, incluido el Partido Comunista. ¿Estos izquierdistas se sumaron al kirchnerismo para no ser irrelevantes en la política argentina, o más bien lo hicieron porque creen que este movimiento puede convertirse en un camino “nacional” para la revolución? ¿Quién tiene razón? ¿Son los Kirchner una forma de peronismo del siglo XXI, un neoperonismo? ¿Son populistas conservadores? O más bien, ¿son el único reformismo posible tras los cambios provocados por la caída de la URSS?

De hecho, sus reformas han sido muy limitadas, especialmente si se comparan con las de Evo Morales en Bolivia o Hugo Chávez en Venezuela. Si bien el empleo y el poder adquisitivo mejoraron desde que el matrimonio Kirchner asumió la presidencia en 2003 hasta 2011, otros cambios sociales significativos significaron que, hacia 2015, uno de cada cuatro argentinos estaba desempleado o tenía un empleo ocasional; un tercio de todos los asalariados estaban empleados “en negro”; la inseguridad laboral subió a niveles récord; el bienestar social (las obras sociales) casi ha desaparecido para más de la mitad de la población; la afiliación sindical se encuentra en un mínimo histórico del 35%; toda una generación nunca ha tenido un trabajo regular; los niveles educativos han disminuido y el analfabetismo ha aumentado, con respecto a 1989; y la brecha entre el diez por ciento más rico y el más pobre se ha ampliado. La presidente Cristina Fernández de Kirchner ha afirmado, en repetidas ocasiones, que las empresas privadas nunca han tenido una tasa de ganancia más alta. De hecho, los negocios en Argentina están fuertemente subsidiados por el Estado, desde compañías privadas de gas y luz, hasta hipódromos y restaurantes en el elegante Puerto Madero de Buenos Aires. Estos subsidios, iniciados bajo el gobierno de Menem y señalados como una de las causas de la

debacle económica de 2001, se han mantenido sin cambios. A los empresarios argentinos se les ha garantizado una alta tasa de ganancia, por más irracionales que sean las políticas económicas seguidas por el Gobierno: el mecanismo de subsidios los protege de las caídas del mercado. La izquierda argentina ha tendido a ser solidaria con las políticas de los Kirchner, considerando que los aspectos negativos se compensan con los positivos, y que deben ser pragmáticas, cuando la única otra alternativa posible es un gobierno abiertamente neoliberal, como el que encabezó Mauricio Macri en 2015. En este proceso la izquierda ha sido subsumida al movimiento kirchnerista, perdiendo muchos elementos de su identidad.

Como en el caso de los Kirchner, muchos de los líderes de la Marea Rosa han tratado de lidiar con los cambios del siglo XXI aprobando nuevas leyes, haciendo campaña por los derechos humanos, de los homosexuales y de las mujeres, y enfrentándose a algunos sectores del *establishment* tradicional. Debido a tales leyes y políticas progresistas, estos líderes han sido considerados la “Nueva Izquierda” y han obtenido el apoyo de una gran parte de la izquierda más tradicional. La izquierda trotskista ha sido una excepción. En Brasil, varios grupos trotskistas se separaron del PT de Lula para formar el *Partido da Causa Operária*, el Partido Socialista de los Trabajadores Unificado y el Partido Socialismo y Libertad (PSOL). El PSOL se ha alineado con una variación de la teoría del socialismo del siglo XXI de Heinz Dieterich Steffan (Steffan, 2000), y obtuvo casi el 3% de los votos en 2018. En Argentina, varios pequeños partidos trotskistas formaron el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) recibiendo cerca del 7% de los votos en 2021. Muchas de estas organizaciones de izquierda se han topado con el problema de apoyar varias propuestas de los movimientos de la Marea Rosa, mientras intentan mantener una identidad de izquierda independiente. Al mismo tiempo, el éxito de los movimientos de la Marea Rosa y su capacidad para cooptar a una parte importante de la izquierda ha influido en muchas de las organizaciones de izquierda más tradicionales para adoptar propuestas y un discurso más en sintonía con estos movimientos populistas. Específicamente, muchos en la izquierda latinoamericana del siglo XXI han reemplazado su perspectiva orientada a la clase trabajadora, con políticas de identidad y un llamado a “la gente” y “los pobres”. Como tal, las diferencias entre los movimientos populistas y de izquierda, tan tangibles y claras en 1940, se han vuelto difusas y, a veces, bastante indistinguibles.

Posiblemente esta sea la razón por la cual, para muchos observadores externos, estos nuevos movimientos populistas en América Latina fueron vistos como una versión más moderna de la izquierda,

que finalmente había abandonado los criterios marxistas extranjeros, para asentarse más firmemente en las realidades y tradiciones nacionales. Un problema similar surge cuando consideramos los gobiernos de la “marea rosa”. Para los observadores externos, tanto el matrimonio Kirchner, Lula, Chávez, Evo, Mujica, Correa, Ortega, parecen ser similares; o sea, parte de un nuevo movimiento político continental. Y, sin embargo, numerosos conflictos entre ellos sugieren diferencias, como por ejemplo, entre Mujica de Uruguay y Evo Morales de Bolivia, por un lado, y los Kirchner por el otro (Mujica a menudo se refería a Néstor Kirchner como un “tuerto ladrón”). Lo mismo puede decirse en términos de sus políticas e ideas. Chávez fue partidario de lo que denominó “socialismo del siglo XXI”, mientras que Evo Morales insistió en la creación de una sociedad plurinacional, con profundas raíces en las tradiciones indígenas. Lula, por su parte, comenzó en una posición ideológica más cercana a Chávez, pero se distanció para conformar una alianza electoral con la Igreja Universal y el PMDB². Mientras tanto, los Kirchner han repetido muchas veces que no eran de “izquierda”, sino que representaban una modernización del peronismo. Estas posiciones filosóficas tuvieron un impacto en las políticas gubernamentales. Por ejemplo, Chávez se hizo cargo de la corporación petrolera de Venezuela (PDVSA) y utilizó sus considerables ingresos para desarrollar varios programas sociales (aunque parece haber habido mucha corrupción). Los Kirchner, a pesar de su retórica, no hicieron nada parecido. Su nacionalización de YPF, la corporación petrolera argentina, implicó convertirse en el accionista mayoritario mediante la compra de las acciones españolas de Repsol. Como tal, YPF sigue siendo una corporación privada, impulsada por las ganancias, el pago de dividendos y la venta de acciones en Wall Street. Lo mismo puede decirse de Lula y Evo Morales. Al menos hasta 2010, las políticas de Evo implicaban una profunda redistribución del ingreso, que difería significativamente de la política de asistencialismo gubernamental implementada por Lula.

Las diferencias de enfoque son reveladoras en términos de apoyo popular. Cuando Dilma Rousseff fue derrocada en un golpe de Estado parlamentario, Lula y su PT no pudieron movilizar ningún tipo de protesta significativa, lo que provocó el ascenso de Jair Bolsonaro. Esto fue diferente en Bolivia, donde el golpe orquestado por Jeanine Añez vio una resistencia y represión significativas. Terminó cuando

2 El PMDB, o Partido del Movimento Democrático Brasileiro (Partido del Movimiento Democrático Brasileño) es un partido político de centro derecha que nació como la oposición aceptable a la dictadura militar de 1964. Ideológicamente estaba en el extremo opuesto del espectro del PT.

Añez aceptó nuevas elecciones, que fueron ganadas abrumadoramente por el Movimiento al Socialismo³ de Morales, aunque sin Morales como candidato. En Argentina, los fracasos socioeconómicos de los Kirchner provocaron su derrota en las elecciones de 2015. Por primera vez en la historia argentina, se eligió libremente a un candidato abiertamente de derecha. Mauricio Macri también tuvo el dudoso honor de ser el primer candidato presidencial que ni siquiera se molestó en enmascarar sus propuestas neoliberales.

¿Qué tenían en común estos gobiernos, si es que tenían algo? Primero, todos se volvieron pragmáticos para alcanzar el poder político y, como tales, se abstuvieron de cuestionar las promesas neoliberales, como la importancia de una sociedad regulada por el mercado. En segundo lugar, creían que la redistribución del ingreso era el resultado del aumento de los subsidios gubernamentales, no de algo derivado de la creación de empleo (especialmente el pleno empleo). Así, el desempleo tendió a mantenerse en niveles cercanos a los de la década de 1990 en toda América Latina. Tercero, no intentaron desarrollar sus economías de manera integral, rompiendo el ciclo exportador. Esto significó que cuando el precio de las materias primas cayó después de 2009, su situación se volvió crítica. Y, sin embargo, claramente no eran todos iguales. Morales y Chávez eran reformistas en un sentido socialdemócrata más tradicional. Tampoco eran marxistas en ningún sentido del término. Lula, los Kirchner, el nicaragüense Daniel Ortega y el ecuatoriano Rafael Correa son, en el mejor de los casos, neopopulistas o populistas conservadores. De hecho, Ortega tiene un fuerte componente de mística. No es casualidad que las políticas de salud de Ortega, durante la pandemia de COVID, sean como las del derechista brasileño Jair Bolsonaro, o que haya desmantelado muchas de las originales reformas sandinistas.

Mientras tanto, muchos militantes de la izquierda en América Latina han sido absorbidos por los nuevos movimientos populistas, mientras que aquellos que mantuvieron su independencia tienden a haber aceptado criterios pragmáticos similares a los populistas. En cierto sentido, la política latinoamericana puede asimilarse a la siguiente anécdota del periodista Tomás Eloy Martínez. Este recordaba que una vez un embajador extranjero le pidió a Perón que describiera a la política argentina. Perón lo pensó un rato y con una gran sonrisa en el rostro dijo: “Bueno amigo, en Argentina el 30 por ciento son

3 El MAS es un partido político que surgió de la fusión de activistas de la Confederación de Mineros (CSUTCB), la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (CIDOB), varias federaciones campesinas y una escisión de la derecha neofascista Falange Socialista Boliviana.

radicales⁴, otro 30 por ciento son conservadores, el 20 por ciento son socialistas, el 10 por ciento son comunistas y hay un 10 por ciento a los que realmente no les importa la política”. “Pero eso es 100 por ciento”, respondió el embajador sorprendido. “¿Y los peronistas?”. “Ay no, todos somos peronistas”, dijo Perón riendo (Martínez, 2015).

BIBLIOGRAFÍA

- Cuttillo, Irene (2018). *Historias Gorilas. Represión en la Argentina durante los años 1943-1955*. Buenos Aires: Editorial Prometeo.
- Ellner, Steve (2019). Pink-Tide Governments: Pragmatic and Populist Responses to Challenges from the Right. *Latin American Perspective*, 46(1), Issue 224, January.
- González, Luis (1979). *Historia de la Revolución Mexicana. Período 1934-1940, Los artífices del cardenismo*. México: El Colegio de México.
- Haya de la Torre, Víctor Raúl (1932, 23 de abril). *Repertorio Americano*, XXIV(14), 217-219.
- Hernández Chávez, Alicia (1979). *Historia de la Revolución Mexicana. Período 1934-1940, La mecánica cardenista*. México: El Colegio de México.
- Hofstadter, Richard (1960). *The Age of Reform*. New York: Vintage Books.
- James, Daniel (2010, 6 de agosto). *Conferencia*. La Plata: Cátedra de Historia Socioeconómica de América Latina y Argentina de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata.
- Kabat, Marina (2018). *Perónleaks. Una relectura del Peronismo a partir de sus documentos secretos, 1943-1955*. Buenos Aires: Ediciones RYR.
- Levine, Robert (1970). *The Vargas Regime: The Critical Years, 1934-1938*. New York: Columbia University Press.
- Martínez, Tomás Eloy (2015). *La novela de Perón*. Buenos Aires: Alfaguara.
- Mendes Loureiro, Pedro y Saad Filho, Alfredo (2019). The Limits of Pragmatism: The Rise and Fall of the Brazilian Workers' Party (2002-2016). *Latin American Perspective*, 46(1), Issue 224, January.

4 En Argentina los radicales son aquellas personas que son miembros del partido Unión Cívica Radical (UCR), una organización de clase media de centroderecha fundada en 1890.

- Perón, Juan (1950). *Conducción Política*. Buenos Aires: Mundo Peronista.
- Ribera Carbó, Anna (2019). *Francisco J. Múgica: El presidente que no tuvimos*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Steffan, Heinz Dietrich (2000). *La crisis de los intelectuales*. Buenos Aires: Editorial 21.
- Weaver, Adam (2018, 10 de noviembre). Putting Brazil in Context: The Fall of the Workers Party. *blackrosefed.org*. <https://blackrosefed.org/brazil-in-context-workers-party/>

EPÍLOGO. UNA HISTORIA DE “DOS PUEBLOS”

EL POPULISMO NACIONAL-POPULAR Y EL POPULISMO DEL SIGLO XXI EN AMÉRICA LATINA

Francisco Panizza

DADO QUE ESTE LIBRO tiene como objeto el estudio del populismo en América Latina, sería entendible el eludir el debate sobre su conceptualización. Sin embargo, sin conceptualizar los términos los debates son superficiales. ¿Si no definimos el populismo, cómo podemos establecer si Salvador Allende o Luiz Inácio Lula da Silva pueden ser caracterizados como populistas? Y, sin definirlo, ¿cómo podemos establecer la relación entre el populismo y otros “conceptos esencialmente disputados” (Collier, Hidalgo y Maciuceanu, 2006), tales como el de democracia? Los contribuyentes a este libro definen al populismo de diversas maneras, lo cual resulta en respuestas también diferentes a las muchas cuestiones que levanta el estudio del populismo en la región. En esta visión sinóptica voy a definir brevemente lo que entiendo por populismo, una conceptualización que está basada en los influentes trabajos de Ernesto Laclau sobre el tópico y que también coincide en sus líneas generales con la adoptada por Ronaldo Munck en la introducción a este libro.

La teoría del populismo de Laclau (1979; 2005a; 2005b) se centra en la prioridad que el autor atribuye a la constitución del “pueblo” como un actor político en una relación de antagonismo con un cierto *Otro* (típicamente “la oligarquía”, la elite política y económica, el “*establishment*” etc.). De acuerdo a este criterio, el populismo divide el

espacio político en dos bloques: “*Nosotros*” (el pueblo, “los de abajo”, los oprimidos) y *Ellos* (el no pueblo). Este criterio también supone que los actores populistas toman partido al pretender representar a los de abajo o, como escribe Igor Goicovic (capítulo tres), al bloque social de los oprimidos.

El pueblo como actor político es producto de un proceso de identificación política y no de una categoría social preexistente. Como todo signifiante, el signifiante “pueblo” es algo construido retroactivamente, un signifiante vacío a ser invocado, un ejercicio performativo que crea lo que se supone estar expresando. De acuerdo con este enfoque, el signifiante “pueblo” opera como un punto nodal que articula un conjunto de identidades heterogéneas para determinar quién es *el pueblo* y quién lo representa. Prácticas articulatorias en torno al signifiante “pueblo” son elementos definitorios de las luchas hegemónicas que buscan sedimentar identidades contestadas.

¿Qué es lo distintivo en la construcción populista del pueblo? Después de todo, todos los políticos alegan representar al pueblo. Laclau argumenta que la presencia de interpelaciones populares en un discurso político no es suficiente para caracterizarlo como populista. Para él, “el populismo comienza cuando demandas popular-democráticas son presentadas como una alternativa antagónica a la ideología del bloque dominante”. Y agrega: para tener un “pueblo” necesitamos algo más, necesitamos una plebe (*plebs*) que reivindique ser el único pueblo (*populus*) legítimo, esto es, una parcialidad que pretenda constituirse en la totalidad de la comunidad (Laclau, 2005a, p. 81).

La teoría del populismo de Laclau reivindica la autonomía de la política en la construcción de identidades populistas. Como tal, su teoría disocia la identificación política de factores estructurales, tales como modelos de desarrollo económico y clases sociales para hacer de la identificación un resultado contingente de apelaciones discursivas y luchas hegemónicas. Sin embargo, la contingencia de las identificaciones populistas hace difícil explicar por qué ciertas apelaciones populistas son más exitosas que otras, porqué el populismo adquiere características diferentes en diferentes regiones del mundo (y aun dentro de la misma región) y cómo y en qué medida las estructuras sociales favorecen o limitan procesos identificatorios.

A los efectos de contestar estas preguntas, es necesario, como lo hacen los participantes de este libro, volver a enraizar el estudio del populismo en la historia, economía e instituciones de América Latina y mapear sus variaciones y manifestaciones en la historia de la región. En esta síntesis voy a apoyarme en la teoría del populismo de Laclau y en las contribuciones de los autores de este libro para enfocarme en la constitución de identidades populistas en las dos grandes oleadas de

incorporación sociopolítica de tipo populista en la región: la primera que se extiende entre los años cuarenta y setenta (en adelante el populismo “nacional-popular”) y la segunda que abarca las dos primeras décadas del corriente siglo (en adelante, el “populismo del siglo XXI”) para reflexionar sobre las características específicas del populismo en América Latina y qué es lo que las comunalidades y diferencias entre las dos olas populistas revelan sobre las relaciones entre el populismo con modelos de desarrollo y la democracia.

EL POPULISMO NACIONAL-POPULAR

Dos cuestiones sobre el populismo nacional-popular en América Latina son particularmente relevantes para el análisis comparado del populismo. La primera se refiere a la relación entre populismo y modelos de desarrollo económico. La segunda concierne la relación entre populismo y clases sociales. En su seminal ensayo temprano “Hacia una teoría del populismo” publicado en su libro *Política e ideología en la teoría marxista*, Laclau (1979) toma distancia teórica en relación con ciertos estudiosos pioneros del populismo latinoamericano tales como Francisco Weffort y Octavio Ianni, que caracterizaban al populismo como la superestructura política del modelo de desarrollo económico conocido como de “industrialización substitutiva de importaciones” (ISI). Laclau argumentaba en el ensayo que el populismo no es una superestructura *necesaria* de un modelo de desarrollo (Laclau, 1979, p. 77) (énfasis agregado). El argumento de Laclau puede ser entendido de dos maneras diferentes: la primera es que el populismo puede surgir en los más variados contextos socio-económicos. La segunda, es que el modelo de industrialización substitutiva de importaciones era compatible con una variedad de regímenes políticos, algunos de los cuales eran populistas y otros no. Es difícil discordar de estas afirmaciones, pero sus formulaciones no agotan la cuestión de la relación entre populismo y el modelo ISI.

Como lo recuerda Laclau en el mismo ensayo, el populismo versión nacional-popular surgió en las décadas de los años treinta y cuarenta en antagonismo con el *laissez faire* del capitalismo de la época, hegemonizado en la región por oligarquías agroexportadoras y con orden político liberal oligárquico controlado por elites políticas que se autoperpetuaban en el poder a menudo a través del fraude electoral y prácticas clientelísticas. En esta versión temprana del populismo en la región el nacionalismo político y el económico iban de la mano. En el discurso populista, “el pueblo” encarnaba a la nación privada de derechos políticos y justicia social por oligarquías domésticas asociadas a intereses foráneos (de allí su caracterización como nacional-popular). Cuando llegaron al gobierno, líderes populistas tales como

Juan Domingo Perón en Argentina y Getulio Vargas en Brasil, intentaron implementar un modelo de desarrollo económico nacionalista basado en la intervención del Estado para el desarrollo de la industria nacional que combinaba el proteccionismo económico con políticas sociales (ISI).

El resultado de este proyecto fue una matriz político-económica en la cual la economía y la política no pueden ser entendidas por separado. El modelo de sustitución de importaciones produjo los cambios sociales y recursos económicos que hicieron posible la primera ola de inclusión sociopolítica de sectores populares urbanos. La industrialización creó las bases sociales de los regímenes populistas y erosionó la hegemonía de las elites agroexportadoras y sus representantes políticos. El proteccionismo, los subsidios, los monopolios públicos y privados, la inflación moderada y la transferencia de rentas del sector agroexportador al urbano industrial a través de mecanismos tales como los controles de precios de productos agroalimentarios y las tasas de cambio diferenciales para importaciones y exportaciones, hicieron posible el pagar salarios industriales por encima de los equilibrios de mercado y proveyeron recursos para financiar programas sociales y nuevas formas de representación de los sectores sociales que debilitaron a las máquinas clientelistas urbanas y rurales controladas por políticos tradicionales.

El populismo nacional-popular dio sustento político-institucional al nuevo modelo de desarrollo. La centralidad del estado en el nuevo modelo económico proporcionó a las fuerzas políticas que lo controlaban ascendencia política y económica sobre los principales actores económicos y sociales de la época, incluyendo los trabajadores y empresarios industriales nacionales. La relación personalista entre los carismáticos líderes populistas de la época (Cárdenas, Perón, Vargas, Haya de la Torre, etc.) y sus seguidores fue acompañada por un proceso sistemático de organización y movilización política de sus bases populares que resultó en algunos de los partidos y movimientos políticos más poderosos del siglo XX en la región (Philip y Panizza, 2011). Cuando en el gobierno, los líderes populistas usaron los recursos estatales para organizar y controlar a sus seguidores en arreglos institucionales de tipo corporativo, así como para reprimir los disensos. El populismo no fue *necesariamente* la superestructura del modelo ISI pero dio sustento político a sus arreglos político-institucionales y estableció los mecanismos de representación y control social que forjaron la alianza de clases que lo caracterizó. Si no de base y superestructura, la relación entre populismo y el modelo de desarrollo por sustitución de importaciones fue de afinidades electivas (Weber, 2010).

La segunda cuestión a considerar es el papel de las clases sociales en la constitución de identidades políticas nacional-populares. Aunque aparentemente abstracta, la teoría del populismo de Laclau está fuertemente influenciada por su lectura de la realidad social latinoamericana, particularmente de Argentina. En sus escritos tempranos, Laclau tomó distancia política y teórica de lo que consideraba el reduccionismo de clase y el vanguardismo político del marxismo de la época y su visión de las identidades políticas a partir de su inserción en las estructuras productivas que consideraban a la clase obrera (o mejor dicho a los partidos comunistas de vanguardia que se autoatribuían su representación) como la vanguardia de una estrategia revolucionaria determinada por las contradicciones del capitalismo. Para Laclau (así como para otros analistas de la política latinoamericana críticos de la ortodoxia marxista), la estructura de clases del capitalismo dependiente en América Latina ponía fuertes limitaciones estructurales a la capacidad de la clase obrera de promover cambios radicales en aislamiento de otros sectores sociales.

Pese a estas limitaciones objetivas, la pertenencia de clase era central en el análisis que hacía Laclau de este periodo histórico. “El pueblo” del populismo nacional-popular estaba constituido por una alianza multiclasista, pero la clase obrera estaba en el centro de esta alianza social, económica y políticamente. Por ejemplo, en la histórica manifestación del 17 de octubre de 1945 en Argentina, los trabajadores industriales fueron los actores clave de la movilización que contribuyó a elevar a Juan Domingo Perón a la presidencia del país y que lo convertiría en el líder político más importante de Argentina de la segunda mitad del siglo XX. La primera línea del discurso de Perón en ese evento histórico enfatiza su relación con los trabajadores:

Trabajadores: hace casi dos años, desde estos mismos balcones, dije que tenía tres honras en mi vida: la de ser soldado, la de ser un patriota y la de ser el primer trabajador argentino.¹

Durante las presidencias de Perón (1946-55) y aun después de su derrocamiento, la central sindical peronista, la Confederación General del Trabajo (CGT) fue la columna vertebral del movimiento peronista, evidenciando la importancia de la clase obrera en la política argentina de la época. Lo mismo se puede afirmar de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) durante los largos años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en ese país. Podría argumentarse que la centralidad de la clase obrera en los movimientos

1 [Discurso de Juan Domingo Perón \(17 de octubre de 1945\).](#)

populistas de Argentina y México se explica porque estos países eran los más industrializados de la región en la época. Sin embargo, la clase trabajadora fue también central en otros movimientos populistas nacional-populares latinoamericanos.

Por ejemplo, Bolivia era en ese entonces el país más subdesarrollado y con mayor porcentaje de población rural en Sudamérica y también tenía la mayor población indígena de la región. Sin embargo, como lo muestra Gustavo Bonifaz (s/f), en Bolivia las clases sociales fueron el clivaje dominante durante la primera era de gobierno del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) (1952-64). Durante los debates de la Convención Constituyente de 1938, Walter Guevara Arce, quien fuera más tarde un dirigente prominente del MNR, rechazó la idea dominante en la época de que la educación era la solución al llamado “problema del indio”. De acuerdo a Guevara, era porque el indio no tenía acceso a la tierra que no podía hacer ejercicio pleno de la ciudadanía y por consiguiente el “problema del indio” era un problema económico. Guevara propuso incluso evitar la palabra *indio* en la nueva constitución por considerarla despectiva lo cual llevó a un grupo de convencionales a proponer la incorporación en la nueva constitución de una sección titulada “Sobre los Campesinos” (Bonifaz, s/f). Como otros movimientos populistas de la época el MNR era una coalición de clases liderado por políticos e intelectuales criollos de clase media. En esta alianza, las organizaciones de trabajadores industriales mineros y campesinos constituyeron su principal base social. Liderada por los mineros del estaño, la Central Obrera Boliviana (COB) fundada en 1952, apoyó a los gobiernos del MNR al mismo tiempo que ejerció un poder de veto informal sobre sus políticas. Para contrabalancear el poder de la COB la dirigencia del MNR promovió sindicatos rurales bajo su control, lo cual llevó a difíciles compromisos dentro la coalición multclasista en el poder.

La centralidad de las clases sociales en el populismo nacional-popular fue más allá de la importancia de las organizaciones de trabajadores y campesinos en los movimientos populistas de la época. Su relevancia debe ser considerada en el contexto más amplio del imaginario político de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, marcado por la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania Nazi y la resurgencia en popularidad de los partidos comunistas en el mundo entero. En muchos países, incluyendo algunos de América Latina, una revolución comunista aparecía como una posibilidad real tanto para la izquierda como para la derecha. Políticos reformistas de la época buscaron canalizar las demandas de los trabajadores como parte de una estrategia para evitar la radicalización de la clase obrera. La si-

guiente cita de Luis Batlle Berres, que ascendió a la presidencia de Uruguay en 1947, es representativa de esta estrategia:

Yo he tenido la oportunidad de decirle a quienes me han venido a ver en mi despacho para saber algo de lo que estoy pensando que es imposible ignorar el hecho de que la humanidad está pasando por una violenta revolución política y social que sacude a todo el mundo. Nadie puede pretender que permanezcamos a su margen, o que simplemente la condenemos o la rechacemos. Lo que requieren los tiempos es que nos unamos a este inmenso movimiento para orientar su curso futuro, aun al precio de acelerar su evolución. (Batlle, 1965, pp. 56-57)

Históricamente, el populismo nacional-popular fue considerado una barrera para el avance político de las izquierdas latinoamericanas, como una especie de revolución pasiva. Líderes populistas intentaron enfrentar lo que consideraban como una amenaza comunista mediante la inclusión política y social de los trabajadores a través de una combinación de reconocimiento, redistribución, movilización y represión. Por su parte los partidos socialistas y comunistas denunciaron los movimientos populistas de la época como cuasi fascistas, como expresión de alianzas de clase dominadas por la burguesía que buscaban reprimir y cooptar a la clase obrera y debilitar las luchas de la izquierda por cambios revolucionarios (Munck, introducción).

En el mismo sentido, estudiosos del populismo nacional popular han destacado el papel del populismo en la consolidación de la hegemonía burguesa. En el capítulo cuarto, Reinaldo Lindolfo Lohn y Silvia María Fávero Arend resumen el clásico argumento de Francisco Weffort sobre el tópico con especial referencia a la política brasilera bajo Getulio Vargas. De acuerdo con Weffort, el populismo varguista representaba la incorporación subordinada de las clases populares al sistema político en el contexto de un proceso de desarrollo industrial. Weffort argumenta que el modo populista de incorporación política imposibilitaba a las masas populares actuar como una clase social autónoma al mantenerlas subordinadas a líderes carismáticos. Weffort afirma que las ausencias de un partido autónomo de la clase obrera y de sindicatos independientes comprometidos con el cambio social alimentaban una lógica cesarista de relaciones directas entre el electorado y los políticos, que reproducía y expandía el espacio político del populismo.

Como hacen notar los autores, en Brasil estas consideraciones eran compartidas por la derecha y por la izquierda con opuestas implicaciones políticas. Para la izquierda, el populismo era un movimiento político que negaba agencia a la clase trabajadora. Para la derecha, el populismo representaba la activación política demagógica

de las masas, una visión asociada a formas elitistas de descalificar la participación política de sectores populares que culminaría en el golpe de Estado de 1964 dado contra la amenaza populista personificada en el presidente João Goulart. Los prejuicios de los militares brasileños contra la participación política del pueblo son evidenciados en la afirmación de uno de los presidentes militares de la época, el general João Batista Figueiredo de que la democratización era imposible porque “un pueblo que no sabe lavarse los dientes no está preparado para votar”.²

En contraste con estas posiciones, Laclau (1979) pone de cabeza la noción del populismo como una alianza de clases políticamente regresiva. Laclau argumenta que, para los sectores dominados, las luchas ideológicas consisten en la expansión de los antagonismos implícitos en lo que él denomina “interpelaciones popular-democráticas” y su articulación a discursos de clase. El autor concluye que en ese sentido un “populismo socialista” no es una manifestación regresiva de la ideología de la clase obrera, sino su forma más avanzada; el momento en que la clase obrera logra condensar el conjunto de la ideología democrática de una determinada formación social con su propia ideología de clase (1979, p. 174).

Cabe notar que Laclau no afirma que el populismo es siempre revolucionario o siquiera progresista. Laclau distingue entre un populismo de las clases dominantes, en el cual una fracción emergente de la burguesía moviliza políticamente a las masas populares para establecer su hegemonía sobre otras fracciones de la clase burguesa, y el populismo de las clases dominadas, liderado por la clase obrera. La reivindicación del populismo como el camino al socialismo es pues condicionada a que la clase obrera sea la clase hegemónica de la alianza populista y en que el socialismo sea su horizonte ideológico, una condición que no es sostenible si se abandona la clase social como categoría de análisis en el estudio del populismo.

La naturaleza del populismo (aquí en su versión nacional-popular) como una estrategia de antagonismo y ruptura con el orden político oligárquico-combinada con la institucionalización y control del conflicto de clase está presente en los aportes de varios contribuyentes a este libro. De particular relevancia para esta cuestión es la caracterización del peronismo por Marcelo Raimundo en el capítulo segundo como una “revolución pasiva” en el sentido gramsciano del término. Como lo establece Raimundo, Gramsci definió revoluciones pasivas como procesos de cambio iniciados desde arriba por poderosas fac-

2 Ver en <https://www.pensador.com/frase/NzIwNDk/>.

ciones de la élite, actuando como agentes colectivos de la burguesía frente a una crisis potencial de dominación.

Raimundo elabora la conceptualización de Gramsci haciendo notar que mientras las revoluciones pasivas tienen como objetivo superar una crisis de dominación de clase, las mismas desencadenan procesos de activación política de sectores subordinados que pueden promover cambios no deseados ni anticipados por la clase dominante. En ese sentido, Raimundo argumenta que el Peronismo combinó la burocratización de los sindicatos con una fuerte organización a nivel de plantas de trabajo que abría oportunidades para la activación de los militantes de base con efectos potencialmente disruptivos para el orden político. Para él, el elemento “revolucionario” del Peronismo ha sido la producción de cambios considerables en las relaciones de poder de clase a favor de los trabajadores en los lugares de trabajo. Raimundo concluye que la combinación de control burocrático desde arriba con el empoderamiento de las bases son dos caras de la misma moneda, lo cual no es plenamente capturado por el viejo esquema de conciliación de clases. Vuelvo a la cuestión del populismo como revolución pasiva en las conclusiones de este capítulo, pero analizo a continuación el populismo del siglo XXI.

EL POPULISMO DEL SIGLO XXI EN AMÉRICA LATINA

El populismo del siglo XXI en América Latina tiene raíces en los populismos nacional-populares de la mitad del siglo pasado, pero surge y se desarrolla en un contexto en el cual cambios políticos, sociales y económicos llevaron a una reformulación en las relaciones entre populismo y modelos de desarrollo económico, en el modo en el cual “el pueblo” es construido por el discurso populista, y en el rol de las clases sociales en las coaliciones populistas.

Munck nota en la introducción a este libro que los gobiernos “populares-progresistas” de comienzos del corriente siglo, surgieron como producto de la crisis del neoliberalismo y la búsqueda de una estrategia de desarrollo post-neoliberal. Para evaluar la naturaleza y las dimensiones de esta crisis se hace necesario primero conceptualizar el neoliberalismo. La definición de neoliberalismo tiene paralelos con la de populismo en que las dos son contestadas y maleables. Ambas han hecho el recorrido desde la academia a la política para volverse mal definidas armas en las luchas político-ideológicas entre la derecha y la izquierda.

Especialmente en América Latina, el origen del neoliberalismo contemporáneo estuvo estrechamente vinculado con el llamado Consenso de Washington, un término acuñado por el economista John Williamson, para significar lo que él alegaba era la sabiduría común

de todos los economistas serios de la época (Williamson, 1994, p. 18). Williamson codificó el Consenso de Washington en diez políticas que abarcaban desde la disciplina fiscal a la liberalización del comercio exterior y desde las privatizaciones a la protección del derecho de propiedad. Williamson (2000) ha rechazado la identificación entre el Consenso de Washington y el neoliberalismo. Sin embargo, es difícil disputar que bajo cualquier definición de neoliberalismo, un modelo económico que incluye la liberalización del comercio exterior, privatizaciones, desregulaciones, y la liberalización de la inversión extranjera directa deba ser considerada como parte del modelo neoliberal.

El neoliberalismo, sin embargo, es más que un conjunto de políticas económicas pro-mercado. En sus diferentes iteraciones, el neoliberalismo ha articulado a su núcleo duro económico un conjunto de elementos ideológicos políticos, culturales y sociales, para conformar una verdadera visión del mundo. En este contexto, el colapso de la Unión Soviética y la emergencia de los EE. UU. como el único superpoder a escala mundial en la década de los noventa, los avances del neoliberalismo llevaron a una estrecha asociación político-ideológica entre el liberalismo económico y la democracia liberal. La democracia es, por supuesto, más o menos compatible con diferentes modelos económicos. Pero la afinidad electiva entre el neoliberalismo y la democracia liberal parecía especialmente fuerte en América Latina, que había experimentado en los años ochenta y noventa una doble transición de dictaduras a democracia y del modelo de industrialización por sustitución de importaciones al neoliberalismo.

Sin embargo, aun en sus momentos de máxima dominación, el neoliberalismo generó dislocaciones socioeconómicas y resistencias políticas que debilitaron su hegemonía. Para decirlo sintéticamente, las reformas de mercado polarizaron las ya desiguales sociedades de la región entre un estrecho estrato social que tenía la educación, el capital humano y financiero y las oportunidades de trabajo para beneficiarse de la apertura de las economías y un sector más amplio que quedó desprotegido frente la expansión de las relaciones de mercado a diversas áreas de la vida social y económica. Uno de los impactos políticamente más relevantes de las políticas neoliberales fue el achicamiento de la clase obrera industrial y en el aumento exponencial del sector informal. La expansión de las relaciones de mercado también contribuyó al surgimiento de nuevas formas de individualización y consumo en las clases medias, que aumentaron la brecha sociocultural entre las clases media y alta por un lado y los sectores populares por el otro. El negativo impacto social del neoliberalismo se vio exacerbado por una “media década” de estancamiento económico entre 1998 y 2002 y por una serie de crisis financieras que culminaron en las

crisis de Argentina y Uruguay en 2001-02. Como resultado, en el año 2000 el porcentaje de la población de América Latina que vivía debajo de la línea de pobreza era mayor que el de la década de los ochenta (Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 2004).

En términos políticos, mientras el populismo nacional-popular surgió como una alternativa al orden político liberal oligárquico, el populismo del siglo XXI emergió en América Latina alrededor de 20 años del comienzo de retorno a la democracia en la región. La democratización abrió espacios para la competencia electoral, así como para el resurgimiento de históricos movimientos sociales y para la activación de nuevas formas de movilización popular en relación a cuestiones de género, etnia y regiones entre otras. Pero las transiciones pactadas de la década de los ochenta y la implementación desde arriba de reformas neoliberales como respuesta a la crisis de la deuda de la segunda mitad de la década limitaron el espacio para reformas más substantivas. Por todo el progreso registrado en los derechos civiles y políticos, las democracias de los años noventa eran democracias de baja calidad, en las cuales la hegemonía del neoliberalismo ofrecía escasas alternativas en términos de modelos de desarrollo económico, al tanto que múltiples formas de desigualdad desfiguraban la igualdad ciudadana. El politólogo y político mexicano Jorge Castañeda resume las consecuencias de la hegemonía del neoliberalismo en los términos siguientes:

Para cualquier gobierno de América Latina, seguir políticas contrarias a los deseos o intereses de Washington tiene consecuencias directas, inmediatas y frecuentemente desastrosas; [...] el precio de cualquier distancia de los principios de la ortodoxia del libremercado es exorbitante. (Castañeda, 1993)

Sin embargo, la expansión de las relaciones de mercado a áreas cada vez más amplias de la vida social promovió una oleada de resistencia al neoliberalismo que fue capitalizada por una nueva generación de líderes populistas. Las dislocaciones políticas y sociales resultantes de las políticas neoliberales hicieron posible la repolitización de demandas colectivas en antagonismo con el orden económico neoliberal y los partidos políticos que lo sustentaban en la década de los noventa. Como lo afirma Patricia Pensado Leglise (capítulo 6), si es posible identificar un elemento común a todas las diversas formas de populismo en el siglo XXI, este sería en sus orígenes comunes, en tanto todos emergieron como producto del descontento social con el neoliberalismo. Al poner en cuestión las democracias neoliberales despolitizadas, los populistas del siglo XXI repolitizaron las políticas económicas,

denunciaron a los sistemas políticos como corruptos, unificaron identidades populares y movilizaron a los sectores populares (Philip and Panizza, 2011, p. 76).

El neoliberalismo devino el “afuera constitutivo” (“el otro”) (Laclau, 2005) de los populistas en cuanto estaban en oposición. Sin embargo, como lo señalan varios autores en este libro, cuando los populistas llegaron al gobierno, sus políticas económicas fueron más pos-neoliberales que neoliberales. El significado preciso de neoliberalismo y en qué medida significó una quiebra o una acomodación con el neoliberalismo es debatible. En su dimensión económica, el pos-neoliberalismo ha sido definido como un intento de rebalancear la economía desde mercado hacia el estado y por la prioridad asignada a la reducción de la pobreza y la desigualdad (Grugel y Riggirozzi, 2012). Con importantes niveles de variación en los diversos países en que fueron implementadas, las políticas posneoliberales incluyeron entre otras, incrementos en la tributación y el gasto público, formas selectivas de intervención económica, la renacionalización de algunas industrias estratégicas, la imposición de controles selectivos de precios, exportaciones e inversiones extranjeras y la imposición de tasas y cuotas de exportación (Grugel y Riggirozzi, 2012; Levitsky y Roberts, 2011).

Las políticas sociales posneoliberales incluyeron una expansión importante de las transferencias monetarias condicionales (*conditional cash transfers*) originariamente implementadas por los gobiernos de centro derecha en la década de los noventa, así como aumentos en otras prestaciones sociales. Beneficios tales como las pensiones no contributivas y la cobertura universal de salud beneficiaron a grupos sociales históricamente excluidos, tales como los trabajadores domésticos, rurales y del sector informal. Las políticas posneoliberales también incluyeron aumentos en el gasto en educación y la expansión en el acceso a la educación universitaria. Estas políticas fueron complementadas con políticas laborales que promovieron la negociación colectiva, expandieron los derechos laborales y el reconocimiento de los sindicatos y aumentos a los salarios mínimos (Levitsky y Roberts, 2011).

Los estudios académicos difieren sobre si estas políticas representaron o no una ruptura con la matriz neoliberal. Grugel y Riggirozzi (2010) argumentan que en la práctica los gobiernos posneoliberales tendieron a ser sorprendentemente pragmáticos, implementando políticas compatibles con el modelo de libremercado. Por el contrario, Levitsky y Roberts (2011) argumentan enfáticamente que en tanto los gobiernos de izquierda y centro izquierda de la época no abandonaron totalmente el modelo de economía de mercado, los mismos rompie-

ron con el neoliberalismo al desafiar la ortodoxia neoliberal y usar el poder del estado para mejorar la distribución del ingreso y oportunidades económicas en sus sociedades.

Estoy de acuerdo con Levitsky y Roberts en que las políticas los gobiernos populistas del siglo XXI que fueron parte de la llamada “marea rosa” marcaron significativas diferencias con el neoliberalismo. Como lo muestran en más detalle los estudios de caso incluidos en este libro, las mejoras económicas, políticas y sociales de los sectores populares no fueron triviales (Ferrero Centeno y Roumpakis, 2012; Silva y Rossi, 2018; Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 2010). Mas aun, los mecanismos de inclusión social fueron más amplios que bajo el populismo nacional-popular e incluyeron sectores sociales tales como los trabajadores informales que no se beneficiaron de las políticas de protección social del populismo nacional-popular.

Hubo, por supuesto, diferencias de grado importantes en la medida en que los gobiernos populistas del siglo XXI intentaron implementar modelos alternativos de desarrollo. En un extremo, el proyecto chavista de socialismo del siglo XXI representó el intento más radical de implementar una alternativa al neoliberalismo con políticas tales como las nacionalizaciones y la promoción de empresas controladas por los trabajadores. En su estudio de Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez, Roberto López Sánchez (capítulo séptimo) argumenta que Chávez repensó el ideal de la revolución socialista en el siglo XXI vinculándola a las luchas revolucionarias populares del siglo anterior. En lo que se refiere a la economía, el proyecto chavista tuvo como meta el superar la dependencia mediante su sustitución por un modelo neodesarrollista caracterizado por una fuerte intervención estatal en áreas estratégicas. En Ecuador, Rafael Correa también promovió un ambicioso programa de desarrollo alternativo que fue pionero en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y que estaba guiado por el principio holístico del “buen vivir” (*sumak kawsay*). Las políticas para alcanzar este ideal incluyeron, entre otras, el planeamiento participativo, un estado intervencionista y fuertes inversiones en infraestructura. Las administraciones de Hugo Morales en Bolivia buscaron avanzar principios y políticas similares bajo el manto del llamado “capitalismo andino-amazónico”. Sus políticas incluyeron apoyo para pequeñas empresas del mercado informal, nuevos programas sociales y la nacionalización de los hidrocarburos, que se materializó en la práctica en la renegociación de las *royalties* con las empresas petroleras (John Brown, capítulo octavo).

Los principios guía de las diferentes alternativas al neoliberalismo fueron en muchos sentidos radicales y se tradujeron en un con-

junto de políticas innovativas que intentaron llevarlos a la práctica. Sin embargo, ninguno de estos modelos puede ser considerado una alternativa exitosa de desarrollo. Esto no fue tanto por una cuestión de continuidad con las políticas neoliberales: ningún modelo de desarrollo arranca de un punto cero. Mas bien, la falla fundamental de estas alternativas fue que incrementaron la dependencia de la exportación de materias primas agrícolas y minerales y la dependencia de rentas por la concesión de licencias para la minería extractiva y los hidrocarburos para la financiación del estado y el gasto social. Esta consecuencia es resumida por Brown en el capítulo octavo en los siguientes términos: “A pesar de un claro movimiento hacia un modelo posneoliberal de democracia y desarrollo que fue presentado por Morales como una alternativa radical al neoliberalismo que tenía como objetivo la diversificación de la economía acompañado por la nacionalización de los recursos naturales, ninguno de estos objetivos fue plenamente logrado. Bolivia se volvió todavía más dependiente de las exportaciones primarias que antes del acceso de Morales a la presidencia, en cuanto las exportaciones primarias se incrementaron del 89% del total de las exportaciones en 2005 a 95% en 2012”. Cuando principios alternativos, tales como la preservación del medioambiente, chocaron con el objetivo de extraer rentas del subsuelo, los principios fueron dejados de lado. Esta realidad es ejemplificada por la frase del expresidente Correa (citada por Pablo Dávalos en el capítulo 9) al justificar la explotación petrolera en el territorio amazónico: “No podemos ser como mendigos sentados en una bolsa de oro”. En el caso de Venezuela, la hiperdependencia de las rentas petroleras combinadas con el mal manejo de la economía llevó a la hiperinflación y a una caída del nivel de vida de la población sin precedentes en la historia del país.

Para resumir. El boom de las materias primas producto de la expansión de la globalización capitalista incluyendo a China, hizo posible para los populistas del siglo XXI el ganar un mayor grado de autonomía de la ortodoxia neoliberal así como recursos para financiar las políticas sociales al costo de perder autonomía en relación a los mercados de las *commodities* sobre los cuales tenían poca o ninguna influencia. El aumento de las rentas extractivistas también disminuyó los incentivos para intentar reformas más radicales al modelo neoliberal que podían haber diversificado las economías, aumentado el valor agregado de los productos de exportación y generado las ganancias de productividad necesarias para la creación de empleos de mejor calidad y salarios más altos. El fracaso económico, social y político de estas políticas se puso en evidencia con el fin del boom de las *commo-*

dities hacia fines de la primera década del corriente siglo y comienzos de la segunda.

Es necesario ahora analizar las dimensiones políticas del posneoliberalismo tal como fue hecho con los modelos de industrialización sustitutiva de importaciones y neoliberal en la sección anterior. Como lo hacen notar varios co-autores de este libro, el populismo del siglo XXI fue parte de un giro más amplio hacia la izquierda en la región que tuvo lugar a comienzos del presente siglo. Los partidos políticos y movimientos que fueron parte de ese giro tuvieron características políticas muy diferentes y no todos pueden ser clasificados como populistas. La división entre lo que algunos académicos han caracterizado como entre populistas y socialdemócratas (Panizza, 2005) ha sido objeto de importantes debates. Uno de los posibles criterios de diferenciación es la diferencia política entre las trayectorias al poder que caracterizaron a los socialdemócratas y a los populistas.

Los llamados partidos social democráticos hicieron su camino al gobierno dentro de los carriles institucionales de las democracias liberales de los años noventa, comenzando al nivel local y estadual, e incrementando gradualmente sus representaciones parlamentarias hasta llegar a ganar elecciones presidenciales, muchas veces después de varios intentos. Esta fue la trayectoria del Frente Amplio en Uruguay y del Partido de los Trabajadores en Brasil. En ambos casos, los candidatos presidenciales representaron partidos de izquierda de larga trayectoria en sus respectivos países, con una importante base social, organización interna y una militancia activa. Además ambos partidos tenían fuertes vínculos políticos con las centrales de trabajadores de sus países, el *Plenario Intersindical de Trabajadores — Convención Nacional de Trabajadores* (PIT-CNT) en Uruguay y la Central Única dos Trabalhadores (CUT) en Brasil, así como con otros movimientos sociales. En lo que tiene relación con la economía, los gobiernos de estos partidos mantuvieron importantes grados de continuidad con el modelo de economía de mercado, moderando sus excesos e incrementando el gasto social.

En contraste con los socialdemócratas, el camino al gobierno de los populistas del siglo XXI estuvo marcado por crisis de representación, protestas populares masivas, liderazgos personalistas y proyectos políticos fundacionales. Las protestas masivas y las crisis de representación se alimentaron recíprocamente en Argentina en 2001-2002, en Bolivia con las llamadas “guerras del gas” y “del agua” del 2000 y el 2003 y en Ecuador con las protestas callejeras que llevaron a las renuncias de tres presidentes entre 1997 y 2005 que culminaron con el llamado “movimiento forajido” que precedió la victoria electoral de Rafael Correa en 2006. En Venezuela, la crisis del sistema político se

hizo evidente en el llamado “Caracazo” de 1989 y por el considerable apoyo popular a los dos golpes militares fallidos en 1992. Entre los líderes populistas de comienzos del siglo, solamente Evo Morales fue líder de las protestas populares, pero cualquiera haya sido su relación con las protestas callejeras, los líderes populistas enfrentaron dos objetivos políticos comunes: construir al pueblo como actor político y refundar el orden político. Los dos objetivos estaban estrechamente relacionados. Para analizarlos se necesita examinar la cuestión del populismo como institucionalización del conflicto social, tal como lo presentan varios contribuyentes a este libro. La cuestión es introducida por Munck en la introducción a este libro cuando afirma que “sea el Kirchnerismo lidiando con el movimiento piquetero de los desocupados o el Lulismo lidiando con el movimiento de los trabajadores sin tierra, podemos percibir una pauta de cooptación y domesticación de movimientos contestatarios”.

Teóricamente, la relación entre los movimientos populares y los liderazgos populistas está relacionada con las dimensiones horizontales y verticales del modo populista de identificación. La dimensión identificatoria horizontal es generada por prácticas asociativas y luchas sociales contestatarias tales como la de los piqueteros en Argentina, los cocaleros en Bolivia y los pobladores de los barrios en Venezuela (Ferrero, 2014). Los movimientos sociales populares levantan demandas que al no ser atendidas por los gobiernos general las dislocaciones políticas que hacen posible las luchas por la hegemonía política. Laclau (2005b, 37) se refiere a esta condición cuando afirma que una relación de solidaridad anti-sistémica puede surgir entre demandas que solo tienen en común su condición de no haber sido satisfechas. Sin embargo, afirma Laclau, considerar las protestas masivas como la forma privilegiada de la lucha política corre el riesgo de minimizar la importancia de la dimensión vertical de la política que va más allá de los picos de movilización popular (Mouffe, 2018, p. 19). Es por esto que para Laclau la dimensión vertical de las identificaciones políticas es un requisito para cambios políticos radicales.

La dimensión horizontal autónoma es incapaz por sí misma de producir cambios históricos de largo plazo si no es complementada por la dimensión vertical de la hegemonía, es decir por una transformación radical del estado. La autonomía dejada a sí misma lleva tarde o temprano al agotamiento y la dispersión de los movimientos de protesta. (Laclau, 2014, p. 9)

Para Laclau, la identificación vertical es identificación con el líder populista. Según argumenta, la pluralidad de actores que constituyen el pueblo populista se ven unificados no simplemente por su común

antagonismo hacia un *otro* opresor sino también por su identificación vertical con un líder cuyo nombre se vuelve un significativo vacío que hace posible la fusión simbólica de identidades sociales heterogéneas. Sin embargo, como lo nota Paul Cammack (200, 152) las apelaciones populistas personalistas, directas e inmediatas tienden a ser de vida corta. En este sentido, el énfasis de Laclau en la identificación populista como identificación con el nombre del líder no considera la cuestión de la institucionalización del populismo y su papel en la reconstitución del orden político.

Implícito en la apelación contra el orden vigente del populismo está la promesa redentora (Canovan, 1999) que una vez que los “enemigos del pueblo” sean privados de sus formas institucionales de dominación ha de surgir un nuevo orden institucional en el cual el pueblo habrá de ejercer su poder soberano en forma directa y sin mediaciones. Es esto lo que quiere significar Gerardo Aboy Carlés (2013) cuando sostiene que el populismo comprende un doble movimiento de ruptura y reconstrucción del orden político, un ejercicio de balanceo inscripto en la brecha entre los *plebs* (los plebeyos, los de abajo) como la parcialidad que reclama ser los únicos detentores legítimos de la soberanía y el *populus* (el pueblo como comunidad política, los ciudadanos) como la representación plena de la comunidad. Cuando el líder populista está en ejercicio de la presidencia, la identificación vertical con el líder se institucionaliza en el rol del líder como cabeza del orden institucional y en la relación entre el pueblo, el partido de gobierno y la maquinaria del estado. Sin embargo, el proceso de institucionalización populista no establece cuál es la naturaleza específica de los arreglos institucionales que garantizan el ejercicio de la soberanía popular y sobre cómo y en qué medida las instituciones reproducen en el tiempo las identidades populares.

Las constituciones de Venezuela, Ecuador y Bolivia aprobadas en 1999, 2008 y 2009 respectivamente, establecieron los principios ideacionales y la arquitectura legal de los regímenes populistas de la época y al hacerlo definieron quienes eran considerados parte del pueblo en los nuevos órdenes políticos. Los tres textos constitucionales evidencian formas altamente plurales de concebir al “pueblo”. El preámbulo de la constitución venezolana establece el objetivo de “refundar la República para establecer una sociedad *multiétnica y pluricultural*”.³ El artículo primero de la constitución boliviana define al país como un estado “*plurinacional*” e “*intercultural*” mientras que el artículo tercero establece que la nación boliviana “está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígenas origina-

3 Ver <http://hrlibrary.umn.edu/research/venezuela-constitution.html>.

rios campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano".⁴ Por su parte el artículo primero de la constitución de Ecuador define al estado como "*intercultural y multinacional*" (énfasis agregado).⁵ Las tres constituciones complementan sus declaraciones de principio con la enumeración detallada de los derechos políticos, sociales, económicos y culturales de los diversos sectores sociales que conjuntamente constituyen el pueblo. Sería ingenuo asimilar la retórica constitucional con la vigencia práctica de estos derechos, pero el enfatizar la distancia entre principios y realidad debe tener en consideración que además de sus efectos legales las declaraciones constitucionales tienen un efecto performativo que como tal contribuye simbólicamente a la constitución de identidades populares en versiones plurales.

Las constituciones combinan la construcción ideacional del pueblo en clave plural con nuevos mecanismos de participación política. Estos nuevos mecanismos contrastan con las formas más verticales de estilo corporativista de incorporación de los sectores populares en los populismos nacional-populares del siglo pasado y tienen como objetivo el profundizar las limitadas formas de participación popular propios de la democracia liberal. Con este propósito, la constitución venezolana de 1999 establece un llamado "quinto poder" denominado "poder ciudadano" e incluye más de 70 artículos promoviendo la participación popular.⁶ El artículo 95 de la constitución de Ecuador de 2008 estipula que "La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria". El mismo artículo establece que:

Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano.⁷

Por su parte el artículo 11 de la constitución Boliviana de 2009 establece que: "La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equiva-

4 Ver <https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Bolivia/bolivia09.html>.

5 Ver <https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/english08.html>.

6 Ver <https://aceproject.org/ero-en/regions/americas/VE/venezuela-constitution-english-1999/view>.

7 Ver https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf.

lencia de condiciones entre hombres y mujeres” y lista entre los mecanismos de participación directa el referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa.⁸

La creación de mecanismos de participación directa de la ciudadanía en los arreglos constitucionales de los populismos del siglo XXI combinó formas liberales, populistas y participativas de democracia. Las instituciones de democracia participativa son compatibles con el principio populista del ejercicio directo y sin mediaciones de la soberanía popular. Sin embargo, como se hace notar arriba, el populismo tiene también una dimensión vertical definida por la relación entre “el pueblo” y la persona del líder, ahora institucionalizada en la presidencia. Aunque los procesos identificatorios son siempre relacionales, la identificación populista vertical tiene una dimensión de arriba hacia abajo que está en tensión con el ejercicio de la soberanía desde abajo hacia arriba como lo postula la democracia participativa. Esta tensión puede ser negociada de diversas maneras en la institucionalidad populista, pero las experiencias del populismo del siglo XXI evidencian mayormente una concentración de poder en el ejecutivo en detrimento de procesos de democracia participativa que reflejan la dimensión vertical-personalista del populismo, así como la tradición latinoamericana de hiper-personalismo que limitaron fuertemente los espacios institucionales de participación directa de la ciudadanía.

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

Dos cuestiones se desprenden de la constitución plural de las identidades populares en los populismos del Siglo XXI en América Latina. La primera, de naturaleza teórica, se refiere al postulado sostenido mayoritariamente por estudiosos de los populismos de derecha europeos, de que el populismo es antidemocrático por naturaleza porque postula una concepción homogénea del pueblo (Müller, 2016; Mudde, 2007). Si bien este puede ser el caso para los populismos europeos de tipo etno-nacionalistas, la afirmación no se corresponde con los populismos latinoamericanos del siglo XXI, los cuales, como se evidencia a lo largo de este libro, constituyen identidades populares plurales que incluyen diferencias étnicas, culturales, raciales y de género entre otras.

La segunda cuestión para considerar tiene que ver con las formas de imaginar al pueblo como actor político en los populismos nacional-populares y del siglo XXI. “El pueblo” de los populismos nacional-populares también incluía una variedad de actores y movimientos so-

8 Ver https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_bolivia.pdf.

ciales, tales como organizaciones femeninas, campesinas y de jóvenes. Pero como lo formulan Silva y Rossi, la incorporación sociopolítica del populismo nacional popular y los procesos de incorporación de los populismos del siglo XXI tuvieron diferencias y características específicas. Mientras que la incorporación de los populismos nacional populares se dio bajo la forma de arreglos corporativistas, la de los populistas del siglo XXI tuvo más bien bases sociales territoriales y los actores centrales del proceso no fueron los sindicatos urbano-industriales sino sectores populares marginalizados que incluyeron formas de identificación territorial, étnica, racial, de género y culturales.

Las razones de estas diferencias en los modelos de incorporación fueron tanto políticas como socio-económicas. Políticamente, la politización de clivajes sociales de tipo étnico, racial, de género y territorial en los años noventa se puso de manifiesto en el papel que movimientos sociales representativos de esas identidades en las protestas contra las políticas neoliberales que dieron lugar a la emergencia de los populismos del siglo XXI. Paralelamente, como se señala en secciones anteriores, los procesos de desindustrialización e informalización resultado de las reformas neoliberales debilitaron a los sindicatos industriales al achicar a la clase obrera lo que dio lugar al crecimiento de un sector informal atomizado y heterogéneo de trabajadores precarizados con débiles vínculos asociativos y poco poder de movilización. Estos trabajadores y sus familias fueron los principales beneficiarios de los programas de transferencias monetarias condicionadas (*conditional cash transfers*) en contraste con los beneficios laborales asociados a la sindicalización y el empleo formal de los populismos nacional-populares.

Considerados conjuntamente, la activación de múltiples movimientos sociales populares y la emergencia de un vasto sector de trabajadores en el sector informal tienen una relevancia significativa para entender el auge del populismo contemporáneo no solo en América Latina pero también en otras regiones del mundo. Como lo hace notar Laclau (2005, 150) el capitalismo globalizado genera múltiples espacios potenciales de conflictos y antagonismos: crisis ecológicas y financieras, desbalances entre los diversos sectores de la economía, expectativas de consumo unidas al desempleo masivo, redes comerciales y financieras criminales de alcances globales etc. Laclau afirma que dado este contexto, no hay razones para que los conflictos a nivel de las relaciones de producción constituyan el punto nodal de las luchas contra el capitalismo siendo por tanto imposible el determinar a priori cuales han de ser los actores hegemónicos de estas luchas.

El argumento de Laclau debe ser considerado a la luz de la centralidad de las identidades clasistas en el populismo nacional-popular y

su subsecuente debilitamiento en los populismos del siglo XXI. Como se hace notar en las secciones anteriores, en sus trabajos tempranos sobre el populismo, Laclau utiliza la categoría clase social como clave para distinguir entre el populismo de las clases dominantes y de las clases dominadas, categorías que también son usadas por Gramsci para caracterizar las revoluciones pasivas en contraste con las revoluciones socialistas. La disminución de la importancia asignada a las clases sociales en las elaboraciones más recientes sobre el populismo en los trabajos de Laclau sería simplemente un reflejo de los cambios en las estructuras sociales de las sociedades contemporáneas que disminuyen la centralidad de las clases sociales. Si embargo, el papel de las clases sociales en procesos de ruptura populista requiere un análisis más cuidadoso.

En primer lugar, a riesgo de recordar lo obvio, el capitalismo es un modo de producción y el neoliberalismo un modelo de capitalismo. Como tal, la ruptura con el neoliberalismo supone un papel central de los actores que tienen un rol estratégico en el modelo de producción, es decir de los trabajadores. La expansión del campo de las luchas populares a los ámbitos territoriales, socio-culturales, de género etc. debe ser fuertemente bienvenida. Pero mientras una pluralidad de antagonismos tiene el potencial de crear múltiples puntos de ruptura sistémica, los mismos también abren espacios para la absorción diferencial de sus demandas o su cooptación por el orden establecido o también por el estado populista. Laclau (2005b, 46) es consciente de esta posibilidad al argumentar que los regímenes políticos que surgen como producto de una ruptura populista corren el riesgo de ser institucionalizados gradualmente, al punto en el cual la lógica de la diferencia prevalece sobre la lógica equivalencial característica de las interpelaciones populistas, las cuales se tornan cada vez más una *langue de bois* incapaces de tener impactos reales sustantivos en las luchas políticas. Los casos de Venezuela bajo las presidencias de Nicolás Maduro (capítulo 7) y de Ecuador bajo las presidencias de Rafael Correa (capítulo 9) son ejemplos de este tipo de procesos.

Para evitar esos riesgos, la construcción de una alternativa radical al orden neoliberal requiere el tipo de luchas hegemónicas que Gramsci llama guerra de posiciones, en el cual la dimensión horizontal de la identificación tiene un papel central no solamente en oposición al neoliberalismo sino también en las relaciones con los gobiernos y líderes populistas. Una alternativa rupturista requiere también la reconsideración del papel de las clases sociales en las luchas contra hegemónicas en el contexto de la economía política del capitalismo del siglo XXI. Como escribe Samuele Mazzolini (2020, p. 770, citado por Munck en la introducción a este libro) “el populismo puede gene-

rar un nuevo orden (contra)hegemónico, pero no hay certeza ninguna de que lo hará. La cuestión es qué decide si lo hace”.

BIBLIOGRAFÍA

- Aboy Carlés Gerardo (2013). De los popular a lo populista o el incierto devenir de los *plebs*. En Aboy Carlés, Gerardo; Barros, Sebastián y Merlo, Julián, *Las brechas del pueblo. Reflexiones sobre identidades populares y populismo*. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Barragán, Rossana (2006). *Asambleas Constituyentes. Ciudadanía y elecciones, convenciones y debates (1825-1971)*. La Paz: Muela del Diablo Editores.
- Battle, Luis (1965). *Pensamiento y acción. Selección y notas por Santiago Rompani*. Montevideo: Editorial Alfa.
- Bonifaz, Gustavo (s/f). *Nationalism, Populism and Legitimation in Bolivia* (manuscrito).
- Cammack, Paul (2000). The Resurgence of Populism in Latin America. *Bulletin of Latin American Research*, 19(2), 149-161.
- Canovan, Margaret (1999). Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy. *Political Studies*, 47(1), 2-16.
- Castañeda, Jorge (1993). *Utopia unarmed: The Latin American left after the Cold War*. New York: Knopf.
- Collier, David; Hidalgo, Fernando Daniel y Maciuceanu, Andra Olivia (2006). Essentially Contested Concepts: Debates and Applications. *Journal of Political Ideologies*, 11(3), 211-246.
- Economic Commission for Latin America and the Caribbean (2004). *Social Panorama of Latin America*. Santiago: United Nations.
- Economic Commission for Latin America and the Caribbean (2010). *Social Panorama of Latin America*. Santiago: United Nations.
- Ferrero, Juan Carlos (2014). *Democracy against Neoliberalism in Argentina and Brazil. A Move to the Left*. New York: Palgrave Macmillan.
- Ferrero, Juan Carlos; Centeno, Ramón y Roumpakis, Antonio (2021). Transitions and non-transitions from neoliberalism in Latin America and Southern Europe. *Politics*, October. <https://doi.org/10.1177/02633957211048387>
- Grugel, Jean y Riggirozzi, Pia (2012). Post-Neoliberalism in Latin America. Rebuilding and Reclaiming the State after Crisis. *Development and Change*, 43(1), 1-21.
- Hubert, Evelyn y Solt, Fred (2004). Successes and Failures of Neoliberalism. *Latin American Research Review*, 39(3), 150-163.

- Laclau, Ernesto (1979). *Politics and Ideology in Marxist Theory*. London: Verso.
- Laclau, Ernesto (2005a). *On Populist Reason*. London: Verso.
- Laclau, Ernesto (2005b). Populism: What's in a Name?. En Panizza, Francisco (Ed.), *Populism and the Mirror of Democracy*. London: Verso.
- Laclau, Ernesto (2014). *The Rhetorical Foundations of Society*. London: Verso.
- Levitsky, Steven y Roberts, Kenneth M. (Eds.) (2011). Introduction: Latin America's Left Turn: A Framework for Analysis. En Levitsky, Steven y Roberts, Kenneth M. (Eds.), *The Resurgence of the Latin American Left*. Baltimore: The John Hopkins University Press.
- Mazzolini, Samuele (2020). Populism is not Hegemony: Towards a Re-Gramscianization of Ernesto Laclau. *Theory & Event*, 23(3), 765-786.
- Mouffe, Chantal (2018). *For a Left Populism*. London: Verso.
- Mudde, Cas (2007). *Populist Radical Right Parties in Europe*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Müller, Jan-Werner (2016). *What is Populism?* Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Ostiguy, Pierre; Panizza, Francisco y Moffitt, Benjamin (2021). *Populism in Global Perspective. A Performative and Discursive Approach*. New York/Abingdon: Routledge.
- Panizza, Francisco (2005). Unarmed Utopia Revisited: The Reurgence of Left of Centre Politics in Latin America. *Political Studies*, 53(4), 716-734.
- Panizza, Francisco (2009). *Contemporary Latin America. Development and Democracy beyond the Washington Consensus*. London: Zed Books.
- Peceny, Mark (1994). The Inter American System as a Liberal Pacific Union? (review essay). *Latin American Research Review*, 29(3), 188-201.
- Perón, Juan Domingo (1945, 17 de octubre). El Coronel Juan D. Perón habla desde los balcones de la casa de gobierno a los trabajadores concentrados en la Plaza de Mayo. En sitio web del Partido Justicialista Bonaerense. shorturl.at/kyRU0
- Philip, George y Panizza, Francisco (2011). *The Triumph of Politics. The Return of the Left in Venezuela, Bolivia and Ecuador*. Cambridge: Polity Press.

- Polanyi, Karl (2001). *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time* (2° ed.). Boston: Beacon Press.
- Silva, Eduardo y Rossi, Federico M. (Eds.) (2018). *Reshaping the Political Arena: From Resisting Neoliberalism to the Second Incorporation*. Pittsburgh: Pittsburgh University Press.
- Weber, Max (2010). *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Williamson, John (1994). In Search of a Manual for Technopols. En Williamson, J. (Ed.), *The Political Economy of Policy Reform*. Washington: Institute for International Economics.
- Williamson, John (2000). What should the World Bank think about the Washington Consensus. *World Bank Research Observer*, 15(2), 251-264.

SOBRE LOS AUTORES Y AUTORAS

JOHN BROWN

Profesor en el Centro para el Estudio de la Política de la Universidad de Maynooth, Irlanda. Es autor de *Profundizando la democracia en la Bolivia y Venezuela posneoliberales: avances y retrocesos* (2022). Publicaciones recientes en revistas incluyen “Neoliberalización, desdemocratización y respuestas populistas en Europa Occidental, EE. UU. y América Latina” en *Critical Sociology* (2020) y “Party-base linkages and contestatory mobilization in Bolivia’s El Alto: subduing the Ciudad Rebelde”, en *Perspectivas Latinoamericanas* (2020).

BARRY CANNON

Da conferencias sobre política en el Departamento de Sociología de la Universidad de Maynooth (Irlanda). Su investigación se centra en la política latinoamericana, especialmente en la izquierda y la derecha en la región y en el populismo como concepto y práctica. Ha publicado en varias revistas clave, incluidas *Third World Quarterly*, *Latin American Politics and Society*, *Democratization* y *New Political Science*. Su libro más reciente es *La derecha en América Latina: poder de élite, hegemonía y lucha por el Estado* (2016).

VICTOR DE OLIVEIRA PINTO COELHO

Tiene una licenciatura y una maestría en Historia de la Universidad Federal de Minas Gerais (Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil). Tiene un doctorado en Historia Social de la Cultura, de la Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Brasil). Su tesis versó sobre el tema “Teoría e historiografía”. Trabaja en los campos de la historia moderna y contemporánea, la teoría de la historia y la historia política. Ha publicado *A técnica como totalidade: a mitologia política de Ernst Jünger no entreguerras* (2020).

PABLO DÁVALOS

PhD en Economía de la Université de Grenoble-Alpes (Francia), postdoctorado de la Universidad Andina Simón Bolívar. Fue viceministro de Economía de Ecuador (2005). Es profesor-investigador en la Universidad Nacional de Chimborazo-Ecuador y profesor visitante en la Université de Grenoble-Alpes, Francia. Es coordinador del Grupo de Trabajo de CLACSO “Movimientos Indígenas Latinoamericanos”. Su libro más reciente fue *Un Manifiesto para el Siglo XXI: de la Renta Básica Universal y otras utopías* (2020).

SILVIA MARIA FÁVERO AREND

Professora de graduação, o mestrado até o Departamento de História da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Possui mestrado e doutorado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professora dos Programas de Pós-graduação em História e em Educação da UDESC, onde também coordena o Laboratório de Relações de Gênero e Família. Também é coordenadora do Grupo de Trabalho de História da Infância e Juventude da Associação Nacional de História. Realizou estágios pós-doutorais na Fondation Nationale des Sciences Politiques e na Universidade Nova de Lisboa. É pesquisadora do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

IGOR GOICOVIC DONOSO

Profesor Titular en el Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile. Es Profesor de Historia y Geografía por la Universidad Católica de Valparaíso (1989), Magíster en Historia por la Universidad de Santiago de Chile (1996) y Doctor en Historia por la Universidad de Murcia (España, 2005). Sus líneas de investigación se han centrado en el estudio del conflicto y la violencia social y política, en Chile y América Latina. En este campo es autor de varios libros y artículos especializados. Integrante del GT de CLACSO “Izquierdas: praxis y transformación social”.

RODOLFO GÓMEZ

Candidato a Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Magíster en Investigación en Ciencias Sociales (FSOC, UBA), Licenciado en Ciencias de la Comunicación (FSOC, UBA). Docente e Investigador en las Licenciaturas de Ciencia Política y de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales de la UBA; de la Facultad de Educación y Comunicación Social de la Universidad del Salvador (USAL). Asistente académico de la Dirección de Investigaciones del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Entre sus últimas publicaciones pueden mencionarse: “De la Teoría Crítica a la Dialéctica Negativa. Un itinerario de la primera generación de la ‘Escuela de Frankfurt’” (*Revista Avatares*, FSOC, UBA, 2023); *Pandemia, política y medios masivos de comunicación (recargado): es el capitalismo* (CLACSO, 2022); *Pandemia y Estados capitalistas latinoamericanos “de nuevo tipo”*. *Algunas reflexiones a partir del caso argentino* (CLACSO, 2020).

REINALDO LOHN

Professor do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Estado de Santa Catarina, onde foi colega de Luiz Felipe Falcão. Na mesma instituição coordena o Laboratório de Estudos da Contemporaneidade e do grupo de pesquisa Memória e Identidade. É doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e realizou estágio pós-doutoral no Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. Atua ainda no Mestrado Profissional em Ensino de História (PROFHistória). É pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

ROBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ

Profesor de la Universidad de Zulia (LUZ), Venezuela. Tiene una Maestría en Historia venezolana y un PhD en Ciencias Políticas. En la actualidad enseña historia de Venezuela e historia universal en la carrera de Antropología. Ha sido coordinador de la Unidad de Antropología en la Diplomatura de los Concejos Comunales, y en la Diplomatura de Capacitación Sindical. Su área de investigación es sobre movimientos sociales. Ha publicado más de cincuenta trabajos científicos y organizado numerosas reuniones y conferencias.

MARIANA MASTRÁNGELO

Es profesora y licenciada en Historia (UNC, 2002-2005), doctora en Historia (UBA, 2010) y ha realizado un posdoctorado en la Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil, 2011). Es profesora Asociada

Regular por la Universidad Nacional de Chilecito (UNDEC) y profesora de grado y de posgrado en la Universidad de Buenos Aires. Sus líneas de investigación son Historia Social, Movimiento Obrero, Memoria y Cultura. Entre sus obras se destacan: *Rojos en la Córdoba obrera, 1930-1940* (Buenos Aires: Imago Mundi, 2011), y *La izquierda en movimiento: Clase trabajadora y luchas populares en América Latina. Siglos XX y XXI* (coedición con Viviana Bravo Vargas, Buenos Aires; CLACSO, 2022). Es investigadora del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), del Programa de Historia Oral de la UBA, del Instituto de Estudios de América Latina (INDEAL) de la UBA, y del Instituto de Investigación en Sociedad, Conocimiento y Desarrollo de la Universidad Nacional de Chilecito (IISCD, Undec). Participa de proyectos de Ubacyt, de extensión (UBANEX) y de la Undec, donde dirige proyectos de investigación. Es integrante del GT de CLACSO “Izquierdas: praxis y transformación social”.

RONALDO MUNCK

PhD en Sociología Política del Desarrollo, Universidad de Essex, 1976. Jefe de Compromiso Cívico, Gabinete del Presidente, Dublin City University. Profesor Honorario de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Liverpool y Profesor Adjunto de Estudios de Desarrollo Internacional, Universidad St. Mary, Halifax, Nueva Escocia. Es investigador invitado del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de América Latina (UBA) e integrante del GT de CLACSO “Izquierdas: praxis y transformación social”. Es autor de varios libros sobre América Latina, el movimiento obrero y el desarrollo.

FRANCISCO PANIZZA

Profesor de América Latina y Política Comparada en el Departamento de Gobierno de la London School of Economics (LSE). Nació en Montevideo, Uruguay, donde estudió Derecho. Tiene una maestría y un doctorado en Políticas de la Universidad de Essex. De 1991 a 1995 fue investigador en el Departamento de Investigación del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional. Se incorporó al Departamento de Gobierno de la London School of Economics en 1995. Es coeditor de la serie de Routledge “Conceptualizing Comparative Politics”. Ha escrito mucho sobre populismo, incluido el aclamado *Populism and the Mirror of Democracy* (2005) y (con otros) el reciente título *Populism in Global Perspective: A Performative and Discursive Approach* (2021).

PATRICIA PENSADO LEGLISE

Profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Dr. José Ma. Luis Mora-CONACYT. Es doctora en Estudios Latinoamericanos, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Perteneció al Sistema Nacional de Investigadores. Profesora del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. Participa en Grupos de Trabajo de CLACSO desde 2009. Se ha especializado en temas de historia oral, participación de la izquierda en movimientos políticos y sociales en el siglo XX y de la historia contemporánea de América Latina. Su última publicación en coordinación con Gerardo Necochea Gracia (2020) es *Recorridos solidarios. Trayectorias individuales y montajes colectivos en la historia reciente*. Es integrante del GT de CLACSO “Izquierdas: praxis y transformación social”.

PABLO ALEJANDRO POZZI

PhD en Historia (SUNY at Stony Brook, 1989) y profesor Titular Regular Plenario de la Cátedra de Historia de los Estados Unidos de América, en el Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (Argentina). Su especialidad es la historia social contemporánea y, particularmente, la historia de la clase obrera post 1945, tanto en Estados Unidos como en la Argentina. Ha publicado artículos y libros sobre historia y sociedad norteamericana y argentina. Fue Director del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de América Latina (INDEAL), Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Fue miembro del International Committee de la Organization of American Historians y del Editorial Board del Journal of American History. Fue Contributing Editor del Journal of American History y es Participating Editor de Latin American Perspectives, miembro del Comité Científico de Asociación Brasileira de Historia Oral (ABHO), representante electo por América Latina al Concejo Internacional de la International Oral History Association y, hasta 2013, presidente de la Asociación de Historia Oral de la República Argentina. Se acogió al beneficio jubilatorio en julio 2019. Es integrante del GT de CLACSO “Izquierdas: praxis y transformación social”.

MARCELO RAIMUNDO

Profesor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y doctor en Historia de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Dicta clases en la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FAHCE-UNLP) y es miembro del Centro de Investigaciones Socio-Históricas (CISH), unidad de investigación del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IDIHCS-UNLP-CONICET). Su tesis doctoral se vinculó al sindica-

lismo y los conflictos laborales en la región de La Plata, Berisso y Ensenada durante los años sesenta y principios de los setenta. Desde hace años, trabaja temas vinculados con la historia de los trabajadores, la radicalización de la militancia política y sindical en la Argentina contemporánea, desde la perspectiva de la historia social y la historia local. Ha compilado un libro y publicado varios artículos en revistas nacionales e internacionales al respecto. También se dedica a la enseñanza de la historia de los Estados Unidos y a diversos temas relacionados con el uso de tecnologías de la información para la investigación y la docencia.

WILLIAM I. ROBINSON

Profesor distinguido de Sociología, Estudios Globales y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de California en Santa Bárbara. Trabajó como asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua en la década de 1980 y fue profesor afiliado en la Universidad Centroamericana en Managua de 1994 a 2001. Entre sus muchos libros premiados se encuentran *América Latina y el Capitalismo Global* (2008), *Capitalismo Global y el Crisis de la humanidad* (2014) y *El estado policial global* (2020).

PABLO VOMMARO

Posdoctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Investigador Independiente del CONICET. Profesor e investigador en las Facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales (UBA). Director de Investigación de CLACSO. Co-coordinador del Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes (GEPoJu, IIGG-UBA). Director de la colección “Las juventudes argentinas hoy”, Grupo Editor Universitario, con 45 libros publicados entre 2015 y 2022.

COLECCIÓN GRUPOS DE TRABAJO

La publicación de este libro sobre el populismo, sus debates y su vigencia, elaborado en esta coyuntura histórica regional y mundial por autores diversos, muchos de los cuales forman parte del Grupo de Trabajo de CLACSO “Izquierdas y luchas sociales en América Latina”, tal vez suponga un renovado punto de partida para abrir preguntas innovadoras al respecto, para que revisitemos el interrogante —a pesar de ese “borramiento”— sobre la pervivencia de un sistema injusto que ya no solo amenaza con despojar a las y los trabajadores de las posibilidades de vivir una “vida buena”, sino que jaquea la supervivencia de la humanidad en su conjunto y de todo el planeta y su diversidad vital.

De la Presentación.



CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales

Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais
